I N D I C E
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Acuerdo por el que se establece que habrá un Consejero Presidencial de Seguridad Nacional 3

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Decreto por el que se aprueba la Enmienda al artículo XIII del Convenio Constitutivo de la Unión Latina, adoptada por el XIV Congreso de la Unión Latina 4

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para establecer una Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos 5

Decreto por el que se aprueba el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua sobre la Ejecución de Sentencias Penales 5

Decreto por el que se aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal 5

Decreto por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú 6

Decreto por el que se aprueba el Segundo Protocolo por el que se modifica el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España de 21 de noviembre de 1978 6

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América en relación al uso de la banda de 2310-2360 MHz 7

Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza Bruno Antonio Miyamotto Luque para prestar distintos servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México 7

Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza Armando Mejía Meléndez, para prestar distintos servicios en distintas Embajadas y en la Oficina Comercial Británica, en distintas ciudades de México 7

Decreto Promulgatorio del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional, adoptado en Montreal, Canadá, el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve 8

Decreto Promulgatorio del Convenio Aduanero para la Importación Temporal de Equipo Profesional y sus Anexos A y B, hechos en Bruselas, el ocho de junio de mil novecientos sesenta y uno 19

Decreto Promulgatorio del Acuerdo de Cooperación Mutua entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España para el Intercambio de Información Respecto de Operaciones Financieras Realizadas a través de Instituciones Financieras para Prevenir y Combatir Operaciones de Procedencia Ilícita o de Lavado de Dinero, suscrito en la ciudad de Madrid, el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve 25

Decreto Promulgatorio del Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Checa, suscrito en la Ciudad de México, el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve 28

Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa sobre la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la Ciudad de México, el once de noviembre de mil novecientos noventa y nueve 31

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION

Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley de Pesca 39

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgado en favor de VPN de México, S.A. de C.V. 40

Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgado en favor de VPN de México, S.A. de C.V. 42

BANCO DE MEXICO

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana 45

Tasas de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional 46

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 46

Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de diciembre de 2000 46

Reforma al acuerdo de adscripción de las unidades administrativas del Banco de México 49

AVISOS

Judiciales y generales 50

SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE SALUD

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-032-SSA2-2000, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector 62

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA

Extracto de Acuerdo de inicio de investigación por prácticas monopólicas relativas en el mercado de telefonía móvil, que publica la Comisión Federal de Competencia, en cumplimiento del artículo 27 del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica (expediente número DE-60-2000) 99

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 441/93, relativo a la dotación de tierras, promovido por un grupo de campesinos del poblado Santa Efigenia, Municipio de San Ignacio, Sin. 100

Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 853/93, relativo a la dotación de tierras, promovido por campesinos del poblado El Aguaje, Municipio de San Felipe, Gto. 112

Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 993/93, relativo a la creación de un nuevo centro de población ejidal, que de constituirse se denominará Río Uxpanapa, Municipio de Minatitlán, Ver. 127

Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 4/98, relativo a la ampliación de ejido, promovido por un grupo de campesinos del poblado Quirio, Municipio de Alvaro Obregón, Mich. 139

Internet: www.gobernacion.gob.mx Esta edición consta de dos secciones
Correo electrónico: dof@rtn.net.mx *Informes, suscripciones y quejas: 5592-7919 / 5535-4583*

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ACUERDO por el que se establece que habrá un Consejero Presidencial de Seguridad Nacional.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 7o., 8o., 27, 31 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y

CONSIDERANDO

Que una eficiente política en materia de seguridad nacional constituye una premisa indispensable para garantizar la preservación de la soberanía nacional, el ejercicio de las facultades de la autoridad, el imperio de la ley, así como las condiciones para el goce pleno de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos;

Que México, al igual que muchas otras naciones, se encuentra inmerso en una etapa de cambios, así como de incorporación a procesos de integración regional o internacional, que pueden derivar en nuevos retos en materia de seguridad nacional, lo que hace patente la necesidad de actualizar los instrumentos con que cuenta el Estado para defender el proyecto de nación plasmado en la Constitución Federal;

Que el narcotráfico, las organizaciones criminales y el terrorismo actúan con medios tecnológicos cada vez más rápidos y avanzados, afectando no sólo la vida de las personas y su patrimonio, sino la viabilidad del proyecto nacional y atentando contra la estabilidad política, económica y social;

Que en la realidad mexicana existen múltiples situaciones de riesgo que, por su gravedad, pueden traducirse en amenazas a la seguridad nacional, como lo pueden ser, entre otros, los fenómenos naturales, sociales, económicos, internacionales y de carácter fronterizo;

Que las anteriores situaciones sólo pueden ser consideradas como problemas de seguridad nacional cuando, por su gravedad, amenacen seriamente a la población, a las instituciones o al territorio;

Que, conforme al marco jurídico vigente, diversas dependencias de la Administración Pública Federal participan en acciones relacionadas con la seguridad nacional, como lo son la Secretaría de la Defensa Nacional, en la defensa del territorio y el control de armamento; la Secretaría de Marina, en la vigilancia de las aguas y costas nacionales; la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la defensa de los intereses de México en la comunidad internacional y, sobre todo, la Secretaría de Gobernación en la conducción de la política interior y la operación del sistema de investigación e información para garantizar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano;

Que las políticas y acciones en materia de seguridad nacional deben, en todo momento, mantenerse dentro de los límites constitucionales y legales que garantizan una actuación respetuosa por parte de las agencias o unidades administrativas competentes en esta materia, lo que implica, entre otros aspectos, una actuación organizada, un control eficaz y una rendición de cuentas clara, por parte de aquéllas;

Que en este contexto es necesario establecer una instancia de asesoría y apoyo técnico que contribuya a dar coherencia, unidad y amplitud de visión a las decisiones en materia de seguridad nacional que corresponde tomar al Presidente de la República, sin afectar el ejercicio de las atribuciones legales de las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y

Que resulta pertinente que dicha instancia de asesoría y apoyo se ubique de manera directa en la Presidencia de la República, no solamente por la importancia que representa para el ejercicio de las atribuciones del titular del Ejecutivo Federal, sino con el objeto de asegurar la adecuada participación de las dependencias y agencias ejecutoras, he tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO

Artículo 1o.- Para asesorar y dar apoyo técnico al Presidente de la República en la planeación, evaluación y seguimiento de políticas y estrategias de seguridad nacional, habrá un Consejero Presidencial de Seguridad Nacional.

Artículo 2o.- El Consejero será designado y removido libremente por el titular del Ejecutivo Federal.

Artículo 3o.- El Consejero Presidencial de Seguridad Nacional tendrá las siguientes funciones:

I. Asesorar al Presidente de la República sobre el diseño de la política de seguridad nacional, así como sobre el diagnóstico de los asuntos en la materia;
II. Recomendar al Presidente de la República la atención de asuntos específicos, así como proponer la creación de grupos de trabajo especializados;
III. Preparar un proyecto de agenda para el diagnóstico y el análisis de riesgos y amenazas a la seguridad nacional y someterlo a la consideración del Presidente de la República;
IV. Sugerir al Presidente de la República las acciones para incrementar las capacidades de las instancias que generen inteligencia de seguridad nacional al interior de la Administración Pública Federal, así como proponer los lineamientos que orienten la coordinación entre dichas instancias;
V. Proponer al Presidente de la República instrumentos para evaluar las acciones y estrategias que se adopten en materia de seguridad nacional;
VI. Coordinar la conformación de un banco de datos, a partir de la información que aporten las instituciones de la Administración Pública Federal que generen inteligencia de seguridad nacional y el propio Consejero;
VII. Proponer al Presidente de la República proyectos de iniciativas de reformas o adiciones al marco jurídico en esta materia;
VIII. Asesorar al Presidente de la República sobre la celebración de acuerdos y convenios internacionales relativos a la seguridad nacional, así como recibir la información sobre las acciones realizadas en el marco de dichos acuerdos y convenios, y
IX. Presentar periódicamente al Presidente de la República un reporte sobre seguridad nacional.

Artículo 4o.- Para el despacho de los asuntos a su cargo, el Consejero contará con el personal de apoyo que determine el Ejecutivo Federal, de conformidad con el presupuesto respectivo.

Artículo 5o.- Los titulares de las dependencias a que se encuentren adscritas las unidades de inteligencia, deberán remitir al Consejero la información de seguridad nacional generada por éstas, conforme se vaya generando. En todo caso, la relación entre el Consejero y las unidades de inteligencia se conducirá a través del titular de la dependencia a que dichas unidades se encuentren adscritas.

El Consejero conformará, administrará y custodiará un banco de datos, en el que obrará, debidamente clasificada y sistematizada, toda la información a la que se hubiere tenido acceso o se hubiere generado. A dicho banco de datos tendrán acceso los titulares de las dependencias que tengan responsabilidades en materia de seguridad nacional.

Artículo 6o.- El banco de datos a que se refiere el artículo anterior será estrictamente confidencial en términos de las disposiciones legales aplicables.

Los servidores públicos que tengan acceso a la información y documentación que integre dicho banco de datos deberán custodiarla y cuidarla de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

SEGUNDO.- El Gabinete de Seguridad Nacional cesará en sus funciones a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento, por lo que se abroga el Acuerdo por el que se Reestructuran los Gabinetes Especializados del Ejecutivo Federal y se Abroga el Diverso que Creó la Oficina de la Presidencia, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 19 de diciembre de 1997, así como todo lo relativo a dicho Gabinete.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los cuatro días del mes de enero de dos mil uno.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, **José Francisco Gil Díaz**.- Rúbrica.- El Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, **Francisco Javier Barrio Terrazas**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

DECRETO por el que se aprueba la Enmienda al artículo XIII del Convenio Constitutivo de la Unión Latina, adoptada por el XIV Congreso de la Unión Latina.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"LA CAMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONCEDE EL ARTICULO 76 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

ARTICULO UNICO.- Se aprueba la **ENMIENDA AL ARTICULO XIII DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA UNION LATINA, ADOPTADA POR EL XIV CONGRESO DE LA UNION LATINA**, reunido en la ciudad de París, Francia, el seis y siete de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.

México, D.F., 7 de diciembre de 2000.- Sen. **Enrique Jackson Ramírez**, Presidente.- Sen. **Sara Castellanos Cortés**, Secretaria.- Rúbricas.**"**

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.

DECRETO por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para establecer una Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"LA CAMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONCEDE EL ARTICULO 76 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

ARTICULO UNICO.- Se aprueba el **ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PARA ESTABLECER UNA COMISION DE SALUD FRONTERIZA MEXICO-ESTADOS UNIDOS**, hecho en la ciudad de Washington, el catorce de julio de dos mil y en la Ciudad de México, D.F., el veinticuatro de julio del propio año.

México, D.F., 16 de noviembre de 2000.- Sen. **Enrique Jackson Ramírez**, Presidente.- Sen. **Sara Castellanos Cortés**, Secretaria.- Rúbricas.**"**

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.

DECRETO por el que se aprueba el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua sobre la Ejecución de Sentencias Penales.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"LA CAMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONCEDE EL ARTICULO 76 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

ARTICULO UNICO.- Se aprueba el **TRATADO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA SOBRE LA EJECUCION DE SENTENCIAS PENALES**, firmado en la Ciudad de México, el catorce de febrero de dos mil.

México, D.F., a 14 de noviembre de 2000.- Sen. **Enrique Jackson Ramírez**, Presidente.- Sen. **Yolanda González Hernández**, Secretaria.- Rúbricas.**"**

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del

mes de diciembre de dos mil.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.

DECRETO por el que se aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"LA CAMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONCEDE EL ARTICULO 76 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

ARTICULO UNICO.- Se aprueba el **CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DEL PERU SOBRE ASISTENCIA JURIDICA EN MATERIA PENAL**, firmado en la Ciudad de México, el dos de mayo de dos mil.

México, D.F., a 14 de noviembre de 2000.- Sen. **Enrique Jackson Ramírez**, Presidente.- Sen. **Yolanda González Hernández**, Secretaria.- Rúbricas.**"**

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.

DECRETO por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"LA CAMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONCEDE EL ARTICULO 76 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

ARTICULO UNICO.- Se aprueba el **TRATADO DE EXTRADICION ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DEL PERU**, firmado en la Ciudad de México, el dos de mayo de dos mil.

México, D.F., a 14 de noviembre de 2000.- Sen. **Enrique Jackson Ramírez**, Presidente.- Sen. **Yolanda González Hernández**, Secretaria.- Rúbricas.**"**

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.

DECRETO por el que se aprueba el Segundo Protocolo por el que se modifica el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España de 21 de noviembre de 1978.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"LA CAMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONCEDE EL ARTICULO 76 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

ARTICULO UNICO.- Se aprueba el **SEGUNDO PROTOCOLO POR EL QUE SE MODIFICA EL TRATADO DE EXTRADICION Y ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS**

UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE ESPAÑA DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1978, firmado en la Ciudad de México el seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

México, D.F., a 14 de noviembre de 2000.- Sen. **Enrique Jackson Ramírez**, Presidente.- Sen. **Yolanda González Hernández**, Secretaria.- Rúbricas.**"**

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.

DECRETO por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América en relación al uso de la banda de 2310-2360 MHz.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"LA CAMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONCEDE EL ARTICULO 76 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

ARTICULO UNICO.- Se aprueba el **ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN RELACION AL USO DE LA BANDA DE 2310-2360 MHz**, firmado en la Ciudad de México, el veinticuatro de julio de dos mil.

México, D.F., a 28 de noviembre de 2000.- Sen. **Enrique Jackson Ramírez**, Presidente.- Sen. **Yolanda González Hernández**, Secretaria.- Rúbricas.**"**

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.

DECRETO por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza Bruno Antonio Miyamotto Luque para prestar distintos servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano BRUNO ANTONIO MIYAMOTTO LUQUE, para prestar servicios como Técnico en Contabilidad, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano FERNANDO SANTIAGO DE LA CRUZ ALCALA, para prestar servicios como Analista de Asientos Contables, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano ANTONIO PADILLA SALINAS, para prestar servicios como Mecánico Electricista, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana GABRIELA TREVILLA SAMANO, para prestar servicios como Operadora de Teléfonos, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO QUINTO.- Se concede permiso al ciudadano ROBERTO ONTIVEROS CHAVEZ, para prestar servicios como Ingeniero, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

México, D.F., a 5 de diciembre de 2000.- Dip. **Ricardo Francisco García Cervantes**, Presidente.- Sen. **Enrique Jackson Ramírez**, Presidente.- Dip. **Bernardo Borbón Vilches**, Secretario.- Sen. **Rita María Esquivel Reyes**, Secretario.- Rúbricas**"**.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.

DECRETO por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza Armando Mejía Meléndez, para prestar distintos servicios en distintas Embajadas y en la Oficina Comercial Británica, en distintas ciudades de México.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano ARMANDO MEJIA MELENDEZ, para prestar servicios como Chofer de la Sección Agrícola, en la Embajada de Países Bajos, en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano HORACIO ALONSO LICON VAZQUEZ, para prestar servicios como Agregado Comercial, en la Oficina Comercial Británica, en Monterrey.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso a la ciudadana ALICIA SOFIA ZAYAZ MILLAN, para prestar servicios como Asistente Comercial, en la Oficina Comercial Británica, en Guadalajara.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana ADRIANA LOPEZ AGUILERA, para prestar servicios como Asistente Comercial, en la Oficina Comercial Británica, en la Ciudad de México.

ARTICULO QUINTO.- Se concede permiso al ciudadano MANUEL EDUARDO VEGA TORRES, para prestar servicios como Agregado Comercial, en la Oficina Comercial Británica, en Guadalajara.

ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso a la ciudadana ALMA ROSA SOTO GONZALEZ, para prestar servicios como Asistente Comercial, en la Embajada del Reino Unido, en México.

México, D.F., a 7 de diciembre de 2000.- Dip. **Ricardo Francisco García Cervantes**, Presidente.- Sen. **Enrique Jackson Ramírez**, Presidente.- Dip. **Carolina Viggiano Austria**, Secretario.- Sen. **Sara Castellanos Cortés**, Secretario.- Rúbricas**"**.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.

DECRETO Promulgatorio del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional, adoptado en Montreal, Canadá, el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a sus habitantes, sabed:

El veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto firmó ad referéndum el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional, hecho en la ciudad de Montreal, Canadá, en la misma fecha, cuyo texto en español consta en la copia certificada adjunta.

El citado Convenio fue aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el treinta de marzo de dos mil, según decreto publicado en el **Diario Oficial de la Federación** del nueve de agosto del propio año.

El instrumento de ratificación, firmado el veintidós de agosto de dos mil, fue depositado ante la Organización de Aviación Civil Internacional, el veinte de noviembre del propio año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional.

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el catorce de diciembre

de dos mil.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores, **Jorge Castañeda Gutman**.- Rúbrica.

JUAN MANUEL GOMEZ ROBLEDO, CONSULTOR JURIDICO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES,

CERTIFICA:

Que en los archivos de esta Secretaría obra copia certificada del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional, adoptado en Montreal, Canadá, el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, cuyo texto en español es el siguiente:

CONVENIO

para la unificación de ciertas reglas

para el transporte aéreo internacional

Hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999

Organización de Aviación Civil Internacional

CONVENIO

PARA LA UNIFICACION DE CIERTAS REGLAS

PARA EL TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL

LOS ESTADOS PARTES EN EL PRESENTE CONVENIO;

RECONOCIENDO la importante contribución del Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, en adelante llamado "Convenio de Varsovia", y de otros instrumentos conexos para la armonización del derecho aeronáutico internacional privado;

RECONOCIENDO la necesidad de modernizar y refundir el Convenio de Varsovia y los instrumentos conexos;

RECONOCIENDO la importancia de asegurar la protección de los intereses de los usuarios del transporte aéreo internacional y la necesidad de una indemnización equitativa fundada en el principio de restitución;

REAFIRMANDO la conveniencia de un desarrollo ordenado de las operaciones de transporte aéreo internacional y de la circulación fluida de pasajeros, equipaje y carga conforme a los principios y objetivos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, hecho en Chicago el 7 de diciembre de 1944;

CONVENCIDOS de que la acción colectiva de los Estados para una mayor armonización y codificación de ciertas reglas que rigen el transporte aéreo internacional mediante un nuevo convenio es el medio más apropiado para lograr un equilibrio de intereses equitativo;

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo I - Ambito de aplicación

1. El presente Convenio se aplica a todo transporte internacional de personas, equipaje o carga efectuado en aeronaves, a cambio de una remuneración. Se aplica igualmente al transporte gratuito efectuado en aeronaves por una empresa de transporte aéreo.

2. Para los fines del presente Convenio, la expresión *transporte internacional* significa todo transporte en que, conforme a lo estipulado por las partes, el punto de partida y el punto de destino, haya o no interrupción en el transporte o transbordo, están situados, bien en el territorio de dos Estados Partes, bien en el territorio de un solo Estado Parte si se ha previsto una escala en el territorio de cualquier otro Estado, aunque éste no sea un Estado Parte. El transporte entre dos puntos dentro del territorio de un solo Estado Parte, sin una escala convenida en el territorio de otro Estado, no se considerará transporte internacional para los fines del presente Convenio.

3. El transporte que deban efectuar varios transportistas sucesivamente constituirá, para los fines del presente Convenio, un solo transporte cuando las partes lo hayan considerado como una sola operación, tanto si ha sido objeto de un solo contrato como de una serie de contratos, y no perderá su carácter internacional por el hecho de que un solo contrato o una serie de contratos deban ejecutarse íntegramente en el territorio del mismo Estado.

4. El presente Convenio se aplica también al transporte previsto en el Capítulo V, con sujeción a las condiciones establecidas en el mismo.

Artículo 2 - Transporte efectuado por el Estado y transporte de envíos postales

1. El presente Convenio se aplica al transporte efectuado por el Estado o las demás personas jurídicas de derecho público en las condiciones establecidas en el Artículo 1.

2. En el transporte de envíos postales, el transportista será responsable únicamente frente a la administración postal correspondiente, de conformidad con las normas aplicables a las relaciones entre los transportistas y las administraciones postales.

3. Salvo lo previsto en el párrafo 2 de este Artículo, las disposiciones del presente Convenio no se aplicarán al transporte de envíos postales.

Capítulo II

Documentación y obligaciones de las partes relativas al transporte de pasajeros, equipaje y carga

Artículo 3 - Pasajeros y equipaje

1. En el transporte de pasajeros se expedirá un documento de transporte, individual o colectivo, que contenga:

a) la indicación de los puntos de partida y destino;

b) si los puntos de partida y destino están situados en el territorio de un solo Estado Parte y se han previsto una o más escalas en el territorio de otro Estado, la indicación de por lo menos una de esas escalas.

2. Cualquier otro medio en que quede constancia de la información señalada en el párrafo 1 podrá sustituir a la expedición del documento mencionado en dicho párrafo. Si se utilizase uno de esos medios, el transportista ofrecerá al pasajero expedir una declaración escrita de la información conservada por esos medios.

3. El transportista entregará al pasajero un talón de identificación de equipaje por cada bulto de equipaje facturado.

4. Al pasajero se le entregará un aviso escrito indicando que cuando sea aplicable el presente Convenio, éste regirá la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones, y por destrucción, pérdida o avería del equipaje, y por retraso.

5. El incumplimiento de las disposiciones de los párrafos precedentes no afectará a la existencia ni a la validez del contrato de transporte que, no obstante, quedará sujeto a las reglas del presente Convenio incluyendo las relativas a los límites de responsabilidad.

Artículo 4 - Carga

1. En el transporte de carga, se expedirá una carta de porte aéreo.

2. Cualquier otro medio en que quede constancia del transporte que deba efectuarse podrá sustituir a la expedición de la carta de porte aéreo. Si se utilizasen otros medios, el transportista entregará al expedidor, si así lo solicitara este último, un recibo de carga que permita la identificación del envío y el acceso a la información de la que quedó constancia conservada por esos medios.

Artículo 5 - Contenido de la carta de porte aéreo o del recibo de carga

La carta de porte aéreo o el recibo de carga deberán incluir:

a) la indicación de los puntos de partida y destino;

b) si los puntos de partida y destino están situados en el territorio de un solo Estado Parte y se han previsto una o más escalas en el territorio de otro Estado, la indicación de por lo menos una de esas escalas; y

c) la indicación del peso del envío.

Artículo 6 - Documento relativo a la naturaleza de la carga

Al expedidor podrá exigírsele, si es necesario para cumplir con las formalidades de aduanas, policía y otras autoridades públicas similares, que entregue un documento indicando la naturaleza de la carga. Esta disposición no crea para el transportista ningún deber, obligación ni responsabilidad resultantes de lo anterior.

Artículo 7 - Descripción de la carta de porte aéreo

1. La carta de porte aéreo la extenderá el expedidor en tres ejemplares originales.

2. El primer ejemplar llevará la indicación "para el transportista", y lo firmará el expedidor. El segundo ejemplar llevará la indicación "para el destinatario", y lo firmarán el expedidor y el transportista. El tercer ejemplar lo firmará el transportista, que lo entregará al expedidor, previa aceptación de la carga.

3. La firma del transportista y la del expedidor podrán ser impresas o reemplazadas por un sello.

4. Si, a petición del expedidor, el transportista extiende la carta de porte aéreo, se considerará, salvo prueba en contrario, que el transportista ha actuado en nombre del expedidor.

Artículo 8 - Documentos para varios bultos

Cuando haya más de un bulto:

a) el transportista de la carga tendrá derecho a pedir al expedidor que extienda cartas de porte aéreo separadas;

b) el expedidor tendrá derecho a pedir al transportista que entregue recibos de carga separados cuando se utilicen los otros medios previstos en el párrafo 2 del Artículo 4.

Artículo 9 - Incumplimiento de los requisitos para los documentos

El incumplimiento de las disposiciones de los Artículos 4 a 8 no afectará a la existencia ni a la validez del contrato de transporte que, no obstante, quedará sujeto a las reglas del presente Convenio, incluso las relativas a los límites de responsabilidad.

Artículo 10 - Responsabilidad por las indicaciones inscritas en los documentos

1. El expedidor es responsable de la exactitud de las indicaciones y declaraciones concernientes a la carga inscritas por él o en su nombre en la carta de porte aéreo, o hechas por él o en su nombre al transportista para que se inscriban en el recibo de carga o para que se incluyan en la constancia conservada por los otros medios mencionados en el párrafo 2 del Artículo 4. Lo anterior se aplicará también cuando la persona que actúa en nombre del expedidor es también dependiente del transportista.

2. El expedidor indemnizará al transportista de todo daño que haya sufrido éste, o cualquier otra persona con respecto a la cual el transportista sea responsable, como consecuencia de las indicaciones y declaraciones irregulares, inexactas o incompletas hechas por él o en su nombre.

3. Con sujeción a las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este Artículo, el transportista deberá indemnizar al expedidor de todo daño que haya sufrido éste, o cualquier otra persona con respecto a la cual el expedidor sea responsable, como consecuencia de las indicaciones y declaraciones irregulares, inexactas o incompletas inscritas por el transportista o en su nombre en el recibo de carga o en la constancia conservada por los otros medios mencionados en el párrafo 2 del Artículo 4.

Artículo 11 - Valor probatorio de los documentos

1. Tanto la carta de porte aéreo como el recibo de carga constituyen presunción, salvo prueba en contrario, de la celebración del contrato, de la aceptación de la carga y de las condiciones de transporte que contengan.

2. Las declaraciones de la carta de porte aéreo o del recibo de carga relativas al peso, las dimensiones y el embalaje de la carga, así como al número de bultos constituyen presunción, salvo prueba en contrario, de los hechos declarados; las indicaciones relativas a la cantidad, el volumen y el estado de la carga no constituyen prueba contra el transportista, salvo cuando éste las haya comprobado en presencia del expedidor y se hayan hecho constar en la carta de porte aéreo o el recibo de carga, o que se trate de indicaciones relativas al estado aparente de la carga.

Artículo 12 - Derecho de disposición de la carga

1. El expedidor tiene derecho, a condición de cumplir con todas las obligaciones resultantes del contrato de transporte, a disponer de la carga retirándola del aeropuerto de salida o de destino, o deteniéndola en el curso del viaje en caso de aterrizaje, o haciéndola entregar en el lugar de destino o en el curso del viaje a una persona distinta del destinatario originalmente designado, o pidiendo que sea devuelta al aeropuerto de partida. El expedidor no ejercerá este derecho de disposición de forma que perjudique al transportista ni a otros expedidores y deberá reembolsar todos los gastos ocasionados por el ejercicio de este derecho.

2. En caso de que sea imposible ejecutar las instrucciones del expedidor, el transportista deberá avisarle inmediatamente.

3. Si el transportista cumple las instrucciones del expedidor respecto a la disposición de la carga sin exigir la presentación del ejemplar de la carta de porte aéreo o del recibo de carga entregado a este último será responsable, sin perjuicio de su derecho a resarcirse del expedidor, del daño que se pudiera causar por este hecho a quien se encuentre legalmente en posesión de ese ejemplar de la carta de porte aéreo o del recibo de carga.

4. El derecho del expedidor cesa en el momento en que comienza el del destinatario, conforme al Artículo 13. Sin embargo, si el destinatario rehúsa aceptar la carga o si no es hallado, el expedidor recobrará su derecho de disposición.

Artículo 13 - Entrega de la carga

1. Salvo cuando el expedidor haya ejercido su derecho en virtud del Artículo 12, el destinatario tendrá derecho, desde la llegada de la carga al lugar de destino, a pedir al transportista que le entregue la carga a cambio del pago del importe que corresponda y del cumplimiento de las condiciones de transporte.

2. Salvo estipulación en contrario, el transportista debe avisar al destinatario de la llegada de la carga, tan pronto como ésta llegue.

3. Si el transportista admite la pérdida de la carga, o si la carga no ha llegado a la expiración de los siete días siguientes a la fecha en que debería haber llegado, el destinatario podrá hacer valer contra el transportista los derechos que surgen del contrato de transporte.

Artículo 14 - Ejecución de los derechos del expedidor y del destinatario

El expedidor y el destinatario podrán hacer valer, respectivamente, todos los derechos que les conceden los Artículos 12 y 13, cada uno en su propio nombre, sea en su propio interés, sea en el interés de un tercero, a condición de cumplir las obligaciones que el contrato de transporte impone.

Artículo 15 - Relaciones entre el expedidor y el destinatario y relaciones entre terceros

1. Los Artículos 12, 13 y 14 no afectan a las relaciones del expedidor y del destinatario entre sí, ni a las relaciones entre terceros cuyos derechos provienen del expedidor o del destinatario.

2. Las disposiciones de los Artículos 12, 13 y 14 sólo podrán modificarse mediante una cláusula explícita consignada en la carta de porte aéreo o en el recibo de carga.

Artículo 16 - Formalidades de aduanas, policía u otras autoridades públicas

1. El expedidor debe proporcionar la información y los documentos que sean necesarios para cumplir con las formalidades de aduanas, policía y cualquier otra autoridad pública antes de la entrega de la carga al destinatario. El expedidor es responsable ante el transportista de todos los daños que pudieran resultar de la falta, insuficiencia o irregularidad de dicha información o de los documentos, salvo que ello se deba a la culpa del transportista, sus dependientes o agentes.

2. El transportista no está obligado a examinar si dicha información o los documentos son exactos o suficientes.

Capítulo III

Responsabilidad del transportista y medida de la indemnización del daño

Artículo 17 - Muerte y lesiones de los pasajeros - Daño del equipaje

1. El transportista es responsable del daño causado en caso de muerte o de lesión corporal de un pasajero por la sola razón de que el accidente que causó la muerte o lesión se haya producido a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque.

2. El transportista es responsable del daño causado en caso de destrucción, pérdida o avería del equipaje facturado por la sola razón de que el hecho que causó la destrucción, pérdida o avería se haya producido a bordo de la aeronave o durante cualquier periodo en que el equipaje facturado se hallase bajo la custodia del transportista. Sin embargo, el transportista no será responsable en la medida en que el daño se deba a la naturaleza, a un defecto o a un vicio propios del equipaje. En el caso de equipaje no facturado, incluyendo los objetos personales, el transportista es responsable si el daño se debe a su culpa o a la de sus dependientes o agentes.

3. Si el transportista admite la pérdida del equipaje facturado, o si el equipaje facturado no ha llegado a la expiración de los veintiún días siguientes a la fecha en que debería haber llegado, el pasajero podrá hacer valer contra el transportista los derechos que surgen del contrato de transporte.

4. A menos que se indique otra cosa, en el presente Convenio el término "equipaje" significa tanto el equipaje facturado como el equipaje no facturado.

Artículo 18 - Daño de la carga

1. El transportista es responsable del daño causado en caso de destrucción o pérdida o avería de la carga, por la sola razón de que el hecho que causó el daño se haya producido durante el transporte aéreo.

2. Sin embargo, el transportista no será responsable en la medida en que pruebe que la destrucción o pérdida o avería de la carga se debe a uno o más de los hechos siguientes:

a) la naturaleza de la carga, o un defecto o un vicio propios de la misma;
b) el embalaje defectuoso de la carga, realizado por una persona que no sea el transportista o alguno de sus dependientes o agentes;
c) un acto de guerra o un conflicto armado;
d) un acto de la autoridad pública ejecutado en relación con la entrada, la salida o el tránsito de la carga.

3. El transporte aéreo, en el sentido del párrafo 1 de este Artículo, comprende el periodo durante el cual la carga se halla bajo la custodia del transportista.

4. El periodo del transporte aéreo no comprende ningún transporte terrestre, marítimo ni por aguas interiores efectuado fuera de un aeropuerto. Sin embargo, cuando dicho transporte se efectúe durante la ejecución de un contrato de transporte aéreo, para fines de carga, entrega o transbordo, todo daño se presumirá, salvo prueba en contrario, como resultante de un hecho ocurrido durante el transporte aéreo. Cuando un transportista, sin el consentimiento del expedidor, reemplace total o parcialmente el transporte previsto en el acuerdo entre las partes como transporte aéreo por otro modo de transporte, el transporte efectuado por otro modo se considerará comprendido en el periodo de transporte aéreo.

Artículo 19 - Retraso

El transportista es responsable del daño ocasionado por retrasos en el transporte aéreo de pasajeros equipaje o carga. Sin embargo, el transportista no será responsable del daño ocasionado por retraso si prueba que él y sus dependientes y agentes adoptaron todas las medidas que eran razonablemente necesarias para evitar el daño o que les fue imposible, a uno y a otros, adoptar dichas medidas.

Artículo 20 - Exoneración

Si el transportista prueba que la negligencia u otra acción u omisión indebida de la persona que pide indemnización, o de la persona de la que proviene su derecho, causó el daño o contribuyó a él, el transportista quedará exonerado, total o parcialmente, de su responsabilidad con respecto al reclamante, en la medida en que esta negligencia u otra acción u omisión indebida haya causado el daño o contribuido a él. Cuando pida indemnización una persona que no sea el pasajero, en razón de la muerte o lesión de este último, el transportista quedará igualmente exonerado de su responsabilidad, total o parcialmente, en la medida en que pruebe que la negligencia u otra acción u omisión indebida del pasajero causó el daño o contribuyó a él. Este Artículo se aplica a todas las disposiciones sobre responsabilidad del presente Convenio, incluso al párrafo 1 del Artículo 21.

Artículo 21 - Indemnización en caso de muerte o lesiones de los pasajeros

1. Respecto al daño previsto en el párrafo 1 del Artículo 17 que no exceda de 100000 derechos especiales de giro por pasajero, el transportista no podrá excluir ni limitar su responsabilidad.

2. El transportista no será responsable del daño previsto en el párrafo 1 del Artículo 17 en la medida que exceda de 100 000 derechos especiales de giro por pasajero, si prueba que:

a) el daño no se debió a la negligencia o a otra acción u omisión indebida del transportista o sus dependientes o agentes; o

b) el daño se debió únicamente a la negligencia o a otra acción u omisión indebida de un tercero.

Artículo 22 - Límites de responsabilidad respecto al retraso, el equipaje y la carga

1. En caso de daño causado por retraso, como se especifica en el Artículo 19, en el transporte de personas la responsabilidad del transportista se limita a 4150 derechos especiales de giro por pasajero.

2. En el transporte de equipaje, la responsabilidad del transportista en caso de destrucción, pérdida, avería o retraso se limita a 1000 derechos especiales de giro por pasajero a menos que el pasajero haya hecho al transportista, al entregarle el equipaje facturado, una declaración especial del valor de la entrega de éste en el lugar de destino, y haya pagado una suma suplementaria, si hay lugar a ello. En este caso, el transportista estará obligado a pagar una suma que no excederá del importe de la suma declarada, a menos que pruebe que este importe es superior al valor real de la entrega en el lugar de destino para el pasajero.

3. En el transporte de carga, la responsabilidad del transportista en caso de destrucción, pérdida, avería o retraso se limita a una suma de 17 derechos especiales de giro por kilogramo, a menos que el expedidor haya hecho al transportista, al entregarle el bulto, una declaración especial del valor de la entrega de éste en el lugar de destino, y haya pagado una suma suplementaria, si hay lugar a ello. En este caso, el transportista estará obligado a pagar una suma que no excederá del importe de la suma declarada, a menos que pruebe que este importe es superior al valor real de la entrega en el lugar de destino para el expedidor.

4. En caso de destrucción, pérdida, avería o retraso de una parte de la carga o de cualquier objeto que ella contenga, para determinar la suma que constituye el límite de responsabilidad del transportista solamente se tendrá en cuenta el peso total del bulto o de los bultos afectados. Sin embargo, cuando la destrucción, pérdida, avería o retraso de una parte de la carga o de un objeto que ella contiene afecte al valor de otros bultos comprendidos en la misma carta de porte aéreo, o en el mismo recibo o, si no se hubiera expedido ninguno de estos documentos, en la misma constancia conservada por los otros medios mencionados en el párrafo 2 del Artículo 4, para determinar el límite de responsabilidad también se tendrá en cuenta el peso total de tales bultos.

5. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este Artículo no se aplicarán si se prueba que el daño es el resultado de una acción u omisión del transportista o de sus dependientes o agentes, con intención de causar daño, o con temeridad y sabiendo que probablemente causaría daño; siempre que, en el caso de una acción u omisión de un dependiente o agente, se pruebe también que éste actuaba en el ejercicio de sus funciones.

6. Los límites prescritos en el Artículo 21 y en este Artículo no obstarán para que el Tribunal acuerde además, de conformidad con su propia ley, una suma que corresponda a todo o parte de las costas y otros gastos de litigio en que haya incurrido el demandante, inclusive intereses. La disposición anterior no regirá cuando el importe de la indemnización acordada, con exclusión de las costas y otros gastos de litigio, no exceda de la suma que el transportista haya ofrecido por escrito al demandante dentro de un periodo de seis meses contados a partir del hecho que causó el daño, o antes de comenzar el juicio, si la segunda fecha es posterior.

Artículo 23 - Conversión de las unidades monetarias

1. Se considerará que las sumas expresadas en derechos especiales de giro mencionadas en el presente Convenio se refieren al derecho especial de giro definido por el Fondo Monetario Internacional. La conversión de las sumas en las monedas nacionales, en el caso de procedimientos judiciales, se hará conforme al valor de dichas monedas en derechos especiales de giro en la fecha de la sentencia. El valor, en derechos especiales de giro, de la moneda nacional de un Estado Parte que sea miembro del Fondo Monetario Internacional se calculará conforme al método de valoración aplicado por el Fondo Monetario Internacional para sus operaciones y transacciones, vigente en la fecha de la sentencia. El valor, en derechos especiales de giro, de la moneda nacional de un Estado Parte que no sea miembro del Fondo Monetario Internacional se calculará de la forma determinada por dicho Estado.

2. Sin embargo, los Estados que no sean miembros del Fondo Monetario Internacional y cuya legislación no permita aplicar las disposiciones del párrafo 1 de este Artículo podrán declarar, en el momento de la ratificación o de la adhesión o ulteriormente, que el límite de responsabilidad del transportista prescrito en el Artículo 21 se fija en la suma de 1 500 000 unidades monetarias por pasajero en los procedimientos judiciales seguidos en sus territorios; 62500 unidades monetarias por pasajero, con

respecto al párrafo 1 del Artículo 22; 15000 unidades monetarias por pasajero, con respecto al párrafo 2 del Artículo 22; y 250 unidades monetarias por kilogramo, con respecto al párrafo 3 del Artículo 22. Esta unidad monetaria corresponde a sesenta y cinco miligramos y medio de oro con ley de novecientas milésimas. Estas sumas podrán convertirse en la moneda nacional de que se trate en cifras redondas. La conversión de estas sumas en moneda nacional se efectuará conforme a la ley del Estado interesado.

3. El cálculo mencionado en la última oración del párrafo 1 de este Artículo y el método de conversión mencionado en el párrafo 2 de este Artículo se harán de forma tal que expresen en la moneda nacional del Estado Parte, en la medida posible, el mismo valor real para las sumas de los Artículos 21 y 22 que el que resultaría de la aplicación de las tres primeras oraciones del párrafo 1 de este Artículo. Los Estados Partes comunicarán al Depositario el método para hacer el cálculo con arreglo al párrafo 1 de este Artículo o los resultados de la conversión del párrafo 2 de este Artículo, según sea el caso, al depositar un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del presente Convenio o de adhesión al mismo y cada vez que haya un cambio respecto a dicho método o a esos resultados.

Artículo 24 - Revisión de los límites

1. Sin que ello afecte a las disposiciones del Artículo 25 del presente Convenio, y con sujeción al párrafo 2 que sigue, los límites de responsabilidad prescritos en los Artículos 21, 22 y 23 serán revisados por el Depositario cada cinco años, debiendo efectuarse la primera revisión al final del quinto año siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio o, si el Convenio no entra en vigor dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que se abrió a la firma, dentro del primer año de su entrada en vigor, con relación a un índice de inflación que corresponda a la tasa de inflación acumulada desde la revisión anterior o, la primera vez, desde la fecha de entrada en vigor del Convenio. La medida de la tasa de inflación que habrá de utilizarse para determinar el índice de inflación será el promedio ponderado de las tasas anuales de aumento o de disminución del índice de precios al consumidor de los Estados cuyas monedas comprenden el derecho especial de giro mencionado en el párrafo 1 del Artículo 23.

2. Si de la revisión mencionada en el párrafo anterior resulta que el índice de inflación ha sido superior al diez por ciento, el Depositario notificará a los Estados Partes la revisión de los límites de responsabilidad. Dichas revisiones serán efectivas seis meses después de su notificación a los Estados Partes. Si dentro de los tres meses siguientes a su notificación a los Estados Partes una mayoría de los Estados Partes registra su desaprobación, la revisión no tendrá efecto y el Depositario remitirá la cuestión a una reunión de los Estados Partes. El Depositario notificará inmediatamente a todos los Estados Partes la entrada en vigor de toda revisión.

3. No obstante el párrafo 1 de este Artículo, el procedimiento mencionado en el párrafo 2 de este Artículo se aplicará en cualquier momento, siempre que un tercio de los Estados Partes expresen el deseo de hacerlo y con la condición de que el índice de inflación mencionado en el párrafo 1 haya sido superior al treinta por ciento desde la revisión anterior o desde la fecha de la entrada en vigor del presente Convenio si no ha habido una revisión anterior. Las revisiones subsiguientes efectuadas empleando el procedimiento descrito en el párrafo 1 de este Artículo se realizarán cada cinco años, contados a partir del final del quinto año siguiente a la fecha de la revisión efectuada en virtud de este párrafo.

Artículo 25 - Estipulación sobre los límites

El transportista podrá estipular que el contrato de transporte estará sujeto a límites de responsabilidad más elevados que los previstos en el presente Convenio, o que no estará sujeto a ningún límite de responsabilidad.

Artículo 26 - Nulidad de las cláusulas contractuales

Toda cláusula que tienda a exonerar al transportista de su responsabilidad o a fijar un límite inferior al establecido en el presente Convenio será nula y de ningún efecto, pero la nulidad de dicha cláusula no implica la nulidad del contrato, que continuará sujeto a las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 27 - Libertad contractual

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio impedirá al transportista negarse a concertar un contrato de transporte, renunciar a las defensas que pueda invocar en virtud del presente Convenio, o establecer condiciones que no estén en contradicción con las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 28 - Pagos adelantados

En caso de accidentes de aviación que resulten en la muerte o lesiones de los pasajeros, el transportista hará, si lo exige su ley nacional, pagos adelantados sin demora, a la persona o personas físicas que tengan derecho a reclamar indemnización a fin de satisfacer sus necesidades económicas inmediatas. Dichos pagos adelantados no constituirán un reconocimiento de responsabilidad y podrán ser deducidos de toda cantidad posteriormente pagada como indemnización por el transportista.

Artículo 29 - Fundamento de las reclamaciones

1. En el transporte de pasajeros, de equipaje y de carga, toda acción de indemnización de daños, sea que se funde en el presente Convenio, en un contrato o en un acto ilícito, sea en cualquier otra causa, solamente podrá iniciarse con sujeción a condiciones y a límites de responsabilidad como los previstos en

el presente Convenio, sin que ello afecte a la cuestión de qué personas pueden iniciar las acciones y cuáles son sus respectivos derechos. En ninguna de dichas acciones se otorgará una indemnización punitiva, ejemplar o de cualquier naturaleza que no sea compensatoria.

Artículo 30 - Dependientes, agentes - Total de las reclamaciones

1. Si se inicia un acción contra un dependiente del transportista, por daños a que se refiere el presente Convenio, dicho dependiente o agente, si prueban que actuaban en el ejercicio de sus funciones, podrán ampararse en las condiciones y los límites de responsabilidad que puede invocar el transportista en virtud del presente Convenio.

2. El total de las sumas resarcibles del transportista, sus dependientes y agentes, en este caso, no excederá de dichos límites.

3. Salvo por lo que respecta al transporte de carga, las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este Artículo no se aplicarán si se prueba que el daño es el resultado de una acción u omisión del dependiente, con intención de causar daño, o con temeridad y sabiendo que probablemente causaría daño.

Artículo 31 - Aviso de protesta oportuno

1. El recibo del equipaje facturado o la carga sin protesta por parte del destinatario constituirá presunción, salvo prueba en contrario, de que los mismos han sido entregados en buen estado y de conformidad con el documento de transporte o la constancia conservada por los otros medios mencionados en el párrafo 2 del Artículo 3 y en el párrafo 2 del Artículo 4.

2. En caso de avería, el destinatario deberá presentar al transportista una protesta inmediatamente después de haber sido notada dicha avería y, a más tardar, dentro de un plazo de siete días para el equipaje facturado y de catorce días para la carga, a partir de la fecha de su recibo. En caso de retraso, la protesta deberá hacerla a más tardar dentro de veintiún días, a partir de la fecha en que el equipaje o la carga hayan sido puestos a su disposición.

3. Toda protesta deberá hacerse por escrito y darse o expedirse dentro de los plazos mencionados.

4. A falta de protesta dentro de los plazos establecidos, todas las acciones contra el transportista serán inadmisibles, salvo en el caso de fraude de su parte.

Artículo 32 - Fallecimiento de la persona responsable

En caso de fallecimiento de la persona responsable, la acción de indemnización de daños se ejercerá, dentro de los límites previstos en el presente Convenio, contra los causahabientes de su sucesión.

Artículo 33 - Jurisdicción

1. Una acción de indemnización de daños deberá iniciarse, a elección del demandante en el territorio de uno de los Estados Partes, sea ante el tribunal del domicilio del transportista, o de su oficina principal, o del lugar en que tiene una oficina por cuyo conducto se ha celebrado el contrato, sea ante el tribunal del lugar de destino.

2. Con respecto al daño resultante de la muerte o lesiones del pasajero, una acción podrá iniciarse ante uno de los tribunales mencionados en el párrafo 1 de este Artículo, o en el territorio de un Estado Parte en que el pasajero tiene su residencia principal y permanente en el momento del accidente y hacia y desde el cual el transportista explota servicios de transporte aéreo de pasajeros en sus propias aeronaves o en las de otro transportista con arreglo a un acuerdo comercial, y en que el transportista realiza sus actividades de transporte aéreo de pasajeros desde locales arrendados o que son de su propiedad o de otro transportista con el que tiene un acuerdo comercial.

3. Para los fines del párrafo 2,

a) "acuerdo comercial" significa un acuerdo, que no es un contrato de agencia, hecho entre transportistas y relativo a la provisión de sus servicios conjuntos de transporte aéreo de pasajeros;

b) "residencia principal y permanente" significa la morada fija y permanente del pasajero en el momento del accidente. La nacionalidad del pasajero no será el factor determinante al respecto.

4. Las cuestiones de procedimiento se regirán por la ley del tribunal que conoce el caso.

Artículo 34 - Arbitraje

1. Con sujeción a lo previsto en este Artículo, las partes en el contrato de transporte de carga pueden estipular que toda controversia relativa a la responsabilidad del transportista prevista en el presente Convenio se resolverá por arbitraje. Dicho acuerdo se hará por escrito.

2. El procedimiento de arbitraje se llevará a cabo, a elección del reclamante, en una de las jurisdicciones mencionadas en el Artículo 33.

3. El árbitro o el tribunal arbitral aplicarán las disposiciones del presente Convenio.

4. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 de este Artículo se considerarán parte de toda cláusula o acuerdo de arbitraje, y toda condición de dicha cláusula o acuerdo que sea incompatible con dichas disposiciones será nula y de ningún efecto.

Artículo 35 - Plazo para las acciones

1. El derecho a indemnización se extinguirá si no se inicia una acción dentro del plazo de dos años, contados a partir de la fecha de llegada a destino o la del día en que la aeronave debería haber llegado o la de la detención del transporte.

2. La forma de calcular ese plazo se determinará por la ley del tribunal que conoce el caso.

Artículo 36 - Transporte sucesivo

1. En el caso del transporte que deban efectuar varios transportistas sucesivamente y que esté comprendido en la definición del párrafo 3 del Artículo 1, cada transportista que acepte pasajeros, equipaje o carga se someterá a las reglas establecidas en el presente Convenio y será considerado como una de las partes del contrato de transporte en la medida en que el contrato se refiera a la parte del transporte efectuado bajo su supervisión.

2. En el caso de un transporte de esa naturaleza, el pasajero, o cualquier persona que tenga derecho a una indemnización por él, sólo podrá proceder contra el transportista que haya efectuado el transporte durante el cual se produjo el accidente o el retraso, salvo en el caso en que, por estipulación expresa, el primer transportista haya asumido la responsabilidad por todo el viaje.

3. Si se trata de equipaje o carga, el pasajero o el expedidor tendrán derecho de acción contra el primer transportista, y el pasajero o el destinatario que tengan derecho a la entrega tendrán derecho de acción contra el último transportista, y uno y otro podrán, además, proceder contra el transportista que haya efectuado el transporte durante el cual se produjo la destrucción, pérdida, avería o retraso. Dichos transportistas serán solidariamente responsables ante el pasajero o ante el expedidor o el destinatario.

Artículo 37 - Derecho de acción contra terceros

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio afecta a la cuestión de si la persona responsable de daños de conformidad con el mismo tiene o no derecho de acción regresiva contra alguna otra persona.

Capítulo IV

Transporte combinado

Artículo 38 - Transporte combinado

1. En el caso de transporte combinado efectuado en parte por aire y en parte por cualquier otro medio de transporte, las disposiciones del presente Convenio se aplicarán únicamente al transporte aéreo, con sujeción al párrafo 4 del Artículo 18, siempre que el transporte aéreo responda a las condiciones del Artículo 1.

2. Ninguna de las disposiciones del presente Convenio impedirá a las partes, en el caso de transporte combinado, insertar en el documento de transporte aéreo condiciones relativas a otros medios de transporte, siempre que las disposiciones del presente Convenio se respeten en lo que concierne al transporte aéreo.

Capítulo V

Transporte aéreo efectuado por una persona distinta del transportista contractual

Artículo 39 - Transportista contractual - Transportista de hecho

Las disposiciones de este Capítulo se aplican cuando una persona (en adelante el "transportista contractual") celebra como parte un contrato de transporte regido por el presente Convenio con el pasajero o con el expedidor, o con la persona que actúe en nombre de uno u otro, y otra persona (en adelante el "transportista de hecho") realiza, en virtud de autorización dada por el transportista contractual todo o parte del transporte, pero sin ser con respecto a dicha parte del transporte un transportista sucesivo en el sentido del presente Convenio. Dicha autorización se presumirá, salvo prueba en contrario.

Artículo 40 - Responsabilidades respectivas del transportista contractual y del transportista de hecho

Si un transportista de hecho realiza todo o parte de un transporte que, conforme al contrato a que se refiere el Artículo 39, se rige por el presente Convenio, tanto el transportista contractual como el transportista de hecho quedarán sujetos, excepto lo previsto en en este Capítulo, a las disposiciones del presente Convenio, el primero con respecto a todo el transporte previsto en el contrato, el segundo solamente con respecto al transporte que realiza.

Artículo 41 - Responsabilidad mutua

1. Las acciones y omisiones del transportista de hecho y de sus dependientes y agentes, cuando éstos actúen en el ejecicio de sus funciones, se considerarán también, con relación al transporte realizado por el transportista de hecho, como acciones y omisiones del transportista contractual.

2. Las acciones y omisiones del transportista contractual y de sus dependientes y agentes, cuando éstos actúen en el ejercicio de sus funciones, se considerarán, también con relación al transporte realizado por el transportista de hecho, como del transportista de hecho. Sin embargo, ninguna de esas acciones u omisiones someterá al transportista de hecho a una responsabilidad que exceda de las cantidades previstas en los Artículos 21, 22, 23 y 24. Ningún acuerdo especial por el cual el transportista contractual asuma obligaciones no impuestas por el presente Convenio, ninguna renuncia de derechos o

defensas establecidos por el Convenio y ninguna declaración especial de valor prevista en el Artículo 21 afectarán al transportista de hecho, a menos que éste lo acepte.

Artículo 42 - Destinatario de las protestas e instrucciones

Las protestas e instrucciones que deban dirigirse al transportista en virtud del presente Convenio tendrán el mismo efecto, sean dirigidas al transportista contractual, sean dirigidas al transportista de hecho. Sin embargo, las instrucciones mencionadas en el Artículo 12 sólo surtirán efecto si son dirigidas al transportista contractual.

Artículo 43 - Dependientes y agentes

Por lo que respecta al transporte realizado por el transpotista de hecho, todo dependiente o agente de éste o del transportista contractual tendrán derecho, si prueban que actuaban en el ejercicio de sus funciones, a invocar las condiciones y los límites de responsabilidad aplicables en virtud del presente Convenio al transportista del cual son dependiente o agente, a menos que se pruebe que habían actuado de forma que no puedan invocarse los límites de responsabilidad de conformidad con el presente Convenio.

Artículo 44 - Total de la indemnización

Por lo que respecta al transporte realizado por el transportista de hecho, el total de las sumas resarcibles de este transportista y del transportista contractual, y de los dependientes y agentes de uno y otro que hayan actuado en el ejercicio de sus funciones, no excederá de la cantidad mayor que pueda obtenerse de cualquiera de dichos transportistas en virtud del presente Convenio, pero ninguna de las personas mencionadas será responsable por una suma más elevada que los límites aplicables a esa persona.

Artículo 45 - Destinatario de las reclamaciones

Por lo que respecta al transporte realizado por el transportista de hecho, la acción de indemnización de daños podrá iniciarse, a elección del demandante, contra dicho transportista o contra el transportista contractual o contra ambos, conjunta o separadamente. Si se ejerce la acción únicamente contra uno de estos transportistas, éste tendrá derecho a traer al juicio al otro transportista, rigiéndose el procedimiento y sus efectos por la ley del tribunal que conoce el caso.

Artículo 46 - Jurisdicción adicional

Toda acción de indemnización de daños prevista en el Artículo 45 deberá iniciarse, a elección del demandante, en el territorio de uno de los Estados Partes ante uno de los tribunales en que pueda entablarse una acción contra el transportista contractual, conforme a lo previsto en el Artículo 33, o ante el tribunal en cuya jurisdicción el transportista de hecho tiene su domicilio o su oficina principal.

Artículo 47 - Nulidad de las cláusulas contractuales

Toda cláusula que tienda a exonerar al transportista contractual o al transportista de hecho de la responsabilidad prevista en este Capítulo o a fijar un límite inferior al aplicable conforme a este Capítulo será nula y de ningún efecto, pero la nulidad de dicha cláusula no implica la nulidad del contrato, que continuará sujeto a las disposiciones de este Capítulo.

Artículo 48 - Relaciones entre el transportista contractual y el transportista de hecho

Excepto lo previsto en el Artículo 45, ninguna de las disposiciones de este Capítulo afectará a los derechos y obligaciones entre los transportistas, incluido todo derecho de acción regresiva o de indemnización.

Capítulo VI

Otras disposiciones

Artículo 49 - Aplicación obligatoria

Toda cláusula del contrato de transporte y todos los acuerdos particulares concertados antes de que ocurra el daño, por los cuales las partes traten de eludir la aplicación de las reglas establecidas en el presente Convenio, sea decidiendo la ley que habrá de aplicarse, sea modificando las reglas relativas a la jurisdicción, serán nulos y de ningún efecto.

Artículo 50 - Seguro

Los Estados Partes exigirán a sus transportistas que mantengan un seguro adecuado que cubra su responsabilidad en virtud del presente Convenio. El Estado Parte hacia el cual el transportista explota servicios podrá exigirle a éste que presente pruebas de que mantiene un seguro adecuado, que cubre su responsabilidad en virtud del presente Convenio.

Artículo 51 - Transporte efectuado en circunstancias extraordinarias

Las disposiciones de los Artículos 3 a 5, 7 y 8 relativas a la documentación del transporte, no se aplicarán en el caso de transportes efectuados en circunstancias extraordinarias que excedan del alcance normal de las actividades del transportista.

Artículo 52 - Definición de días

Cuando en el presente Convenio se emplea el término "días", se trata de días del calendario y no de días de trabajo.

Capítulo VII

Cláusulas finales

Artículo 53 - Firma, ratificación y entrada en vigor

1. El presente Convenio estará abierto en Montreal, el 28 de mayo de 1999, a la firma de los Estados participantes en la Conferencia internacional de derecho aeronáutico, celebrada en Montreal del 10 al 28 de mayo de 1999. Después del 28 de mayo de 1999, el Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados en la Sede de la Organización de Aviación Civil Internacional, en Montreal, hasta su entrada en vigor de conformidad con el párrafo 6 de este Artículo.

2. El presente Convenio estará igualmente abierto a la firma de organizaciones regionales de integración económica. Para los fines del presente Convenio, "organización regional de integración económica" significa cualquier organización constituida por Estados soberanos de una región determinada, que tenga competencia con respecto a determinados asuntos regidos por el Convenio y haya sido debidamente autorizada a firmar y a ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al presente Convenio. La referencia a "Estado Parte" o "Estados Partes" en el presente Convenio, con excepción del párrafo 2 del Artículo 1, el apartado b) del párrafo 1 del Artículo 3, el apartado b) del Artículo 5, los Artículos 23, 33, 46 y el apartado b) del Artículo 57, se aplica igualmente a una organización regional de integración económica. Para los fines del Artículo 24, las referencias a "una mayoría de los Estados Partes" y "un tercio de los Estados Partes" no se aplicará a una organización regional de integración económica.

3. El presente Convenio estará sujeto a la ratificación de los Estados y organizaciones regionales de integración económica que lo hayan firmado.

4. Todo Estado u organización regional de integración económica que no firme el presente Convenio podrá aceptarlo, aprobarlo o adherirse a él en cualquier momento.

5. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán ante la Organización de Aviación Civil Internacional, designada en el presente como Depositario.

6. El presente Convenio entrará en vigor el sexagésimo día a contar de la fecha de depósito del trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión ante el Depositario entre los Estados que hayan depositado ese instrumento. Un instrumento depositado por una organización regional de integración económica no se tendrá en cuenta para los fines de este párrafo.

7. Para los demás Estados y otras organizaciones regionales de integración económica, el presente Convenio surtirá efecto sesenta días después de la fecha de depósito de sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

8. El Depositario notificará inmediatamente a todos los signatarios y Estados Partes:

a) cada firma del presente Convenio y la fecha correspondiente;
b) el depósito de todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión y la fecha correspondiente;
c) la fecha de entrada en vigor del presente Convenio;
d) la fecha de entrada en vigor de toda revisión de los límites de responsabilidad establecidos en virtud del presente Convenio;
e) toda denuncia efectuada en virtud del Artículo 54.

Artículo 54 - Denuncia

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Convenio mediante notificación por escrito dirigida al Depositario.

2. La denuncia surtirá efecto ciento ochenta días después de la fecha en que el Depositario reciba la notificación.

Artículo 55 - Relación con otros instrumentos del Convenio de Varsovia

El presente Convenio prevalecerá sobre toda regla que se aplique al transporte aéreo internacional:

1. entre los Estados Partes en el presente Convenio debido a que esos Estados son comúnmente Partes de

a) el *Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional* firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929 (en adelante llamado el Convenio de Varsovia);
b) el *Protocolo que modifica el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929,* hecho en La Haya el 28 de septiembre de 1955 (en adelante llamado el Protocolo de La Haya);
c) el *Convenio, complementario del Convenio de Varsovia, para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional realizado por quien no sea el transportista contractual* firmado en Guadalajara el 18 de septiembre de 1961 (en adelante llamado el Convenio de Guadalajara);
d) el *Protocolo que modifica el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional firmado en Varsovia, el 12 de octubre de 1929 modificado por el Protocolo*

hecho en La Haya el 28 de septiembre de 1955, firmado en la ciudad de Guatemala el 8 de marzo de 1971 (en adelante llamado el Protocolo de la ciudad de Guatemala);

e) los Protocolos adicionales núms. 1 a 3 y el Protocolo de Montreal núm. 4 que modifican el Convenio de Varsovia modificado por el Protocolo de La Haya o el Convenio de Varsovia modificado por el Protocolo de La Haya y el Protocolo de la ciudad de Guatemala firmados en Montreal el 25 de septiembre de 1975 (en adelante llamados los Protocolos de Montreal); o

2. dentro del territorio de cualquier Estado Parte en el presente Convenio debido a que ese Estado es Parte en uno o más de los instrumentos mencionados en los apartados a) a e) anteriores.

Artículo 56 - Estados con más de un sistema jurídico

1. Si un Estado tiene dos o más unidades territoriales en las que son aplicables diferentes sistemas jurídicos con relación a cuestiones tratadas en el presente Convenio, dicho Estado puede declarar en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión que el presente Convenio se extenderá a todas sus unidades territoriales o únicamente a una o más de ellas y podrá modificar esta declaración presentando otra declaración en cualquier otro momento.

2. Esas declaraciones se notificarán al Depositario e indicarán explícitamente las unidades territoriales a las que se aplica el Convenio.

3. Respecto a un Estado Parte que haya hecho esa declaración:

a) las referencias a "moneda nacional" en el Artículo 23 se interpretarán como que se refieren a la moneda de la unidad territorial pertinente de ese Estado; y

b) la referencia en el Artículo 28 a la "ley nacional" se interpretará como que se refiere a la ley de la unidad territorial pertinente de ese Estado.

Artículo 57 - Reservas

No podrá formularse ninguna reserva al presente Convenio, salvo que un Estado Parte podrá declarar en cualquier momento, mediante notificación dirigida al Depositario, que el presente Convenio no se aplicará:

a) al transporte aéreo internacional efectuado directamente por ese Estado Parte con fines no comerciales respecto a sus funciones y obligaciones como Estado soberano; ni

b) al transporte de personas, carga y equipaje efectuado para sus autoridades militares en aeronaves matriculadas en ese Estado Parte, o arrendadas por éste, y cuya capacidad total ha sido reservada por esas autoridades o en nombre de las mismas.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL los plenipotenciarios que suscriben, debidamente autorizados, firman el presente Convenio.

HECHO en Montreal el día veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve en español, árabe, chino, francés, inglés y ruso, siendo todos los textos igualmente auténticos. El presente Convenio quedará depositado en los archivos de la Organización de Aviación Civil Internacional y el Depositario enviará copias certificadas del mismo a todos los Estados Partes en el presente Convenio, así como también a todos los Estados Partes en el Convenio de Varsovia, el Protocolo de La Haya, el Convenio de Guadalajara, el Protocolo de la ciudad de Guatemala y los Protocolos de Montreal.

La presente es copia fiel y completa en español del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional, adoptado en Montreal, Canadá, el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Extiendo la presente, en veintidós páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el ocho de diciembre de dos mil, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- Conste.- Rúbrica.

DECRETO Promulgatorio del Convenio Aduanero para la Importación Temporal de Equipo Profesional y sus Anexos A y B, hechos en Bruselas, el ocho de junio de mil novecientos sesenta y uno.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a sus habitantes, sabed:

El ocho de junio de mil novecientos sesenta y uno, en la ciudad de Bruselas, se adoptó el Convenio Aduanero para la Importación Temporal de Equipo Profesional y sus Anexos A y B, cuyo texto en español consta en la copia certificada adjunta.

El citado Convenio y sus Anexos A y B fueron aprobados por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis, según decreto publicado en el **Diario Oficial de la Federación** del veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete.

El instrumento de adhesión, firmado el veintidós de agosto de dos mil, fue depositado ante el Secretario General de la Organización Mundial de Aduanas, el siete de noviembre del propio año, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Convenio Aduanero para la Importación Temporal de Equipo Profesional.

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el catorce de diciembre de dos mil.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores, **Jorge Castañeda Gutman**.- Rúbrica.

JUAN MANUEL GÓMEZ ROBLEDO, CONSULTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES,

CERTIFICA:

Que en los archivos de esta Secretaría obra traducción al idioma español del Convenio Aduanero para la Importación Temporal de Equipo Profesional y sus Anexos A y B, hechos en Bruselas, el ocho de junio de mil novecientos sesenta y uno, cuyo texto y forma en español son los siguientes:

CONVENIO ADUANERO PARA LA IMPORTACIÓN TEMPORAL DE EQUIPO PROFESIONAL

PREÁMBULO

Los Estados signatarios del presente Convenio, reunidos bajo los auspicios del Consejo de Cooperación Aduanera y de las Partes Contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), y con el concurso de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Teniendo en cuenta los votos formulados por los representantes del comercio internacional y otros sectores interesados en extender el ámbito de aplicación del régimen de importación temporal libre del pago de impuestos a la importación.

Convencidos de que la adopción de procedimientos comunes relativos a la importación temporal libre del pago de impuestos a la importación de equipo profesional, facilitará el intercambio a nivel internacional de conocimientos y técnicas especializadas.

Convienen en lo siguiente:

CAPÍTULO I.

Artículo 1.

Definiciones.

Para los efectos del presente Convenio, se entenderá:

a) Por "impuestos a la importación", los aranceles aduaneros y todos los demás aranceles e impuestos por la importación, o generados con motivo de la importación, así como todos los impuestos internos y de consumo aplicables a las mercancías importadas, sin incluir los derechos y cargos cuyo importe se limite al costo aproximado de los servicios prestados y que no constituyan una protección indirecta a los productos nacionales o un gravamen a la importación para efectos fiscales.

b) Por "admisión temporal", la importación temporal libre del pago de impuestos a la importación y libre del cumplimiento de prohibiciones y restricciones a la importación, sujeta a la obligación de reexportación;

c) Por "Consejo": la organización instituida por el "Convenio relativo a la creación de un Consejo de Cooperación Aduanera", celebrado en Bruselas el 15 de diciembre de 1950;

d) Por "persona", tanto una persona física como una persona moral, a menos que el contexto disponga otra cosa.

CAPÍTULO II.

Artículo 2.

Admisión temporal.

Cada Parte Contratante obligada respecto a un Anexo del presente Convenio, concederá la admisión temporal al equipo objeto de dicho Anexo, sujeto a las condiciones especificadas en los artículos 1 a 22 y en dicho Anexo. El término "equipo" abarcará asimismo, los aparatos auxiliares y los accesorios correspondientes.

Artículo 3.

Cuando una Parte Contratante exija la constitución de una garantía, a fin de asegurarse del cumplimiento de las condiciones requeridas para beneficiarse de las facilidades que dispone el presente Convenio, el importe de dicha garantía no excederá de una cantidad superior al importe de los impuestos a la importación exigibles, más un diez por ciento adicional sobre los mismos.

Artículo 4.

El equipo que sea objeto de admisión temporal, deberá ser reexportado dentro del plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de su importación. Sin embargo, las autoridades aduaneras del país de importación temporal podrán por razones justificadas y con apego a sus leyes y reglamentos vigentes, conceder plazos mayores, o prorrogar el plazo inicial.

Artículo 5.

El equipo objeto de admisión temporal, podrá reexportarse en uno o varios envíos con destino a cualquier país, por cualquier oficina de aduana abierta para tales operaciones, aun cuando sea distinta a la de importación.

Artículo 6.

1. En caso de accidente debidamente probado, y no obstante la obligación de reexportación prevista por el presente Convenio, no se exigirá la reexportación de la totalidad o parte del equipo gravemente dañado, siempre y cuando, con arreglo a lo que establezcan las autoridades aduaneras:

a) se sujete al pago de los impuestos a la importación que sean aplicables; o
b) se abandone, libre de todo cargo, a la Hacienda Pública del país de importación temporal; o
c) se destruya, bajo control oficial, sin que de ello puedan resultar gastos a la Hacienda Pública del país de importación temporal.

2. Cuando la totalidad o parte del material admitido temporalmente no pueda reexportarse como consecuencia de un embargo que no se haya practicado a solicitud de particulares, la obligación de reexportación quedará suspendida mientras dure el embargo.

Artículo 7.

Las refacciones importadas con el objeto de reparar el equipo admitido temporalmente, también se beneficiarán de las facilidades previstas en el presente Convenio.

CAPÍTULO III

Artículo 8.

Disposiciones diversas.

Para la aplicación del presente Convenio, se considerará que el Anexo o Anexos vigentes con respecto a una Parte Contratante, forman parte integrante del Convenio y por lo que se refiere a dicha Parte Contratante, se considerará que cualquier referencia al Convenio incluye dicho Anexo o Anexos.

Artículo 9.

Las disposiciones del presente Convenio establecen facilidades mínimas, y no serán obstáculo para la aplicación de facilidades más amplias que determinadas Partes Contratantes concedan o puedan conceder, ya sea mediante disposiciones unilaterales o en virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales.

Artículo 10.

Para la aplicación del presente Convenio, los territorios de las Partes Contratantes que constituyan una Unión Aduanera o Económica, podrán considerarse como un solo territorio.

Artículo 11.

Las disposiciones del presente Convenio no constituirán obstáculo para la aplicación de prohibiciones o restricciones previstas en las leyes y reglamentos nacionales fundados sobre consideraciones de moralidad, orden público, seguridad pública, higiene o salud pública, o sobre consideraciones de orden veterinario o fitopatológicos, o que se refieran a la protección de patentes, marcas de fábrica y derechos de autor.

Artículo 12.

Cualquier incumplimiento a las disposiciones del presente Convenio, sustitución, declaración falsa o maniobra que beneficie indebidamente a una persona u objeto, con las facilidades previstas en este Convenio, expone al infractor, en el país en donde la infracción se cometa, a las sanciones contenidas en las leyes y reglamentos de ese país, y al pago de los impuestos a la importación aplicables.

CAPÍTULO IV

Artículo 13.

Disposiciones finales.

1. Las Partes Contratantes se reunirán cuando sea necesario, para examinar las condiciones en que se aplica el presente Convenio, y especialmente con el fin de considerar las medidas más apropiadas para asegurar una interpretación y aplicación uniformes del mismo.

2. El Secretario General del Consejo convocará dichas reuniones a petición de cualquier Parte Contratante. Cuando las cuestiones que haya que examinar, se refieran únicamente a uno o más Anexos en vigor, la petición podrá presentarla solamente una Parte Contratante obligada por dicho Anexo o Anexos. Salvo pacto en contrario de las Partes Contratantes, las reuniones se celebrarán en el domicilio del Consejo.

3. Las Partes Contratantes establecerán el reglamento interno de sus reuniones. Las decisiones de las Partes Contratantes se tomarán por mayoría de dos tercios de los que se encuentren presentes y tomen parte en la votación. Si se tratase de cuestiones relativas a uno o más Anexos en vigor, solamente tendrán derecho a voto las Partes Contratantes obligadas por los referidos Anexos.

4. Las Partes Contratantes reunidas no podrán pronunciarse válidamente acerca de una cuestión, si no estuvieren presentes más de la mitad de las mismas.

Artículo 14.

1. Cualquier diferencia entre las Partes Contratantes, referente a la interpretación o aplicación del presente Convenio, se resolverá, en la medida de lo posible, mediante negociaciones directas entre dichas Partes.

2. Cualquier diferencia que no haya podido resolverse mediante negociaciones, se someterá por las partes interesadas, a la consideración de las Partes Contratantes reunidas en las condiciones previstas en el artículo 13 del presente Convenio, las cuales examinarán dicha diferencia y harán las recomendaciones oportunas con objeto de solucionarla.

3. Las partes entre las cuales haya surgido la diferencia, podrán convenir de antemano, la aceptación de las recomendaciones que les hagan las Partes Contratantes.

Artículo 15.

1. Cualquier Estado miembro del Consejo y cualquier Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas o de sus organismos especializados podrá llegar a ser Parte Contratante del presente Convenio:

a) firmándolo, sin reserva de ratificación;
b) depositando un instrumento de ratificación después de haberlo firmado con reserva de ratificación; o
c) adhiriéndose al mismo.

2. El presente Convenio quedará abierto a la firma de los Estados a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo, hasta el 31 de marzo de 1962, en la sede del Consejo, en Bruselas. Después de dicha fecha, quedará abierto a la adhesión de los mismos.

3. En el caso previsto en el párrafo 1 b) del presente artículo, el Convenio deberá someterse a la ratificación de los Estados signatarios, de conformidad con sus procedimientos constitucionales respectivos.

4. Cualquier Estado que no sea miembro de las organizaciones a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo, al cual se haya dirigido una invitación a este efecto por el Secretario General del Consejo, a petición de las Partes Contratantes, podrá llegar a ser Parte Contratante del presente Convenio, adhiriéndose al mismo después de su entrada en vigor.

5. Cada uno de los Estados mencionados en los párrafos 1 o 4 del presente artículo, especificará en el momento de firmar o ratificar el presente Convenio o de adherirse al mismo, el Anexo o Anexos que se compromete a aplicar. Podrá extender posteriormente sus compromisos a uno o más Anexos, mediante notificación al Secretario General del Consejo.

6. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del Secretario General del Consejo.

Artículo 16.

1. El presente Convenio entrará en vigor, por lo que respecta a un Anexo determinado, tres meses después de que cinco de los Estados mencionados en el párrafo 1 del artículo 15 que antecede, hayan firmado el presente Convenio sin reserva de ratificación, o hayan depositado su instrumento de ratificación o de adhesión y se hayan comprometido a aplicar las disposiciones de dicho Anexo.

2. Con respecto a cualquier Estado que ratifique el presente Convenio o se adhiera al mismo, después de que cinco Estados hayan firmado el Convenio sin reserva de ratificación o hayan depositado el instrumento de ratificación o de adhesión, y se hayan comprometido a aplicar las disposiciones de uno o más Anexos determinados, el Convenio entrará en vigor, por lo que se refiere a dicho Anexo o Anexos, tres meses después de la fecha en que dicho Estado se hubiere comprometido, en el momento de entregar su instrumento de ratificación o de adhesión, a aplicar las disposiciones de dicho Anexo o Anexos.

3. Con respecto a cualquier Estado que después de haber firmado sin reserva de ratificación o haber ratificado el presente Convenio o haberse adherido al mismo, se comprometa a aplicar las disposiciones de otro Anexo, que cinco Estados se hayan comprometido con anterioridad a aplicar, el presente Convenio entrará en vigor, por lo que se refiere a dicho Anexo, tres meses después de que dicho Estado haya notificado su compromiso.

Artículo 17.

1. El presente Convenio tendrá una duración ilimitada. Sin embargo, cualquier Parte Contratante podrá denunciarlo en cualquier momento después de la fecha de su entrada en vigor, en la forma en que se determina en el artículo 16 del presente Convenio.

2. La denuncia se notificará mediante instrumento escrito que se depositará ante el Secretario General del Consejo.

3. La denuncia surtirá efectos seis meses después de la recepción del instrumento de denuncia por el Secretario General del Consejo.

4. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del presente artículo, se aplicarán igualmente en lo que respecta a los Anexos del Convenio. Cualquier Parte Contratante podrá, en cualquier momento después

de la fecha de su entrada en vigor, tal como se establece en el artículo 16, declarar que anula su compromiso relativo a la aplicación de uno o más Anexos. La Parte Contratante que anule todos sus compromisos referentes a la aplicación de los Anexos se considerará que ha denunciado el Convenio.

Artículo 18.

1. Las Partes Contratantes, reunidas en las condiciones previstas en el artículo 13, podrán recomendar reformas al presente Convenio.

2. El texto de cualquier reforma así recomendada será comunicada por el Secretario General del Consejo a todas las Partes Contratantes, a todos los demás Estados signatarios o adheridos, al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, a las PARTES CONTRATANTES del GATT y a la UNESCO.

3. Dentro del plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de comunicación de la reforma recomendada, cualquier Parte Contratante o, si se trata de alguna reforma que se refiera solamente a un Anexo en vigor, cualquier Parte Contratante obligada en virtud de dicho Anexo, podrá hacer saber al Secretario General del Consejo:

a) que tiene alguna objeción que oponer a la reforma recomendada, o
b) que tiene intención de aceptar la reforma recomendada, pero en su país no se han cumplido aún las condiciones necesarias para dicha aceptación.

4. Mientras una Parte Contratante que haya dirigido la comunicación prevista en el párrafo 3 b) de este artículo, no haya notificado al Secretario General del Consejo su aceptación a la reforma propuesta, podrá presentar una objeción a la misma durante un plazo de nueve meses, a partir del vencimiento del plazo de seis meses, previsto en el párrafo 3 del presente artículo.

5. Si se formula una objeción a la reforma propuesta en las condiciones previstas en los párrafos 3 y 4 del presente artículo, se considerará que dicha reforma no ha sido aceptada y no surtirá efecto alguno.

6. Si no se ha formulado objeción alguna a la reforma recomendada, en las condiciones previstas en los párrafos 3 y 4 del presente artículo, la reforma se considerará aceptada en la siguiente fecha:

a) Cuando ninguna Parte Contratante haya dirigido comunicación alguna en aplicación de lo dispuesto en el párrafo 3 b) del presente artículo, al vencimiento del plazo de seis meses a que se refiere dicho párrafo 3.
b) Cuando alguna Parte Contratante haya dirigido una comunicación en aplicación del párrafo 3 b) del presente artículo, en la más próxima de las siguientes fechas:
    i) La fecha en la que todas las Partes Contratantes que hayan dirigido dicha comunicación, hayan notificado al Secretario General del Consejo la aceptación de la reforma recomendada; siempre que dicha fecha se refiera a la del vencimiento del plazo de seis meses, a que se refiere el párrafo 3 del presente artículo, cuando todas las aceptaciones se hayan notificado con anterioridad a dicho vencimiento;
    ii) La fecha de vencimiento del plazo de nueve meses, a que se refiere el párrafo 4 del presente artículo.

7. Cualquier reforma que se considere aceptada entrará en vigor seis meses después de la fecha en que se consideró aceptada.

8. El Secretario General del Consejo notificará lo antes posible a todas las Partes Contratantes cualquier objeción formulada de conformidad con el párrafo 3 a) así como cualquier comunicación dirigida de conformidad con el párrafo 3 b) del presente artículo. Posteriormente informará a todas las Partes Contratantes, si la o las Partes Contratantes que hayan dirigido dicha comunicación, oponen o no alguna objeción contra la reforma recomendada o si la aceptan.

9. Cualquier Estado que ratifique el presente Convenio o se adhiera al mismo, se considerará que ha aceptado las reformas que hayan entrado en vigor en la fecha de depósito de su instrumento de ratificación o adhesión.

10. Se considerará que cualquier Estado que después de haber firmado sin reserva de ratificación o haber ratificado el presente Convenio o haberse adherido al mismo, se comprometa a aplicar las disposiciones de otro Anexo, ha aceptado las reformas a dicho Anexo que hayan entrado en vigor en la fecha en que dicho Estado haya notificado su decisión al Secretario General del Consejo.

Artículo 19

1. Cualquier Estado podrá al momento de la firma sin reserva de ratificación, o del depósito del instrumento de ratificación o de adhesión, o posteriormente, notificar al Secretario General del Consejo, que el presente Convenio se extiende a la totalidad o a la parte de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable; en cuyo caso, el Convenio se aplicará a dichos territorios, tres meses después de la fecha de recepción de dicha notificación por el Secretario General del Consejo, pero no antes de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio con respecto a dicho Estado.

2. Cualquier Estado que, en aplicación del párrafo 1 del presente artículo, haya notificado que el presente Convenio se extiende a algún territorio de cuyas relaciones internacionales es responsable, podrá

notificar al Secretario General del Consejo, de conformidad con las disposiciones del artículo 17 del presente Convenio, que dicho territorio dejará de aplicar dicho Convenio.

Artículo 20

No se admitirá reserva alguna al presente Convenio.

Artículo 21

El Secretario General del Consejo notificará a todas las Partes Contratantes, así como a los demás Estados signatarios o adheridos al presente Convenio, al Secretario General de las Naciones Unidas, a las Partes Contratantes del GATT y a la UNESCO:

a) las firmas, ratificaciones, adhesiones y declaraciones mencionadas en el artículo 15 del presente Convenio;
b) la fecha en la cual el presente Convenio y cada uno de sus Anexos entrarán en vigor de conformidad con el artículo 16;
c) las denuncias y las declaraciones recibidas de conformidad con el artículo 17;
d) las reformas que se consideren aceptadas de conformidad con el artículo 18, así como la fecha de su entrada en vigor;
e) las declaraciones y notificaciones recibidas de conformidad con el artículo 19.

Artículo 22

De conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, el presente Convenio se registrará en la Secretaría de las Naciones Unidas a petición del Secretario General del Consejo.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios suscritos firman el presente Convenio.

Hecho en Bruselas el ocho de junio de mil novecientos sesenta y uno, en idioma francés y en idioma inglés, ambos textos igualmente fehacientes, en un ejemplar único que se depositará en poder del Secretario General del Consejo, el cual remitirá copias certificadas del mismo, a todos los Estados mencionados en el párrafo 1 del artículo 15.

ANEXO A

EQUIPO DE PRENSA, DE RADIODIFUSIÓN Y DE TELEVISIÓN

I. Definición y condiciones

1. Definición.

Para la aplicación del presente Anexo se entenderá por "equipos de prensa, de radiodifusión o de televisión", el equipo necesario para que los representantes de prensa, radiodifusión o de televisión, que visiten un país con el fin de realizar reportajes, grabaciones o emisiones dentro de los límites de determinados programas.

2. Condiciones para conceder permiso a la admisión temporal:

El equipo:

a) deberá ser propiedad de una persona física residente en el extranjero o de una persona moral establecida en el extranjero;
b) deberá ser importado por una persona física residente en el extranjero o por una persona moral establecida en el extranjero;
c) deberá poder identificarse cuando se reexporte siempre que, en el caso de medios vírgenes de grabación de sonidos o de imágenes, las medidas de identificación que se apliquen sean muy flexibles;
d) deberá ser utilizado exclusivamente por la persona que visite el país de importación o bajo su propia dirección;
e) no deberá ser objeto de un contrato de alquiler o contrato similar del que sea parte una persona residente o establecida en el país de la importación temporal, siempre que, esta condición no se aplique en el caso de realización de programas conjuntos de radiodifusión o de televisión.

II. Lista Ilustrativa

A. Equipo de prensa, como:

- Máquinas de escribir;
- Cámaras fotográficas o cinematográficas;
- Aparatos de transmisión, de grabación, o de reproducción de sonido o de las imágenes;
- Medios vírgenes de grabación de sonidos o de imágenes.
- Aparatos para el control técnico de buques;

B) Equipo que necesitan los hombres de negocios, los expertos en organización científica o técnica del trabajo, en productividad y en contabilidad, y las personas que ejercen profesiones similares, como, por ejemplo;

- Máquinas de escribir;
- Aparatos de transmisión, registro o producción de sonido;
- Instrumentos y aparatos de cálculo.

C) Equipo necesario para los expertos encargados de estudios topográficos o de trabajos de prospección geofísica, como por ejemplo:

- Instrumentos y aparatos de medición;
- Equipo de perforación;
- Aparatos de transmisión y de comunicación.

D) Instrumentos y aparatos necesarios para los médicos, cirujanos, veterinarios, parteras y personas que ejercen profesiones similares.

E) Equipo necesario para los expertos en arqueología, paleontología, geografía, zoología, etc.

F) Equipo necesario para los artistas, compañías de teatro y orquestas, incluidos todos los objetos utilizados para la representación, instrumentos de música, decorados, vestuario, animales, etc.

G) Equipo necesario para conferencistas con el fin de ilustrar sus conferencias.

H) Vehículos concebidos o especialmente adaptados para ser utilizados con los fines anteriormente indicados, como puestos de control ambulantes, vehículos-taller y vehículos-laboratorio.

ANEXO B

EQUIPO CINEMATOGRÁFICO

I. Definición y Condiciones

1. Definición

Para la aplicación del presente Anexo, se entenderá por "equipo cinematográfico" el equipo necesario para una persona que visite el territorio de otro país con el fin de realizar una o varias películas determinadas.

2. Condiciones para conceder permiso a la admisión temporal.

El equipo:

a) deberá ser propiedad de una persona física residente en el extranjero o de una persona moral con domicilio en el extranjero;

b) deberá ser importado, por una persona física residente en el extranjero o por una persona moral con domicilio en el extranjero;

c) deberá poder identificarse cuando se reexporte, siempre que, en el caso de medios vírgenes de grabación de sonidos o de imágenes, las medidas de identificación que se apliquen sean muy flexibles;

d) deberá ser utilizado exclusivamente por la persona que visite el país de importación o bajo su propia dirección, sin embargo esta condición no se aplicará a los materiales importados con el fin de realizar una película en cumplimiento de un contrato de coproducción celebrado con una persona residente o establecida en el país de importación temporal y aprobado por las autoridades competentes de dicho país, dentro del ámbito de un acuerdo intergubernamental de coproducción cinematográfica;

e) no deberá de ser objeto de un contrato de alquiler o de un contrato similar del que sea parte una persona residente o establecida en el país de importación temporal.

II. Lista ilustrativa

A) Equipo, como:

- Cámaras de todos los tipos;
- Instrumentos y aparatos de medición y de control técnico;
- Grúas y dispositivos para tomas en "travelling";
- Aparatos de iluminación;
- Aparatos de registro o de reproducción del sonido;

B. Equipo de radiodifusión, como:

- Aparatos de transmisión y de comunicación;
- Aparatos de registro o reproducción del sonido;
- Instrumentos y aparatos de medición y control técnico;
- Accesorios de trabajo (relojes, cronómetros, brújulas, grupos electrógenos, transformadores, pilas o acumuladores, aparatos de calefacción y de ventilación, etc.);
- Medios vírgenes de registro de sonido;

C. Equipo de televisión, como:

- Cámaras de televisión;
- Telecinema;
- Instrumentos y aparatos de medición y de control técnico;
- Aparatos de transmisión y retransmisión;
- Aparatos de comunicación;
- Aparatos de registro o de reproducción de sonido o de imagen;
- Aparatos de iluminación;
- Accesorios de trabajo (relojes, cronómetros, brújulas, grupos electrógenos, transformadores, pilas o acumuladores, aparatos de calefacción y ventilación, etc.);

- Medios vírgenes de grabación de sonidos o de imágenes;
- "Film rushes";
- Instrumentos de música, vestuario, decoración y otros accesorios de teatro.

D. Vehículos concebidos o especialmente adaptados para ser utilizados con los fines anteriormente mencionados.

La presente es traducción al idioma español del Convenio Aduanero para la Importación Temporal de Equipo Profesional y sus Anexos A y B, hechos en Bruselas, el ocho de junio de mil novecientos sesenta y uno.

Extiendo la presente, en dieciséis páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el ocho de diciembre de dos mil, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- Conste.- Rúbrica.

DECRETO Promulgatorio del Acuerdo de Cooperación Mutua entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España para el Intercambio de Información Respecto de Operaciones Financieras Realizadas a través de Instituciones Financieras para Prevenir y Combatir Operaciones de Procedencia Ilícita o de Lavado de Dinero, suscrito en la ciudad de Madrid, el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a sus habitantes, sabed:

El veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en la ciudad de Madrid, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó ad referéndum el Acuerdo de Cooperación Mutua para el Intercambio de Información Respecto de Operaciones Financieras Realizadas a través de Instituciones Financieras para Prevenir y Combatir Operaciones de Procedencia Ilícita o de Lavado de Dinero con el Reino de España, cuyo texto en español consta en la copia certificada adjunta.

El citado Acuerdo fue aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, según decreto publicado en el **Diario Oficial de la Federación** del once de febrero de dos mil.

El Canje de Notas previsto en el artículo 10 del Acuerdo, se efectuó en la ciudad de Madrid el ocho de mayo y diecinueve de julio de dos mil.

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el once de diciembre de dos mil.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores, **Jorge Castañeda Gutman**.- Rúbrica.

JUAN MANUEL GOMEZ ROBLEDO CONSULTOR JURIDICO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES,

CERTIFICA:

Que en los archivos de esta Secretaría obra el original correspondiente a México del Acuerdo de Cooperación Mutua entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España para el Intercambio de Información Respecto de Operaciones Financieras Realizadas a través de Instituciones Financieras para Prevenir y Combatir Operaciones de Procedencia Ilícita o de Lavado de Dinero, suscrito en la ciudad de Madrid, el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve, cuyo texto en español es el siguiente:

ACUERDO DE COOPERACION MUTUA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE ESPAÑA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION RESPECTO DE OPERACIONES FINANCIERAS REALIZADAS A TRAVES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA PREVENIR Y COMBATIR OPERACIONES DE PROCEDENCIA ILICITA O DE LAVADO DE DINERO

Los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, en adelante denominados "las Partes";

Conscientes de la necesidad de establecer una cooperación mutua expedita para el intercambio de información respecto de operaciones financieras para prevenir y combatir operaciones de procedencia ilícita o de lavado de dinero realizadas a través de instituciones financieras;

Han acordado lo siguiente:

ARTICULO 1
Objeto y Alcance

1. El objeto del presente Acuerdo es permitir y facilitar, de manera recíproca el intercambio de información sobre operaciones financieras, entre las autoridades competentes de las Partes, a fin de detectar y congelar las operaciones financieras (colocación, ocultación, cambio o transferencia de activos) que se sospeche se realizaron con recursos provenientes de actividades ilícitas.

2. Las autoridades competentes de las Partes cooperarán mutuamente para cumplir con el objeto del presente Acuerdo de conformidad con sus leyes y reglamentos respectivos y los límites fijados por estos últimos.

3. Las autoridades competentes de las Partes se brindarán la más amplia asistencia mutua, a fin de obtener y compartir información sobre operaciones financieras, que se sospeche se realizaron con recursos provenientes de actividades ilícitas, para ser utilizada en investigaciones, procedimientos o procesos judiciales o administrativos relacionados con las actividades mencionadas en el párrafo 1 del presente Artículo.

ARTICULO 2

Definiciones

1. Para efectos del presente Acuerdo:

a) las expresiones "Parte requirente" y "Parte requerida" significan, respectivamente, la Parte que solicita o que recibe la información y la Parte que proporciona o a la que se le solicita la información;

b) el término "persona" se aplica a toda persona física o moral, que pueda considerarse como tal para la legislación de las Partes;

c) la expresión "operación financiera" significa las operaciones en numerario y en donde intervienen las monedas escriturarias o electrónicas;

d) la expresión "institución financiera" se aplica a toda persona, agente, agencia, sucursal u oficina de una entidad, de conformidad con la legislación de las dos Partes o cualquier otra disposición similar o equivalente que pueda adicionarse o sustituir a las mismas.

e) la expresión "autoridad competente" designa:

- por los Estados Unidos Mexicanos al Secretario de Hacienda y Crédito Público o al Procurador Fiscal de la Federación o sus representantes;
- por el Reino de España al Director de Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), o sus representantes.

2. En lo concerniente a la aplicación del presente Acuerdo por una de las Partes, cualquier término no definido en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que se le atribuya en la legislación de la otra Parte.

ARTICULO 3

Conservación de la Información sobre las Operaciones Financieras

Las Partes deberán asegurarse de que las instituciones financieras bajo su jurisdicción y las sujetas a su legislación interna, registren la información sobre operaciones financieras y conserven dicha información por un periodo no menor a cinco (5) años.

ARTICULO 4

Solicitudes de Asistencia

1. Las solicitudes de asistencia serán dirigidas directamente a la autoridad competente, por escrito, en español, y deberán contar con la firma autógrafa de la autoridad competente o sus representantes.

2. Las solicitudes de asistencia podrán realizarse por teléfono o por fax en los casos urgentes. Estas serán confirmadas en las formas indicadas anteriormente y a la brevedad posible.

3. Las solicitudes de información de la Parte requirente incluirán los siguientes datos:

a) el nombre y toda la información o datos disponibles sobre la identidad de la persona sobre la cual se solicita información;

b) la utilidad que se pretende dar a la información requerida, así como la identificación de las Dependencias gubernamentales que tendrán acceso a la información solicitada.

c) un breve resumen del caso que es objeto de la investigación;

d) cuando sea adecuado, un resumen o copias del texto de las leyes presuntamente violadas por la persona sujeta a investigación;

e) toda la información disponible relacionada con la operación financiera objeto de la solicitud de asistencia, incluyendo el número de cuenta, nombre del titular, el nombre y ubicación de la institución financiera implicada en la operación, así como la fecha de la misma.

ARTICULO 5

Condiciones para la Asistencia

1. Toda la información proporcionada dentro del marco del presente Acuerdo no podrá ser entregada más que para los fines de la lucha contra las operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita. Esta no podrá ser proporcionada a otras personas que no sean las autoridades competentes de la Parte requirente, con la autorización previa y por escrito de la autoridad competente de la Parte requerida o de sus representantes.

2. El presente Acuerdo no obliga de ninguna manera a una de las Partes a proporcionar asistencia a la Otra, si se ha iniciado un procedimiento judicial sobre los mismos hechos o si esta asistencia es

susceptible de atentar contra la soberanía, la seguridad, la política nacional, el orden público, y los intereses esenciales del Estado.

3. El presente Acuerdo no impedirá a las Partes cumplir con sus obligaciones derivadas de otros compromisos internacionales.

4. La información intercambiada tendrá el carácter de confidencial, quedando protegida por el secreto que deben guardar los servidores públicos y gozará de la protección prevista por la ley de la misma naturaleza de la Parte requerida.

5. En respuesta a una solicitud de la Parte requirente, la Parte requerida hará todo lo posible para obtener y proporcionar la información siguiente, de conformidad con sus leyes y reglamentos o cualquier otra norma jurídica en vigor:

a) la identidad de la persona que realiza la operación, incluyendo nombre, domicilio y profesión, ocupación y cualquier otro dato disponible relativo a la identidad;
b) si la persona que realiza la operación financiera no actúa por cuenta propia, la identidad de la persona en nombre de quien la realiza, incluyendo los elementos del inciso precedente;
c) la cantidad, la fecha y el tipo de operación financiera;
d) las cuentas afectadas por la operación;
e) el nombre, domicilio, número de matrícula y el tipo de institución financiera en donde se realizó la operación financiera.

6. Cuando la Parte requerida no disponga de información suficiente para responder a la solicitud, dicha Parte adoptará todas las medidas necesarias para proporcionar a la parte requirente la información solicitada, dentro del marco de sus leyes y reglamentos o cualquier otra norma jurídica en vigor.

7. Cuando la Parte requirente solicite documentos originales o certificados, la Parte requerida proporcionará dicha información en los términos de la solicitud, dentro del marco de sus leyes y reglamentos o cualquier otra norma jurídica en vigor.

ARTICULO 6

Asistencia Espontánea

Una parte transmitirá espontáneamente a la otra Parte, la información que sea de su conocimiento y que pueda ser relevante o significativa para el cumplimiento de los fines del presente Acuerdo. Las autoridades competentes determinarán la información que deberán intercambiar conforme al presente párrafo y tomarán las medidas necesarias para proporcionar dicha información.

ARTICULO 7

Limitaciones

El presente Acuerdo no crea ni confiere derechos, privilegios o beneficios a cualquier persona, tercero u otra entidad distinta de las Partes o de sus autoridades gubernamentales.

ARTICULO 8

Procedimientos de Concertación y de Cooperación

1. Las autoridades competentes de las Partes procurarán resolver de común acuerdo cualquier dificultad de interpretación o aplicación del presente Acuerdo. Para tal efecto, las autoridades competentes de las Partes podrán contactarse directamente o por medio de sus representantes.

2. Las autoridades competentes de las Partes, podrán de común acuerdo, desarrollar un programa destinado a ampliar el campo de su cooperación. Este programa podrá incluir, el intercambio de conocimientos técnicos, la realización de investigaciones simultáneas, la elaboración de estudios coordinados en áreas de interés común y el desarrollo de mecanismos más amplios para el intercambio de información, de conformidad con el objeto del presente Acuerdo.

ARTICULO 9

Costos

1. Los costos ordinarios en que se incurra al proporcionar la asistencia, serán sufragados por la Parte requerida y los costos extraordinarios en que se incurra al prestar asistencia serán sufragados por la Parte requirente, salvo que las autoridades competentes acuerden lo contrario.

2. Las Partes determinarán por mutuo acuerdo los costos que serán considerados como extraordinarios.

ARTICULO 10

Entrada en Vigor

Cada una de las Partes notificará a la Otra, por la vía diplomática, el cumplimiento de los procedimientos internos requeridos para la entrada en vigor del presente Acuerdo, el que tendrá efectos el primer día del segundo mes siguiente al día de la recepción de la segunda notificación.

ARTICULO 11

Duración y Denuncia del Acuerdo

El presente Acuerdo se concluye por tiempo indefinido. Cada una de las Partes podrá denunciarlo en todo momento, por la vía diplomática, con aviso previo de tres meses.

Hecho en la ciudad de Madrid, el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.- Por los Estados Unidos Mexicanos: el Secretario de Hacienda y Crédito Público, **José Angel Gurría**.- Rúbrica.- Por el Reino de España: el Ministro de Economía y Hacienda, **Rodrigo de Rato y Figaredo**.- Rúbrica.

La presente es copia fiel y completa en español del Acuerdo de Cooperación mutua entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España para el Intercambio de Información Respecto de Operaciones Financieras Realizadas a través de Instituciones Financieras para Prevenir y Combatir Operaciones de Procedencia Ilícita o de Lavado de Dinero, suscrito en la ciudad de Madrid, el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Extiendo la presente, en diez páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el cuatro de diciembre de dos mil, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- Conste.- Rúbrica.

DECRETO Promulgatorio del Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Checa, suscrito en la Ciudad de México, el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a sus habitantes, sabed:

El veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en la Ciudad de México, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó ad referéndum el Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica con el Gobierno de la República Checa, cuyo texto en español consta en la copia certificada adjunta.

El citado Acuerdo fue aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el veintiocho de abril de dos mil, según decreto publicado en el **Diario Oficial de la Federación** del siete de agosto del propio año.

El Canje de Notas previsto en el artículo 13 del Acuerdo, se efectuó en las ciudades de Praga y México, el doce de enero y dieciocho de agosto de dos mil, respectivamente.

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el once de diciembre de dos mil.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores, **Jorge Castañeda Gutman**.- Rúbrica.

JUAN MANUEL GOMEZ ROBLEDO, CONSULTOR JURIDICO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES,

CERTIFICA:

Que en los archivos de esta Secretaría obra el original correspondiente a México del Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Checa, suscrito en la Ciudad de México, el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, cuyo texto en español es el siguiente:

ACUERDO DE COMERCIO Y COOPERACION ECONOMICA ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CHECA

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Checa, en adelante denominados "las Partes",

DESEANDO estrechar sus relaciones de amistad y fortalecer el espíritu de cooperación sobre la base de los principios del respeto a la soberanía nacional, a la igualdad de los Estados, a los principios enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los principios democráticos;

ANIMADOS por la esperanza de desarrollar y fortalecer las relaciones comerciales entre los dos países;

TOMANDO EN CUENTA la importancia de promover un entorno más liberal y previsible para el comercio internacional;

BUSCANDO fortalecer los vínculos que ambos países han mantenido históricamente respecto de la cooperación económica;

CONSIDERANDO la necesidad de facilitar un mejor acceso a sus respectivos mercados y evitar el establecimiento de nuevas barreras al comercio recíproco;

BUSCANDO establecer un marco adecuado para llevar a cabo consultas en materia comercial;

CONFIANDO en que el establecimiento de un mecanismo consultivo bilateral mejorará la cooperación económica entre los dos países;

Han acordado lo siguiente:

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1

Las Partes, de conformidad con la legislación interna de cada país y ajustándose a lo dispuesto en el presente Acuerdo, establecen como objetivo primordial el fomento y desarrollo de las relaciones económicas entre ambos países en lo general y, en lo particular, del intercambio comercial bilateral.

ARTICULO 2

Las disposiciones de este Acuerdo se aplicarán sin perjuicio de las obligaciones internacionales asumidas por los dos países y de conformidad con las legislaciones nacionales.

ARTICULO 3

1. Las Partes reafirman su voluntad de conducir el intercambio comercial entre ambos países de conformidad con los compromisos por ellos adquiridos en la Organización Mundial de Comercio.

2. De conformidad con las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT 1994), en sus relaciones comerciales las Partes se ajustarán a los principios de:

a) trato de Nación más Favorecida, y
b) trato nacional.

ARTICULO 4

Lo estipulado en el Artículo 3 del presente Acuerdo no será aplicado a los beneficios y preferencias que ya otorga o que otorgue en el futuro cada Parte:

a) por su participación en alguna zona de libre comercio, unión aduanera, u otros esquemas de integración regional o por su comercio transfronterizo con países limítrofes o en un acuerdo tendiente al establecimiento de una zona de libre comercio o una unión aduanera de conformidad con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT 1994); y
b) a productos originarios de países en vías de desarrollo de conformidad con la Parte IV (Comercio y Desarrollo) del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT 1994).

ARTICULO 5

Las Partes, de conformidad con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT 1994), podrán adoptar o mantener medidas que, sin constituir un medio de discriminación arbitrario o injustificado, sean necesarias para la protección de:

a) la moral pública;
b) la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales;
c) la propiedad industrial e intelectual;
d) los recursos naturales y el medio ambiente;
e) los tesoros nacionales de valor artístico, histórico o arqueológico.

ARTICULO 6

Las Partes, de conformidad con el Artículo 2 del presente Acuerdo, garantizarán una protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual de acuerdo con las normas internacionales más elevadas, exigidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, concluido en el marco de la OMC.

Para los efectos del presente artículo, se considerará propiedad intelectual, los derechos de autor -incluidos los correspondientes a programas de cómputo y compilación de datos- los derechos conexos, las marcas comerciales, las indicaciones geográficas -incluidas las denominaciones de origen- los diseños y modelos industriales, las patentes, las topografías de circuitos integrados, la protección de la información confidencial y la protección contra la competencia desleal tal como se define en el artículo 10 bis del Convenio de París sobre la Protección de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 7

Con el propósito de identificar productos con potencial exportador y facilitar el comercio entre ambos países:

1. Las Partes promoverán la cooperación económica y comercial a través de la organización de ferias y exposiciones comerciales, reuniones empresariales, misiones, seminarios y simposia.

2. Las Partes concederán de conformidad con la legislación interna del respectivo país, la autorización para exportaciones e importaciones exentas de aranceles aduaneros, impuestos y demás derechos para:

a) muestras y mercancías sin valor comercial y materiales de publicidad comercial;
b) objetos y mercancías importados temporalmente y destinados a ferias y exposiciones siempre que no sean objeto de venta;
c) equipos destinados a pruebas, exámenes e investigaciones científicas conforme a los programas que se establezcan en el marco de este Acuerdo.

CAPITULO II. COMISION DE COOPERACION ECONOMICA Y COMERCIAL

ARTICULO 8

1. Las Partes establecen, a nivel ministerial, la Comisión de Cooperación Económica y Comercial México - República Checa, en adelante denominada "la Comisión".

2. La Comisión estará encabezada por funcionarios de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de México y del Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa, e integrada por las personas que éstos designen.

3. La Comisión podrá convocar a funcionarios de otras dependencias gubernamentales, establecer y delegar responsabilidades en comités *ad hoc* o permanentes, grupos de trabajo y de expertos, así como solicitar la asesoría de personas o grupos sin vinculación gubernamental.

4. La Comisión se reunirá, de común acuerdo, a solicitud de alguna de las Partes. Las reuniones serán presididas alternadamente por cada una de ellas.

5. El orden del día de las reuniones será establecido previamente y de común acuerdo.

6. Los informes y las recomendaciones de los comités *ad hoc* o permanentes, de los grupos de trabajo y de expertos, así como de personas y grupos sin vinculación gubernamental a que se refiere este Artículo serán sometidos a la atención de la Comisión.

ARTICULO 9

La Comisión:

a) establecerá las líneas generales de cooperación económica;
b) analizará la evolución y las perspectivas del intercambio comercial;
c) identificará y promoverá las oportunidades para acrecentar las relaciones de comercio;
d) servirá como foro de consulta entre las Partes sobre asuntos específicos de comercio;
e) evaluará el desarrollo del Acuerdo.

ARTICULO 10

La Comisión promoverá la cooperación económica y comercial a través de:

a) el intercambio de información y estadísticas sobre comercio, inversión y disposiciones legislativas;
b) el intercambio de información relacionada con normas industriales, comerciales, sanitarias, fitosanitarias y otras normas referentes al comercio entre los dos países;
c) la investigación de mercados efectuada por institutos especializados sobre comercio internacional;
d) la elaboración de estudios sobre condicionantes del intercambio comercial, con el propósito de identificar acciones que mejoren los términos y condiciones de acceso a los mercados de los dos países;
e) la identificación y solución de problemas que afecten la cooperación económica bilateral;
f) la revisión de los desarrollos multilaterales y regionales comerciales de interés común.

CAPITULO III. CONSULTAS

ARTICULO 11

1. Mediante la cooperación y las consultas, las Partes procurarán alcanzar una solución mutuamente satisfactoria ante cualquier diferencia que pudiera surgir en materia comercial.

2. Las Partes podrán establecer consultas en todo momento, a solicitud de alguna de ellas, sobre cualquier asunto o medida que afecte o pueda afectar la interpretación o aplicación de este Acuerdo o sobre las relaciones comerciales entre ambos países.

3. Las consultas tendrán lugar dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud por escrito, al menos que las Partes acuerden una fecha posterior.

CAPITULO IV. AMPLIACION Y MODIFICACION DEL ACUERDO

ARTICULO 12

1. Las Partes podrán convenir cualquier modificación o adición a este Acuerdo, incluyendo su alcance. La Parte que solicite una modificación lo hará por escrito, a través de la vía diplomática.

2. Las adiciones o modificaciones entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el Artículo 13 numeral 1, una vez que se intercambien las notificaciones escritas que certifiquen que las formalidades jurídicas necesarias han concluido.

CAPITULO V. VIGENCIA

ARTICULO 13

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que se reciba la última notificación, cursada a través de la vía diplomática, en la que las Partes se comuniquen el cumplimiento de sus requisitos legislativos internos para tal efecto.

2. Desde la fecha de su entrada en vigor, este Acuerdo sustituirá en lo que se refiere a las relaciones entre México y la República Checa al Convenio Comercial entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia, firmado en la Ciudad de México el 15 de noviembre de 1974.

ARTICULO 14

El presente Acuerdo permanecerá vigente por tiempo indefinido, salvo que alguna de las Partes comunique a la otra su intención de darlo por terminado, a través de la vía diplomática. En este caso, la

validez del presente Acuerdo expirará seis meses después de la fecha de notificación de denuncia a la otra Parte.

En caso de darse por concluida la vigencia del presente Acuerdo, sus disposiciones seguirán aplicándose a los compromisos suscritos y a los proyectos convenidos bajo su amparo hasta su total cumplimiento.

Hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares originales, cada uno en los idiomas español y checo, siendo ambos textos igualmente auténticos.- Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.- Rúbrica.- Por el Gobierno de la República Checa.- Rúbrica.

La presente es copia fiel y completa en español del Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Checa, suscrito en la Ciudad de México, el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Extiendo la presente, en once páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el cuatro de diciembre de dos mil, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- Conste.- Rúbrica.

DECRETO Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa sobre la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la Ciudad de México, el once de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a sus habitantes, sabed:

El once de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en la Ciudad de México, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó ad referéndum el Acuerdo sobre la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con la República Portuguesa, cuyo texto en español consta en la copia certificada adjunta.

El citado Acuerdo fue aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el diecisiete de abril de dos mil, según decreto publicado en el **Diario Oficial de la Federación** del doce de julio del propio año.

El Canje de Notas previsto en el artículo 21 del Acuerdo, se efectuó en la ciudad de Lisboa, el veintiocho de julio y tres de agosto de dos mil.

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el once de diciembre de dos mil.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores, **Jorge Castañeda Gutman**.- Rúbrica.

JUAN MANUEL GOMEZ ROBLEDO, CONSULTOR JURIDICO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES,

CERTIFICA:

Que en los archivos de esta Secretaría obra el original correspondiente a México del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa sobre la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la Ciudad de México, el once de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, cuyo texto en español es el siguiente:

ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA PORTUGUESA SOBRE LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES

Los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa, en adelante denominados como las "Partes Contratantes";

DESEOSOS de intensificar la cooperación económica entre los dos Estados;

CON EL PROPOSITO DE crear y promover condiciones favorables para las inversiones realizadas por los inversionistas de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante sobre bases de igualdad y mutuo beneficio;

RECONOCIENDO que la promoción y protección mutua de las inversiones en la base a este Acuerdo estimulará las iniciativas de negocios;

Han acordado lo siguiente:

CAPITULO UNO: DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1 Definiciones

Para efectos del presente Acuerdo,

1. El término "inversión" significará toda clase de activos y derechos invertidos por inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, de conformidad con las leyes y reglamentos de esta última, incluyendo, en particular, aunque no exclusivamente:

a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles, adquiridos o utilizados para fines económicos, así como otros derechos *in rem,* tales como hipotecas, gravámenes, derechos de prenda y derechos similares;

b) participaciones, acciones, instrumentos de deuda u otras formas de participación en el capital de las empresas, u otras formas de participación y/o intereses económicos en la actividad correspondiente;

c) reclamaciones pecuniarias derivadas de otros activos o de cualquier otra prestación que tenga un valor económico, excepto:

i) reclamaciones pecuniarias que se deriven únicamente de contratos comerciales para la venta de bienes o servicios;

ii) el otorgamiento de créditos para financiar una transacción comercial, tal como financiamiento al comercio;

iii) créditos con una duración menor de tres años,

de un inversionista en el territorio de una Parte Contratante a un inversionista en el territorio de la otra Parte Contratante. No obstante, la excepción relativa a los créditos con una duración menor de tres años, no aplicará a los créditos que un inversionista de una Parte Contratante otorgue a una compañía de la otra Parte Contratante propiedad del primer inversionista;

d) derechos de propiedad intelectual tales como derechos de autor, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, secretos comerciales y empresariales, procedimientos tecnológicos, conocimientos técnicos *(know how),* y prestigio y clientela *(good will)*;

e) concesiones otorgadas conforme a derecho, derivadas de un contrato o acto administrativo de una autoridad competente;

f) activos a disposición de un arrendatario, en el territorio de una Parte Contratante, en virtud de un contrato de arrendamiento y de conformidad con sus leyes y reglamentos.

Cualquier modificación en la forma de inversión de los bienes no afecta su carácter de inversión, siempre y cuando dichas modificaciones estén comprendidas en la definición anterior y no sean contrarias a las leyes y reglamentos de la Parte Contratante en cuyo territorio se realiza la inversión.

Una obligación de pago de, o el otorgamiento de un crédito a una Parte Contratante o a una empresa del Estado, no es considerada una inversión.

2. El término "rentas" significará aquellas cantidades producidas por las inversiones, en un período determinado de tiempo, en particular, aunque no exclusivamente incluirá, ganancias, dividendos, intereses, regalías, remuneraciones por asistencia técnica u otras formas de ingreso relacionadas con la inversión.

Las rentas derivadas de las inversiones gozarán de la misma protección otorgada a las inversiones.

En el caso de que las rentas derivadas de las inversiones, tal y como se define en el párrafo anterior, sean reinvertidas, los ingresos resultantes de la reinversión también serán considerados como un ingreso derivado de la primera inversión.

3. El término "inversionista" significa:

a) personas físicas que tengan la nacionalidad de cualquiera de las Partes Contratantes, de conformidad con sus leyes y reglamentos, y

b) personas jurídicas, incluyendo corporaciones, empresas comerciales u otras empresas o asociaciones que tengan su sede en el territorio de una de las Partes Contratantes, se encuentren incorporadas o constituidas y realicen sus operaciones de conformidad con las leyes y reglamentos de dicha Parte Contratante.

4. El término "territorio" significa el territorio de cualquiera de las Partes Contratantes, tal y como se defina en sus leyes y reglamentos respectivos, incluyendo el mar territorial o cualquier otra área marítima adyacente a la costa de la Parte Contratante interesada sobre la cual dicha Parte Contratante ejerza soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción de conformidad con el derecho internacional.

ARTICULO 2 Promoción y Protección de las Inversiones

1. Cada Parte Contratante promoverá y alentará dentro de su territorio, en la medida de lo posible, las inversiones realizadas por los inversionistas de la otra Parte Contratante, y admitirá dichas inversiones dentro de su territorio de conformidad con sus leyes y reglamentos. Cada Parte Contratante deberá, en cualquier caso, otorgar a dichas inversiones un trato justo y equitativo.

2. Las inversiones realizadas por inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante de conformidad con sus leyes y reglamentos, gozarán de plena protección y seguridad en el territorio de esta última.

3. Ninguna de las Partes Contratantes impedirá, en forma alguna, a través de medidas arbitrarias o discriminatorias, la administración, mantenimiento, uso, goce o disposición de las inversiones en su territorio por inversionistas de la otra Parte Contratante.

4. La extensión legal, alteración o transformación de una inversión será considerada como una nueva inversión.

ARTICULO 3 Trato Nacional y Trato de la Nación Más Favorecida

1. A las inversiones realizadas por inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, así como a las rentas derivadas de una inversión, les será otorgado un trato justo y equitativo y no menos favorable que el otorgado a las inversiones de los inversionistas de esta última Parte Contratante, o a las inversiones de inversionistas de cualquier tercer Estado.

2. Ambas Partes Contratantes otorgarán a los inversionistas de la otra Parte Contratante, con respecto a la administración, mantenimiento, uso, goce o disposición de las inversiones realizadas en su territorio, un trato justo y equitativo y no menos favorable que el otorgado a las inversiones de los inversionistas de esta última Parte Contratante, o a los inversionistas de cualquier tercer Estado.

3. Las disposiciones de este Artículo no serán interpretadas en el sentido de obligar a una Parte Contratante a hacer extensivos a los inversionistas de la otra Parte Contratante los beneficios de cualquier tratamiento, preferencia o privilegio que pudiera ser otorgado por aquella Parte Contratante en virtud de:

a) zonas de libre comercio, uniones aduaneras, mercado común o cualquier acuerdo internacional similar, existentes o futuros, incluyendo otras formas de cooperación económica, de los cuales cualquiera de las Partes Contratantes forme o llegue a formar parte, y
b) acuerdos bilaterales y multilaterales, que tengan o no naturaleza regional, relacionados total o principalmente con asuntos tributarios,

ARTICULO 4 Expropiación e Indemnización

1. Ninguna de las Partes Contratantes podrá expropiar o nacionalizar una inversión ya sea directa o indirectamente a través de medidas equivalentes a expropiación o nacionalización (en lo sucesivo "expropiación"), excepto por causas de utilidad pública, sobre bases no discriminatorias, mediante indemnización y conforme a derecho.

2. Dicha indemnización será equivalente al valor de mercado de la inversión expropiada inmediatamente antes de que la expropiación se haya llevado a cabo o la decisión de expropiar hubiera sido públicamente conocida, lo que ocurra primero. La indemnización será pagada sin demora, incluirá los intereses a la tasa comercial normal desde el día de la expropiación hasta el día de su pago, y será completamente liquidable y libremente transferible.

Los criterios de valuación incluirán el valor corriente, el valor del activo, incluyendo el valor fiscal declarado de la propiedad de bienes tangibles, y otros criterios que resulten apropiados para determinar el valor de mercado.

3. El inversionista cuya inversión sea expropiada, tendrá el derecho conforme a las leyes y reglamentos de la Parte Contratante que llevó a cabo la expropiación, a una pronta revisión de su caso, por una autoridad judicial o de cualquier otra autoridad competente de esa Parte Contratante, y a una evaluación de su inversión de conformidad con los principios establecidos en el presente Artículo.

ARTICULO 5 Indemnización por Pérdidas

A los inversionistas de cualquiera de las Partes Contratantes que hayan sufrido pérdidas en sus inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante debido a guerra o conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, u otras situaciones consideradas como tal por el derecho internacional, les será otorgado por la última Parte Contratante un trato no menos favorable que el otorgado por esa Parte Contratante a las inversiones de sus propios inversionistas, o de cualquier tercer Estado, lo que resulte más favorable, en lo concerniente a la restitución, indemnización o cualquier otra consideración económica. Cualquier pago realizado bajo lo dispuesto por el presente Artículo, deberá ser libremente transferible sin demora.

ARTICULO 6 Transferencias

1. Cada Parte Contratante deberá, de conformidad con sus propias leyes y reglamentos, garantizar que todas las sumas relacionadas con una inversión de un inversionista de la otra Parte Contratante puedan ser libremente transferibles sin demora hacia dentro y hacia fuera de su territorio. Dichas transferencias incluirán, en particular:

a) el capital y las cantidades adicionales necesarias para mantener o incrementar las inversiones;
b) las rentas;
c) las sumas necesarias para el servicio, reembolso y amortización de los préstamos, reconocidos por ambas Partes Contratantes como una inversión;
d) los productos obtenidos por la venta o por la liquidación total o parcial de la inversión;
e) cualquier indemnización o pago a que se refieren los Artículos 4 y 5;
f) cualquier pago realizado de conformidad con el Artículo 7;

g) los salarios devengados por trabajadores extranjeros, debidamente autorizados para trabajar en relación con la inversión en el territorio de la otra Parte Contratante;

h) los pagos derivados de la solución de una controversia.

2. Las transferencias a que se refiere este Artículo, serán realizadas sin demora, al tipo de cambio aplicable a la fecha de la transferencia en una divisa convertible.

3. Para los efectos del presente Artículo, una transferencia se considerará realizada sin demora, cuando dicha transferencia tenga lugar dentro del plazo normalmente utilizado para el cumplimiento de las formalidades necesarias, el cual, bajo ninguna circunstancia, excederá de dos meses contados a partir de la fecha en que la solicitud de transferencia fue presentada.

4. En caso de un desequilibrio fundamental de la balanza de pagos o de una amenaza del mismo, cada Parte Contratante podrá temporalmente restringir las transferencias, siempre y cuando tal Parte Contratante instrumente medidas o un programa de acuerdo con los estándares del Fondo Monetario Internacional. Estas restricciones se impondrán sobre bases equitativas, no discriminatorias y de buena fe, y no podrán ir más allá de lo necesario para remediar la situación correspondiente a la balanza de pagos.

ARTICULO 7 Subrogación

Si una Parte Contratante o su agencia designada realiza un pago de conformidad con una indemnización, garantía o contrato de seguro contra riesgos no comerciales otorgados en relación a una inversión de un inversionista en el territorio de la otra Parte Contratante, esta última Parte Contratante reconocerá la cesión de cualquier derecho o reclamación de tal inversionista a la primera Parte Contratante o su agencia designada y el derecho de la primera Parte Contratante y su agencia designada para ejercitar en virtud de subrogación, cualquier derecho o reclamación en la misma medida que su antecesor en título. Respecto a la transferencia de pagos a la Parte Contratante realizados en virtud de dicha cesión, los Artículos 4, 5 y 6 del presente Acuerdo aplicarán *mutatis mutandis.*

No obstante, en caso de una controversia, únicamente el inversionista designado o la agencia designada que esté constituida conforme al derecho privado, podrán iniciar o participar en procedimientos ante un tribunal nacional o someter el caso a arbitraje internacional de conformidad con las disposiciones de la Sección Primera del Capítulo Dos.

CAPITULO DOS: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

PRIMERA SECCION: SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE Y UN INVERSIONISTA DE LA OTRA PARTE CONTRATANTE

ARTICULO 8 Ambito de Aplicación y Derecho de Acción

1. Esta Sección se aplica a controversias entre una Parte Contratante y un inversionista de la otra Parte Contratante, respecto a un supuesto incumplimiento de una obligación de la primera Parte Contratante conforme a este Acuerdo, que ocasione pérdida o daño al inversionista o a su inversión. Una inversión de un inversionista de la otra Parte Contratante, no podrá someter una controversia a resolución de conformidad con este Acuerdo.

2. Si un inversionista somete una reclamación al arbitraje de conformidad con esta Sección, ni el inversionista ni su inversión podrán iniciar o continuar procedimientos ante un tribunal nacional, salvo los procedimientos en que se solicite la aplicación de medidas precautorias de carácter suspensivo, declaratorio o extraordinario, que no impliquen el pago de daños ante un tribunal administrativo o judicial conforme a la legislación de la Parte contendiente. Si un inversionista o su inversión inicia procedimientos ante un tribunal nacional, el inversionista no podrá someter la reclamación a arbitraje de conformidad con esta Sección.

ARTICULO 9 Medios de Solución, Periodos de Tiempo

1. Un inversionista podrá elegir someter una controversia a resolución:

a) de cualquier tribunal competente, judicial o administrativo, de la Parte Contratante que es parte en la controversia;

b) de acuerdo con cualquier procedimiento de solución de controversias aplicable previamente acordado, o

c) al arbitraje de acuerdo con este Artículo, conforme a:

   i) el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados ("el Convenio del CIADI"), si la Parte Contratante del inversionista y la Parte Contratante que es parte en la controversia, son parte del Convenio del CIADI;

   ii) las Reglas del Mecanismo Complementario del Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ("Mecanismo Complementario del CIADI"), si la Parte Contratante del Inversionista o la Parte Contratante que es parte en la controversia, pero no ambas, son parte del Convenio del CIADI; o

iii) las Reglas de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional ("CNUDMI").

2. Las reglas de arbitraje aplicables, regirán al mismo, salvo en la medida de lo modificado por esta Sección.

3. Una controversia puede ser sometida a resolución, de acuerdo con el párrafo (1) c), una vez que hayan transcurrido seis meses de consultas y negociaciones, desde que los actos que motivan la reclamación tuvieron lugar, siempre que el inversionista haya entregado a la Parte Contratante que es parte en la controversia, notificación por escrito de su intención de someter la reclamación a arbitraje por lo menos con 90 días de anticipación, y siempre y cuando no haya transcurrido un plazo de tres años a partir de la fecha en que el inversionista por primera vez tuvo o debió haber tenido conocimiento de los actos que dieron lugar a la controversia.

4. La notificación a que se refiere el párrafo 3, especificará:

a) el nombre y domicilio tanto del inversionista contendiente como de su inversión;
b) las disposiciones del presente Acuerdo presuntamente incumplidas y cualquier otra disposición aplicable;
c) las cuestiones de hecho y de derecho en que se funda la reclamación, y
d) la reparación que se solicita y el monto aproximado de los daños reclamados.

ARTICULO 10 Consentimiento de la Parte Contratante

Cada Parte Contratante otorga su consentimiento incondicional al sometimiento de una controversia al arbitraje internacional de acuerdo con esta Sección.

ARTICULO 11 Integración del Tribunal Arbitral

1. A menos que las partes contendientes convengan otra cosa, el tribunal arbitral se integrará por tres miembros. Cada parte en la controversia designará un miembro y las Partes contendientes nombrarán de común acuerdo a un tercer miembro como su presidente quien, en cualquier caso, será nacional de un tercer Estado con el cual ambas Partes Contratantes mantengan relaciones diplomáticas.

2. Los miembros de los tribunales arbitrales deberán tener experiencia en derecho internacional y en materia de inversión.

3. Si un tribunal arbitral no ha sido constituido dentro de un término de 90 días contado a partir de la fecha en que la reclamación fue sometida a arbitraje, ya sea porque una de las partes contendientes no designó miembro o no se llegó a un acuerdo en relación con el nombramiento del presidente, el Secretario General del CIADI, a petición de cualquiera de las partes contendientes, será invitado a designar a su discreción, al miembro o miembros aún no designados. No obstante, el Secretario General del CIADI, al momento de designar al presidente, deberá asegurarse de que el mismo no sea nacional de algunas de las Partes Contratantes.

ARTICULO 12 Acumulación

1. Un tribunal de acumulación establecido conforme a este Artículo se instalará de acuerdo a las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI y procederá de conformidad con lo establecido en dichas Reglas, salvo lo dispuesto por esta Sección.

2. Los procedimientos se acumularán:

a) cuando dos o más inversionistas en relación con la misma inversión sometan una reclamación al arbitraje de conformidad con este Acuerdo, o
b) cuando se sometan al arbitraje dos o más reclamaciones derivadas de cuestiones comunes de hecho y de derecho.

3. El tribunal de acumulación resolverá sobre la jurisdicción a la que habrán de someterse las reclamaciones y examinará conjuntamente dichas reclamaciones, salvo que determine que los intereses de cualquier parte contendiente se vean seriamente perjudicados.

ARTICULO 13 Lugar del Arbitraje

A solicitud de cualquiera de las partes contendientes, cualquier arbitraje que se lleve a cabo conforme a esta Sección, se realizará en un Estado que sea parte de la Convención de Nueva York. Las reclamaciones sometidas al arbitraje conforme a esta Sección, se considerarán derivadas de una relación u operación comercial para los efectos del Artículo 1 de la Convención de Nueva York.

ARTICULO 14 Indemnización

Una Parte Contratante no aducirá como defensa, reconvención, derecho de compensación o por cualquier otra razón, que la indemnización u otra compensación, respecto de una parte o la totalidad de las presuntas pérdidas o daños, ha sido recibida o habrá de recibirse de acuerdo con una indemnización, garantía o contrato de seguro.

ARTICULO 15 Derecho Aplicable

1. Un tribunal establecido conforme a este Mecanismo de Solución de Controversias decidirá los asuntos materia de controversia que se sometan a su consideración, de conformidad con las

disposiciones del presente Acuerdo, las reglas aplicables de derecho y los principios de Derecho Internacional.

2. Una interpretación que formulen de común acuerdo las Partes Contratantes sobre una disposición del presente Acuerdo, será obligatoria para cualquier tribunal establecido de conformidad con este Mecanismo de Solución de Controversias. Si las Partes Contratantes no presentan su interpretación dentro de los 60 días siguientes a la fecha de solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, el tribunal decidirá la cuestión.

ARTICULO 16 Laudos y Ejecución

1. Los laudos arbitrales pueden tomar las siguientes formas de resolución:

a) una declaración de que la Parte Contratante ha incumplido con sus obligaciones de conformidad con este Acuerdo;
b) indemnización pecuniaria, que incluirá cualquier interés aplicable;
c) restitución en especie, en casos apropiados, salvo que la Parte Contratante pague en su lugar indemnización compensatoria, cuando la restitución no sea factible, y
d) con el acuerdo de las partes contendientes, cualquier otra forma de resolución.

2. Los laudos arbitrales serán definitivos y obligatorios solamente respecto de las partes contendientes y solamente con respecto al caso particular.

3. El laudo arbitral solamente será publicado si existe un convenio por escrito de las partes contendientes.

4. Un tribunal arbitral no podrá ordenar a una Parte Contratante el pago de daños que tengan carácter punitivo.

5. Cada Parte Contratante deberá tomar, en su territorio, las medidas necesarias para la efectiva ejecución del laudo de acuerdo con lo establecido en este Artículo, y acatar sin demora cualquier laudo emitido en un procedimiento del cual sea parte.

6. Un inversionista podrá recurrir a la ejecución de un laudo arbitral, conforme al Convenio del CIADI o a la Convención de Nueva York, si ambas Partes Contratantes son parte de dichos instrumentos.

SEGUNDA SECCION: SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES

ARTICULO 17 Ambito de Aplicación, Medios de Solución y Periodos de Tiempo

1. Las controversias que surgieren entre las Partes Contratantes sobre la interpretación o aplicación del presente Acuerdo deberán, en la medida de lo posible, ser dirimidas amigablemente o a través de consultas, mediación o conciliación.

2. Si las Partes Contratantes no llegan a un acuerdo en un período de seis (6) meses contados a partir del inicio de las negociaciones, la controversia podrá, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, ser sometida a un tribunal arbitral de conformidad con las disposiciones de este Artículo.

3. Una Parte Contratante no podrá iniciar procedimientos de acuerdo con este Mecanismo de Solución de Controversias por una controversia relativa a la violación de los derechos de un inversionista, la cual haya sido sometida por dicho inversionista a los procedimientos conforme a la Sección Primera, a menos que la otra Parte Contratante incumpla o no acate el laudo dictado en dicha controversia. En este caso, el tribunal arbitral establecido de conformidad con esta Sección, ante la presentación de una solicitud de la Parte Contratante cuyo inversionista fue parte en la controversia, podrá ordenar:

a) una declaración en el sentido de que el incumplimiento o desacato de los términos del laudo definitivo está en contravención de las obligaciones de la otra Parte Contratante de conformidad con este Acuerdo, y
b) una recomendación de que la otra Parte Contratante cumpla y acate el laudo definitivo.

4. El tribunal arbitral será constituido *ad hoc* de la siguiente manera: cada una de Partes Contratantes nombrará un miembro, y estos dos miembros deberán proponer a un nacional de un tercer Estado con el cual ambas Partes Contratantes mantengan relaciones diplomáticas como el Presidente, para que sea nombrado por las dos Partes Contratantes. Los miembros deberán ser designados en un plazo de dos meses, y el Presidente dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que cualquiera de las Partes Contratantes notifique a la otra su intención de someter la controversia a un tribunal arbitral.

5. Si no se cumple con los plazos señalados en el párrafo 4 de este Artículo, cualquiera de las Partes Contratantes podrá, a falta de cualquier otro arreglo, invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia para que realice los nombramientos necesarios. En caso de que el Presidente se encuentre impedido para desempeñar esa función, o sea nacional de alguna de las Partes Contratantes, el Vicepresidente será invitado a hacer los nombramientos necesarios. Si el Vicepresidente también es nacional de cualquiera de las Partes Contratantes o se encuentra impedido por cualquier otra razón para hacer los nombramientos respectivos, corresponderá al miembro de la Corte Internacional de Justicia que siga inmediatamente en el orden jerárquico, y que no sea nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, efectuar los nombramientos necesarios.

6. El tribunal arbitral resolverá las controversias de conformidad con este Acuerdo y las reglas y principios aplicables de Derecho Internacional.

7. El tribunal arbitral resolverá por mayoría de votos. Las decisiones del tribunal arbitral serán definitivas y obligatorias para ambas Partes Contratantes. Cada una de las Partes Contratantes será responsable por los gastos de sus propios árbitros y de su representación en los procedimientos arbitrales. Ambas Partes Contratantes asumirán por partes iguales los gastos correspondientes al Presidente, así como cualquier otro gasto. El Tribunal Arbitral podrá tomar una decisión distinta con respecto a los gastos.

En cualesquiera otros asuntos, el Tribunal Arbitral establecerá sus propias reglas de procedimiento.

8. El Tribunal Arbitral, establecerá en el laudo sus consideraciones de hecho y de derecho, conjuntamente con las razones de las mismas, y podrá, a petición de una Parte Contratante, otorgar las siguientes formas de resolución:

a) una declaración de que un acto de una Parte Contratante está en contravención a sus obligaciones de conformidad con este Acuerdo;
b) una recomendación para que una Parte Contratante actúe de conformidad con sus obligaciones establecidas en este Acuerdo, o
c) cualquier otra forma de resolución que consienta la Parte Contratante en contra de la cual se dictó el laudo.

CAPITULO TRES: DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 18 Aplicación de otras reglas

1. Si las disposiciones correspondientes a las leyes y reglamentos de cualquiera de las Partes Contratantes o las obligaciones derivadas del derecho internacional, existentes en el presente o establecidas en lo sucesivo entre las Partes Contratantes adicionalmente a este Acuerdo, contienen una regulación, ya sea general o específica, que otorgue a las inversiones hechas por inversionistas de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el previsto por este Acuerdo, dichas disposiciones deberán prevalecer sobre este Acuerdo, en la medida en que sean más favorables.

2. Cada Parte Contratante observará cualquier otra obligación que haya asumido por escrito, en relación a inversiones en su territorio por inversionistas de la otra Parte Contratante. Las controversias que se deriven de dichas obligaciones, serán solucionadas únicamente de acuerdo a los términos contenidos en el acuerdo específico del que derivan las obligaciones.

ARTICULO 19 Aplicación del Acuerdo

El presente Acuerdo se aplicará a todas las inversiones realizadas por inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante de conformidad con las disposiciones legales de esta última, sean anteriores o posteriores a su entrada en vigor, pero no se aplicarán a ninguna controversia en materia de inversiones que hubiera surgido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.

ARTICULO 20 Consultas

Los representantes de las Partes Contratantes, cuando resulte necesario, realizarán consultas sobre cualquier materia relacionada con la interpretación y aplicación de este Acuerdo. Dichas consultas se realizarán a solicitud de una de las Partes Contratantes, quien deberá, si ello es necesario, proponer que las reuniones se lleven a cabo en el lugar y el momento acordado a través de canales diplomáticos.

ARTICULO 21 Entrada en vigor y duración

1. El presente Acuerdo entrará en vigor dentro de los 30 días siguientes a la notificación por escrito que cada una de las Partes Contratantes realice respecto del cumplimiento de sus requisitos constitucionales o procedimientos legales.

2. El presente Acuerdo permanecerá en vigor por un período de 10 años, prorrogable por períodos iguales, a menos que 12 meses antes de la terminación de dicho período, cualquiera de las Partes Contratantes notifique por escrito a la otra Parte Contratante su intención de dar por terminado el Acuerdo.

3. Con respecto a las inversiones realizadas con anterioridad a la fecha de terminación del presente Acuerdo, las disposiciones de los Artículos 1 a 20, continuarán en vigor por un periodo de 10 años posterior a la fecha de terminación del Acuerdo.

Hecho en la Ciudad de México, el once de noviembre de 1999, en dos ejemplares originales en los idiomas español, portugués e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación, prevalecerá el texto en inglés.- Por los Estados Unidos Mexicanos.- Rúbrica.- Por la República Portuguesa.- Rúbrica.

PROTOCOLO

En el acto de la firma del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa sobre la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, los plenipotenciarios, estando debidamente

autorizados para este efecto, han acordado adicionar la siguiente disposición, que se considerará como parte integral de dicho Acuerdo:

Con respecto al Artículo 3 del presente Acuerdo:

Las Partes Contratantes consideran que las disposiciones del Artículo 3 del presente Acuerdo, no perjudican el derecho de cualquiera de las Partes Contratantes de aplicar las disposiciones pertinentes de su derecho fiscal que distingan entre contribuyentes que no se encuentren en situación idéntica en lo que se refiere a su lugar de residencia o al lugar en que el capital es invertido.

Hecho en la Ciudad de México, el once de noviembre de 1999, en dos ejemplares originales en los idiomas español, portugués e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación, prevalecerá el texto en inglés.- Por los Estados Unidos Mexicanos.- Rúbrica.- Por la República Portuguesa.- Rúbrica.

La presente es copia fiel y completa en español del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa sobre la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la Ciudad de México, el once de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Extiendo la presente, en veintitrés páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el cuatro de diciembre de dos mil, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- Conste.- Rúbrica.

ANEXO A

EQUIPO DE PRENSA, DE RADIODIFUSION Y DE TELEVISION

I. Definición y condiciones

1. Definición.

Para la aplicación del presente Anexo se entenderá por "equipos de prensa, de radiodifusión o de televisión", el equipo necesario para que los representantes de prensa, radiodifusión o de televisión, que visiten un país con el fin de realizar reportajes, grabaciones o emisiones dentro de los límites de determinados programas.

2. Condiciones para conceder permiso a la admisión temporal:

El equipo:

a) deberá ser propiedad de una persona física residente en el extranjero o de una persona moral establecida en el extranjero;

b) deberá poder identificarse cuando se reexporte siempre que, en el caso de medios vírgenes de grabación de sonidos o de imágenes las medidas de identificación que se apliquen sean muy flexibles;

d) deberá ser utilizado exclusivamente por la persona que visite el país de importación o bajo su propia dirección;

e) no deberá ser objeto de un contrato de alquiler o contrato similar del que sea parte una persona residente o establecida en el país de la importación temporal.

II. Lista Ilustrativa

A. Equipo de prensa, como:

* Máquinas de escribir;
* Cámaras fotográricas o cinematográficas;
* Aparatos de transmisión, de grabación, o de reproducción de sonido o de las imágenes;
* Medios vírgenes de grabación de sonidos o de imágenes.
* Aparatos para el control técnico de buques.

B) Equipo que necesitan los hombres de negocios, los expertos en organización científica o técnica del trabajo, en productividad y en contabilidad, y las personas que ejercen profesiones similares, como, por ejemplo;

* Máquinas de escribir;
* Aparatos de transmisión, registro o producción de sonido;
* Instrumentos y aparatos de cálculo.

C) Equipo necesario para los expertos encartgados de estudios topográfricos o de trabajos de prospección geofísica, como por ejemplo:

* Instrumentos y aparatos de medición;
* Equipo de perforación;
* Aparatos de transmisión y de comunicación.

D) Instrumentos y aparatos necesarios para los médicos, cirujanos, veterinarios, parteras y personas que ejercen profesiones similares.

E) Equipo necesario para los expertos en arqueología, paleontología, geografía, zoología, etc.

F) Equipo necesario para los artistas, compañías de teatro y orquestas, incluidos todos los objetos utilizados para la representación, instrumenhtos de música, decorados, vestuario, animales, etc.

G) Equipo necesario para conferencistas con el fin de ilustrar sus conferencias.

H) Vehículos concedidos o especialmente adaptados para ser utilizados con los fines anteriormente indicados, como puestos de control ambulantes, vehículos-taller y vehículos-laboratorio.

ANEXO B

EQUIPO CINEMATOGRÁFICO

I., Definición y Condiciones

1. Definición

Para la aplicación del presente Anexo, se entenderá por "equipo cinematográfico" el equipo necesario para una persona que visite el territorio de otro país con el fin de realizar una o varias películas determinadas.

2. Condiciones para conceder permiso a la admisión temporal.

El equipo:

a) deberá ser propiedad de una persona física residente en el extranjero o de una persona moral con domicilio en el extranjero;

b) deberá ser importado, por una persona física residente en el extranjero o por una persona moral con domicilio en el extranjero;

c) deberá poder identificarse cuando se reexporte, siempre que, en el caso de medios vírgenes de grabación de sonidos o de imágnes, las medidas de identificación que se apliquen sean muy flexibles;

d) deberá ser utilizado exclusivamente por la persona que visite el país de importación o bajo su propia dirección, sin embargo esta condición no se aplicará a los materiales importados con el fin de realizar una película en cumplimiento de un contrato de coproducción celebrado con una persona residente o establecida en el país de importación temporal y aprobado por las autoridades competentes de dicho país, dentro del ámbito de un acuerdo intergubernamental de coproducción cinematográfica;

e) no debera de ser objeto de un contrato de alquiler o de un contrato similar del que sea parte una persona residente o establecida en el país de importación temporal.

II. Lista ilustrativa

A) Equipo. como:

* Cámaras de todos los tipos;
* Instrumentos y aparatos de medición y de control técnico;
* Grúas y dispositivos para tomas en "travelling";
* Aparatos de iluminación;
* Aparatos de registro o de reproducción del sonido;

B. Equipo de radiodifusión como:

* Aparatos de transmisión y de comunicación;
* Aparatos de registro o reproducción del sonido;
* Instrumentos y aparatos de medición y control técnico;
* Accesorios de trabajo (relojes, cronometros, brújulas, grupos electrógenos, transformadores, pilas o acumuladores, aparatos de calefacción y de ventilación, etc);
* Medios vírgenes de registro de sonido;

C. Equipo de televisión, como:

+ ´Cámaras de televisión;
* Telecinema;
* Instrumentos y aparatos de medición y de control técnico;
* Aparatos de transmisión y retransmisión;
* Aparatos de comunicación;
* Aparatos de registro o de reproducción de sonidos o de imagen;
* Aparatos de iluminación;
* Accesorios de trabajo (relojes, cronómetros, brújulas, grupos electrógenos, transformadores, pilas o acumuladores, aparatos de calefacción y ventilación, etc.);
* Medios vírgenes de grabación de sonidos o de imágenes;
* "Film rushes";
* Instrumentos de música, vestuario, decoración y otros accesorios de teatro.

D) Vehículos concebidos o especialmente adaptados para ser utilizados con los fines anteriormente mencionados.

La presente es traducción al idioma español del Convenio Aduanero para la Importación Temporal de Equipo Profesional y sus Anexos A y B,.hechos en Bruselas, el ocho de junio de mil novecientos sesenta y uno.

Extiendo la presenhte, en dieciséis páginas útiles, enh la Ciudad de México, Distrito Federal, el ocho de diciembre dle dos mil, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- Conste.- Rúbrica.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION

DECRETO por el que se reforma el artículo 13 de la Ley de Pesca.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

SE REFORMA EL ARTICULO 13 DE LA LEY DE PESCA

ARTICULO UNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley de Pesca, para quedar como sigue:

"Artículo 13 **....**

"Las especies denominadas marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de 50 millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial.

"..."

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan al presente Decreto.

TERCERO.- En tanto concluye su vigencia cualquier permiso expedido en sentido contrario a esta reforma, la autoridad administrativa vigilará el exacto cumplimiento de las obligaciones contraídas por los permisionarios.

México, D.F., a 27 de diciembre de 2000.- Dip. **Ricardo Francisco García Cervantes**, Presidente.- Sen. **Enrique Jackson Ramírez**, Presidente.- Dip. **Bernardo Borbón Vilches**, Secretario.- Sen. **Sara Castellanos Cortés**, Secretaria.- Rúbricas**"**.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

EXTRACTO del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgado en favor de VPN de México, S.A. de C.V.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION PARA INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR UNA RED PUBLICA DE TELECOMUNICACIONES, QUE OTORGO EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN FAVOR DE VPN DE MEXICO, S.A. DE C.V., EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2000.

De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 26 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se da cumplimiento a la publicación del extracto de la concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones.

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION

Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, que otorga el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo sucesivo la Secretaría, en favor de VPN de México, S.A. de C.V., en lo sucesivo el Concesionario, al tenor de los siguientes antecedentes y condiciones.

Capítulo Primero

Disposiciones Generales

1.5. Vigencia. La vigencia de esta Concesión será de 30 (treinta) años, contados a partir de la fecha de otorgamiento de la Concesión, y podrá ser prorrogada de acuerdo con lo señalado por el artículo 27 de la Ley.

Capítulo Segundo

Disposiciones aplicables a los servicios

2.1. Calidad de los servicios. El Concesionario se obliga a prestar los servicios comprendidos en esta Concesión, en forma continua y eficiente, garantizando en todo momento la interoperabilidad e interconexión con otras redes públicas de telecomunicaciones, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables y las características técnicas establecidas en la Concesión y sus Anexos respectivos.

Asimismo, el Concesionario, dentro de un plazo de 360 (trescientos sesenta) días naturales, contado a partir del otorgamiento de la Concesión, se obliga a instrumentar los mecanismos necesarios para poder llevar a cabo las reparaciones de la Red o las fallas en los servicios dentro de las 8 (ocho) horas hábiles siguientes a la recepción del reporte correspondiente.

El Concesionario buscará que los servicios comprendidos en la Concesión se presten con las mejores condiciones de precio, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, a fin de promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones. Para ello, deberá enviar a la Comisión, dentro de los 120 (ciento veinte) días naturales siguientes a la fecha de otorgamiento de la Concesión, los estándares mínimos de calidad de dichos servicios que se obliga a respetar, sin perjuicio de que cumpla con las normas de calidad establecidas en los Anexos de la presente Concesión y, en su caso, con las reglas de carácter general que al efecto expida la Comisión.

2.2. Interrupción de los servicios. Salvo lo establecido en los Anexos correspondientes, en el supuesto de que se interrumpa la prestación de alguno de los servicios comprendidos en esta Concesión durante un periodo mayor a 72 (setenta y dos) horas consecutivas, contado a partir de la fecha establecida en el reporte respectivo, el Concesionario bonificará a los usuarios la parte de la cuota correspondiente al tiempo que dure la interrupción.

2.3. Sistema de quejas y reparaciones. El Concesionario deberá establecer un sistema para la recepción de quejas y la reparación de fallas en la Red, mismo que deberá estar a disposición del público en general en sus oficinas comerciales.

Asimismo, durante las 24 horas del día, los 365 (trescientos sesenta y cinco) días del año, el Concesionario deberá proporcionar servicios por operadora de atención a sus usuarios y de recepción de quejas de los servicios comprendidos en la Concesión.

Mensualmente, el Concesionario deberá elaborar un reporte que incluirá la incidencia de fallas por tipo, las acciones correctivas adoptadas y las bonificaciones realizadas, mismo que deberá presentar a la Comisión cuando ésta lo requiera.

La Comisión podrá hacer del conocimiento público dicha información, conjuntamente con la de otros concesionarios que presten servicios similares en el país o en la misma región.

2.8. Servicios de emergencia. El Concesionario deberá presentar a la Comisión, dentro de los 180 (ciento ochenta) días naturales contados a partir de la fecha de otorgamiento de la Concesión, un plan de acciones para prevenir la interrupción de los servicios, así como para proporcionar servicios de emergencia, en caso fortuito o de fuerza mayor.

En la eventualidad de una emergencia y dentro del área de cobertura de la Red, el Concesionario proporcionará los servicios indispensables que indique la Secretaría, en forma gratuita, sólo por el tiempo y en la proporción que amerite la emergencia.

El Concesionario deberá dar aviso a la Secretaría y a la Comisión, de cualquier evento que repercuta en forma generalizada o significativa en el funcionamiento de la Red.

Capítulo Tercero

Tarifas

3.1. Cobro indebido de tarifas. Si el Concesionario llegare a cobrar a los usuarios tarifas no registradas o distintas de las establecidas, en su caso, conforme al artículo 61 de la Ley, deberá reembolsar a éstos la diferencia con respecto a las tarifas registradas o establecidas.

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que se impongan de conformidad con la Ley y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

Anexo A del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgado por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al amparo de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en favor de VPN de México, S.A. de C.V., con fecha 17 de noviembre de 2000.

A.2. Servicios comprendidos. Los servicios contenidos en el presente numeral, constituyen los servicios autorizados por la Secretaría, respecto de la Concesión. El Concesionario acepta y se obliga a prestar los servicios descritos en adelante, únicamente a las personas físicas y morales definidas como usuarios o usufructuarios en el numeral anterior.

A.2.1. La provisión y arrendamiento de capacidad de la Red para la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza;

A.2.2. La comercialización de la capacidad adquirida respecto de redes de otros concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, con los cuales el Concesionario tenga celebrados los convenios correspondientes para la adquisición de dicha capacidad;

A.2.3. La prestación del servicio de telefonía de larga distancia nacional e internacional, este último, previa autorización por parte de la Comisión del puerto internacional correspondiente;

A.2.4. La prestación del Servicio de transmisión de datos, y

A.2.5. La prestación directa de servicios de valor agregado a sus usuarios, previo registro de los mismos ante la Comisión, en términos de lo previsto por los artículos 3 fracción XII, 33 y 64 fracción II de la Ley. En todo caso, el Concesionario deberá llevar una contabilidad separada para estos servicios.

A.7. Plazo para iniciar la explotación de la Red. El Concesionario deberá iniciar la explotación de la Red, en un plazo máximo de 360 (trescientos sesenta) días naturales, contado a partir de la fecha de otorgamiento de la Concesión, para lo cual deberá informar a la Secretaría y a la Comisión el inicio de la explotación de la Red, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a su realización.

A.8. Compromisos de cobertura de la Red. El Concesionario se obliga a enlazar con infraestructura propia y arrendada, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud y que se mencionan en el numeral A.15 del presente Anexo, las ciudades que a continuación se señalan tomando como referencia el programa de cobertura existente para la Red de telefonía local.

La cobertura de la Red contempla la instalación de infraestructura en las siguientes ciudades:

Primer año: Reynosa, Tamps.; Tampico, Tamps.; México, D.F.; Veracruz, Ver.; Coatzacoalcos, Ver., y Villahermosa, Tab.

Segundo año: Monterrey, N.L.

Leonel López Celaya, Director General de Política de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 10 fracciones IV, XI y XVII y 23 del Reglamento Interior de esta dependencia del Ejecutivo Federal, en el Acuerdo de fecha 5 de junio de 1987, y a efecto de que se dé cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo 26 de la Ley Federal de Telecomunicaciones,

HAGO CONSTAR:

Que el presente Extracto del Título de Concesión, compuesto por cuatro fojas debidamente utilizadas, concuerda fielmente en todas y cada una de sus partes con su original, el cual tuve a la vista y con el cual se cotejó.

Se expide la presente constancia a los trece días del mes de diciembre de dos mil.- Conste.- Rúbrica.

(R.- 137697)

EXTRACTO del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgado en favor de VPN de México, S.A. de C.V.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION PARA INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR UNA RED PUBLICA DE TELECOMUNICACIONES, QUE OTORGO EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN FAVOR DE VPN DE MEXICO, S.A. DE C.V., EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2000.

De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 26 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se da cumplimiento a la publicación del extracto de la concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones.

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION

Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, que otorga el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo sucesivo la Secretaría, en favor de VPN de México, S.A. de C.V., en lo sucesivo el Concesionario, al tenor de los siguientes antecedentes y condiciones.

Capítulo Primero

Disposiciones Generales

1.3. Compromisos de cobertura de la Red. El Concesionario proporcionará los servicios a que se refieren los anexos de la Concesión a través de infraestructura cableada de fibra óptica y par trenzado de cobre. La cobertura de la Red se realizará de acuerdo al siguiente programa de instalación para los primeros 5 (cinco) años contados a partir de la fecha de otorgamiento de la Concesión:

Ciudades o localidades	Medio	Año I Km.	Año II Km.	Año III Km.	Año IV Km.	Año V Km.	Total Km.

México, D.F. Area Metropolitana	Fibra óptica Cobre	0 0	4.5 67.5	7 105	7.4 111	8.9 133.5	27.8 417
Veracruz/ Boca del Río, Ver.	Fibra óptica Cobre	0 0	1.125 16.875	1.75 26.25	1.85 27.75	2.225 33.375	6.95 104.25
Tampico/ Cd. Madero, Tamps.	Fibra óptica Cobre	0 0	2.25 33.75	3.5 52.5	3.7 55.5	4.45 66.75	13.9 208.5
Reynosa, Tamps.	Fibra óptica Cobre	0 0	1.25 16.875	1.75 26.25	1.85 27.75	2.225 33.375	7.075 104.25
Monterrey, N.L.	Fibra óptica Cobre	0 0	0 0	5 75	10 150	10 150	25 375
Coatzacoalcos, Ver.	Fibra óptica Cobre	0 0	0.3375 5.0625	0.525 7.875	0.555 8.325	0.6675 10.012	2.085 31.275
Villahermosa, Tab.	Fibra óptica Cobre	0 0	0.225 3.375	0.35 5.25	0.37 5.55	0.445 6.675	1.39 20.85
Total	Fibra óptica Cobre	0 0	9.6875 143.44	19.875 298.12	25.725 385.88	28.912 433.69	84.2 1261.1

1.7. Vigencia. La vigencia de esta Concesión será de 30 (treinta) años, contados a partir de la fecha de otorgamiento de la Concesión, y podrá ser prorrogada de acuerdo con lo señalado por el artículo 27 de la ley.

1.8. Plazo para iniciar la explotación de la Red. El Concesionario deberá iniciar la explotación de la Red, en un plazo máximo de 360 (trescientos sesenta) días naturales, contado a partir de la fecha de otorgamiento de la Concesión, para lo cual deberá informar a la Secretaría y a la Comisión el inicio de la explotación de la Red, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a su realización.

Capítulo Segundo

Disposiciones aplicables a los servicios

2.1. Calidad de los servicios. El Concesionario se obliga a prestar los servicios comprendidos en esta Concesión, en forma continua y eficiente, garantizando en todo momento la interoperabilidad e interconexión con otras redes públicas de telecomunicaciones, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables y las características técnicas establecidas en la Concesión y sus anexos respectivos.

Asimismo, el Concesionario, dentro de un plazo de 360 (trescientos sesenta) días naturales, contado a partir del otorgamiento de la Concesión, se obliga a instrumentar los mecanismos necesarios para poder llevar a cabo las reparaciones de la Red o las fallas en los servicios, dentro de las 8 (ocho) horas hábiles siguientes a la recepción del reporte correspondiente.

El Concesionario buscará que los servicios comprendidos en la Concesión, se presten con las mejores condiciones de precio, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, a fin de promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones. Para ello, deberá enviar a la Comisión, dentro de los 120 (ciento veinte) días naturales siguientes a la fecha de otorgamiento de la Concesión, los estándares mínimos de calidad de dichos servicios que se obliga a respetar, sin perjuicio de que cumpla con las normas de calidad establecidas en los anexos de la presente Concesión y, en su caso, con las reglas de carácter general que al efecto expida la Comisión.

2.3. Interrupción de los servicios. Salvo lo establecido en los anexos correspondientes, en el supuesto de que se interrumpa la prestación de alguno de los servicios comprendidos en esta Concesión durante un periodo mayor a 72 (setenta y dos) horas consecutivas, contado a partir de la fecha establecida en el reporte respectivo, el Concesionario bonificará a los usuarios la parte de la cuota correspondiente al tiempo que dure la interrupción.

2.4. Sistema de quejas y reparaciones. El Concesionario deberá establecer un sistema para la recepción de quejas y la reparación de fallas en la Red, mismo que deberá estar a disposición del público en general en sus oficinas comerciales.

Asimismo, durante las 24 horas del día, los 365 (trescientos sesenta y cinco) días del año, el Concesionario deberá proporcionar servicios por operadora de atención a sus usuarios y de recepción de quejas de los servicios comprendidos en la Concesión.

Mensualmente, el Concesionario deberá elaborar un reporte que incluirá la incidencia de fallas por tipo, las acciones correctivas adoptadas y las bonificaciones realizadas, mismo que deberá presentar a la Comisión cuando ésta lo requiera.

La Comisión podrá hacer del conocimiento público dicha información, conjuntamente con la de otros concesionarios que presten servicios similares en el país o en la misma región.

2.8. Servicios de emergencia. El Concesionario deberá presentar a la Comisión, dentro de los 180 (ciento ochenta) días naturales contados a partir de la fecha de otorgamiento de la Concesión, un plan de acciones para prevenir la interrupción de los servicios, así como para proporcionar servicios de emergencia, en caso fortuito o de fuerza mayor.

En la eventualidad de una emergencia y dentro del área de cobertura de la Red, el Concesionario proporcionará los servicios indispensables que indique la Secretaría, en forma gratuita, sólo por el tiempo y la proporción que amerite la emergencia.

El Concesionario deberá dar aviso a la Secretaría y a la Comisión, de cualquier evento que repercuta en forma generalizada o significativa en el funcionamiento de la Red.

Capítulo Tercero

Tarifas

3.1. Cobro indebido de tarifas. Si el Concesionario llegare a cobrar a los usuarios tarifas no registradas o distintas de las establecidas, en su caso, conforme al artículo 61 de la Ley, deberá reembolsar a éstos la diferencia con respecto a las tarifas registradas o establecidas.

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que se impongan de conformidad con la Ley y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

Anexo A del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgado por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al amparo de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en favor de VPN de México, S.A. de C.V., con fecha 17 de noviembre de 2000.

A.2. Servicios comprendidos. En el presente Anexo se encuentran comprendidos los siguientes servicios:

A.2.1. El servicio de telefonía local a usuarios residenciales y comerciales, de conformidad con los parámetros y criterios de interconexión e interoperabilidad que se establecen en las Reglas y en el presente Anexo;

A.2.2. Servicios de operadora autorizados a los concesionarios del Servicio local, de conformidad con lo establecido en el Plan Técnico Fundamental de Numeración y la regulación específica que al efecto emita la Comisión;

A.2.3. La comercialización de la capacidad adquirida de otros concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones con las que el Concesionario tenga celebrados los convenios correspondientes, y

A.2.4. Servicios de telefonía pública, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Servicio de Telefonía Pública, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 16 de diciembre de 1996.

A.10. Operación y calidad de los servicios. Hasta en tanto la Comisión no emita las normas de calidad específicas para la prestación de los servicios a que se refiere este Anexo, el Concesionario deberá cumplir con todas y cada una de las normas mínimas que a continuación se refieren:

A.10.1. El porcentaje de fallas en líneas respecto al total de líneas en servicio, deberá ser como máximo de 4% (cuatro por ciento) al mes;

A.10.2. El porcentaje de reparación de líneas telefónicas el mismo día de recepción de la queja, debe ser como mínimo de 80% (ochenta por ciento);

A.10.3. El porcentaje de reparación de líneas dentro de los 3 (tres) días siguientes al de la recepción de la queja será de 94% (noventa y cuatro por ciento);

A.10.4 El porcentaje de intentos de llamadas en la hora de máximo tráfico que recibe el tono de marcar en 4 (cuatro) segundos, deberá ser al menos de 99% (noventa y nueve por ciento);

A.10.5. El porcentaje de establecimiento de llamadas locales que lleguen a su destino en la hora de máximo tráfico, independientemente si está ocupado o no contesta el número deseado y sin considerar los casos de marcación incompleta o número inexistente, deberá ser como mínimo de 97% (noventa y siete por ciento), y

A.10.6. El porcentaje de contestación de operadora para los servicios de información de números de directorio y para recepción de quejas será como mínimo de 92% (noventa y dos por ciento).

A.13. Servicio no discriminatorio. El Concesionario deberá atender toda solicitud de Servicio local residencial o comercial que se encuentre dentro de los doscientos metros de distancia respecto a cada uno de los lados donde se encuentre instalada la infraestructura de distribución correspondiente.

A.14. Atención de solicitudes. A partir del inicio de la prestación de los servicios contemplados en este Anexo, el Concesionario se obliga a atender cualquier solicitud de dichos servicios en un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales después de que reciba la solicitud y a disminuir en 5 (cinco) días naturales el plazo máximo mencionado por cada año sucesivo, hasta que el plazo máximo sea de 10 (diez) días naturales.

A.15. Servicios de emergencia. Sin perjuicio de lo señalado en la Condición 2.8. de la Concesión, el Concesionario deberá dar prioridad a la instalación y reparación de las líneas telefónicas de los cuerpos de seguridad pública, bomberos y organizaciones que presten servicios de emergencia y que la Secretaría determine conforme a los programas que establezca. El Concesionario se obliga a proporcionar gratuitamente los servicios de llamadas de emergencia que determine la Secretaría dentro de su Area de servicio local.

A.17. Servicios de recepción de quejas. El Concesionario deberá proporcionar servicios de recepción de quejas de los servicios del presente Anexo, a través de la marcación de los códigos asignados en el Plan Técnico Fundamental de Numeración para este propósito, durante las 24 horas del día, todos los días del año.

Anexo B del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgado por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al amparo de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en favor de VPN de México, S.A. de C.V., con fecha 17 de noviembre de 2000.

B.2. Servicio comprendido. En el presente Anexo se encuentra comprendido el Servicio de transmisión de datos, que se proporciona a través de la infraestructura señalada en la Condición 1.3. de la Concesión.

Dentro del Servicio de transmisión de datos, se entenderán comprendidas:

B.2.1. La conexión de sus usuarios entre sí para fines exclusivos del Servicio de transmisión de datos mediante la provisión de enlaces dedicados locales;

B.2.2. La interconexión con otras redes públicas de telecomunicaciones, exclusivamente para la provisión del Servicio de transmisión de datos entre sus usuarios, para lo cual, el convenio de interconexión correspondiente deberá ser registrado ante la Comisión, en términos del artículo 64 fracción VI de la Ley;

B.2.3. El acceso a sus usuarios a Servicios de valor agregado, siempre que el proveedor de dichos servicios cuente con la constancia de registro correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley;

B.2.4. La venta o arrendamiento de capacidad de la Red para la prestación del Servicio de transmisión de datos objeto del presente Anexo, y

B.2.5. La comercialización de la capacidad adquirida de otros concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones con las que el Concesionario tenga celebrados los convenios correspondientes, para la prestación del servicio objeto del presente Anexo.

B.7. Calidad de los servicios. Hasta en tanto la Comisión no emita las normas de calidad específicas para la prestación del Servicio de transmisión de datos, el Concesionario deberá cumplir con todas y cada una de las normas mínimas que a continuación se refieren:

B.7.1. El porcentaje de instalación de enlaces dedicados locales en 20 (veinte) días a que se obliga como mínimo el Concesionario es de 95% (noventa y cinco por ciento);

B.7.2. El porcentaje de instalación de enlaces dedicados locales en 35 (treinta y cinco) días a que se obliga como mínimo el Concesionario es de 99% (noventa y nueve por ciento);

B.7.3. El porcentaje de reparación de enlaces dedicados locales en 8 (ocho) horas a que se obliga como mínimo el Concesionario es de 60% (sesenta por ciento), y

B.7.4. El porcentaje de reparación de enlaces dedicados locales en un día a que se obliga como mínimo el Concesionario es de 90% (noventa por ciento);

B.9. Interrupción del Servicio de transmisión de datos. En caso de que se interrumpa la prestación del Servicio de transmisión de datos por 12 (doce) horas consecutivas, contadas a partir de la hora establecida en el reporte respectivo, el Concesionario bonificará a sus usuarios la parte de la cuota correspondiente al tiempo que dure la interrupción, aun cuando la suspensión se deba a casos fortuitos o de fuerza mayor y sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda.

B.12. Servicios de emergencia. Sin perjuicio de lo señalado en la Condición 2.8 de la Concesión, el Concesionario deberá dar prioridad a la instalación y reparación de los Servicios de transmisión de datos

contratados por los cuerpos de seguridad pública, bomberos y organizaciones que presten servicios de emergencia y que la Secretaría determine conforme a los programas que establezca.

Leonel López Celaya, Director General de Política de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 10 fracciones IV, XI y XVII y 23 del Reglamento Interior de esta dependencia del Ejecutivo Federal, en el acuerdo de fecha 5 de junio de 1987, y a efecto de que se dé cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo 26 de la Ley Federal de Telecomunicaciones,

HAGO CONSTAR:

Que el presente Extracto del Título de Concesión compuesto por siete fojas debidamente utilizadas, concuerda fielmente en todas y cada una de sus partes con su original, el cual tuve a la vista y con el cual se cotejó.- Se expide la presente constancia a los trece días del mes de diciembre de dos mil.- Conste.- Rúbrica.

(R.- 137698)

BANCO DE MEXICO

TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley del Banco de México; en los artículos 8o. y 10o. del Reglamento Interior del Banco de México, y en los términos del numeral 1.2 de las Disposiciones Aplicables a la Determinación del Tipo de Cambio para Solventar Obligaciones Denominadas en Moneda Extranjera Pagaderas en la República Mexicana, publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** el 22 de marzo de 1996, el Banco de México informa que el tipo de cambio citado obtenido el día de hoy conforme al procedimiento establecido en el numeral 1 de las Disposiciones mencionadas, fue de $9.7546 M.N. (NUEVE PESOS CON SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS DIEZMILESIMOS MONEDA NACIONAL) por un dólar de los EE.UU.A.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Atentamente

México, D.F., a 5 de enero de 2001.

BANCO DE MEXICO

Gerente de Inversiones y Cambios Nacionales	Director de Disposiciones de Banca Central
Ricardo Medina Alvarez	**Héctor Tinoco Jaramillo**
Rúbrica.	Rúbrica.

TASAS de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TASAS DE INTERES DE INSTRUMENTOS DE CAPTACION BANCARIA EN MONEDA NACIONAL

	TASA BRUTA		**TASA BRUTA**
I. DEPOSITOS A PLAZO FIJO		II. PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	
A 60 días		A 28 días	
Personas físicas	9.12	Personas físicas	9.64
Personas morales	9.12	Personas morales	9.64
A 90 días		A 91 días	
Personas físicas	9.64	Personas físicas	10.05
Personas morales	9.64	Personas morales	10.05
A 180 días		A 182 días	
Personas físicas	9.77	Personas físicas	10.15
Personas morales	9.77	Personas morales	10.15

Las tasas a que se refiere esta publicación, corresponden al promedio de las determinadas por las instituciones de crédito para la captación de recursos del público en general a la apertura del día 5 de

enero de 2001. Se expresan en por ciento anual y se dan a conocer para los efectos a que se refiere la publicación de este Banco de México en el **Diario Oficial de la Federación** de fecha 11 de abril de 1989.

México, D.F., a 5 de enero de 2001.

BANCO DE MEXICO

Director de Disposiciones de Banca Central	Director de Información del Sistema Financiero
Héctor Tinoco Jaramillo	**Cuauhtémoc Montes Campos**
Rúbrica.	Rúbrica.

TASA de interés interbancaria de equilibrio.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO

Según resolución de Banco de México publicada en el **Diario Oficial de la Federación** del 23 de marzo de 1995, y de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Circular 2019/95, modificada mediante Circular-Telefax 4/97 del propio Banco del 9 de enero de 1997, dirigida a las instituciones de banca múltiple, se informa que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 29 días, obtenida el día de hoy, fue de 18.2200 por ciento.

La tasa de interés citada se calculó con base a las cotizaciones presentadas por: Bancomer S.A., Banca Serfin S.A., Banco Internacional S.A., Banco Nacional de México S.A., Citibank México S.A., Banco Interacciones S.A., Chase Manhattan Bank México S.A. y Banco Inverlat S.A.

México, D.F., a 5 de enero de 2001.

BANCO DE MEXICO

Director de Disposiciones de Banca Central	Gerente de Mercado de Valores
Héctor Tinoco Jaramillo	**Jaime Cortina Morfin**
Rúbrica.	Rúbrica.

EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de diciembre de 2000.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

EQUIVALENCIA DE LAS MONEDAS DE DIVERSOS PAISES CON EL DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2000.

Con fundamento en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación y en los artículos 8o. y 10o. de su Reglamento Interior, el Banco de México da a conocer a continuación, para efectos fiscales, la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de los EE.UU.A., observada en los mercados internacionales al cierre del mes de diciembre de 2000.

País	Moneda	Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A.
Africa Central	Franco	0.00141
Albania	Lek	0.00699
Alemania	Marco (3)	0.47560
Antillas Holandesas	Florín	0.56177
Arabia Saudita	Riyal	0.26661
Argelia	Dinar	0.01362
Argentina	Peso	1.00145
Australia	Dólar	0.55600
Austria	Chelín (3)	0.06760
Bahamas	Dólar	1.00000
Bahrain	Dinar	2.65245
Barbados	Dólar	0.50249
Bélgica	Franco (3)	0.02306
Belice	Dólar	0.50505
Bermuda	Dólar	1.00000
Bolivia	Boliviano	0.15649
Brasil	Real	0.51295
Bulgaria	Lev	0.47465
Canadá	Dólar	0.66560

Chile	Peso	0.00175
China	Yuan	0.12080
Colombia	Peso (1)	0.44703
Corea del Norte	Won	0.45455
Corea del Sur	Won (1)	0.79840
Costa Rica	Colón	0.00314
Cuba	Peso (2)	0.04762
Dinamarca	Corona	0.12420
Ecuador	Sucre (1)	0.04000
Egipto	Libra	0.25707
El Salvador	Colón	0.11422
Emiratos Arabes Unidos	Dirham	0.27225
Eslovaquia	Corona	0.02102
España	Peseta (3)	0.00559
Estados Unidos de América	Dólar	1.00000
Estonia	Corona	0.05917
Etiopía	Birr	0.12180
Federación Rusa	Rublo	0.03495
Fidji	Dólar	0.46000
Filipinas	Peso	0.02004
Finlandia	Marco (3)	0.15645
Francia	Franco (3)	0.14181
Ghana	Cedi (1)	0.13722
Gran Bretaña	Libra	1.49220
Grecia	Dracma	0.00272
Guatemala	Quetzal	0.12970
Guyana	Dólar	0.00554
Haití	Gourde	0.04510
Holanda	Florín (3)	0.42211
Honduras	Lempira	0.06622
Hong Kong	Dólar	0.12822
Hungría	Forint	0.00350
India	Rupia	0.02142
Indonesia	Rupia (1)	0.10449
Irak	Dinar (2)	3.17965
Irán	Riyal (1)	0.57061
Irlanda	Punt (3)	1.18111
Islandia	Corona	0.01176
Israel	Shekel	0.24691
Italia	Lira (1) (3)	0.48041
Jamaica	Dólar	0.02217
Japón	Yen	0.00871
Jordania	Dinar	1.40845
Kenya	Chelín	0.01283
Kuwait	Dinar	3.27439
Líbano	Libra (1)	0.66225
Libia	Dinar	1.83925
Lituania	Litas	0.25001
Luxemburgo	Franco (3)	0.02306
Malasia	Ringgit	0.26316
Malta	Lira	2.27790
Marruecos	Dirham	0.09401
Nicaragua	Córdoba	0.07752
Nigeria	Naira	0.00907
Noruega	Corona	0.11337
Nueva Zelanda	Dólar	0.43915
Pakistán	Rupia	0.01724
Panamá	Balboa	1.00000
Paraguay	Guaraní (1)	0.28209
Perú	Nvo. Sol	0.28361

Polonia	Zloty	0.24114
Portugal	Escudo (3)	0.00464
Puerto Rico	Dólar	1.00000
Rep. Checa	Corona	0.02632
Rep. Dominicana	Peso	0.05900
Rumania	Leu (1)	0.03864
Singapur	Dólar	0.57710
Siria	Libra	0.02222
Sri-Lanka	Rupia	0.01214
Suecia	Corona	0.10591
Suiza	Franco	0.61675
Surinam	Florín	0.00101
Tailandia	Baht	0.02308
Taiwan	Dólar	0.03015
Tanzania	Chelín	0.00124
Trinidad y Tobago	Dólar	0.16025
Turquía	Lira (1)	0.00149
Ucrania	Hryvna	0.18401
Unión Sudafricana	Rand (2)	0.13200
Uruguay	Peso	0.07997
Venezuela	Bolívar	0.00143
Vietnam	Dong (1)	0.06890
Yemen	Rial (2)	0.00619
Yugoslavia	Dinar (2)	0.07981
Zaire (Rep. Dem. Congo)	Zaire	0.22074
Unión Monetaria Europea	Euro (4)	0.93020

1) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
2) Tipo de cambio de mercado.
3) Tipos de cambio calculados con base en la paridad fija publicada por el Banco Central Europeo el 31 de diciembre de 1998.
4) Antes denominado Ecu. A partir del 1 de enero de 1999 el Ecu, que correspondía a la divisa de la Comunidad Económica Europea dejó de existir.

México, D.F., a 5 de enero de 2001.

BANCO DE MEXICO

Director General de Operaciones de Banca Central
David Margolin Schabes
Rúbrica.

Director de Disposiciones de Banca Central
Héctor Tinoco Jaramillo
Rúbrica.

REFORMA al acuerdo de adscripción de las unidades administrativas del Banco de México.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

REFORMA AL ACUERDO DE ADSCRIPCION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL BANCO DE MEXICO

De conformidad con lo previsto en los artículos 47, fracción I, de la Ley del Banco de México, así como 4o. y 8o. de su Reglamento Interior, se publica la presente reforma al Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México, para los efectos previstos en dichos artículos.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo Unico del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México, para quedar en los términos siguientes:

"ARTICULO UNICO. …

...

III. DIRECCION GENERAL DE ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO

GERENCIA TECNICA

GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y SEGUIMIENTO DE LA REGULACION

SUBGERENCIA DE CONTROL DE AUTORIZACIONES

SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO DE LA REGULACION

SUBGERENCIA DE CONTROL DE GESTION

DIRECCION DE ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEL SISTEMA FINANCIERO

GERENCIA DE ANALISIS DE RIESGOS Y PROYECTOS ESPECIALES
SUBGERENCIA DE ANALISIS DE RIESGOS
GERENCIA DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
SUBGERENCIA DE ANALISIS DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
SUBGERENCIA DE DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO

DIRECCION DE INFORMACION DEL SISTEMA FINANCIERO
GERENCIA DE INFORMACION DEL SISTEMA FINANCIERO
SUBGERENCIA DE INFORMACION PARA EL ANALISIS FINANCIERO
GERENCIA DE INFORMATICA DEL SISTEMA FINANCIERO
SUBGERENCIA DE INFORMATICA DEL SISTEMA FINANCIERO

IV. DIRECCION GENERAL JURIDICA

DIRECCION DE DISPOSICIONES DE BANCA CENTRAL
GERENCIA DE DISPOSICIONES AL SISTEMA FINANCIERO
SUBGERENCIA DE DISPOSICIONES AL SISTEMA FINANCIERO
SUBGERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONSULTAS DE BANCA CENTRAL
GERENCIA DE CONTROL DE LEGALIDAD Y DE ASUNTOS JURIDICOS INTERNACIONALES
SUBGERENCIA DE CONTROL DE LEGALIDAD
SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS INTERNACIONALES
GERENCIA DE INSTRUMENTACION LEGAL DE OPERACIONES DE BANCA CENTRAL
SUBGERENCIA DE INSTRUMENTACION LEGAL

DIRECCION JURIDICA
GERENCIA JURIDICA CONSULTIVA Y FIDUCIARIA
SUBGERENCIA JURIDICA CONSULTIVA
SUBGERENCIA JURIDICA DE CONSULTAS LABORALES Y FIDUCIARIAS
GERENCIA JURIDICA DE LO CONTENCIOSO
SUBGERENCIA JURIDICA DE LO CONTENCIOSO

V. a VI. ...

VII. DIRECCION DE EMISION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE EMISION
SUBGERENCIA DE PLANEACION Y ESTUDIOS DE EMISION
SUBGERENCIA DE COORDINACION Y PROGRAMACION DE SUCURSALES Y CORRESPONSALES
SUBGERENCIA DE INFORMATICA
GERENCIA DE FABRICA DE BILLETES
SUPERINTENDENCIA DE ORIGINALES, PRELIMINARES Y TINTAS
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
SUPERINTENDENCIA DE MANUFACTURA
SUPERINTENDENCIA DE MANTENIMIENTO
SUPERINTENDENCIA DE PROCESOS FINALES
SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTOS
CAJERO PRINCIPAL
SUBGERENCIA DE CUSTODIA Y GUARDA DE EFECTIVOS
SUBGERENCIA DE ATENCION A BANCOS Y PROCESO DE BILLETE
SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE APOYO DE LA CAJA PRINCIPAL
GERENCIA DE CAJA DE LA SUCURSAL CIUDAD JUAREZ
GERENCIA DE CAJA REGIONAL DE LA SUCURSAL GUADALAJARA
GERENCIA DE CAJA REGIONAL DE LA SUCURSAL HERMOSILLO
GERENCIA DE CAJA REGIONAL DE LA SUCURSAL MAZATLAN
GERENCIA DE CAJA REGIONAL DE LA SUCURSAL MERIDA
GERENCIA DE CAJA REGIONAL DE LA SUCURSAL MEXICALI
GERENCIA DE CAJA REGIONAL DE LA SUCURSAL MONTERREY
GERENCIA DE CAJA REGIONAL DE LA SUCURSAL TORREON
GERENCIA DE CAJA REGIONAL DE LA SUCURSAL VERACRUZ

VIII. ...

IX. DIRECCION DE SISTEMAS
GERENCIA DE INFORMATICA
SUBGERENCIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO

SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
SUBGERENCIA DE PLANEACION Y REGULACION
GERENCIA DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES
SUBGERENCIA DE COMPUTO
SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES

X. CONTRALOR

GERENCIA DE CONTROL
SUBGERENCIA DE CONTROL DE GESTION ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE CONTROL DE EGRESOS ADMINISTRATIVOS
SUBGERENCIA DE CONTROL DE EFECTIVOS, METALES Y VALORES
GERENCIA DE NORMATIVIDAD
SUBGERENCIA DE NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE EVALUACION EN TECNOLOGIA DE INFORMACION**"**

TRANSITORIO

UNICO. La presente reforma entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

México, D.F., a 27 de diciembre de 2000.
BANCO DE MEXICO
Director General de Administración Interna
del Banco de México en ausencia del Gobernador
Alejandro Garay Espinosa
Rúbrica.

AVISOS
JUDICIALES Y GENERALES

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Segundo Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito
Guanajuato
EDICTO
Martha Evelia Martínez Contreras
Irapuato, Gto.
Por este medio emplázasele Juicio Amparo promovido por Banamex contra actos Séptima Sala Civil Supremo Tribunal consistente sentencia dieciséis agosto dos mil toca 339/2000. Su disposición en Secretaría copia demanda. Cítasele acuda este Tribunal defender derechos y señalar domicilio ciudad Guanajuato.
Publicarse por tres veces, de siete en siete días, en el **Diario Oficial de la Federación** y en periódico de circulación nacional.
Guanajuato, Gto., a 30 de octubre de 2000.
El Secretario de Acuerdos Segundo Tribunal Colegiado
Jorge L. Rico Rangel
Rúbrica.
(R.- 136926)

METALES EMBUTIDOS, S.A.
AVISO DE REDUCCION AL CAPITAL SOCIAL
Por asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de fecha 3 de noviembre de 1999, se acordó reducir el capital social mediante el reembolso de $18'957,963.60 M.N. (dieciocho millones novecientos cincuenta y siete mil novecientos sesenta y tres 60/100 M.N.) sin llevar a cabo la cancelación de acciones.
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles, publíquese este aviso por tres veces, en el **Diario Oficial de la Federación.**
4 de diciembre de 2000.
Secretario del Consejo de Administración
Daniel A. del Río Loaiza
Rúbrica.
(R.- 136930)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado
Puebla, Pue.
EDICTO
Norberto Miguel Sambiasi Subresky, tercero perjudicado dentro de los autos del Juicio de Amparo 496/2000, se ordenó emplazarlo a juicio en términos de lo dispuesto por el artículo 30 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia y se hace de su conocimiento que el quejoso Fernando Vicente Loranca Quiroz, interpuso demanda de amparo contra actos del ciudadano Juez Décimo Segundo de lo Civil de esta ciudad y otras autoridades, se le previene para que se presente al Juicio de Garantías de mérito dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación, ya que en caso de no hacerlo, éste se seguirá conforme a derecho proceda, y las subsecuentes notificaciones se harán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, quedando a su disposición en la Secretaría las copias simples de traslado. Para su publicación en el periódico Excélsior y en el **Diario Oficial de la Federación**, que deberá de efectuarse por tres veces consecutivas de siete en siete días.
Puebla, Pue., a 30 de agosto de 2000.
La C. Actuaria Judicial del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Puebla
Lic. María Yolanda Martínez Torija
Rúbrica.
(R.- 136933)

BANCO NACIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR, S.N.C.
BANCA DE DESARROLLO
AVISO
Se comunica a los cafeticultores que hayan obtenido un crédito, subsidio, estímulo, y que a su vez hayan firmado un pagaré, certificados de depósito, recibos, etcétera, reconociendo el adeudo con el Fideicomiso del Café, se presenten en las oficinas del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., ubicadas en la calle de camino a Santa Teresa número 1679-planta baja Sur, colonia Jardines del Pedregal, en el área fiduciaria, a partir del día 14 de diciembre del año 2000 y hasta el día 14 del mes de enero del año 2001, en el horario de 9:00 a 13:00 horas, para proceder a entregarles el original de los pagarés, certificados de depósito, recibos, entre otros títulos de crédito que firmaron, con la finalidad de que el Fideicomiso dé por condonados sus adeudos, junto con los intereses que se generaron. Para tal efecto, deberán proporcionar una copia de su identificación oficial vigente (credencial de elector), así como copia de su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, en el caso de tener representante legal, es necesario que proporcionen una copia de la identificación del representante legal, así como el poder que lo acredite como tal y el Registro Federal de Contribuyentes tanto del representante legal como el del representado.
México, D.F., a 4 de diciembre de 2000.
Delegado Fiduciario
Lic. Carlos Flores Salinas
Rúbrica.
(R.- 136986)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal
Sección Amparos
Mesa III
Expediente 723/99-III
EDICTO
Tercero perjudicado: Sotero Pérez Hernández.
Se dictó un auto que a la letra dice:
México, Distrito Federal, a trece de noviembre del año dos mil.
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por Tomasa Zamudio Uribe de Pérez, quejoso en el presente Juicio de Garantías, en atención a su contenido se provee; no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado en virtud de que en autos no obra constancia de emplazamiento del tercero perjudicado Sotero Pérez Hernández, por lo tanto, y en virtud de que ya se agotaron todos los medios de investigación del domicilio de la parte tercero perjudicada en mención, con fundamento en los artículos 30 fracción II de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se ordena emplazar por medio de edictos a la parte tercero perjudicada Sotero Pérez Hernández, por conducto de su representante legal, los que se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana y en el **Diario Oficial de la Federación**, haciéndole saber que debe presentarse a este Juzgado a más tardar dentro del término de

treinta días, contado a partir del día siguiente al de la última publicación, y señalar domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo, las posteriores notificaciones, aun las de carácter personal, se harán por medio de lista; además fíjese una copia íntegra del presente proveído en los estrados del Juzgado por todo el tiempo del emplazamiento.

Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

Lo proveyó y firma el licenciado Alejandro Dzib Sotelo, Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en unión del Secretario que da fe.- Doy fe.

México, D.F., a 24 de noviembre de 2000.

El Secretario de Acuerdos

Lic. Raúl Martínez Morales

Rúbrica.

(R.- 136990)

IMPORTACIONES MAR, S.A. DE C.V.

(EN LIQUIDACION)

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2000

Activo total $0.00

Pasivo total $0.00

Capital contable $0.00

El presente balance se publica para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

México, D.F., a 7 de diciembre de 2000.

Liquidador

Roberto Páramo Fuentes

Rúbrica.

(R.- 137012)

Estados Unidos Mexicanos

Poder Judicial de la Federación

Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo

y de Juicios Civiles Federales

en el Estado de México

EDICTO

Consorcio en Ingeniería Fabricantes, Sociedad Anónima de Capital Variable y Gustavo Ladrón de Guevara Ojeda.

En cumplimiento al auto de fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil, dictado por el Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, en el Juicio de Amparo número 997/2000-II, promovido por Javier Oceguera Figueroa, en su carácter de Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Fundición y Artículos Metálicos, José Luis Orihuela Avila y Jorge Ignacio Bautista Olvera, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, se les tuvo como terceros perjudicados y en términos del artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se les mandó emplazar por medio de los presentes edictos, a este juicio, para que si a su interés conviniere se apersonen al mismo, en el entendido de que debe presentarse en el local de este Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, sito en el número 212 de la calle de Instituto Literario Poniente de esta ciudad de Toluca, México, por sí, o por medio de apoderado o representante legal, dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación de este Edicto, y que se han fijado las diez horas del veintisiete de diciembre del año en curso para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia constitucional, quedando a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia simple de la demanda.

Para su publicación por tres veces, de siete en siete días, en el **Diario Oficial de la Federación** y en el diario de mayor circulación en la República, se expide el presente en la ciudad de Toluca, México, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil.- Doy fe.

La Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México

Lic. Sara Mercedes Neira González

Rúbrica.

(R.- 137015)

GRUPO CORPORATIVO VIMA, S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL DE LIQUIDACION AL 15 DE JULIO DE 2000

Activo

Bancos $ 0

Suma el activo	$ 0
Pasivo	
Cuentas por pagar	$ 0
Capital contable	
Capital social	100,000
Resultados acumulados	(100,000)
Suma el capital	0
Suma el pasivo y capital	$ 0

México, D.F., a 7 de diciembre de 2000.
Presidente
Víctor Manuel Juárez López
Rúbrica.
(R.- 137059)
SERVINTE, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL DE LIQUIDACION AL 15 DE JULIO DE 2000

Activo	
Bancos	$ 0
Suma el activo	$ 0
Pasivo	
Cuentas por pagar	$ 0
Capital contable	
Capital social	15,006
Resultados acumulados	(15,006)
Suma el capital	0
Suma el pasivo y capital	$ 0

México, D.F., a 7 de diciembre de 2000.
Presidente
Víctor Manuel Juárez López
Rúbrica.
(R.- 137060)
INMOBILIARIA GALASA, S.A.
AVISO
Por asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 2 de enero de 1980, los accionistas de Inmobiliaria Galasa, S.A. acordaron disminuir el capital social de la misma en la suma de quinientos veinte mil pesos (actualmente quinientos veinte pesos) para quedar en la suma de dos millones quinientos mil pesos (actualmente dos mil quinientos pesos).
8 de diciembre de 2000.
Delegado
C.P. Antonio Humberto Velázquez Lira
Rúbrica.
(R.- 137098)
COMAGRO, S.A.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2000

Activo circulante	
Bancos	3,470.64
Total del activo circulante	3,470.64
Total del activo	3,470.64
Capital contable	
Capital social y reservas	6,000.00
Resultados acumulados	- 2,529.36
Total del capital	3,470.64
Total del pasivo y capital	3,470.64

El balance final de liquidación de Comagro, S.A., se publica en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
El remanente será reembolsado a los accionistas en proporción a su participación accionaria en el capital social.
México, D.F., a 8 de diciembre de 2000.
Liquidador
Lic. Pablo Enrique Martínez Gama
Rúbrica.

(R.- 137265)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil
en el Distrito Federal
EDICTO
Rosa María Azuara Díaz.
En los autos del Juicio de Amparo número 233/2000, promovido por Inmobeter, S.A., por conducto de su apoderado Rafael López Ibarra, contra actos de los Magistrados de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, radicado en este Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil, en esta capital; al ser señalado como tercera perjudicada y desconocerse su domicilio actual, con fundamento en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo, se ordena su emplazamiento al juicio de mérito por edictos, los que se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el **Diario Oficial de la Federación** y en uno de los periódicos de mayor circulación en esta capital, se hace de su conocimiento que en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, queda a su disposición copia simple de la demanda de amparo, y que cuenta con un término de treinta días, contado a partir de la última publicación de tales edictos, para que ocurra al Juzgado a hacer valer sus derechos.
Atentamente
México, D.F., a 27 de noviembre de 2000.
La Secretaria de Acuerdos del Juzgado Octavo
de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal
Lic. Rosa Contreras Vega
Rúbrica.

(R.- 137304)

INMOBILIARIA BOSQUE DE CIRUELOS, S.A. DE C.V.
AVISO
Con fundamento en el artículo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se comunica a todos los interesados que mediante asamblea general extraordinaria de accionistas de Inmobiliaria Bosque de Ciruelos, S.A. de C.V., celebrada con fecha 30 de noviembre de 2000, se acordó reducir el capital social en su parte variable, por un monto de $11'916,019.00 (once millones novecientos dieciséis mil diecinueve pesos 00/100 M.N.), mediante la amortización y reembolso a los accionistas de 119'160,190 (ciento diecinueve millones ciento sesenta mil ciento noventa) acciones.
En consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, el capital social total de Inmobiliaria Bosque de Ciruelos, S.A. de C.V., quedó establecido en la cantidad de $27'854,389.00 (veintisiete millones ochocientos cincuenta y cuatro mil trescientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), correspondiendo $1'215,799.00 (un millón doscientos quince mil setecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) a la parte mínima fija y $26'638,590.00 (veintiséis millones seiscientos treinta y ocho mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N.) a la parte variable del capital social.
México, D.F., a 18 de diciembre de 2000.
Secretario del Consejo de Administración
C.P. Carlos Enrique Urdiales Morales
Rúbrica.

(R.- 137317)

GRUPO DE SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A. DE C.V.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 30 DE JUNIO DE 2000
Activo

Circulante		
Caja	$ 0.00	
Bancos	0.00	
Clientes	0.00	
Suma		$ 0.00
Fijo		
Equipo de oficina	$ 0.00	
Depreciación Eq. Ofna.		0.00
Equipo de cómputo		0.00
Depreciación Eq. Cpto.		0.00
Suma		$ 0.00
Diferido		
Pagos anticipados		$ 0.00
Depósitos en garantía		0.00

Imptos. pagados por anticipado 0.00
Suma $ 0.00
Activo total $ 0.00
Pasivo
Circulante
Proveedores $ 0.00
I.V.A. por pagar 0.00
Suma $ 0.00
Pasivo total $ 0.00
Capital contable
Capital social $ 50,000.00
Resultado de ejercicios anteriores (44,289.00)
Resultado del ejercicio (5,711.00)
Capital total $ 0.00
Pasivo más capital $ 0.00
México, D.F., a 20 de diciembre de 2000.
Liquidador
Alfonso Arias Santillán
Rúbrica.
(R.- 137396)
ADMINISTRACIONES INDUSTRIALES DEL VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2000
expresado en pesos
Activo
Total activo --------
Pasivo y capital
Total pasivo circulante 1'798,202
Capital social 600
Capital social no exhibido (480)
Otras cuentas de capital 71,146
Resultados de años anteriores (2,754)
Resultados del ejercicio (1'866,714)
Total capital (1'798,202)
Total pasivo y capital --------
Cuota de reembolso por acción: $0.00 por cada acción.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 247 fracción II de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se publica el balance final de liquidación de la sociedad al 31 de octubre de 2000.
México, D.F., a 14 de noviembre de 2000.
Liquidador
Juan Pablo Sánchez Kanter
Rúbrica.
(R.- 137416)
CANCOMEX, S.A. DE C.V.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2000
expresado en pesos
Activo
Total activo --------
Pasivo y capital
Total pasivo circulante 722,745
Capital social 600
Otras cuentas de capital 28,348
Resultados de años anteriores (9,727)
Resultados del ejercicio (741,966)
Total capital (722,745)
Total pasivo y capital --------
Cuota de reembolso por acción: $0.00 por cada acción.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 247 fracción II de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se publica el balance final de liquidación de la sociedad al 31 de octubre de 2000.
México, D.F., a 14 de noviembre de 2000.
Liquidador

Juan Pablo Sánchez Kanter
Rúbrica.
(R.- 137417)
CBI FONDO CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS
BALANCE FINAL DE LIQUIDACION

Activo			
Disponibilidades	77,660.33		
Inversiones en valores			
Títulos para negociar			
Est. para baja de valor de títulos			
Títulos recibidos en reporto			
Operaciones con valores y derivados			
Val. por recibir en Oper. de Prest.			
Oper. con Instr. Finan. derivados			
Cuentas por cobrar (neto)			
Bienes adjudicados (neto)			
Inmuebles, mobiliario y Eq. (neto)			
Inversión permanente en acciones de empresas promovidas			
Impuestos diferidos (neto)			
Otros activos			
Total activo	77,660.33		
Pasivo y capital			
Préstamos bancarios y de otros organismos			
De corto plazo			
De largo plazo			
Otras cuentas por pagar			
ISR y PTU por pagar			
Acreed. Div. y Ot. Ctas. por pagar			
Impuestos diferidos (neto)			
Créditos diferidos			
Total pasivo			
Capital contable			
Capital contribuido			
Capital social	1,000,023.15		
Prima en venta de acciones	-60,227.64	939,795.51	
Capital ganado			
Rva. para la Adq. de Accs. propias	-990,577.85		
Resultado de Ejerc. anteriores	160,809.61		
Resultado por Val. de Emp. Prom.			
Resultado neto	-32,366.94	-862,135.18	
Total capital contable	77,660,33		
Total pasivo y Cap. contable		77,660.33	
Cuentas de orden			
Capital social autorizado	600,000,023.78		
Acciones emitidas	25,010,422.00		
Otras obligaciones contingentes			
Bienes en custodia o en administración			
Montos contratados en Títs. opcionales			
Títulos recibidos en reporto			
Partes correspondientes a los socios en el haber social			
CBI Casa de Bolsa, S.A., CBI Grupo Financiero			77,652.87
Inmobiliaria Interamericana Insurgentes, S.A. de C.V.			1.86
Inmobiliaria Cata, S.A. de C.V.	1.86		
Inmobiliaria León CBI, S.A. de C.V.		1.86	
Polanco CBI Bienes Raíces, S.A. de C.V.		1.86	

México, D.F., a 6 de noviembre de 2000.
Liquidador

Lic. Manuel Velasco Velázquez
Rúbrica.
(R.- 137429)
CORPORACION TRONCAL DE AUTOTRANSPORTE DE ORIENTE CHALCO, S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA
Con base en lo estipulado por el artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como en el 182 fracción XII y el 183 del mismo ordenamiento, en la concordancia con los artículos tercero y noveno inciso D, de los estatutos de la sociedad, se convoca a todos los permisionarios de Corporación Troncal de Autotransporte de Oriente Chalco, S.A. de C.V. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 6 de enero de 2001 a las 10:00 horas en el domicilio ubicado en el Salón La Huerta Chimalhuacán.
ORDEN DEL DIA
1.- Pasar lista de asistencia y declaración del quórum.
2.- Elección de dos escrutadores.
3.- Informe del ciudadano presidente del Consejo de Administración.
4.- Informe del contador Guillermo Chávez Zárate (incremento a la tarjeta).
5.- Asuntos generales (creación del rol general de trabajo).
Apercibidos de no asistir pagará el socio la cantidad de $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.) de multa y aceptando los acuerdos que se traten en la H. Asamblea.
Atentamente
México, D.F., a 26 de diciembre de 2000.
Secretario de la Administración
Fidel Aguilera Valdivia
Rúbrica.
(R.- 137691)
SEGUROS ATLAS, S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA
Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el 8 de noviembre de 2000, se convoca a los señores accionistas de Seguros Atlas, S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 12 de enero de 2001 a las 13:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en la calle de Córdoba número 42, 4o. piso, colonia Roma, en esta ciudad, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I. Designación de escrutadores.
II. Declaratoria de apertura de la Asamblea.
III. Ratificación de poderes otorgados en la institución.
IV. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por esta Asamblea.
V. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea.
Los accionistas podrán asistir personalmente o hacerse representar por apoderado mediante carta poder. Para tener derecho a asistir a la Asamblea, no requerirán los accionistas efectuar el depósito de sus acciones, ya que se acreditará la propiedad de las mismas con la inscripción que de ellas se tenga en el libro de registro de acciones que se lleva en la empresa.
México, D.F., a 26 de diciembre de 2000.
Secretario del Consejo de Administración
Lic. José Luis Méndez Lacarra
Rúbrica.
(R.- 137694)
LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA
MODIFICACION A LA BASE DECIMATERCERA DE LAS BASES PARA SORTEOS
DE LOTERIA INSTANTANEA
La H. Junta Directiva de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en sesión ordinaria efectuada el 22 de junio de 1990, tuvo a bien aprobar las bases para sorteos de Lotería Instantánea a celebrar por la citada Institución, las cuales fueron publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** de fecha 4 de diciembre de 1990.
En sesión ordinaria celebrada el 18 de octubre de 2000, se informó al órgano de gobierno, respecto de la solicitud presentada por el Director de Comercialización, en el sentido de que los futuros sorteos de Lotería Instantánea y reimpresiones, incluirán en las estructuras de premios los impuestos a retener, de conformidad con las disposiciones fiscales, por lo que con fundamento en la fracción IV del artículo 6o. de

su Ley Orgánica, se procede a la publicación de la modificación de la base decimatercera para quedar de la siguiente forma:

"**DECIMATERCERA.-** La Lotería Nacional para la Asistencia Pública pagará los premios contra la presentación de los billetes, verificando su autenticidad y conforme a las reglas del sorteo.

Los impuestos que correspondan serán calculados, retenidos y enterados por la Lotería Nacional."

TRANSITORIO

UNICO.- La presente modificación surtirá efecto el día de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

México, D.F., a 20 de diciembre de 2000.

Prosecretario de la H. Junta Directiva

José Luis Téllez Rivero

Rúbrica.

(R.- 137701)

TABLEX, S.A. DE C.V.

AHORA GRUPO LA MODERNA, S.A. DE C.V.

AVISO A LOS TENEDORES DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS

(TABLEX) 1994

En cumplimiento a lo establecido en las cláusulas quinta y décima del clausulado de la Escritura de Emisión correspondiente, hacemos de su conocimiento que:

1. La tasa anual de interés bruto que devengarán las Obligaciones Quirografarias de Tablex, S.A. de C.V. ahora Grupo La Moderna, S.A. de C.V. (TABLEX) 1994 del 2 de enero al 1 de febrero de 2001, será de 22.34% sobre el valor nominal de las mismas.

México, D.F., a 22 de diciembre de 2000.

Representante Común de los Obligacionistas

Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Grupo Financiero Interacciones

Rúbrica.

(R.- 137715)

BANCO DEL ATLANTICO, S.A.

AVISO A LOS TENEDORES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERSION

ATLANTI 1995

En cumplimiento a lo establecido en la cláusula décima cuarta del Acta de Emisión, de las obligaciones ATLANTI 95, en lo referente al pago de los intereses que devengarán estas obligaciones correspondientes al cupón 77, por el periodo comprendido del 26 de diciembre de 2000 al 22 de enero de 2001, será:

Tasa neta

(aplicada con base en año de 360 días) 18.74%

Más 1.50% I.S.R.

(aplicado con base en año de 360 días) 1.50%

Tasa bruta a pagar

(aplicada con base en año de 360 días) 20.24%

A partir del 26 de diciembre del año en curso en las oficinas de la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, ubicadas en Paseo de la Reforma 255, 3er. piso, se pagarán los intereses correspondientes al cupón 76.

México, D.F., a 21 de diciembre de 2000.

Banco del Atlántico, S.A.

Rúbrica.

(R.- 137716)

BANCA CREMI, S.A.

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA

AVISO A LOS TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS AMORTIZABLES

RESPECTO DE LOS DERECHOS AL COBRO DE LA CARRETERA TOLUCA-ATLACOMULCO

(OCALFA) 1995

En cumplimiento a lo establecido en la Escritura de Emisión correspondiente, y de conformidad con las reformas fiscales publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** el 31 de diciembre de 1999, hacemos de su conocimiento que la tasa de interés bruto que devengarán los certificados de participación ordinarios emitidos por Banca Cremi, S.A. (OCALFA) 1995, por el periodo comprendido del 30 de diciembre de 2000 al 29 de enero de 2001 será de 25.31%, sobre su valor nominal ajustado, sujeto a la ley fiscal vigente.

México, D.F., a 27 de diciembre de 2000.
Representante Común de los Tenedores
CBI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
CBI Grupo Financiero
Rúbrica.

(R.- 137717)

UNION DE CREDITO PARA LA CONTADURIA PUBLICA, S.A. DE C.V.

AVISO A LOS TENEDORES DE PAGARES DE MEDIANO PLAZO CON GARANTIA FIDUCIARIA
UNICON P00

En cumplimiento a lo establecido en el prospecto de colocación correspondiente, hacemos de su conocimiento que la tasa de interés que devengarán los Pagarés de Mediano Plazo con Garantía Fiduciaria de UNICON P00, por el periodo comprendido del 1 de agosto de 2000 al 31 de enero de 2001, será de 15.06% anual bruto sobre el valor nominal de las mismas.

Asimismo, a partir del 1 de enero de 2001, en las oficinas de la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, ubicadas en avenida Paseo de la Reforma número 255, piso 3, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, México, Distrito Federal, se pagarán los intereses correspondientes al primer semestre por un periodo de 30 días a razón de una tasa anual de 15.06%, hasta por un monto de $941,250.00 (novecientos cuarenta y un mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).

México, D.F., a 27 de diciembre de 2000.
Representante Común de los Tenedores
Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa
Value Grupo Financiero
Rúbrica.

(R.- 137718)

BANCO INTERACCIONES, S.A.

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, DIVISION FIDUCIARIA
AVISO A LOS TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS AMORTIZABLES RESPECTO A LA TITULARIDAD DE LOS PAGARES
(ITERMEX) 1997

En cumplimiento a lo establecido en la Escritura de Emisión de los Certificados de Participación Ordinarios Amortizables, emitidos por Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, División Fiduciaria, respecto a la titularidad de los pagarés (ITERMEX) 1997, por este conducto nos permitimos informarles que:

La tasa bruta de rendimiento anual, para el periodo comprendido del 31 de diciembre de 2000 al 31 de enero de 2001, será de 21.3383%.

A partir del 2 de enero de 2001, en las oficinas de la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución par el Depósito de Valores, ubicadas en avenida Paseo de la Reforma número 255, piso 3, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, México, Distrito Federal, se pagarán los intereses correspondientes al cuadragésimo quinto periodo, que comprende del 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2000, contra entrega del cupón número 45, a razón de una tasa anual bruta de 21.5646%.

México, D.F., a 27 de diciembre de 2000.
Representante Común de los Tenedores
CBI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
CBI Grupo Financiero
Rúbrica.

(R.- 137720)

CARSO GLOBAL TELECOM, S.A. DE C.V.

AVISO A LOS TENEDORES DE PAGARES DE MEDIANO PLAZO
TELECOM P-98

Por medio de la presente les comunicamos a ustedes que la emisión de Pagarés de Mediano Plazo de Carso Global Telecom, S.A. de C.V. (TELECOM) P-98, devengarán una tasa de interés anual bruto de 20.82%, por el periodo comprendido del 3 al 30 de enero de 2001.

Asimismo, a partir del 3 de enero de 2001, en las oficinas de la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, ubicadas en avenida Paseo de la Reforma número 255, piso 3, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, México, Distrito Federal, se pagarán los intereses correspondientes al trigésimo cuarto periodo a razón de una tasa anual de 20.43% del periodo comprendido del 6 al 31 de diciembre de 2000 y 21.03% del periodo del 1 al 2 de enero de 2001. Este pago se hará contra cupón número 34.

México, D.F., a 28 de diciembre de 2000.
Representante Común de los Tenedores

Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa
Value Grupo Financiero
Rúbrica.
(R.- 137721)

Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Dirección General de Tarifas
Transporte Ferroviario y Multimodal

BASES DE REGULACION TARIFARIA APLICABLE PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE ABORDADORES MECANICOS PARA PASAJEROS, EN SU MODALIDAD DE PASILLOS TELESCOPICOS, QUE PRESTA INMOBILIARIA FUMISA, S.A. DE C.V. (FUMISA), EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

DISPOSICIONES

1.- Las presentes disposiciones para el servicio de abordadores mecánicos para pasajeros, en su modalidad de pasillos telescópicos, tienen por objeto establecer las bases para la aplicación de las tarifas correspondientes a los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte aéreo; así como a los operadores aéreos, de ser el caso.

2.- Para los efectos de estas bases de regulación tarifaria, se entiende por:

I. Aeronave: Cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en el espacio aéreo con personas, carga y/o correo.

II. Aeronaves de Estado: Las aeronaves de propiedad o uso de la Federación, distintas de las militares, las de los gobiernos estatales y municipales y las de las entidades paraestatales.

III. Aeropuerto: El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

IV. Autoridad Aeronáutica: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

V. Concesionario del Servicio Público de Transporte Aéreo: Las personas morales mexicanas que cuentan con autorización para prestar el servicio público de transporte aéreo nacional regular, otorgada al amparo de la Ley de Vías Generales de Comunicación o de la Ley de Aviación Civil.

VI. Edificio Terminal: Las zonas de libre acceso; zonas de acceso restringido; áreas de revisión utilizadas por las diferentes autoridades adscritas al aeropuerto, las cuales comprenden las salas de revisión de equipaje y última espera; los sistemas de información de llegadas y salidas de vuelo, y la señalización, ubicadas dentro del edificio terminal administrado por Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

VII. Empresa: La sociedad mercantil que presta el servicio de abordadores mecánicos para pasajeros en el AICM, en su modalidad de pasillos telescópicos.

VIII. Operador Aéreo: El propietario o poseedor de una aeronave de estado, de las comprendidas en el artículo 5 fracción II inciso a) de la Ley de Aviación Civil, así como de una aeronave de transporte aéreo privado no comercial, mexicana o extranjera.

IX. Pasajero: Toda persona que aborde una aeronave y cuente con un boleto, billete, cupón o contrato-factura para realizar un vuelo y que sea transportada a un lugar específico consignado en cualquiera de los documentos antes referidos.

X. Permisionario del Servicio Público de Transporte Aéreo: Las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que cuentan con permiso para prestar el servicio de transporte aéreo regular internacional, no regular nacional o internacional, o privado comercial.

XI. SENEAM: El órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes denominado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.

XII. Servicio de Abordadores Mecánicos para Pasajeros: El uso de pasillos telescópicos.

XIII. Tarifa: La contraprestación que debe pagar el usuario por el servicio de abordadores mecánicos para pasajeros.

XIV. Usuarios: Son los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte aéreo y los operadores aéreos.

3.- Las tarifas para el servicio de abordadores mecánicos para pasajeros que presta Fumisa (en adelante la empresa) se regirán por las presentes disposiciones y a falta de señalamiento expreso, por la resolución que emita la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal, considerando la normatividad aplicable.

4.- Las tarifas máximas aplicables para la prestación del servicio de abordadores mecánicos para pasajeros en el aeropuerto son:

Pasillos telescópicos

	($/servicio/hora)
Vuelo nacional	499
Vuelo internacional	887

A dichas tarifas se les deberá aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de acuerdo con la ley en esta materia.

5.- La aplicación de la tarifa por el servicio de abordadores mecánicos para pasajeros, en su modalidad de pasillos telescópicos, será por unidad y por periodos de 60 minutos. Después de los primeros 60 minutos de servicio, la tarifa se cobrará por periodos de 15 minutos.

	Vuelo nacional	**Vuelo internacional**
Primer periodo	$150	$266
Segundo periodo	$100	$177
Tercer periodo	$150	$266
Cuarto periodo	$100	$177

6.- A partir del año 2002, los niveles de cobro señalados en las presentes bases, se actualizarán anualmente con base en un factor igual a la variación observada en el Indice Nacional de Precios al Productor (INPP), sin considerar el petróleo, respecto al año inmediato anterior del ejercicio que se trate y que dé a conocer el Banco de México. Dicha actualización tendrá vigencia a partir del día 1 de enero de cada año.

Para efectos de cobro de dichas tarifas y hasta en tanto se publique el INPP sin considerar el petróleo, se aplicará supletoriamente la variación que registre el Indice Nacional de Precios al Consumidor durante el periodo noviembre-noviembre (el año anterior a la actualización y el previo a éste), en el entendido que una vez publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, se realizarán los ajustes que correspondan.

Las tarifas ajustadas conforme al procedimiento anterior se redondearán a pesos por defecto o por exceso, según sea o no menor que 5 el primer decimal restante. Las mismas se deberán presentar ante la Secretaría en un término máximo de 5 días hábiles posteriores a la publicación del indicador de referencia.

En caso de que se registren alteraciones económicas, operativas o de otra índole que modifiquen sustancialmente las condiciones que motivaron la regulación, se estará a la resolución que emita la SCT para tal fin, previa solicitud expresa del prestador de servicios, acompañada de los elementos de juicio que apoyen su solicitud.

7.- El tiempo de servicio se contabilizará como sigue:

I. Se cobrará el tiempo transcurrido desde el acople del pasillo telescópico a la aeronave, hasta su salida de posición.

8.- No se cobrará el tiempo adicional por el servicio de abordadores mecánicos para pasajeros a aquellas aeronaves cuya salida se haya demorado por las siguientes razones:

I.- Por condiciones meteorológicas adversas en el AICM, en ruta o en el aeropuerto de la próxima escala. En estos casos, el usuario debe coordinarse con el Centro de Control Operativo del aeropuerto para un eventual cambio de posición en plataforma;

II.- Por instrucciones del Centro de Control de Tránsito Aéreo (SENEAM);

III.- Por alteraciones en sus itinerarios debido a visitas o sucesos de carácter oficial;

IV.- Por falta o falla en los servicios materia de estas disposiciones o por cualquier otro caso fortuito no imputable al usuario, o

V.- Cuando por disposiciones de alguna autoridad la aeronave no pueda salir de la plataforma o regrese a ésta y los pasajeros deban descender de la aeronave.

Cuando la plataforma de embarque y desembarque se haya habilitado como plataforma de permanencia prolongada o pernocta, no se aplicará el cobro por los servicios de abordadores mecánicos para pasajeros durante el tiempo que la aeronave permanezca en este tipo de plataforma.

9.- No estarán sujetas al pago por el servicio de abordadores mecánicos para pasajeros las aeronaves que:

I.- Deban aterrizar en un aeropuerto por razones de emergencia;

II.- Aterricen en aeropuertos distintos al de destino por falta o falla de los servicios aeroportuarios, por condiciones meteorológicas adversas en ruta o en el aeropuerto de destino, o por cualquier otro caso fortuito no imputable al usuario;

III.- Deban abastecerse de combustible en un aeropuerto distinto al de origen, de escala o de destino, debido a la falta de combustible en éstos;

IV.- Efectúen aterrizajes exclusivamente para cumplir con las formalidades de sanidad, migración o aduana, siempre y cuando no se efectúen operaciones adicionales de embarque y/o desembarque de pasajeros, carga, correo o equipaje, salvo que estas últimas se motiven por mandato de autoridad competente, o

V.- Por instrucciones del Centro de Control de Tránsito Aéreo (SENEAM).

10.- Para efectos de facturación, aplicación y, en su caso, verificación de los cobros por el servicio materia de estas disposiciones, se utilizará como fuente de datos el siguiente documento:

I.- La orden de servicio de los pasillos telescópicos elaborada en cada servicio, recibida y firmada de conformidad por el usuario.

11.- El pago de los servicios mencionados en las presentes bases se efectuará de contado o de acuerdo con lo establecido en el contrato celebrado entre las partes.

12.- La empresa podrá autorizar descuentos a sus tarifas, siempre que dichos descuentos se apliquen en forma no discriminatoria, de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica y su reglamento respectivo, y lo notifique por escrito a la SCT en un plazo no menor a 5 días hábiles de anticipación.

13.- Será responsabilidad de la empresa que el servicio objeto de las presentes disposiciones sea prestado conforme a las normas y estándares establecidos por las autoridades correspondientes, así como a las reglas de operación del aeropuerto.

14.- Los vuelos con destino internacional que efectúen una o varias escalas dentro de la República Mexicana se considerarán como tramo internacional a partir de la última escala nacional; en el caso de los vuelos cuyo origen es un país extranjero y realicen escalas a su arribo a la República Mexicana se considerará para cobro internacional la primera escala y a partir de ésta serán tramos nacionales.

Para las aerolíneas extranjeras siempre se aplicarán las tarifas de vuelos internacionales.

15.- Cuando el concesionario del aeropuerto o la empresa prestadora del servicio estimen que han concluido las circunstancias que dieron origen al establecimiento de estas bases de regulación tarifaria, podrán solicitar a la SCT dejar sin efectos dichas bases y sus mecanismos de ajuste, de conformidad con la normatividad aplicable.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 26 de diciembre de 2000.
El Director General
Lic. Oscar S. Corzo
Rúbrica.

(R.- 137724)

SEGUNDA SECCION

SECRETARIA DE SALUD

PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-032-SSA2-2000, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.

PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-032-SSA2-2000, PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR.

ROBERTO TAPIA CONYER, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3o. , fracción XV, 13 apartado A, fracción I, 133, fracción I de la Ley General de Salud; 38, fracción II, 40, fracciones III y XI, 41, 43, 44, 45, 46 y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28, 33, 60, fracción II y 61 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 7, fracciones V y XIX, y 38, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, me permito ordenar la publicación en el **Diario Oficial de la Federación** del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-032-SSA2-2000, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector.

El presente proyecto de Norma Oficial Mexicana se publica a efecto de que los interesados, dentro de los siguientes 60 días naturales, contados a partir de la fecha de su publicación, presenten sus comentarios ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, sito en Lieja número 7, 1er. piso, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06696, México, D.F., teléfono y fax (5)5-53-70-56, correo electrónico: normas_spce@mail.ssa.gob.mx.

Durante el plazo mencionado, los análisis que sirvieron de base para la elaboración del proyecto de norma estarán a disposición del público, para su consulta en el domicilio del Comité.

PREFACIO

En la elaboración de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, participaron las unidades administrativas e instituciones siguientes:

Secretaría de Salud Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades Centro de Vigilancia Epidemiológica Dirección General Adjunta de Epidemiología Dirección General de Estadística e Informática Dirección General de Promoción de la Salud Dirección General de Comunicación Social Dirección General de Salud Ambiental Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos Dirección General de Regulación de Servicios de Salud Centro de Investigación de Paludismo Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud Coordinación General de Hospitales

Instituto Mexicano del Seguro Social Coordinación de Salud Comunitaria Coordinación General del Programa IMSS-Solidaridad

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado Jefatura de Servicios de Salud, de Regulación de Normas de Vigilancia Epidemiológica y Medicina Preventiva.

Instituto de Salud del Distrito Federal Servicios de Salud Pública en el Distrito Federal

Servicios Estatales de Salud en los Estados

OTROS SECTORES

Secretaría de Educación Pública

Desarrollo Integral de la Familia

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Dirección General de Política Agrícola Fiebre Aftosa y Enfermedades Exóticas Colegio de Posgraduados

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial Dirección General de Normas

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca

Secretaría de la Defensa Nacional Dirección General de Sanidad Militar

Secretaría de Desarrollo Social Instituto Nacional de Ecología

Secretaría de Marina Dirección General de Sanidad Naval

Secretaría de Turismo Dirección General de Auxilio Turístico

Petróleos Mexicanos Gerencia de Servicios Médicos

Organización Panamericana de la Salud/Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Representación en México

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Medicina Instituto de Investigaciones Biomédicas

Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Medicina Escuela Superior de Ciencias Biológicas

INDICE

0. Introducción
1. Objetivo
2. Campo de aplicación
3. Referencias
4. Definiciones, símbolos y abreviaturas
5. Codificación
6. Diagnóstico de las enfermedades
7. Sistemas especiales de vigilancia epidemiológica y evaluación
8. Medidas generales de prevención y control
9. Medidas específicas de prevención y control
10. Coordinación
11. Capacitación
12. Investigación
13. Información
14. Bibliografía
15. Concordancia con normas internacionales y mexicanas
16. Observancia de la Norma

0. Introducción

El Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-032-SSA2-2000, Para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vector (paludismo, dengue, oncocercosis, leishmaniosis, tripanosomosis y rickettsiosis):

a) se justifica por la importancia que, para la Salud Pública, representan estas enfermedades en cuanto a su magnitud y trascendencia, tomando en consideración la existencia de áreas que reúnen condiciones geográficas, epidemiológicas, demográficas y socioeconómicas, así como de marginación y pobreza de la población afectada, que favorecen su transmisión, se estima que cerca de 60% del territorio nacional presenta estas condiciones, donde residen más de 50 millones de personas y se localiza la

mayor parte de los centros agrícolas, ganaderos, industriales, pesqueros, petroleros y turísticos importantes;

b) se fundamenta en principios científicos, tecnologías y experiencias disponibles;

c) comprende aspectos generales de la vigilancia, prevención y control, aplicables a los seis padecimientos enunciados y aspectos específicos para cada uno de ellos;

d) coadyuva a integrar funcionalmente al Sistema Nacional de Salud, a las actividades que deben efectuarse en el marco de la descentralización y del Programa Nacional de Salud 1995-2000; y

e) en virtud de la generación constante de nuevos métodos y técnicas, considera la necesidad de efectuar investigación esencial, con particular atención en los factores de riesgo y las acciones operativas que, en su momento, deberán ser mejoradas e incorporadas, como procedimientos de vigilancia, prevención y control.

f) por lo anterior se conformarán grupos nacionales de expertos en insecticidas, parasitología, virología, participación comunitaria, entomología médica y otros que sean necesarios, así como serán promovidas las evaluaciones por expertos internacionales periódicas con la participación de la Organización Panamericana de la Salud que, en lo futuro, deberán conformarse, organizar su plan de trabajo para emitir recomendaciones de carácter normativo a fin de mejorar los conceptos del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.

En el caso de que alguna otra enfermedad existente transmitida por vectores, o bien, alguna más que aparezca, incrementen su frecuencia y adquieran características de gravedad o peligro, los preceptos de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana podrán ser adecuados y tendrán aplicación suplementaria sobre la materia.

Todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud deberán observar y efectuar gratuitamente las actividades comprendidas en esta NOM.

1. Objetivo

Esta Norma Oficial Mexicana establece los conceptos, estrategias básicas, actividades, procedimientos y técnicas operativas para disminuir el riesgo de infección, enfermedad, complicaciones o muerte por paludismo, dengue, oncocercosis, leishmaniosis, tripanosomosis y rickettsiosis, así como los criterios para orientar las estrategias programáticas de coordinación, regionalización, estratificación y modernización de las actividades para su vigilancia, prevención y control.

2. Campo de aplicación

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para el personal de salud de los Servicios de Salud de los sectores público, social y privado que conforman el Sistema Nacional de Salud, así como por aquellas instancias oficiales o privadas que efectúen el control sobre uno o varios de los vectores que transmiten enfermedades objeto de esta Norma.

3. Referencias

3.1 Programa de Reforma del Sector Salud 1995-2000.

3.2 Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994, Para la Vigilancia Epidemiológica.

3.3 Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

3.4 Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA2-1994, Para la prestación de servicios de atención primaria a la salud.

4. Definiciones, símbolos y abreviaturas

4.1. DEFINICIONES

Para efectos de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, se entiende por:

4.1.1 ácaro: al artrópodo del orden Acari o Acarida, con cuerpo dividido en prosoma y un epistosoma unido al abdomen; con cuatro pares de patas y partes bucales transformadas en gnastosoma.

4.1.2 acaricida: a cualquier sustancia química que se utilice para eliminar garrapatas y ácaros.

4.1.3 aedes: al género de la clase *Insecta*; del orden Diptera de la familia Culicidae, subfamilia Culicinae, tribu Aedini constituida por 41 subgéneros y 1019 especies mundiales. Las especies *A. aegypti* y *A. albopictus*, son transmisores del flavivirus dengue. Este género puede transmitir, también, otros Arbovirus.

4.1.4 agente infeccioso: al elemento patógeno biológico, que puede causar la enfermedad; los más importantes para la salud son: 1) virus, 2) rickettsias, 3) bacterias, 4) protozoarios, 5) hongos y 6) helmintos.

4.1.5 agua negra o servida: al agua que ha sido utilizada por el ser humano para lavado o aseo y que además contiene diversos tipos de desechos sólidos y líquidos, incluyendo las excretas del hombre y de los animales.

4.1.6 ambiente: al medio circundante en que nacen, crecen, se reproducen y mueren los seres vivos y en el que se relacionan con todos los elementos físicos, químicos, biológicos y sociales que lo constituyen.

4.1.7 albañal: al conducto generalmente cerrado, cuya finalidad es desfogar las aguas negras o servidas.

4.1.8 alcantarillado: al sistema de tubería, de diferentes tipos de material y diámetro, para captar y conducir hacia un destino final las aguas negras, pluviales o residuales.

4.1.9 aljibe o Cisterna: al depósito construido con diferentes materiales generalmente subterráneo para colectar, almacenar y distribuir el agua.

4.1.10 anopheles: al género de la clase *Insecta*, orden Diptera, de la familia Culicidae, subfamilia anophelinae, constituida por tres géneros y aproximadamente diez subgéneros y 532 especies en el mundo. Entre las especies más importantes en México por ser vectores del paludismo, se encuentran *An. pseudopunctipennis*, *An. albimanus*, *An. vestitipennis*, *An. cruzians* y *An. darlingi*.

4.1.11 apirexia: sin fiebre.

4.1.12 asperjar: al rociar un líquido en gotas menudas.

4.1.13 brote: a la ocurrencia de dos o más casos asociados, epidemiológicamente entre sí, y en un número superior al esperado. En algunos padecimientos, la ocurrencia de un solo caso se considera brote.

4.1.14 cacharro: al artículo diverso en desuso, que puede contener agua, y convertirse en criadero de mosquitos *Aedes aegypti* o *A. albopictus*, vectores del dengue.

4.1.15 carga de Insecticida: a la cantidad de un preparado de insecticida, en polvo o líquido, necesaria para abastecer el depósito de una bomba aspersora.

4.1.16 clorados: al insecticida, cuya estructura química contiene cloro. Debido a su poder residual y persistencia en el ambiente, se ha restringido su uso exclusivamente para fines de salud pública.

4.1.17 control: a la aplicación de medidas para la disminución de la incidencia, en casos de enfermedad.

4.1.18 control biológico: al procedimiento que se basa en modelos ecológicos depredador-presa para la regulación y control de las poblaciones.

4.1.19 control físico: al procedimiento aplicado para disminuir o evitar el riesgo del contacto vector-humano, efectuando modificaciones en el medio ambiente para eliminar, reducir o modificar el hábitat de los transmisores, en forma temporal o definitiva.

4.1.20 control químico: al procedimiento aplicado contra los vectores, en sus estadios larvarios o inmaduros y de imagos o adultos, utilizando sustancias tóxicas con efecto insecticida.

4.1.21 comunicación educativa: al proceso basado en el desarrollo de esquemas novedosos y creativos de comunicación social, que permite la producción y difusión de mensajes gráficos y audiovisuales de alto impacto, con el fin de reforzar los conocimientos en salud y promover conductas saludables en la población.

4.1.22 criadero: al lugar donde el vector hembra pone sus huevos desarrollándose posteriormente las fases de larvas, pupas y adulto.

4.1.23 criaderos controlables: aquéllos en los que se puede realizar una acción física para evitar que se infesten o retengan agua. Representan a todos aquellos que la comunidad no identifica como desechables y susceptibles de eliminar en una descacharrización. Su clasificación debe motivar un esfuerzo educativo permanente, a fin de que la comunidad sea capacitada para controlarlos.

4.1.24 criaderos controlados: aquellos en los que, no se desarrollan larvas del vector.

4.1.25 criaderos estacionales: aquellos que sólo en un periodo determinado del año contengan agua y puedan ser positivos a la presencia de larvas.

4.1.26 criaderos permanentes: aquellos que se encuentren durante todo el año con agua y frecuentemente con larvas.

4.1.27 chapear: a quitar la yerba.

4.1.28 desinfestación: a la eliminación de seres pluricelulares parásitos a través de algún proceso físico o químico. Principalmente los artrópodos que se encuentran en el cuerpo de una persona, en la ropa, en el ambiente o en animales domésticos (chinche, piojo, pulga, mosco, garrapata, entre otros). Al referirnos a insectos podemos hablar de desinsectación.

4.1.29 descacharrizar: a recolectar y retirar cacharros de los predios.

4.1.30 ecología: a la ciencia que estudia las relaciones de los organismos o grupos de organismos con su medio.

4.1.31 ecosistema: a la unidad estructural, funcional y de organización, consistente en organismos (incluido el hombre) y las variables ambientales (bióticas y abióticas) en un área determinada, actuando recíprocamente intercambiando materiales.

4.1.32 educación para la salud: al proceso de enseñanza-aprendizaje que permite, mediante el intercambio y análisis de la información, desarrollar habilidades y cambiar actitudes, con el propósito de inducir comportamientos para cuidar la salud individual, familiar y colectiva.

4.1.33 enfermedades transmitidas por vectores: a los padecimientos en cuya cadena de transmisión interviene un vector artrópodo, como elemento necesario para la transmisión del parásito. Para efectos de esta NOM se considera como enfermo o persona que porta al agente causal de las enfermedades transmitidas por vector, a toda aquella que, con o sin presentar sintomatología, es detectada por el sistema de vigilancia epidemiológica, incluyendo los hallazgos de laboratorio. En la presente Norma, se incluyen: paludismo, dengue, oncocercosis, leishmaniosis, tripanosomosis y rickettsiosis.

4.1.34 endemia: a la ocurrencia de una enfermedad que mantiene un nivel usual, incluyendo sus variaciones estacionales, en áreas limitadas ecológicamente.

4.1.35 epidemia: a la ocurrencia en una comunidad o región, de casos de una enfermedad, transmisible o no, aguda o crónica, que excede claramente lo esperado.

4.1.36 epidemiología: al estudio de la frecuencia y características de la distribución de enfermedades, así como de los factores que las determinan, condicionan o modifican siempre en relación con una población, en un área geográfica y en un periodo determinados. Proporciona información esencial, para la prevención y el control de enfermedades.

4.1.37 equipo de aspersión: a los aparatos, generalmente bombas, diseñados para rociar al aire o sobre una superficie, los insecticidas.

4.1.38 flavivirus: al género del Arbovirus de la familia Flaviviridae, del cual se conocen cuatro serotipos causantes del dengue: Den-1, Den-2, Den-3 y Den-4.

4.1.39 fomento de la salud: al proceso cuyo objetivo es lograr la autorresponsabilidad social para el cuidado de la salud.

4.1.40 fumigación: a la desinfección que se realiza mediante el uso de vapores o gases tóxicos, para el control y eventual eliminación de especies nocivas para la salud o que causan molestia sanitaria.

4.1.41 garrapata: al nombre común asignado a un ácaro de la familia Ixodidae y Argacidae, generalmente son ectoparásitos hematófagos principalmente de mamíferos.

4.1.42 hábitat: al área o espacio con todos sus componentes físicos, químicos, biológicos y sociales, en donde los seres vivos encuentran condiciones propicias para vivir y reproducirse.

4.1.43 hospedero: a la persona o animal vivo, que, en circunstancias naturales, permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso.

4.1.44 insecto: al artrópodo de la Superclase Hexápoda que como su nombre lo indica tiene tres pares de apéndices, su cuerpo está dividido en tres regiones bien diferenciales: cabeza, tórax y abdomen.

4.1.45 insecticida: a las sustancias químicas o biológicas que eliminan a los vectores o evitan el contacto con el humano, están dirigidos a cualesquiera de sus estadios de desarrollo (huevo, larva, pupa o imago).

4.1.46 imago: al sinónimo de adulto; insecto que presenta los órganos sexuales desarrollados.

4.1.47 imagocida: al insecticida que mata imagos o adultos de insectos.

4.1.48 larva, pupa y ninfa: a los estados juveniles o de inmaduros de un insecto con desarrollo post embrionario de tipo holometábolo.

4.1.49 larvicida: al insecticida que mata larvas de los insectos.

4.1.50 lutzomyia: al género de la familia Psychodidae, entre las especies más importantes en México están: *Lutzomyia olmeca*, *L. cruciata*, *L. longipalpis, L. shannoni* y *L. diabolica*. La única especie en México confirmada como vector es *L. olmeca.*

4.1.51 malla; pabellón: a la red protectora con determinado número de orificios por pulgada cuadrada.

4.1.52 nebulización a ULV; volumen ultrarreducido: al procedimiento para la aplicación espacial de los insecticidas, a dosis muy pequeñas en grado técnico, o soluciones concentradas menores de 500 ml/ha, en gotas fraccionadas cuyo diámetro óptimo generalmente debe fluctuar entre 15 y 50 micras.

4.1.53 onchocerca volvulus: a la especie de la clase Nemátoda, que es el agente causal de la oncocercosis.

4.1.54 organofosforados: al insecticida donde el fósforo forma parte esencial de su estructura química, clasificado en el grupo de mediana toxicidad. Se utiliza en Salud Pública, por su característica de ser rápidamente biodegradado en el medio.

4.1.55 ovipostura: a la acción y efecto de la hembra de los insectos transmisores, al depositar sus huevecillos en el criadero.

4.1.56 participación social: al proceso que permite involucrar a la población, autoridades locales, instituciones públicas y a los sectores social y privado en la planeación, programación, ejecución y

evaluación de los programas y acciones de salud, con el propósito de lograr un mayor impacto y fortalecer un mejor Sistema Nacional de Salud.

4.1.57 parásito: al organismo vivo que crece y se desarrolla, dentro o sobre el hospedero, a sus expensas, causándole daño.

4.1.58 pediculicida: a las sustancias que se utilizan para eliminar piojos en todos sus estadios.

4.1.59 pediculosis: a la infestación de la cabeza, las partes vellosas del cuerpo y la ropa (especialmente a lo largo de las costuras interiores), por piojos adultos, larvas y liendres (huevos), que causan prurito intenso y excoriación del cuero cabelludo y del cuerpo por el rascado.

4.1.60 *pediculus humanus humanus*: a la especie del piojo del cuerpo del ser humano transferido por contacto directo e indirecto a través de ropas.

4.1.61 *pediculus humanus capitis*: a la especie del piojo de la cabeza del ser humano, que se transfiere por contacto directo, de persona a persona.

4.1.62 *phtirius pubis*: a la especie del piojo del pubis (ladilla) del ser humano, que se transfiere por contacto sexual.

4.1.63 piretroides: a los insecticidas clasificados en el grupo de baja toxicidad aguda, de origen sintético, desarrollados a partir de la investigación del piretro natural, irritantes ligeros.

4.1.64 piojo: al artrópodo del orden Anoplura; clase Insecta y del género *Pediculus*, que se alimentan con sangre del hombre y animales domésticos.

4.1.65 pulga: al insecto del orden Siphonaptera (parásitos chupadores, hematófagos), ectoparásitos obligados de mamíferos y aves; presentan el cuerpo comprimido lateralmente. Al parasitar a ratas, puede transmitir enfermedades como la peste al hombre.

4.1.66 promoción de la salud: al proceso que permite fortalecer los conocimientos, aptitudes y actitudes de las personas para participar corresponsablemente en el cuidado de su salud y para optar por estilos de vida saludables facilitando el logro y la conservación de un adecuado estado de salud individual, familiar y colectivo mediante actividades de Participación Social, Comunicación Educativa y Educación para la Salud.

4.1.67 prueba del torniquete: a la utilizada para evaluar la fragilidad capilar, consiste en la aplicación de presión en el manguito, hasta el nivel medio de la TA (Ejem: Si el paciente tiene la TA de 120/80 mm de Hg aplicar 100 mm de Hg, de presión, durante 5 minutos), siendo positiva 20 petequias o más por 2.5 centímetros cuadrados, debajo del área que cubre el brazalete.

4.1.68 recaída: a la reaparición del ciclo exo-eritrocítico como efecto de los hipnozoítos del *P. vivax*, con o sin sintomatología, que obedecen a una infección primaria anterior.

4.1.69 recipientes desechables: aquéllos susceptibles de eliminarse mediante una acción de limpieza o descacharrización. La comunidad debe identificarlos como eliminables.

4.1.70 reduviidae: a la familia de insectos, que incluye los géneros *Triatoma* y *Rhodnius*, "chinches de trompa hocicona", que tiene capacidad para transmitir, de un reservorio animal o de uno a otro humano, los protozoarios Trypanosoma cruzi, agente causal de la Tripanosomiosis Americana o Enfermedad de Chagas.

4.1.71 rickettsia: al parásito intracelular obligado, gramnegativo, pequeño, en forma de cocobacilo, que se multiplica por división binaria y es causante de diversas enfermedades conocidas como Rickettsiosis.

4.1.72 rodenticida: a la sustancia química, que se utiliza para eliminar a los roedores, generalmente por ingestión.

4.1.73 rociado domiciliario: a la aplicación de un insecticida de efecto residual variable, en las superficies de las viviendas y de sus anexos.

4.1.74 simulium: al género de la familia Simulidae, del orden Díptera, de la clase Insecta, cuyas hembras infectadas con las microfilarias de *O. volvulus,* transmiten la oncocercosis de una persona a otra.

4.1.75 tamizaje: al examen, o prueba inicial, para diagnóstico presuntivo de alguna patología.

4.1.76 tipología de criaderos: a la clasificación de criaderos según su descripción específica como tambos, llantas, cubetas, recipientes pequeños o grandes, floreros; facilita el diseño operativo del trabajo y su evaluación. Es de utilidad en los esfuerzos para integrar a la población en programas de Promoción de la Salud y Participación Comunitaria, con lo cual se podrán establecer criterios más adecuados para diseñar, ejecutar y evaluar las actividades.

4.1.77 tratamiento profiláctico: al suministro de medicamentos, a grupos de población o individuos en riesgo de contraer una enfermedad, por residir en o trasladarse hacia áreas endémicas. Para fines de esta Norma, se considera tratamiento profiláctico antipalúdico y contra la oncocercosis. Estos tratamientos tienen la finalidad de evitar las infecciones o disminuir las manifestaciones clínicas de la enfermedad, si se adquiere y, además, eliminar la fuente de infección.

4.1.78 triatóminos: al insecto del orden Hemíptera, de la familia Reduviidae, subfamilia Triatominae, cuyas especies de los géneros *Rhodnius, Panstrongylus* y *Triatoma*, al estar infectadas y picar al hombre, depositan sus deyecciones sobre la piel, para transmitir al *Trypanosoma cruzi*, causante de la Tripanosomosis Americana o Enfermedad de Chagas.

4.1.79 vector: al transportador viviente y transmisor biológico del agente causal de enfermedad. Para efectos de esta NOM, se refiere al artrópodo que transmite el agente causal de una enfermedad, por picadura, mordedura, o por sus desechos.

4.1.80 vigilancia epidemiológica: al estudio permanente y dinámico del estado de salud, así como de sus condicionantes en la comunidad.

4.1.81 zoonosis: a la infección o enfermedad infecciosa transmisible en condiciones naturales, de animales vertebrados al hombre.

4.2. DEFINICIONES ESPECIALES

4.2.1 PALUDISMO: a una enfermedad transmitida por mosquitos, que puede manifestarse clínicamente o cursar con infecciones asintomáticas; clínicamente se caracteriza por episodios paroxísticos de fiebre, escalofríos y sudoración, cuando no es tratado oportuna y adecuadamente puede cursar con anemia, esplenomegalia y tener evolución crónica. Es producida por una o simultáneamente por varias de las cuatro especies de *Plasmodium*: *P. vivax* (el más frecuente en México), *P. falciparum* (limitado principalmente a la frontera sur del país. Se detectan casos importados de los continentes Africano y Asiático resistentes a la cloroquina), *P. malariae* (poco frecuente) y *P. ovale* (ausente del país).

4.2.1.1 ciclo de vida de los plasmodios: el que incluye dos fases: una fase asexuada en el hombre y otra sexuada en los mosquitos. La fase asexuada se inicia cuando el mosquito inocula *esporozoítos* en el organismo humano; que una vez en la sangre buscan infectar hepatocitos. Comprende una etapa hepática y otra en los eritrocitos.

4.2.1.2 *P. vivax* y el *P. ovale*: a los parásitos que desarrollan una fase aguda con desarrollo de un ciclo hepático y otro eritrocítico, después de un periodo de incubación aproximado de 10 días, así como recaídas varias semanas después producidas por las formas hepáticas latentes, denominadas *hipnozoítos*, hasta por 3 años posteriores a la infección primaria.

4.2.1.3 *P. falciparum* y el *P. malariae*: a los parásitos que desarrollan sólo una fase aguda, de un ciclo hepático y otro eritrocítico, por lo cual pueden producir recrudescencias, pero no recaídas. El paludismo por *P. falciparum* si no se trata oportunamente puede producir cuadros graves y la muerte; aunque existe resistencia a la cloroquina por este parásito, las cepas mexicanas responden adecuadamente al tratamiento indicado.

4.2.1.4 vectores del paludismo: a los mosquitos hembras, del género *Anopheles* que transmiten el padecimiento al hombre. En los mosquitos, se desarrolla la fase sexuada de los *Plasmodia* al ingerir sangre de seres humanos infectada con gametos, los cuales en el estómago de los mosquitos, se desarrollan y atraviesan la pared del estómago hasta alcanzar las glándulas salivales del mosquito, y son inoculados al hombre cuando se alimentan. Esta fase se desarrolla aproximadamente en un lapso de entre siete y doce días, que varía por la temperatura del ambiente. En el país son dos las especies más importantes: *A. pseudopunctipennis* y *A. albimanus*.

4.2.1.5 Criaderos preferenciales del *A. Pseudopunctipennis*: a los que se encuentran en ríos y arroyos en las estribaciones montañosas, asociados al crecimiento de algas filamentosas verdes. Las mayores densidades de adultos se registran en el estiaje y, los picos de actividad hematófaga, suelen ocurrir cuando ha oscurecido por completo; reposan durante el día, hacinados en refugios naturales, a salvo de la luz solar y del viento.

4.2.1.6 Criaderos preferenciales del *A. Albimanus*: a los cuerpos de agua lénticos, por lo que predominan en encharcamientos variables y esteros; toleran las aguas salobres. Los adultos abundan en las épocas de lluvia, sus picos de actividad hematófaga suelen ocurrir a los pocos minutos de que se oculta el sol, y reposan durante el día en forma dispersa.

4.2.2 DENGUE: a una enfermedad trasmitida por mosquitos y producida por arbovirus de la familia Flaviviridae, que tiene cuatro serotipos. Su trascendencia radica en que produce brotes explosivos de formas clásicas, con brotes simultáneos de formas hemorrágicas o de choque graves en menor cantidad.

4.2.2.1 cuadro clínico: a la infección por virus del dengue que es asintomática, o que evoluciona como fiebre indiferenciada, o presenta las variedades de dengue clásico o hemorrágico. Las formas clásicas cursan con un cuadro febril agudo caracterizado por cefalea frontal, dolor retroorbital, mialgias y artralgias, así como erupción en la piel. Pueden presentarse manifestaciones hemorrágicas, como epistaxis o gingivorragia.

4.2.2.2 dengue hemorrágico: al que se desarrolla rápidamente entre el 3o. y el 14o. días después de iniciado un cuadro febril. Tiene una duración entre dos y tres días, y la recuperación es espontánea y rápida. Para clasificar un caso deben identificarse todos los signos siguientes:

4.2.2.2.1 Fiebre o antecedentes inmediatos de fiebre aguda.

4.2.2.2.2 Manifestaciones hemorrágicas, que incluyen por lo menos una de las siguientes: torniquete positivo, petequias, equimosis o púrpura, y hemorragias de mucosas del tracto gastrointestinal, de lugares de punción, u otros.

4.2.2.2.3 Trombocitopenia igual o inferior a 100,000/mm3

4.2.2.2.4 Extravasación de plasma, debida al aumento de permeabilidad capilar, que se manifiesta por al menos uno de los siguientes signos: hematocrito aumentado en 20% o más, por encima del valor inicial o del correspondiente a edad, sexo y población; o el descenso del hematocrito en 20% durante el periodo de recuperación; así como signos de extravasación de plasma, como derrame pleural, ascitis e hipoproteinemia.

4.2.2.2.5 Además puede presentarse síndrome de choque, manifestado por pulso rápido y débil, tensión diferencial disminuida (20 mm de Hg o menos), o bien hipotensión de acuerdo con la edad, piel fría y húmeda, y alteración del estado de conciencia.

4.2.2.3 signos de alerta: a los signos que es posible identificar, antes de la instalación del choque, que no necesariamente se encuentran todos al mismo tiempo, por lo que basta con uno o dos de ellos y son los siguientes:

4.2.2.3.1 Dolor abdominal continuo e intenso

4.2.2.3.2 Vómitos persistentes

4.2.2.3.3 Agitación o letargia

4.2.2.3.4 Descenso súbito de la temperatura, asociado a transpiración profusa, taquicardia y desmayo

4.2.2.3.5 Debilidad, hipotensión, estrechamiento de presión del pulso; o las tres condiciones.

4.2.2.4. gravedad del dengue hemorrágico: al que se clasifica y describe según la OMS, en cuatro grados. Cabe destacar que la presencia de trombocitopenia con hemoconcentración, diferencia el dengue hemorrágico de grados I y II, del dengue clásico.

4.2.2.5 transmisores del dengue: al mosquito *Aedes aegypti*. A finales de la década de los ochentas, se introdujo por el norte del país otra especie, el *Aedes albopictus*; aunque, no hay pruebas suficientes para incriminarlo como vector en el país.

4.2.3 ONCOCERCOSIS: a la una enfermedad infecciosa, crónica, de carácter degenerativo, no mortal, causada por un helminto de la superfamilia Filarioidea, y la especie de filaria *Onchocerca volvulus*. El periodo de incubación, que comprende desde la inoculación del parásito por los vectores hasta la aparición de los primeros signos, comúnmente tarda un año, o más. Forma nódulos fibrosos en el tejido subcutáneo, particularmente en cabeza, hombros y cintura pélvica. A menudo causan una erupción con prurito intenso, alteraciones de la pigmentación, edema y atrofia de la piel. Los cambios de pigmentación localizados principalmente en las extremidades inferiores producen un aspecto de “piel de leopardo”; en tanto que la pérdida de elasticidad en la piel y la linfoadenitis, pueden causar lo que se conoce como “ingle colgante”.

4.2.3.1 cuadro clínico: a aquel que inicia con manifestaciones clínicas en piel en los sitios cercanos a la inoculación que hacen los vectores después de un periodo de incubación de un año. El signo cardinal es la aparición de nódulos subcutáneos en los que las macrofilarias anidan y se reproducen liberando microfilarias por un periodo de hasta 15 años. Las microfilarias migran a piel causando dermatitis crónica y frecuentemente, también al ojo, en donde producen queratitis punctata, queratitis esclerozante e iridociclitis. La gravedad de estas últimas lesiones puede conducir a la ceguera.

4.2.3.2 transmisores de la oncocercosis: a los dípteros del Género *Simullium*; en México se reconoce como vector principal a *S. ochraceum* y como vectores secundarios a *S. callidum* y *S. metallicum*. Las tres especies son consideradas como vectores poco eficientes debido a características estructurales de su aparato bucal; éste destruye una alta proporción de filarias al momento de alimentarse con sangre de pacientes infectados.

4.2.3.3 área endémica: a la que se limita a los estados de Oaxaca y Chiapas en regiones situadas entre los 500 y 1500 metros sobre el nivel del mar, fundamentalmente asociadas al cultivo del café. En esas áreas, atraviesan corrientes de agua con las condiciones necesarias para el desarrollo del vector.

4.2.4 LEISHMANIOSIS: a la enfermedad crónica, causada por un protozoario del género *Leishmania,* de las especies *L. mexicana, L. brasiliensis y L. chagasi*.

4.2.4.1 Formas clínicas de las leishmaniosis: Presentan cuatro formas clínicas que afectan piel, membranas mucosas, cartílagos y vísceras del hombre y de diversos reservorios mamíferos menores, como cánidos domésticos o roedores silvestres. Las formas clínicas se clasifican como:

4.2.4.1.1 leishmaniosis visceral (LV); Kala-azar: que produce cuadros graves; afecta vísceras, particularmente bazo.

4.2.4.1.2 leishmaniosis cutánea difusa (LCD): semejante, a veces, a la lepra lepromatosa.

4.2.4.1.3 leishmaniosis cutánea americana; localizada (LCA o LCL): se le conoce como Ulcera del Chiclero y es la más frecuente en nuestro país.

4.2.4.1.4 Leishmaniosis mucocutánea (LMC); Espundia: Nunca cura espontáneamente, resiste mucho a la terapéutica convencional, y las infecciones bacterianas secundarias son la principal causa de muerte.

4.2.4.1 transmisores de las leishmaniosis: a las mosquitas hembra del género *Lutzomyia* que por su mordedura transmiten al hombre la enfermedad; en México, la única especie que ha sido confirmada como vector es *L. olmeca* y se incrimina a *L. cruciata, L. diabolica y L. longipalpis*.

4.2.5 ENFERMEDAD DE CHAGAS; TRIPANOSOMOSIS: a la enfermedad causada por el protozoario *Trypanosoma cruzi,* transmitido entre animales y humanos por triatóminos o chinches besuconas; el periodo de incubación va de una a dos semanas. Otros mecanismos de transmisión son la transfusión sanguínea, trasplante de órganos parasitados, accidentes de laboratorio, ingestión de bebidas y alimentos infectados, desollamiento de animales silvestres, ingestión de carne semicruda de animales parasitados, o infección congénita. En estos casos, el periodo de incubación puede prolongarse.

4.2.5.1 etapas de la enfermedad de Chagas: a tres etapas: aguda, crónica e indeterminada. Afectan en diversos grados, principalmente a corazón, esófago, colon y eventualmente, sistema nervioso central. Un número no bien definido de muertes súbitas corresponden a cardiopatías Chagásicas no diagnosticadas oportunamente. La fase aguda se da generalmente en niños, mientras que las manifestaciones crónicas irreversibles por lo común aparecen en las etapas medias o finales de la vida. La fase indeterminada es particularmente importante en pacientes menores de 15 años en quienes el tratamiento puede prevenir cardiopatías crónicas y muertes súbitas.

4.2.5.2 transmisores de la enfermedad de Chagas: a las especies de chinches de mayor importancia epidemiológica: *Triatoma dimidiata, T. barberi, T. longipennis, Rhodnius prolixus, D. maxima* y el complejo *T. phyllosoma*, aunque todas las chinches hematófagas pueden transmitir los *T. cruzi*. Los triatóminos se distribuyen ampliamente en el territorio nacional lo que favorece el riesgo de transmisión; especialmente en la Costa Pacífico y del Golfo de México. Los reservorios son el hombre y más de ciento cincuenta especies de animales domésticos y salvajes.

4.2.6 RICKETTSIOSIS: las rickettsiosis engloban una amplia gama de padecimientos transmitidos por diferentes tipos de vectores.

4.2.6.1 transmisores de las rickettsiosis: a las siguientes especies. En México, las rickettsiosis más importantes son el tifus epidémico o exantemático y tienen por vector al piojo (*Pediculus humanus humanus* o *corporis*); el tifus murino o endémico, transmitido por pulgas (*Xenopsylla cheopis*); y la fiebre maculosa o manchada cuyos vectores principales son las garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma cajennense* y *Dermacentor variabilis)*.

4.2.6.2 área endémica: a la distribución de estas enfermedades en México. Es amplia, sin embargo, el tifo exantemático causado por la *Rickettsia prowasekii,* ha afectado principalmente al Estado de México y los Altos de Chiapas, en los cuales existe el riesgo de su reaparición; el tifo murino, generado por la infección con *Rickettsia typhi* o *Rickettsia mooseri* todo el país y recientemente se focaliza a Nuevo León y Veracruz; en tanto la fiebre manchada tiene en la Comarca Lagunera el principal nicho de transmisión de la *Rickettsia rickettsii* y causa brotes aislados en Chiapas y Yucatán.

4.2.6.3 Formas clínicas de las rickettsiosis

4.2.6.3.1 Tifo epidémico o exantemático. Puede provocar gangrena en las extremidades y en casos fatales, llegar al colapso circulatorio. La muerte puede ocurrir entre el noveno y decimoctavo días. La letalidad, en casos no tratados, puede ser superior al 40%.

4.2.6.3.2 Enfermedad de Brill Zinsser. Es una reactivación del tifo exantemático que se presenta años después del ataque primario. En caso de recrudecimiento, el cuadro clínico es similar, pero más leve, y tiene una menor letalidad. Puede producir un brote de tifus exantemático si se presenta coincidentemente con infestaciones altas de los vectores.

4.2.6.3.3 Tifo murino. Cuadro clínico semejante al tifo epidémico pero de menor severidad.

4.3. ABREVIATURAS

ºC: a los grados Celsius o centígrados

CICLOPLAFEST: a la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas

cm: a los centímetros

COMP.: a los comprimidos

CVE: a la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica

DDT: al dicloro difenil tricloroetano

D.O.: al **Diario Oficial de la Federación**

ELISA: al ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas

g: a los gramos
g/ha: a los gramos por hectárea
ha: a las hectáreas
HAI: a la hemaglutinación indirecta
ICP: al índice de casas positivas
IFI: a la inmunofluorescencia indirecta
IgG: a la inmunoglobulina clase G
IgM: a la inmunoglobulina clase M
INDRE: al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos
kg: kilogramos
m2: a los metros cuadrados
mg: a los miligramos
ml: a los mililitros
ml/ ha: a los mililitros por hectárea
mm3: a los milímetros cúbicos
mm de Hg: a los milímetros de mercurio
No.: al número
NOM: a la Norma Oficial Mexicana
NT: a las nebulizaciones térmicas
OMS: a la Organización Mundial de la Salud
OPS: a la Organización Panamericana de la Salud
RCP: a la Reacción en cadena de polimerasa
RNA: al ácido ribonucleico
RT-PCR: a la transcripción inverasa - reacción en cadena de la polimerasa
SISPA: al Sistema de Información en Salud para Población Abierta
TA: a la tensión arterial
TCR: al tratamiento de cura radical para paludismo
TDU: al tratamiento en dosis única para paludismo
ULV: al Volumen ultrabajo
VUR: al Volumen Ultra Reducido

5. Codificación

De acuerdo con la X Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades transmitidas por vector se codifican de la manera indicada en la "Tabla 1".

Tabla 1 Clasificación internacional de enfermedades transmitidas por vectores

Clave de Codificación	Padecimiento
Dengue	
A90	Fiebre del Dengue (Dengue Clásico)
A91	Fiebre del Dengue (Dengue Hemorrágico)
Paludismo	
B50	Paludismo (Malaria) debido a *Plasmodium falciparum*
B50.0	Paludismo debido a *Plasmodium falciparum* con complicaciones cerebrales
B50.8	Otro paludismo grave y complicado, debido a *Plasmodium falciparum*
B50.9	Paludismo debido a *Plasmodium falciparum,* sin otras especificaciones
B51	Paludismo (Malaria) debido a *Plasmodium vivax*
B51.0	Paludismo debido a *Plasmodium vivax,* con ruptura esplénica
B51.8	Paludismo debido a *Plasmodium vivax,* con otras complicaciones
B51.9	Paludismo debido a *Plasmodium vivax* sin, complicaciones
B52	Paludismo (Malaria) debido a *Plasmodium malariae*
B52.0	Paludismo debido a *Plasmodium malariae,* con nefropatía
B52.8	Paludismo debido a *Plasmodium malariae,* con otras complicaciones
B52.9	Paludismo debido a *Plasmodium malariae,* con o sin complicaciones
B53	Otro paludismo (Malaria) confirmado parasitoscópicamente.
B53.0	Paludismo debido a *Plasmodium ovale*
B53.1	Paludismo debido a plasmodia(os) de los simios
B53.8	Otro paludismo, confirmado parasitológicamente, no clasificado en otra parte
B54	Paludismo (Malaria) no especificado

Leishmaniosis	
B55	Leishmaniosis
B55.0	Leishmaniosis visceral Kala-azar
	Leishmaniosis dérmica post Kala-azar
B55.1	Leishmaniosis cutánea
B55.2	Leishmaniosis mucocutánea
B55.9	Leishmaniosis no especificada
Oncocercosis	
B73	Oncocercosis
	Ceguera de los ríos
	Infección debida a *Onchocerca volvulus*
	Oncocerciasis
Enfermedad de Chagas	
B57	Enfermedad de Chagas
B57.0	Enfermedad de Chagas, aguda, que afecta al corazón
B57.1	Enfermedad de Chagas, aguda, que no afecta al corazón
B57.2	Enfermedad de Chagas (crónica), que afecta al corazón
B57.3	Enfermedad de Chagas (crónica), que afecta al sistema digestivo
B57.4	Enfermedad de Chagas (crónica), que afecta al sistema nervioso
B57.5	Enfermedad de Chagas (crónica), que afecta a otros órganos
Rickettsiosis	
A75	Tifus
	Excluye: Rickettsiosis debida a *Ehrlichia sennetzu* o szovetsu (A79.8)
A75.0	Tifus Epidémico, debido a *Rickettsia prowazekii,* transmitido por piojo
	Tifus clásico (fiebre)
A75.1	Tifus epidémico (transmitido por piojo)
A75.2	Tifus recrudescente (enfermedad de Brill-Zinsser)
	Tifus debido a *Rickettsia typhi*
A75.3	Tifus murino (transmitido por pulgas)
	Tifus debido a *Rickettsia tsutsugamushi*
	Tifus (transmitido por ácaros) de las malezas
A75.9	Fiebre de Tsutsugamushi
	Tifus no especificado
A77	Tifus SAI
A77.0	Fiebre maculosa (Rickettsiosis transmitida por garrapatas)
	Fiebre maculosa debida a *Rickettsia rickettsii*
	Fiebre maculosa de las Montañas Rocosas
A77.1	Fiebre de San Paolo
A77.2	Fiebre maculosa debida a *Rickettsia coronni*
A77.3	Fiebre maculosa debida a *Rickettsia siberica*
A77.8	Fiebre maculosa debida a *Rickettsia australis*
A77.9	Otras fiebres maculosas
	Fiebre maculosa no especificada
	Tifus transmitido por garrapatas SAI

6. Diagnóstico de las enfermedades

Las definiciones operacionales epidemiológicas para cada padecimiento son la base clínica para detectar estas enfermedades, a través del sistema de vigilancia epidemiológica y deben ser descritas en los manuales correspondientes para cada una de ellas. Por tanto, el cuadro clínico, la procedencia de áreas endémicas o con brotes epidémicos de los casos detectados, así como los procedimientos de laboratorio deben ser la base para reconocer a los enfermos.

6.1 DIAGNOSTICO DEL PALUDISMO. El diagnóstico debe realizarse por examen microscópico de gota gruesa de sangre, o por otras técnicas, que en su momento, apruebe y recomiende en forma expresa el Programa Nacional. Todo caso en que se sospeche de paludismo o que sea contacto de otro caso, debe confirmarse por microscopia. Por lo anterior, en el país se notifican sólo casos confirmados.

6.1.1 Criterios en la toma de muestra de gota gruesa para examen microscópico.

6.1.1.1 Sujeto de la toma. La toma deberá realizarse en todo paciente sospechoso de padecer paludismo y a sus contactos.

6.1.1.2 Sitios donde se toma de muestra. En puestos de notificación de voluntarios capacitados y unidades médicas, se tomará como parte integral del sistema de vigilancia epidemiológica para este padecimiento, sobre todo en áreas endémicas.

6.1.1.3 Momento de la toma. Deberá hacerse antes de iniciar la administración de cualquier medicamento antipalúdico.

6.1.1.4 Manejo de la muestra. La lectura de la muestra, y su resultado estarán bajo la responsabilidad de los laboratorios oficiales debidamente reconocidos. En el caso de localidades que no cuentan con este servicio, la toma y remisión de la muestra al laboratorio más cercano, estará bajo la responsabilidad de personal debidamente capacitado de la red de notificación, sea voluntaria o institucional.

6.2 DIAGNOSTICO DEL DENGUE. Se basa en: Manifestaciones clínicas de la enfermedad; antecedentes de residencia o procedencia de áreas endémicas con transmisión de la enfermedad o con infestación del mosquito *Aedes aegypti o Aedes albopictus* y pruebas serológicas positivas, o taxonomía de serotipo del virus de dengue.

6.2.1 Técnicas de diagnóstico por laboratorio, utilizadas en México. El diagnóstico por laboratorio para dengue tiene utilidad, primero, para realizar la vigilancia epidemiológica y, segundo, confirmar los casos de dengue hemorrágico. A estos últimos y a los de síndrome de choque, se les deberá efectuar diagnóstico por laboratorio en todos los casos, excepto aquéllos en los que ocurra el fallecimiento y no lograran obtenerse muestras de suero o de autopsia.

6.2.1.1 Técnica de ELISA: la de mayor uso para el diagnóstico, con determinación de anticuerpos IgM e IgG antidengue.

6.2.1.2 Técnica de Aislamiento Viral: usada para la taxonomía de los tipos de virus del dengue.

6.2.1.3 Técnica de RCP: usada también para la taxonomía de los tipos de virus del dengue

6.2.1.4 Técnicas rápidas de inmunodiagnóstico: Prueba de campo que identifica anticuerpos IgM e IgG. Debe utilizarse para estudios epidemiológicos o en casos graves; en las clínicas de febriles de unidades médicas centinelas y en localidades sin infraestructura de laboratorio, es un recurso útil para el diagnóstico epidemiológico, principalmente cuando se sospeche de casos de dengue hemorrágico.

6.2.1.5 Procedimiento para confirmación etiológica del dengue. Para el diagnóstico del dengue y dengue hemorrágico por laboratorio se seguirán las indicaciones referidas en la "Tabla 2":

Tabla 2 Procedimientos para la confirmación etiológica de laboratorio de casos probables de dengue clásico y dengue hemorrágico

Método	Detección de Anticuerpos IgM por ELISA	Cultivo de virus	Identificación de RNA viral por transcripción inverasa - reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR)	Detección de anticuerpos IgG por ELISA o por inhibición de la hemaglutinación.
Tipo de muestras recomendadas	Suero obtenido a partir del 8o. día de iniciada la fiebre y hasta 30 días después.	Suero obtenido de 0 a 5 días de iniciada la fiebre (preferentemente en los primeros tres días)	Suero colectado entre el 1o. y 10o. día de iniciada la fiebre. Sangre heparinizada conservada en refrigeración y enviada inmediatamente al laboratorio. Porción de tejido (hígado, bazo y cerebro) en solución estéril sin fenol.	Sueros pares colectados en fase aguda y en convalecencia (dos semanas de diferencia entre ambos).

Condiciones de envío	En refrigeración. Sin hemólisis, ni contaminación. Arribo al laboratorio en término máximo de una semana.	En refrigeración, Sin hemólisis, ni contaminación. Arribo al laboratorio en el término máximo de una semana.	En refrigeración. Suero sin hemólisis, ni contaminación. Sangre no hemolizada. Tejidos en recipientes con solución estéril. Arribo en el laboratorio en el término máximo de tres días.	En refrigeración. Sin hemólisis, ni contaminación. Arribo al laboratorio en el término máximo de una semana.
Tiempo de procesamiento	4 días	15 días	2 a 5 días	7 días
Interpretación de resultados	Positivo: Corresponde a infección o reinfección por dengue virus. Los títulos IgM en reinfección son menos elevados. Negativo: No se demuestra infección reciente por dengue virus.	Positivo: corresponde a infección reciente por el serotipo aislado. Negativo: No excluye la posibilidad de infección por dengue virus.	Positivo: Indica la presencia de genes virales en la muestra y por lo tanto de infección reciente. Negativo: No se demuestra infección reciente por dengue virus.	Positivo: Cuando hay seroconversión o el título de anticuerpos se incrementa cuatro veces más entre ambas muestras. Negativo: Cuando no hay seroconversión o el título se mantiene similar en ambas muestras.
Recomendaciones ante un resultado negativo en un caso sospechoso	Enviar una segunda muestra 20 días después de la primera toma para investigar anticuerpos IgG y aumento de anticuerpos IgM.	Enviar segunda muestra de suero 20 días después de la primera toma para la determinación de anticuerpos IgM e IgG.	Enviar una segunda muestra de suero 20 días después de la primera toma para la determinación de anticuerpos IgM e IgG.	Investigar otros posibles diagnósticos.
Desventajas	No identifica el serotipo responsable. Sólo es positivo hasta 45 días.	Su costo es elevado ya que requiere de cultivo.	Requiere infraestructura de laboratorio muy costosa y de personal altamente calificado. Sólo se realiza en el INDRE	No se identifica el serotipo responsable. Es difícil obtención de una segunda muestra Sólo se realiza en el INDRE

6.2.1.6 Hallazgos de laboratorio clínico en el dengue hemorrágico. Se deben realizar estudios, al menos uno diario, para demostrar la trombocitopenia y la hemoconcentración, que son hallazgos constantes en el dengue hemorrágico. De 3 a 8 días después del inicio de la enfermedad, el recuento de las plaquetas es inferior a 100,000/mm3. La hemoconcentración indica extravasación de plasma, con una elevación del hematocrito igual o mayor a 20%, o su disminución en la misma proporción en la convalecencia.

6.2.1.7 Diagnóstico diferencial. Abarca un espectro muy amplio de infecciones por virus, bacterias y protozoarios. En México debe establecerse un diagnóstico diferencial con la leptospirosis, por su frecuencia y debido a que el curso clínico de la leptospirosis con manifestaciones hemorrágicas tiende a ser fatal, se deberá instalar de inmediato un tratamiento preventivo, con antibióticos, para evitar el agravamiento y la muerte del paciente mientras se realiza su diagnóstico.

6.3 DIAGNOSTICO DE LA ONCOCERCOSIS. El diagnóstico se basa en:

6.3.1 Cuadro clínico y antecedentes: de residencia o procedencia de áreas endémicas con transmisión de la enfermedad.

6.3.2 Demostración de las microfilarias. Por medio de examen microscópico de material fresco de biopsia de piel superficial, por identificación de filarias y microfilarias al extirpar nódulos o bien por observación de microfilarias en la córnea y cámara anterior del ojo.

6.3.3 RCP e hibridación por southern blot. A partir de biopsisas o nódulos.

6.4 DIAGNOSTICO DE LAS LEISHMANIOSIS. El diagnóstico se basa en:

6.4.1 Cuadro clínico y antecedentes: de residencia o procedencia de áreas endémicas con transmisión de la enfermedad y demostración del protozoario del género *Leishmania,* por medio de:

6.4.1.1 Estudio microscópico de frotis

6.4.1.2 Impronta de lesiones cutáneas

6.4.1.3 Biopsias de tejidos. En la forma LCL, LCD y LMC y órganos lesionados en LV.

6.4.1.4 Intradermorreacción o reacción de Montenegro. Positiva, en casos de LCL y LMC.

6.4.1.5 Serología. Positiva en casos de LV, LCD y LMC, por las técnicas de aglutinación e inmunoenzimáticas.

6.4.1.6 Cultivo e inoculación. En animales de laboratorio, para todas las formas clínicas.

6.4.1.7 RCP e hibridación con sondas específicas para complejo y especies.

6.5 DIAGNOSTICO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS O TRIPANOSOMOSIS AMERICANA. Se basa:

6.5.1 Cuadro clínico. Asociado a las fases aguda y crónica del padecimiento.

6.5.2 Antecedentes. De residencia en áreas endémicas de la enfermedad.

6.5.3 Fase aguda. Se confirma al demostrar la presencia del *Trypanosoma cruzi* o serología positiva en la sangre, por estudio directo o por la técnica de concentración de Stroud, cultivo o xenodiagnóstico, serología positiva (HAI, IFI, ELISA y aglutinación de partículas).

6.5.4 Fase indeterminada. Serología positiva (HAI, IFI, ELISA y Aglutinación de Partículas) y xenodiagnóstico.

6.5.5 Fase crónica. El xenodiagnóstico y el cultivo en sangre en medios bifásicos pueden dar resultados positivos, y serología positiva (HAI, IFI, ELISA y Aglutinación de Partículas).

6.5.6 Confirmación del diagnóstico por laboratorio. Se establece únicamente con dos pruebas serológicas diferentes positivas. Los servicios de salud instalados en áreas endémicas, donde la población está en riesgo de contraer la parasitosis, deben tener conocimiento, para establecer el diagnóstico clínico, parasitológico y serológico. Los criterios de laboratorio para la clasificación de casos clínicos se hará según se indica en la "Tabla 3" .

Tabla 3 Criterios para la clasificación de casos de Tripanosomosis americana

Parásitos cualquier método	Serología dos Pruebas	Sintomatología	Criterio Diagnóstico de Caso
+	+	+	Agudo
+	-	+	Agudo
-	+	+	Agudo
+	+	-	Indeterminado
-	+	-	Indeterminado
-	+	+	Crónico
-	-	+	No caso

6.5.7 Control de calidad del diagnóstico parasitoscópico y serológico. Estará a cargo del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), por lo que toda preparación en la que se haya detectado *T. Cruzi,* deberá ser enviada al Departamento de Parasitología del INDRE; así como el 10% de las pruebas no reactivas para su certificación.

6.6. DIAGNOSTICO DE LAS RICKETTSIOSIS. El diagnóstico del tifus epidémico, tifus murino y fiebre maculosa se basa en:

6.6.1 Cuadro clínico y antecedentes: De residencia o procedencia de áreas endémicas con transmisión de la enfermedad.

6.6.2 Las siguientes pruebas de laboratorio:

6.6.2.1 Aglutinación con Proteus OX-19 o Weil-Felix. Debe utilizarse de primera intención como prueba de tamizaje. La reacción de Weil-Felix se considera positiva a partir de títulos iguales o superiores a 1:320, en algunos casos, en donde el cuadro clínico sea característico y con antecedentes epidemiológicos, se consideran como positivos los títulos a partir de 1:160.

6.6.2.2 Detección de anticuerpos IgM o IgG. Por microaglutinación, fijación de complemento, o inmunofluorescencia indirecta.

6.6.2.3 Anticuerpos inmunofluorescentes. No diferencia entre el tifus epidémico y el murino, salvo que se practique absorción diferencial con el respectivo antígeno de *Rickettsia* antes de hacer la prueba, o se tipifique con un equipo específico.

6.6.3 Confirmación del diagnóstico por laboratorio. La confirmación de casos se deberá hacer por:

6.6.3.1 Identificación de las bacterias en frotis. De sangre teñidos con alguna de las siguientes técnicas: Giemsa, Macchiavello, Ruiz Castañeda o Giménez.

6.6.3.2 Serología. Para IgG, tomando dos muestras pareadas, una en la etapa aguda, y otra con dos semanas de diferencia respecto a la primera. Un incremento de cuatro veces o más en los títulos obtenidos, confirma el diagnóstico. Las pruebas de anticuerpos IgM, se tornan positivas al sexto día después de iniciado el cuadro. En la enfermedad de Brill-Zinsser, el anticuerpo inicial es la IgG.

6.6.3.3 Aislamiento de rickettsias. Se realiza de muestras provenientes de humanos o reservorios. Esta técnica sólo se puede efectuar en laboratorios especializados y de alta seguridad.

6.6.3.4 Cultivo de rickettsias. Se hace de muestras de sangre obtenidas durante la etapa febril por inoculación de ratones lactantes, en cultivos celulares, o por demostración de antígeno en eritrocitos por inmunofluorescencia.

7. Sistemas especiales de vigilancia epidemiológica y evaluación

Para realizar adecuadamente la prevención y control de las enfermedades y en virtud de que: a) existe un Programa estructurado a nivel de campo, b) se cuenta con sistemas de vigilancia epidemiológica específicos, que permiten desarrollar la detección de casos, y c) se dispone de estudios entomológicos sobre los vectores; se integran estos aspectos como las bases para ejercer una adecuada prevención y control oportuno de las enfermedades.

7.1. BUSQUEDA DE ENFERMOS. Se efectúa mediante la notificación o vigilancia pasiva y la búsqueda o vigilancia activa de personas sospechosas de padecer alguna enfermedad transmitida por vector. La búsqueda tiene como propósito básico conocer los niveles de endemicidad y sus variaciones a través del tiempo, para aplicar medidas individuales o colectivas de prevención y control.

7.1.1 Notificación o vigilancia pasiva. Puede ser realizada por personal voluntario capacitado, o por personal de las unidades de salud. Los reportes de esta actividad se deben hacer por escrito, registrando los datos de identificación y ubicación de la persona sospechosa de padecer la enfermedad y del responsable de la notificación. Cuando la notificación sea en unidades de salud, o por voluntarios capacitados, se tomarán a los pacientes muestras para diagnóstico, de acuerdo a los lineamientos establecidos para la vigilancia específica. Los notificantes voluntarios en campo, tienen conocimientos para identificar a los enfermos con base en las manifestaciones clínicas que caracterizan los padecimientos transmitidos por vectores, así como para tomar muestras hemáticas y para aplicar tratamientos médicos básicos o sintomáticos, sobre todo del paludismo.

7.1.2 Búsqueda o vigilancia activa. Se realiza en las comunidades por personal capacitado de los servicios de salud, mediante la pesquisa domiciliaria de sospechosos clínicos y sus colaterales, con la periodicidad que determinen la magnitud y la trascendencia de la enfermedad. Este procedimiento tiene como finalidad detectar personas enfermas, que no se hubiesen identificado a través de los sistemas de vigilancia pasiva.

7.1.3 Clínicas de febriles. También llamadas unidades centinela. En dengue para poder darle seguimiento epidemiológico, se establecerá un mecanismo de búsqueda activa que garantice detectar la aparición de casos, el comportamiento de los brotes, el conocimiento de los serotipos de virus del dengue circulantes, así como la evaluación de los impactos del control del vector y, por tanto, la disminución de la incidencia. Serán seleccionados algunos servicios médicos que fungirán como unidades centinelas de vigilancia, en sitios de relevancia por su ubicación geográfica y la presencia de riesgos. En estas clínicas de febriles se utilizarán fundamentalmente las pruebas rápidas de dengue. Los Centros Estatales para la Transfusión Sanguínea, serán unidades centinelas para la Enfermedad de Chagas.

7.1.4 Encuestas. Es un procedimiento para detectar casos, efectuado por personal de los servicios de salud en áreas con exacerbación de la transmisión, o de baja endemicidad, con el propósito de definir la intensidad y la extensión del problema, o para evaluación epidemiológica.

7.2. INVESTIGACION DE CASOS. Es realizada por personal capacitado y de manera selectiva, a fin de incrementar el conocimiento de las enfermedades, evaluar el impacto de las acciones individuales o colectivas y sugerir formas más eficientes para controlar estos problemas.

7.3. ESTUDIO DE BROTES. Determinan los factores de riesgo y las causas para disponer las medidas que proceden para controlar las fuentes de infección, eliminar el desarrollo del brote e impedir el restablecimiento de la endemia. Los debe llevar a cabo el personal de los Servicios de Salud, en todos los brotes.

7.4 ESTUDIOS ENTOMOLOGICOS. El conocimiento de las especies es parte esencial para el grupo de enfermedades transmitidas por vectores.

7.4.1 Propósitos de los estudios entomológicos:

7.4.1.1 Obtener conocimientos respecto a la biología y comportamiento de los vectores en áreas de transmisión o con riesgo.

7.4.1.2 Mantener actualizado el inventario y la distribución geográfica de las especies detectando su introducción o el establecimiento en nuevas áreas.

7.4.1.3 Monitorear las fluctuaciones poblacionales que ocurren y los cambios en los hábitos de alimentación y reposo.

7.4.1.4 Orientar las medidas antivectoriales que se van a poner en práctica; y evaluar la efectividad de las medidas realizadas, obteniendo información útil para hacer adecuaciones en la metodología, oportunidad y frecuencia de las actividades y, en su caso, identificar las fallas por las que no se obtuvieron los resultados esperados.

7.4.1.5 Evaluar eficacia de los productos insecticidas empleados (dosis óptimas, residualidad), así como el rendimiento de los equipos con los que se aplican.

7.4.2 Estudios entomológicos que deben realizarse:

7.4.2.1 Identificación taxonómica de las especies.

7.4.2.2 Estimación de densidades o hacinamiento de población en sus estadios inmaduros y adultos, en las diferentes estaciones del año.

7.4.2.3 Reconocimiento geográfico para ubicar criaderos y refugios naturales, con levantamiento o actualización de croquis.

7.4.2.4 Horario de actividad hematófaga.

7.4.2.5 Hábitos de alimentación, reposo y vuelo.

7.4.2.6 Indice de picadura hora/hombre.

7.4.2.7 Disección de ovarios, para determinar edad fisiológica y riesgo de transmisión.

7.4.2.8 Valoración de susceptibilidad y resistencia a los insecticidas empleados.

7.4.2.9 Evaluación del impacto de las acciones de control de los vectores, incluidas la aplicación de insecticidas o medidas de control físico o biológico.

7.4.2.10 Determinación de la prevalencia de vectores infectados por microorganismos.

7.4.2.11 Reconocimiento de variaciones en las conductas previas o la introducción de nuevos vectores.

7.4.2.12 Indices de infestación por especie y por huésped.

7.4.2.13 Valoración de insecticidas y equipos de aspersión.

7.4.3 Control de calidad. En caso de la identificación taxonómica de las especies, se enviarán las muestras al Departamento de Entomología del INDRE cuando el estado no cuente con laboratorio de entomología; si se tiene ese recurso en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, deberán mandar para control de calidad al INDRE, sólo el 10% de las positivas y el 5% de las negativas. Los ejemplares colectados para envío, se depositarán en frascos, y se preservarán en alcohol al 70%. El material debidamente etiquetado, se remite con el formato único de envío de muestras entomológicas y copia del formato de captura.

7.4.4 ESTUDIOS ENTOMOLOGICOS EN PALUDISMO. En las áreas endémicas debe efectuarse sistemáticamente los estudios citados en esta NOM en su apartado “7.4.2 Estudios entomológicos que deben realizarse”; por su especificidad, se hace particular referencia a los siguientes:

7.4.4.1 Captura de anofelinos, nocturna intra y peridomiciliaria. Con cebo humano en periodos de entre 6 y 12 horas, según la actividad hematófaga y las preferencias de los vectores.

7.4.4.2 Capturas nocturnas de anofelinos reposando fuera de las casas:

7.4.4.2.1 En la vegetación del peridomicilio

7.4.4.2.2 En albergues de animales

7.4.4.3 Capturas diurnas de anofelinos en:

7.4.4.3.1 Casas rociadas

7.4.4.3.2 Casas no rociadas

7.4.4.3.3 Refugios naturales

7.4.4.4 Ensayos de evaluación de máquinas, equipos e insecticidas

7.4.4.4.1 Pruebas biológicas de pared

7.4.4.4.2 Medición de gotas de aerosol

7.4.4.4.3 Pruebas de efectividad de penetración de la niebla

7.4.4.5 Registro de actividades entomológicas. Debe incluir además de especificación de la localidad y fecha en que se realizan, datos del tiempo, como temperaturas, humedad relativa porcentual, dirección e intensidad del viento, y presencia o ausencia de lluvia, entre otros que influyen directamente en la actividad de los anofelinos, además de concentrar la información por especie y los horarios escalonados de actividad hematófaga.

7.4.4.6 Validez de estudios entomológicos. Los ensayos descritos con fines de evaluación, realizados en una sola ocasión, no serán considerados como determinantes para la toma de decisiones, ya que se requiere de mediciones repetidas que muestren la consistencia de los resultados.

7.4.4.7 Indicadores entomológicos

7.4.4.7.1 Promedio de picadura hombre hora = Total de anofelinos capturados (por especie) / Total de horas empleadas en la captura

7.4.4.7.2 Promedio de anofelinos por casa positiva = Total de anofelinos capturados / Número de casas positivas

7.4.4.7.3 Porcentaje de refugios positivos = Número de refugios positivos X 100 / Número de refugios revisados

7.4.4.7.4 Promedio de larvas por caladas = Total de larvas contabilizadas / Total de caladas efectuadas

7.4.4.7.5 Mortalidad en las pruebas de susceptibilidad = Total de mosquitos muertos X 100 / Total de mosquitos expuestos

7.4.4.7.6 Mortalidad corregida =

¡Error!No se encuentra el origen de la referencia.% mortalidad de mosquitos expuestos) - (% mortalidad de mosquitos testigos) X 100 100 - (% de mortalidad de mosquitos testigos)

7.4.4.7.7 Porcentaje hembras multíparas = Número de hembras de mosquito multíparas X 100 / Número de hembras de mosquito disecadas

7.4.5 ESTUDIOS ENTOMOLOGICOS EN DENGUE. En las localidades de riesgo, deben efectuarse sistemáticamente los estudios citados en esta NOM en su apartado "7.4.2 Estudios entomológicos que deben realizarse", aunque existen algunos que, por su peculiaridad o forma de interpretar, son diferentes y se describen a continuación.

7.4.5.1 Estudio de huevecillos y larvas:

7.4.5.1.1 Muestreo de casas y encuesta. Para inspeccionar recipientes con o sin agua y con o sin larvas, de acuerdo al método descrito en las Guías específicas de OPS.

7.4.5.1.2 Tipificación de recipientes positivos. Para sugerir acciones específicas.

7.4.5.1.3 Instalación de trampas de ovipostura. Para estimar indirectamente la infestación de mosquitos hembras.

7.4.5.2 Indicadores entomológicos. En el caso de los vectores del dengue, el grado de infestación por *Aedes aegypti* o *Aedes albopictus*, se conoce mediante el estudio de formas larvarias en los criaderos o la captura de imagos, y se utilizan los siguientes indicadores:

7.4.5.2.1 Indice larvario de casas = Casas con criaderos positivos X 100 / casas exploradas

7.4.5.2.2 Indice larvario de recipientes = recipientes positivos X 100 / recipientes con agua explorados

7.4.5.2.3 Indice larvario de Breteau = depósitos positivos X 100 / casas exploradas

7.4.5.2.4 Indice de picadura = mosquitos capturados horas / hombre de exposición

Precauciones. En caso de haber confirmado la circulación de virus, deberá evitarse las capturas con cebo humano por lo que este índice no se obtendrá.

7.4.5.2.5 Indice de pupas = depósitos positivos a pupas X 100 / depósitos positivos

7.4.5.3 Criterios Operativos de Control larvario. Esta Norma establece los siguientes Criterios Operativos de Control, con base en los índices larvarios medidos antes y después de realizar acciones de control, según se indica en la "Tabla 4".

Tabla 4 Criterios Operativos de Control

NIVEL DE CONTROL OPERATIVO	INDICE DE CASAS POSITIVAS	INDICE DE RECIPIENTES POSITIVOS	INDICE DE BRETEAU
Optimo	< 1	< 0.5	1 - 4
Bueno	1 - 4	0.5 - 1.9	5 - 9
Alarma	5 - 9	2 - 4	10 - 14
Emergencia	10 o más	5 o más	15 o más

7.4.5.4 Evaluación de acciones antilarvarias. Estas acciones tienen como objetivo eliminar la infestación por larvas, por ello, se considerará que las acciones antilarvarias contra los aedes han sido exitosas, sólo cuando se logre obtener Niveles de Control Operativo entre Optimo y Bueno. La evaluación tendrá tres etapas:

7.4.5.4.1 Valoración. Conocer el Indice de Casas Positivas (ICP), en un lapso no mayor a una semana, previa a las intervenciones de control larvario.

7.4.5.4.2 Verificación. Determinar el ICP al día siguiente de la intervención antilarvaria, comparando los valores previos y posteriores del ICP y tipos de recipientes, y por ende, se estará realizando control de calidad de las acciones de control.

7.4.5.4.3 Adecuación de acciones. Si en la verificación, los ICP se encuentran en niveles de alarma o emergencia, se establecerán acciones de capacitación del personal de control antilarvario, inmediatas a la evaluación del impacto, para evitar dispendio de recursos y pérdidas de tiempo en acciones que no tengan el impacto esperado. Si después de la verificación entomológica persisten índices de Alarma o Emergencia, se deben repetir las acciones antilarvarias.

7.4.6. ESTUDIOS ENTOMOLOGICOS EN LEISHMANIOSIS. La actividad entomológica indicada para cada entidad federativa, está condicionada por el riesgo de transmisión identificado.

7.4.6.1 Periodicidad de los estudios. Cuando se notifiquen casos de leishmaniosis en alguna localidad, se programarán encuestas entomológicas, éstas se efectuarán a lo largo de un año, con periodicidad mensual. En caso de no contar con personal suficiente, la periodicidad podrá ser trimestral, empleando, en ambos casos, los formatos especiales para ese fin.

7.4.6.2 Estudios entomológicos a realizar. En las localidades de riesgo, deben efectuarse sistemáticamente los estudios citados en esta NOM en su apartado "7.4.2 Estudios entomológicos que deben realizarse", aunque existen algunos que, por su peculiaridad o forma de interpretar, son diferentes y se describen a continuación.

7.4.6.2.1 Captura con cebo humano: los entomólogos se ubicarán en lugares protegidos por vegetación, donde los residentes realizan actividades agrícolas o forestales; en el peridomicilio (fuera de la casa), o en el intradomicilio (interior de la casa). Las colectas de rutina iniciarán poco antes del crepúsculo hasta las 23 horas, empleando el tubo de captura (capturador de Castro) o el tubo de cloroformo. Se programarán capturas de 24 horas continuas y, dependiendo de los conocimientos de los patrones de picadura y época del año, se programarán horarios de captura en las horas pico de actividad.

7.4.6.2.2 Captura en sitios de reposo: durante el día se realizará la búsqueda de ejemplares en posibles sitios de reposo como raíces y troncos de árboles, huecos en las rocas, madrigueras de mamíferos, nidos de aves, cuevas, etc.

7.4.6.2.3 Captura con trampas: existe una amplia variedad de trampas, las hay de luz blanca, para el vuelo, pegajosas y con cebos, que pueden emplearse para la captura de *Lutzomyias* adultas, la eficacia de éstas varía según la especie en estudio, por lo que se utilizan como una segunda opción o complemento.

7.4.6.3 Indicadores entomológicos:

7.4.6.3.1 Indice de picadura hora/hombre $IIH = \frac{\text{Número de } \textit{Lutzomyias} \text{ capturadas por hora}}{\text{horas / hombre de exposición}}$

7.4.6.3.2 Indice de domiciliación $IID = \frac{\text{Lutzomias capturadas en el interior del domicilio}}{\text{Número total de } \textit{Lutzomyias} \text{ capturadas}} \times 100$

7.4.6.3.2 Indice de peridomicilio $IPD = \frac{\text{Lutzomias capturadas en el peridomicilio}}{\text{Número total de } \textit{Lutzomyias} \text{ capturadas}} \times 100$

7.4.6.4 Validez. Estos índices sólo son comparables entre sí, de haberse realizado todos los estudios en una misma localidad, con la sistematización y periodicidad indicada.

7.4.6.5 Utilidad. Con estos estudios, es posible graficar la actividad hematófaga escalonada por horas y la densidad poblacional relativa por especie, durante todo el año, lo que permitirá desarrollar métodos de protección individual de la población y determinar los meses en los que se debe reforzar la búsqueda de casos de leishmaniosis y la prevención de picaduras de *Lutzomyias*. El ambiente preferente para la actividad de estos vectores es la base para decidir el tipo de intervención antivectorial a emplear.

7.4.7 ESTUDIOS ENTOMOLOGICOS EN LA ENFERMEDAD DE CHAGAS. Los estudios derivan del estudio epidemiológico de caso, de brotes, o de vigilancia rutinaria del personal de entomología, y deberá efectuarse de la siguiente manera:

7.4.7.1 Encuesta domiciliaria por la comunidad. La unidad de entomología pedirá a los moradores de las viviendas de los casos, que capturen chinches vivas y las depositen en frascos o bolsas de polietileno, previa instrucción en cuanto a su identificación (diferenciación de otros artrópodos comunes en la vivienda). Se recolectan periódicamente las muestras para su clasificación.

7.4.7.2 Encuesta domiciliaria por personal de entomología. Se hace mediante visitas especiales a viviendas previamente seleccionadas.

7.4.7.2.1 Tamaño de la muestra. Se determina aleatoriamente y de manera paralela a la encuesta epidemiológica, considerando a la vivienda como la unidad de muestreo. Los poblados pequeños se revisan al 100%.

7.4.7.2.2 Inspección activa de viviendas. La realiza personal de entomología. Se debe identificar los posibles refugios de chinches, intra y peridomiciliarios, con especial atención en los dormitorios; aplicar

aerosol de insecticida piretroide en los posibles refugios para provocar la salida de las chinches y facilitar su captura. Se colectan especímenes en todos los estadios evolutivos que se encuentren.

7.4.7.2.2 Revisión de especímenes capturados. Se clasifica el material colectado, se extrae materia fecal y se analiza con microscopio parasitoscópico en busca de *trypanosomas*.

7.4.7.3 Indicadores entomológicos. Se emplean los indicadores recomendados por OPS/OMS, y son:

7.4.7.3.1 Indice de Infestación = Número de casas con triatóminos X 100 Número total de casas estudiadas

7.4.7.3 2 Indice de Densidad = Número total de triatóminos capturados Número total de casas

7.4.7.3.3 Indice de Hacinamiento = Número total de triatóminos capturados Número de casas con triatóminos

7.4.7.3.4 Indice de Dispersión = Número de localidades con triatóminos X 100 Número total de localidades estudiadas

7.4.7.3.5 Indice de Colonización = Número de casas con ninfas de triatóminos X 100 Número de casas positivas a triatóminos

7.4.7.3.6 Indice de Infección Natural = Número de triatóminos con *T. cruzi* X 100 Número de triatóminos estudiados

7.4.8 ESTUDIOS ENTOMOLOGICOS EN RICKETTSIOSIS. El riesgo de exposición a las rickettsias y, por tanto, a la enfermedad, está dado por la densidad de los vectores y la proporción de éstos infectados. Los estudios entomológicos identifican estas dos condiciones por medio de:

7.4.8.1 Anticuerpos inmunofluorescentes. Esta prueba detecta rickettsias en las garrapatas vectores y se practica en los especímenes colectados en domicilio de los enfermos o en áreas de riesgo.

7.4.8.2 Estudios entomológicos en tifus epidémico o exantemático. Para conocer si los habitantes de una localidad están parasitados por piojos (de la cabeza o del cuerpo), se hará una encuesta, el tamaño de la muestra será determinado de manera estadísticamente válida. Se considerará parasitada la familia, cuando en alguno de sus miembros se encuentra un piojo en cualquier etapa evolutiva. Se pueden obtener índices de infestación, por familias o por individuos estudiados, así como por especie, piojos de cabeza o cuerpo.

7.4.8.3 Estudios entomológicos en tifus murino o endémico. El vector del tifus murino y la peste bubónica es la pulga de la rata y ratones y se ha incriminado también a pulgas de gatos. Estos artrópodos fácilmente dejan a su huésped y puede transferirse a otros por lo que los estudios entomológicos deberán buscar y clasificar las pulgas de los animales que conviven con el hombre, señalando sus índices de infestación por especies vectoras y por huéspedes, especialmente en perros, gatos y ratas.

7.4.8.4 Estudios entomológicos en fiebre maculosa (manchada). El agente etiológico de la fiebre manchada, se encuentra en garrapatas que parasitan al hombre, ganado, roedores y animales silvestres como el venado. Por ello, los estudios entomológicos se dirigen a capturar garrapatas en esos animales y otros que convivan con el hombre, señalando sus índices de infestación por especies vectoras y por huésped.

7.5 ESTUDIOS MASTOZOOLOGICOS. Son realizados por mastozoólogos para identificar animales domésticos o silvestres, que sean reservorio de los agentes causales de enfermedades transmitidas por vectores.

7.5.1 Propósito de los estudios mastozoológicos:

7.5.1.1 Identificar especies.

7.5.1.2 Conocer su distribución geográfica.

7.5.1.3 Estimar densidades de población.

7.5.1.4 Describir y analizar conductas.

7.5.1.5 Identificar y vigilar refugios domésticos y peridomésticos.

7.5.1.6 Identificar animales infectados o enfermos.

7.5.1.7 Caracterizar sus contactos con el hombre, longevidad y susceptibilidad a los gérmenes.

7.5.1.8 Proponer, diseñar y evaluar medidas de control de reservorios.

8. Medidas generales de prevención y control

Son aquellas que van dirigidas para evitar la ocurrencia o evolución de un daño a la salud, sin tocar aspectos puntuales y únicos de alguna entidad patológica asociada con vectores. Favorecen una actitud solidaria y consciente de los individuos e integran la participación del personal de salud, las comunidades y de las autoridades locales.

8.1 MEDIDAS GENERALES:

8.1.1 Informar a la comunidad. Sobre la importancia de las enfermedades transmitidas por vectores, su mecanismo de transmisión y las formas de prevenirlas y controlarlas.

8.1.2 Orientar y capacitar a la población. En acciones de autocuidado de la salud.

8.1.3 Promover. El mejoramiento de la vivienda y del saneamiento básico.

8.1.4 Capacitar. Al personal de salud.

8.2 ACCIONES A REALIZAR.

8.2.1 EN LA COMUNIDAD. Para incrementar el impacto de las acciones, se debe incrementar los conocimientos de la población, motivar actitudes solidarias y de colaboración ciudadana, así como producir cambios de las conductas adversas a la salud individual o colectiva en la comunidad.

8.2.1.1 Informar a la comunidad. La importancia de las enfermedades transmitidas por vectores como problema de salud pública, sobre todo del tipo de enfermedades y sus vectores que existen en el país y, principalmente, en la región en que residen o hacia aquellos lugares que frecuentan fuera de su localidad de residencia, por motivos de trabajo.

8.2.1.2 Brindar a la población los conocimientos básicos. Sobre los mecanismos de transmisión, del riesgo de adquirir alguna de estas enfermedades y de su repercusión social y económica, para motivar la aceptación del Programa, así como su participación en las actividades individuales, familiares y del nivel comunitario.

8.2.1.3 Mejoramiento de la vivienda. En virtud de que en las viviendas es en donde generalmente se presentan las condiciones que favorecen la transmisión de estas enfermedades, se deben dirigirse acciones concretas, sencillas y económicas para modificar aquellos aspectos que incrementan el contacto de los vectores y la población. Dentro de estas acciones están el resane de paredes, colocación de falsos plafones, mosquiteros en puertas y ventanas, eliminación de sitios de anidación y reproducción de insectos y reservorios, cuidados sobre el agua y basuras, higiene personal.

8.2.1.4 Participación comunitaria. Se dirige a la toma de decisiones, la planeación, la capacitación, la ejecución de acciones y en la evaluación, las cuales deben ser conducidas en forma permanente por las autoridades locales y la comunidad. Los representantes de salud deben promover que esta participación sea conducida por la comunidad y sus autoridades, apoyando en los diferentes aspectos que la favorecen, hasta lograr que éstas sean parte de la cultura para lograr el bienestar. La participación comunitaria se dirige a controlar los hábitats y evitar el contacto de la población con los riesgos que favorecen la presencia de estas enfermedades. Esto se logra por medio de:

8.2.1.4.1 Sensibilizar a la población y a los grupos organizados para que acepten y participen activamente en acciones preventivas y de control.

8.2.1.4.2 Movilización de la comunidad. Promover la organización de la comunidad en campañas diversas.

8.2.1.4.3 Promover la gestión de recursos. Humanos, materiales, técnicos y económicos, conjuntamente con las autoridades locales, municipales y estatales, así como con organismos oficiales y privados, para el mejor desarrollo de las actividades que se programan.

8.2.1.4.4 Motivar el desarrollo. La presente Norma motivará el desarrollo de las estrategias de promoción de la salud, de comunicación social y de integración de las autoridades municipales y de educación para que, en el mediano plazo, las acciones de participación ciudadana y comunitaria sean un instrumento alterno a los insecticidas.

8.2.2 DE LAS AUTORIDADES LOCALES. A las autoridades locales (representantes de las Autoridades Municipales y Estatales), les compete una participación determinante para evitar los riesgos de la transmisión de estas enfermedades.

8.2.2.1 Ambito de competencia. El saneamiento básico y ambiental es importante para mantener las localidades libres o con niveles de control a los vectores y reservorios de enfermedades. Por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, a los municipios les corresponden estas acciones, así como promover y velar por el cumplimiento comunitario de las disposiciones que le competen. El ejercicio de lo normado es responsabilidad de la población y de sus instituciones locales.

8.2.2.2 Acciones a realizar. Dentro de las acciones más importantes se encuentran los aspectos relacionados con el buen manejo de basuras, agua, drenaje, pavimentación, alumbrado, mercados, cementerios y de las normas de buena convivencia. Todas estas son de importancia para la vigilancia, prevención y control de las enfermedades.

8.2.3 DE LAS AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES. A estas autoridades, por nivel de competencia, les corresponde proporcionar y adecuar los criterios concretos para que la comunidad y las autoridades locales conduzcan sus actividades en un marco de certidumbre científica y beneficios sociales.

8.2.3.1 Ambito de competencia federal. La elaboración, actualización y la capacitación sobre los contenidos de las normas son competencias federales.

8.2.3.2 Ambito de competencia estatal. La adecuación y promoción del cumplimiento de lo normado le compete a los estados. El ejercicio de las normas es responsabilidad de la población y de sus instituciones locales.

8.2.3.2 Acciones a realizar. De común acuerdo con autoridades del Sector Educativo se debe incluir contenidos en la *Curricula* de los programas en niveles de educación básica y media superior en forma permanente y actualizada, integrando conceptos y actitudes y que motiven prácticas que favorecen la vigilancia, prevención y control de estas enfermedades. Estas acciones deben orientarse a motivar un cambio favorable en las conductas que facilitan el contacto con los vectores de enfermedades o a realizar acciones directas de control sobre éstos. De la misma forma, se deben establecer colaboraciones con los Sectores Agropecuario, de Ecología, de la Construcción, Migración, Comercio, así como con los representantes de Organizaciones Civiles y no Gubernamentales, para coordinar la aplicación de la presente Norma.

9. Medidas específicas de prevención y control

El control de las enfermedades transmitidas por vectores, es complejo, ya que incluye medidas dirigidas a eliminar los agentes causales de algunos de estos padecimientos en el humano, dirigidas tanto a los reservorios como a los vectores, así como otras para evitar o limitar factores de riesgo conocidos, que son propicios para la transmisión de estas enfermedades. El Programa Nacional de Enfermedades Transmitidas por Vector es el responsable de dictar la metodología y las estrategias a seguir para la prevención y control cotidianos de esas enfermedades y de emitir los planes de contingencia en las emergencias sanitarias epidemiológicas.

9.1 TRATAMIENTO MEDICO. Tiene como finalidad, eliminar los agentes causales, las manifestaciones clínicas, complicaciones y muerte. Para que el tratamiento médico cumpla con su función, debe ser oportuno, adecuado, ininterrumpido y suficiente, por lo que habrá de realizar un diagnóstico veraz y temprano, para lo cual los servicios de salud en áreas endémicas deben disponer de personal médico y paramédico capacitado, recursos técnicos adecuados, y apoyo administrativo para los suministros.

9.1.1 TRATAMIENTO MEDICO DEL PALUDISMO. Se emplea la combinación de dos medicamentos, la cloroquina que elimina las formas sanguíneas del *P. vivax* y del *P. falciparum*, excepto los gametocitos de este último y la primaquina, que elimina los hipnozoítos del *P. vivax* y los gametocitos del *P. falciparum*. Se ministrarán diferentes esquemas de acuerdo al objetivo que se persiga.

9.1.1.1 RECOMENDACIONES GENERALES. La cloroquina y primaquina, son medicamentos que en personas sensibles causan:

9.1.1.1.1 Irritación gástrica. Siempre deberán administrarse cuando la persona a tratar haya ingerido algún alimento, y con abundantes líquidos. Si el paciente vomita menos de 30 minutos después de recibirlo, deberá recibir una segunda dosis completa. Si vomita entre 30 y 60 minutos después de una dosis, se le debe dar media dosis adicional. En lo sucesivo pueden fraccionarse las dosis diarias en varias tomas al día.

9.1.1.1.2 Primaquina. No debe ministrarse a menores de seis meses de edad, mujeres embarazadas y madres en periodo de lactancia por sus efectos adversos en hígado y la interacción con hemoglobinas fetales; en estos casos se emplea solamente cloroquina a dosis supresivas cada 21 días y una vez que las condiciones antes mencionadas desaparezcan, se ministrará tratamiento completo.

9.1.1.1.3 Control médico. Cualquier tratamiento antipalúdico y en particular para menores de seis meses de edad, mujeres embarazadas, madres en periodo de lactancia, enfermos hepáticos y otros padecimientos intercurrentes graves, queda siempre sujeta al criterio y vigilancia médica.

9.1.1.1.4 Calidad del tratamiento con medicamentos antipalúdicos. Todos los productores de medicamentos antipalúdicos que liciten en el Sector Oficial, deben presentar un control de calidad del Laboratorio Nacional de Salud Pública o de otro, pero avalado por el Laboratorio mencionado, para asegurar la calidad de los medicamentos.

9.1.1.2 TRATAMIENTO SUPRESIVO. Aquel que se administra, sólo para eliminar el ciclo eritrocítico; en México se utiliza la cloroquina como medicamento de elección en caso de infecciones de paludismo vivax y cloroquina más primaquina en regiones con paludismo falciparum.

9.1.1.2.1 Indicación. A toda persona sospechosa de padecer paludismo se le ministra al momento de tomar la muestra hemática, una dosis única de cloroquina a dosis de 10 mg por kg de peso o según edad y en áreas especiales (de falciparum) se agrega primaquina a dosis de 0.25 mg por kg de peso (a los menores de 6 meses y embarazadas no se les ministra este último).

9.1.1.2.2 Tratamiento supresivo en áreas con *P. vivax*. Se ministra sólo cloroquina, según se indica en la “Tabla 5”

Tabla 5 Tratamiento supresivo en áreas con transmisión de *P. vivax*.

GRUPO DE EDAD	No. COMP. CLOROQUINA DE 150 mg
< 6 meses	1/4
6 meses a 1 año	1/2
2 a 5 años	1

6 a 12 años	2
13 años y más, con menos de 60 kg de peso	3
13 años y más, con más de 60 kg de peso	4

9.1.1.2.3 Tratamiento supresivo en áreas *P. falciparum.* Al momento de tomar la muestra de sangre, se administra cloroquina y primaquina a las dosis mencionadas en el apartado "9.1.1.2.1 Indicación. La dosificación se refiere en la "Tabla 6".

Tabla 6 Tratamiento supresivo en áreas *P. falciparum*

GRUPO DE EDAD	No. COMP. CLOROQUINA DE 150 mg	No. COMP. PRIMAQUINA DE 5 mg	No. COMP. PRIMAQUINA DE 15 mg
< 6 meses	1/4	0	0
6 meses a 1 año	1/2	1/2	0
2 a 5 años	1	1	0
6 a 12 años	2	2	0
13 años y más, con menos de 60 kg de peso	3	0	1
13 años y más, con más de 60 kg de peso	4	0	1

9.1.1.3 TRATAMIENTO DE CURA RADICAL (TCR). Aquél cuyo objetivo es eliminar todos los parásitos, hepáticos y eritrocíticos del enfermo. La cura radical se logra aplicando diferentes esquemas terapéuticos y su efectividad varía de acuerdo a lo referido en la "Tabla 7".

Tabla 7 Tratamiento de cura radical

Esquema	Objetivo / Indicación	Eficacia estimada
Dosis Unica (TDU con cloroquina y primaquina) con periodicidad mensual.	Eliminar fuentes de infección para mosquitos. En distribución masiva, disminuye cargas parasitarias en la población. Util en caso de brotes o en áreas especiales de transmisión persistente y focalizada.	< 50%
TCR a 5 días (cloroquina y primaquina)	Tratamiento en casos detectados en áreas hipo e hiperendémicas. Puede administrarse en forma masiva pero no como medida única de control.	80%
TCR a 14 días (cloroquina y primaquina)	Tratamiento alternativo para los casos de áreas hipoendémicas y cuando los dos esquemas de TCR anteriores no han sido suficientes.	90%
Dosis Unica (TDU con cloroquina y primaquina) cada 8 a 21 días durante 8 tomas	Su mayor utilidad es en casos repetidores. Elimina fuentes de infección para mosquitos.	**¡Error!No se encuentra el origen de la referencia.** 90%

A continuación se describen los cuatro esquemas empleados para cura radical mencionados en la "Tabla 7".

9.1.1.3.1 Tratamiento en dosis única (TDU). El que se aplica para disminuir, rápida y drásticamente la densidad de parásitos circulantes en un área específica.

9.1.1.3.1.1 Indicaciones. En casos tratados de paludismo por *P.*vivax, siempre existe un porcentaje variable que no logra la cura radical; por ello, se observa que el paludismo repite en los mismos enfermos y con gran frecuencia en las mismas casas o en las que se encuentran alrededor. Para evitar que las recaídas produzcan nuevos brotes y contribuyan a la persistencia de la transmisión, se indica el tratamiento de dosis única estrictamente supervisado a todos los habitantes de viviendas que hubieran tenido casos confirmados en los dos años previos, con especial énfasis en los enfermos; o al 100% de la población cuando la localidad sea menor de 1000 habitantes. Se debe incluir a toda persona que sin tener radicación fija en la localidad que se atiende, se encuentre al momento de aplicar la medida, fundamentalmente cuando proceda de otras áreas con transmisión.

9.1.1.3.1.2 Esquema de tratamiento en dosis única. El que se indica en la "Tabla 8".

Tabla 8 Tratamiento en dosis única (TDU)

GRUPO DE EDAD	No. COMP. CLOROQUINA DE 150 mg	No. COMP. PRIMAQUINA DE 5 mg	No. COMP. PRIMAQUINA DE 15 mg
< 6 meses	1/4	0	0

6 meses a 1 año	1/2	1	0
2 a 5 años	1	2	0
6 a 12 años	2	4	0
13 años y más, con menos de 60 kg de peso	3	0	2
13 años y más, con más de 60 kg de peso	4	0	3

9.1.1.3.1.3 Precauciones especiales. Las dosis indicadas causan en personas sensibles, irritación gástrica transitoria que desaparece con la ingesta de alimento. En el caso de localidades con grupos étnicos negroides, se debe evaluar la posibilidad de que se presenten reacciones adversas por el uso de primaquina; en caso de presentarse éstas, se empleará solamente cloroquina a las dosis indicadas en la "Tabla 8".

9.1.1.3.2 Tratamiento de cura radical a cinco días. El que se indica para la curación de casos individuales.

9.1.1.3.2.1 Indicaciones. Se administra en días consecutivos a los casos confirmados y a sus colaterales en áreas hiperendémicas.

9.1.1.3.2.2 Esquema de cura radical a cinco días. El que se indica en la "Tabla 9".

Tabla 9 Tratamiento de cura radical a cinco días

GRUPO DE EDAD	No. COMPRIMIDOS CLOROQUINA DE 150 mg		No. COMPRIMIDOS DE PRIMAQUINA	
	PRIMER DIA	2o. AL 4o. DIA	5 mg	15 mg
< 6 meses	1/4	1/4	0	0
6 meses a 1 año	1/2	1/2	1/2	0
2 a 5 años	1	3/4	1	0
6 a 12 años	2	1	2	0
13 años y más, y menos de 60 kg de peso	3	1 1/2	0	1
13 años y más, con más de 60 kg de peso	4	2	0	1

9.1.1.3.3 Tratamiento de cura radical a catorce días. El que se indica para la curación de casos individuales.

9.1.1.3.3.1 Indicaciones. Debe ministrarse a casos confirmados y sus colaterales en áreas con baja transmisión de la enfermedad. También se emplea en casos que después de ser tratados a cinco días repitan cuadro clínico en áreas de mediana o alta transmisión.

9.1.1.3.3.2 Esquema de cura radical a catorce días. El que se indica en la "Tabla 10"

Tabla 10 Tratamiento de cura radical a catorce días

GRUPO DE EDAD	No. DE COMPRIMIDOS CLOROQUINA DE 150 mg		No. DE COMPRIMIDOS DE PRIMAQUINA POR CATORCE DIAS	
	PRIMER DIA	2o. AL 4o. DIA	5 mg	15 mg
< 6 meses	1/4	1/4	0	0
6 meses a 1 año	1/2	1/2	1/2	0
2 a 5 años	1	3/4	1	0
6 a 12 años	2	1	2	0
13 años y más, con menos de 60 kg de peso	3	1 1/2	0	1
13 años y más, con más de 60 kg de peso	4	2	0	1

9.1.1.3.4 Tratamiento de dosis única en ocho tomas. Tratamiento de cura radical que además evita recaídas si se ministran ocho dosis continuas, con periodicidad semanal o mensual.

9.1.1.3.4.1 Indicaciones. En áreas con casos repetidores.

9.1.1.3.4.2 Esquema de tratamiento de dosis única en ocho tomas. El mismo indicado en la "Tabla 8", ministrado semanal o mensualmente en dosis continuas.

9.1.1.4 TRATAMIENTO DE INFECCIONES RESISTENTES A LA CLOROQUINA.

9.1.1.4.1 Indicaciones. En México no se ha documentado resistencia de plasmodios a la cloroquina y primaquina, sin embargo, frecuentemente se detectan casos importados, fundamentalmente de Africa y Asia en los que cabe esta posibilidad. Por ello, se recomiendan los siguientes esquemas, por vía oral en casos leves y parenteral en casos graves:

9.1.1.4.2 Esquema de tratamiento para infecciones resistentes a cloroquina por vía oral. Se ministra durante seis días; del 1o. al 5o. días sulfato de quinina a dosis de 25 mg por kg de peso, dividido en tres

tomas, una cada 8 horas. El 6o. día, dosis total única de primaquina, a 0.75 mg por kg de peso (máximo, 3 comprimidos).

9.1.1.4.3 Esquema de tratamiento para infecciones resistentes a cloroquina por vía parenteral. Para el tratamiento de infecciones palúdicas graves, se requiere de atención hospitalaria especializada urgente, que incluye: suministro de clorhidrato de quinina o gluconato de quinidina, en dosis inicial de 10 mg por kg de peso, diluido en solución fisiológica, por vía intravenosa en un lapso de dos a cuatro horas. Se sigue con dosis de mantenimiento de 5 mg por kg de peso del mismo medicamento y modo de aplicación durante otro lapso de cuatro a ocho horas.

9.1.1.4.4 Precauciones especiales. La velocidad de goteo en la venoclisis, se disminuye cuando la concentración del medicamento en el plasma excede a los 6 mg por ml, si el intervalo QT del electrocardiograma es mayor de 0.6 segundos, o si el intervalo QRS aumenta a más del 25%. La hipoglicemia asociada con la infección por *P. falciparum* puede exacerbarse, debido a la hiperinsulinemia inducida por la quinina o quinidina y debe tratarse mediante la administración intravenosa de una solución de dextrosa. El tratamiento continuará hasta que la parasitemia se reduzca a menos del 1% y el paciente esté en condiciones de tolerar medicamentos por vía oral.

9.1.1.4.5 Evaluación de la respuesta del *P. falciparum* a la cloroquina. Se realiza para seguimiento de la respuesta del parásito *P. falciparum* a la cloroquina, en áreas de baja, mediana o de transmisión inestable. A partir de la confirmación de un caso y la administración de una dosis de cloroquina de 25 mg por kg de peso, distribuida en tres días, se inicia el seguimiento con muestras diarias durante los días 0, 3 y 7; posteriormente, los días 14, 21 y 28. La prueba de eficacia terapéutica estará a cargo de personal capacitado, y el seguimiento incluye registro de información básica del paciente, evaluación clínica, temperatura axilar, parasitemia y peso corporal en el día cero (antes del tratamiento), seguido del tratamiento supervisado con el medicamento estipulado.

9.1.1.4.5.1 Criterios de inclusión para evaluación de susceptibilidad de *P. falciparum* a cloroquina: La clasificación de la resistencia de los parásitos a los medicamentos se hará de acuerdo a los criterios de la OMS, para ello se incluirá en el estudio de evaluación:

9.1.1.4.5.1.1 Una muestra estadísticamente correcta. De los casos mayores de seis meses de edad.

9.1.1.4.5.1.2 Monoinfección positiva por *P. Falciparum.* Con densidad de 500 a 5,000 parásitos por microlitro.

9.1.1.4.5.1.3 Antecedente de fiebre. Durante las últimas 72 horas.

9.1.1.4.5.1.4 Pacientes procedentes del extranjero. Con diagnóstico confirmado.

9.1.1.5 TRATAMIENTO PROFILACTICO.

9.1.1.5.1 Indicaciones. A las personas residentes en áreas libres de paludismo que se trasladan a zonas endémicas, tanto dentro como fuera del territorio nacional, se les administrará el tratamiento profiláctico antes, durante su permanencia en estos sitios y después de haberlos abandonado.

9.1.1.5.2 Esquema de tratamiento profiláctico. cloroquina de 150 mg a dosis de 10 mg por kilogramo de peso en dosis semanales desde dos semanas antes de viajar; el 1er. día de estancia en el lugar visitado y dos comprimidos cada semana mientras permanezca en el; posteriormente, dos comprimidos cada semana, hasta seis semanas después de haber salido del área endémica. Es conveniente señalar que este tratamiento no impide la infección, pero disminuye la intensidad de las manifestaciones clínicas y la gravedad del cuadro. En el caso de viajeros internacionales, este tratamiento se aplica además de lo establecido en las leyes migratorias y de turismo.

9.1.2 TRATAMIENTO MEDICO DEL DENGUE. El dengue es un padecimiento que no tiene tratamiento específico, ni vacunas que lo prevengan, por lo que las conductas para el manejo de las diferentes formas clínicas, son críticas, especialmente en los casos graves.

9.1.2.1 DENGUE CLASICO.

9.1.2.1.1 Tratamiento sintomático. Con acetoaminofén (no deben utilizarse analgésicos, ni antinflamatorios no esteroides, como ácido acetilsalicílico, naproxén o metamizol) y reposo en el hogar.

9.1.2.1.2 Aislamiento. Evitar el contacto del enfermo con el mosquito vector, utilizando insecticidas de aplicación casera, mosquiteros, repelentes, pabellones.

9.1.2.1.3 Referencia Ante la sospecha de dengue hemorrágico o choque, enviar de inmediato al paciente a una unidad de salud de segundo o tercer nivel, para su hospitalización, y realizar comprobación serológica obligada.

9.1.2.2 DENGUE HEMORRAGICO O SINDROME DE CHOQUE.

9.1.2.2.1 Antecedentes clínico-epidemiológicos. Todo paciente en el que se sospeche dengue clásico y tenga antecedentes de residir en áreas endémicas, debe ser considerado como caso potencial de dengue hemorrágico, por lo cual es muy importante que, tanto los médicos como los enfermos conozcan las conductas a seguir para evitar su agravamiento o la muerte. Debe tenerse en consideración que el manejo de los pacientes es clave para el pronóstico de la enfermedad.

9.1.2.2.2 Clasificación y tratamiento. Los pacientes con sintomatología de dengue hemorrágico deben ser clasificados por su gravedad según lo propone la OMS; así se podrá considerar el tratamiento ambulatorio con rehidratación oral en todos los casos con Grado I y II, a los cuales habrá de informarles sobre la importancia que tiene la identificación de los signos de alarma, ante los cuales deben asistir de inmediato a un hospital para su atención. Los pacientes con signos de alarma o diagnóstico de dengue hemorrágico o síndrome de choque por dengue, compatible con los Grados III y IV de la clasificación OMS, serán hospitalizados de inmediato para su observación, y estudio, así como para aplicar los criterios terapéuticos adecuados.

9.1.2.2.3 Precauciones especiales. En todos estos casos serán realizados diariamente estudios de laboratorio y gabinete, para vigilar la hemoconcentración, la trombocitopenia y el derrame pleural o la ascitis y tomar oportunamente las muestras de suero para el diagnóstico de dengue por laboratorio. Se debe tener presente que la ministración excesiva de líquidos conduce a más extravasación y de no moderarse, lleva a edema pulmonar agudo, insuficiencia cardiorrespiratoria y muerte. El tratamiento en la fase de choque debe tener por objetivo mantener diuresis y no intentar corregir la hipotensión; esta se corregirá gradualmente pasando las 12 a 24 horas críticas, con un buen tratamiento de sostén.

9.1.3 TRATAMIENTO MEDICO DE LA ONCOCERCOSIS. La Ivermectina es el medicamento de elección, el cual será administrado por personal de los servicios de salud y por promotores voluntarios capacitados. El enfermo será observado, cuando menos, durante los siguientes tres días después de ingerir el medicamento, para vigilar, registrar y tratar eventuales reacciones secundarias.

9.1.3.1 Indicaciones. Se ministrará a todo caso confirmado y a la población elegible de las áreas de riesgo y consiste en la combinación del micofilaricida Ivermectina y de la extirpación de nódulos oncocercosos.

9.1.3.2 Esquema de tratamiento con Ivermectina. Se ministra a casos confirmados y a la población elegible de las áreas de riesgo. Debe tratarse a los casos ya que son la única fuente de microfilarias para la infección de los simúlidos y a la población en riesgo para prevenir su infección y nuevos casos. Se administra Ivermectina a dosis de 150 microgramos por kg de peso, dosis única, vía oral cada seis meses de acuerdo con la “Tabla 11”.

Tabla 11 Esquemas de tratamiento con Ivermectina

Peso del Enfermo	Tabletas de Ivermectina 3 mg	Tabletas de Ivermectina 6 mg
15 - 24 kg	1 tableta	1/2 tableta
25 - 44 kg	2 tableta	1 tableta
45 - 64 kg	3 tabletas	11/2 tabletas
65 y más kg	4 tabletas	2 tabletas

9.1.3.2.1 Precauciones especiales. Quedan excluidos de tomar Ivermectina los niños menores de cinco años o con peso inferior a 15 kg; mujeres embarazadas, madres en periodo de lactancia amamantando a niños con menos de una semana de nacidos, epilépticos, y enfermos oncocercosos con otros padecimientos intercurrentes o marcado ataque al estado general. Las reacciones secundarias a la Ivermectina generalmente son ligeras y autolimitadas, disminuyen con los tratamientos subsecuentes y se manifiestan como: prurito, edema, rash, artralgias, mialgias, cefalea, hiperemia conjuntival, hipertermia e hipotensión arterial, de intensidad variable. El tratamiento de estas reacciones es a base de antihistamínicos, analgésicos y antitérmicos, o con dexametasona en casos severos, acompañado de reposo en los casos de hipotensión arterial.

9.1.3.3 Tratamiento quirúrgico. La eliminación de nódulos es primordial por ser los sitios de producción y liberación de nuevas filarias. Estas nodulaciones se detectan mediante exploración física, se extirpan quirúrgicamente con técnicas básicas en campo y en unidades de primer o segundo nivel. Es necesario enviar las muestras al laboratorio para identificar la presencia de microfilarias.

9.1.4 TRATAMIENTO MEDICO DE LAS LEISHMANOSIS. Será administrado y vigilado por personal médico capacitado en el manejo del padecimiento.

9.1.4.1 Indicaciones. Se emplearán tres esquemas de tratamiento de primera elección, de acuerdo al tipo de leishmaniosis, número y morfología de las lesiones: la aplicación de antimoniales por vía intralesionales; aplicación de antimoniales por vía intramuscular; y aplicación de calor local controlado (termocirugía). Se observa una tasa de recaídas del 14% en series controladas empleando antimoniales. Los medicamentos de elección en casos refractarios al tratamiento inicial son: aplicación de antimoniales por vía intramuscular asociada a nifurtimox; aplicación de antimoniales por vía intralesional o intramuscular asociada a termocirugía y la pentamidina como sustituto de antimoniales.

9.1.4.2 Esquema de tratamiento para la Leishmaniosis visceral (*Kala-azar*). El paciente debe recibir, en atención hospitalaria tratamiento con antimoniato de meglumina o gluconato de sodio y antimonio, ambos en solución inyectable intramuscular, a dosis de 60 mg (equivale a 20 mg de antimonio) diarios

por kg de peso, por un tiempo de 20 días consecutivos, sin exceder de tres gramos diarios. En caso necesario, se administra un segundo tratamiento, 15 días después, siguiendo el mismo esquema. Todo caso se tratará a nivel hospitalario y, la oportunidad con que se descubra, es decisiva para la curación.

9.1.4.2.1 Esquema de segunda elección para la Leishmaniosis visceral. Los casos que no mejoren con los antimoniales, pueden recibir Anfotericina B, diariamente o tres veces por semana, por infusión intravenosa, en 5% de dextrosa, durante un periodo de cuatro horas, iniciándose con una dosis de 5-10 mg, la cual puede aumentarse gradualmente por 5-10 mg en cada administración, hasta llegar a una dosis de 0.5-1.0 mg/kg de peso, sin sobrepasar un total de 1-3 g. La duración exacta dependerá de la respuesta de cada paciente. El tratamiento siempre debe ser administrado en un hospital, a fin de vigilar el funcionamiento renal y cardiaco debido a que en pacientes sensibles puede afectarse el funcionamiento renal y cardiaco. Otro medicamento de segunda elección es la Pentamidina la cual se administrará a la dosis de 4 mg/kg de peso, tres veces por semana, durante cinco a 25 semanas. Se considera tóxico y con efectos secundarios, por lo que también, el tratamiento, debe ser administrado siempre en un hospital.

9.1.4.3 Leishmaniosis cutánea difusa.- Esta forma clínica, refractaria al tratamiento, mejora temporalmente con la administración de antimoniato de meglumina o gluconato de sodio y antimonio, a dosis de 60 mg (equivale a 20 mg de antimonio) diarios por kg de peso, por un mínimo de 20 días consecutivos, sin exceder de tres gramos diarios lo que equivale a 10 ml de antimoniato de meglumina y a 8.5 ml de gluconato de sodio y antimonio. En caso necesario, ante la exacerbación del cuadro clínico, este esquema se repite de dos a tres veces en el curso de un año.

9.1.4.3.1 Esquema de segunda elección para la Leishmaniosis cutánea difusa. Si la aplicación de antimoniales no logra mejoría clínica, se agrega la administración oral de nifurtimox a dosis diarias de 10 mg por kg de peso corporal, repartido en tres tomas diarias, por un mínimo de cuatro semanas.

9.1.4.4 Leishmaniosis cutánea americana o localizada.- Se administra el antimoniato de meglumina o gluconato de sodio y antimonio como se describe en el apartado “9.1.4.3 Leishmaniosis cutánea difusa”. En lesiones únicas, o múltiples de diámetro menor a 5 centímetros, los antimoniales se infiltran alrededor de la lesión. El esquema básico intralesional consiste en una aplicación semanal por un mínimo de cuatro semanas y no más de seis; si al término del tratamiento continúa el prurito e inflamación, esto pudiera corresponder a reacción local del medicamento por lo que se suspenderá el tratamiento dos semanas, se buscará la presencia de parásitos y de ser negativo se dará por concluido el tratamiento. Un complemento de los medicamentos, es el calor local con vapor, termos o botellas tapadas que contengan agua caliente a 50-60ºC colocadas sobre las lesiones.

9.1.4.4.1 Tratamientos alternos. Dependiendo de la disponibilidad, la Pentamidina se considera de segunda elección. Se ministra a la dosis antes en el apartado “9.1.4.2.1 Esquema de segunda elección para la Leishmaniosis visceral”. El uso de calor controlado empleando un equipo de termocirugía por 30 segundos sobre los bordes activos de las lesiones, logra en una sola aplicación, tasas de curación del 95%. La resección quirúrgica de las lesiones no se recomienda, por atribuírsele problemas de autoinoculación o metástasis por vía linfática.

9.1.4.5 Leishmaniosis mucocutánea. En esta forma clínica, de difícil curación, también se administran antimoniales a las dosis citadas en el apartado “9.1.4.3 Leishmaniosis cutánea difusa”, generalmente, los enfermos necesitan un segundo tratamiento. La Anfotericina B puede ser utilizada para los casos que no responda a los antimoniales y se administrará a la dosis mencionada en el apartado “9.1.4.2.1 Esquema de segunda elección para la Leishmaniosis visceral”.

9.1.4.5 Precauciones generales. Los medicamentos a base de antimonio causan efectos adversos en pacientes previamente cardiópatas o con enfermedad renal por lo que se deberán monitorear estas funciones durante el tratamiento. Es recomendable que los antimoniales empleados por vía intramuscular, se ministren en dosis parciales los primeros tres días hasta completar la dosis total según peso del paciente. En el caso de la infiltración perilesional de antimoniales, una aguja sólo penetrará el borde de la lesión una sola vez, de otra forma, se corre el riesgo de causar lesiones “satélite” de la lesión original por iatrogenia. Treinta días después de terminado cualquiera de los tratamientos, se valora la curación mediante estudios clínicos y de laboratorio; si persisten datos que sugieran alguna lesión activa o parasitoscopia positiva, es necesario reiniciar el tratamiento, de acuerdo con los esquemas antes referidos.

9.1.5 TRATAMIENTO MEDICO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS. Tratamiento antiparasitario efectivo sólo mientras el parásito se encuentra circulante, una vez que ha causado lesiones en órganos blanco ya no es útil por lo que el médico se limitará a la atención de las complicaciones.

9.1.5.1 Indicaciones. El objetivo debe ser ministrarlo en fase aguda ya que previene daños posteriores; no obstante, durante la fase indeterminada tiene capacidad de limitar los daños en pacientes menores de 18 años.

9.1.5.2 Esquema de tratamiento en fase aguda e indeterminada. En la fase aguda es muy útil el nifurtimox, un derivado del nitrofurfurilideno. En adultos se administra a dosis de 7 a 10 mg por kg de

peso por día (máximo 700 mg al día). En los menores de 15 años, que toleran más el medicamento, la dosis es de 15 mg por kg de peso, repartidos en tres tomas diarias, durante sesenta días consecutivos. En los casos indeterminados menores de 18 años es útil el nifurtimox a las dosis citadas, para prevenir posibles complicaciones que se presentan en la fase crónica.

9.1.5.2.1 Tratamiento alterno. En casos graves también ha mostrado ser eficaz el benznidazol, un derivado del 2-nitroimidazol, a dosis de 5 mg por kg de peso en todas las edades, repartidas en dos tomas diarias durante treinta días ininterrumpidos. Se recomienda vigilancia médica estrecha, en pacientes con antecedentes de daño hepático, renal, pulmonar y hematopatías.

9.1.5.2 Esquema de tratamiento en fase crónica. El tratamiento es sintomático y se dirige a limitar los daños.

9.1.5.3 Chagas congénito. La vigilancia de mujeres embarazadas con esta enfermedad debe ser estricto, ya que un número importante de productos fallecen antes de nacer y, aquellos que sobreviven tienen una expectativa de vida menor a un año. Se ministrará al recién nacido el nifurtimox, a dosis diaria de 8 a 25 mg por kg de peso, por 30 días consecutivos; esto disminuye el riesgo de morir.

9.1.5.4 Precauciones especiales. El medicamento está contraindicado en pacientes con daño cerebral, estados convulsivos, psicosis, así como en mujeres en periodo de lactancia. No ministrarlo en mujeres embarazadas.

9.1.5.5 Valoración del tratamiento. La evaluación en casos agudos se debe centrar en estudios serológicos. La enfermedad de Chagas es de evolución crónica también y requiere una vigilancia sostenida durante años, sobre todo en los casos no tratados, tratados tardíamente o en forma incompleta. La vigilancia comprende: control del paciente en tratamiento: exámenes clínicos periódicos, parasitoscopias de sangre para verificar la erradicación de los tripanosomas circulantes, serología para conocer los niveles de anticuerpos y vigilancia de funcionamiento del corazón. El enfermo puede considerarse como curado si dos exámenes diagnósticos consecutivos con treinta días de intervalo, resultan negativos; con frecuencia, los cuadros agudos tratados a tiempo remiten pronto hacia la curación. Si no se logra la mejoría un mes después de administrado el medicamento, se realizarán los estudios clínicos y de laboratorio y, según los resultados, se procede como sigue:

9.1.5.5.1 Parámetros de evaluación del tratamiento y conducta a seguir.

9.1.5.5.1.1 Con parasitoscopia positiva. Se considera caso activo y se administra nuevamente el tratamiento médico por 30 días.

9.1.5.5.1.2 Con parasitoscopia y serología negativas. Si ha pasado un mes de concluido el último tratamiento, se considera como curado al paciente.

9.1.5.5.1.3 Con serologías positivas. El caso se catalogará como activo, no sujeto a terapia con fármacos específicos, pero que requiere vigilancia médica anual, que incluya un electrocardiograma y pruebas serológicas.

9.1.5.5.1.4 Casos tratados, no curados, en fase indeterminada. Si durante su seguimiento presenten manifestaciones clínicas de etapa crónica de la enfermedad, se canalizan a un centro hospitalario con servicios especializados, para su estudio y manejo.

9.1.6 TRATAMIENTO MEDICO DE LAS RICKETTSIOSIS.

9.1.6.1 Indicaciones. El tratamiento habrá de iniciarse con base en consideraciones clínicas y epidemiológicas, sin esperar la confirmación diagnóstica de laboratorio y, en el caso de enfermos graves, por la alta letalidad que presentan estos padecimientos.

9.1.6.2 Esquema de tratamiento. Los antibióticos indicados son doxiciclina, tetraciclinas y cloranfenicol. Las tetraciclinas han sido consideradas el medicamento de primera elección para el tratamiento de rickettsiosis pero tienen limitaciones para su uso; por ello se empleará la doxiciclina a dosis única de 200 mg en cualquier grupo de edad según recomendación de la OMS como tratamiento del tifus epidémico. El mismo esquema se emplea con fines de profilaxis.

9.1.6.2 Precauciones especiales. Están contraindicadas las sulfas, ya que el desarrollo de las rickettsias aumenta en presencia de sulfonamidas, y la enfermedad se torna más grave. Las tetraciclinas se deben evitar durante el embarazo y en niños menores de 8 años, a los que se les podrá administrar cloranfenicol.

9.2 CONTROL DE VECTORES

Existen diversos métodos para el control de los vectores de enfermedades, tales como los biológicos, genéticos, culturales, físicos, químicos y el control integrado; por su factibilidad y viabilidad, esta NOM describe los medios físicos, a través de mejoramiento del ambiente y saneamiento básico; los químicos, con el empleo de insecticidas y algunos utilizados para el control biológico.

9.2.1 MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO BASICO

Hay medidas directas en las viviendas y en algunos espacios naturales en donde los vectores reposan o se desarrollan, que por sí solas favorecen su control eficiente, por eso, se destaca que la sistematización de las acciones de mejoramiento ambiental y saneamiento, pueden por sí solas, reducir y

eventualmente eliminar el uso de insecticidas; para lograrlo, deben ser integradas por el personal de salud, promoviéndolas y asegurando su realización, de preferencia mediante la participación comunitaria. Esas medidas se deben aplicar de manera permanente; sin embargo, cuando los estudios entomológicos lo indiquen, se programarán campañas intensivas específicas tendientes a eliminar criaderos de vectores con participación comunitaria en caso de emergencia por brotes o desastres naturales. Las acciones básicas son:

9.2.1.1 Aplanado de techos, pisos y paredes con cemento. Al igual que el recubrimiento con hidróxido de calcio (cal viva) las paredes, sirven para cubrir la superficie o rellenar las grietas en donde anidan algunos vectores creando un ambiente hostil para éstos.

9.2.1.2 Protecciones para evitar el acceso de vectores a las viviendas. Mediante la instalación de mallas de alambre o plástico en puertas y ventanas, así como el empleo para dormir de pabellones mosquiteros impregnados o no con insecticidas.

9.2.1.3 Saneamiento del peridomicilio. No acumular recipientes, escombros, madera, tabiques, basura u otros objetos que proporcionan abrigo a vectores, además chapear la vegetación para evitar que esos vectores tengan refugios naturales y facilidad de acceso a las viviendas y a los animales domésticos.

9.2.1.4 Eliminación de las algas verdeazules filamentosas. En los criaderos de mosquitos *An. pseudopunctipennis*, esta medida reduce considerablemente la densidad de larvas y mosquitos adultos cuando se realiza en ríos y arroyos durante la época de sequía. Se debe capacitar y organizar al personal de los programas de salud y a la comunidad para que realicen estas acciones por lo menos una vez al mes durante todo el año. Adicionalmente, debe integrase la limpieza de basuras de los ríos y arroyos, remover obstáculos que puedan crear remansos, encausar recodos o lagunetas, eliminando así las condiciones donde proliferan las larvas de mosquitos.

9.2.1.5 Descacharrización. Respecto a la eliminación de recipientes no útiles, que retengan agua y que potencialmente constituyan criaderos del vector del dengue, es una medida complementaria para la que esta Norma establece, que debe ser una acción que parta de las autoridades municipales y de la comunidad; que tenga como objetivo disminuir la basura, incluidos los cacharros y que las autoridades locales de salud motivarán, apoyarán y evaluarán.

9.2.2 EMPLEO DE INSECTICIDAS

La decisión de integrar insecticidas para el control, sus esquemas de aplicación, técnicas y periodicidad, se basan en estudios epidemiológicos y entomológicos ya que el fin último de su empleo obedece a la prevención y control de enfermedades. La cobertura total de universos epidemiológicos en periodos cortos, tiene un efecto de barrera homogénea, que permite obtener mayor impacto.

9.2.2.1 Características de un insecticida para ser utilizado en salud pública: Su elección y uso tiene sustento en estudios entomológicos e investigación epidemiológica y operativa y serán sometidos a evaluaciones periódicas, respecto a susceptibilidad, impacto sobre los vectores y sobre la base de su rendimiento. Deberá cumplir además con las siguientes condiciones:

9.2.2.1.1 Deben demostrar resultados de susceptibilidad normal. Con referencia para los vectores blanco, de acuerdo con los parámetros de la OMS por lo que esta organización debe recomendarlos.

9.2.2.1.2 No deben producir efectos negativos. A la ecología ni a los humanos, los efectos menores no deben poner en riesgo el equilibrio del medio y la salud del hombre.

9.2.2.1.3 Deben estar registrados ante la CICLOPLAFEST. Además deben especificar su uso; las especificaciones de empleo deben estar incluidas en el Catálogo Oficial de Plaguicidas.

9.2.2.1.4 Debe considerarse su grupo químico. Cuando en un área se apliquen adulticidas y larvicidas simultáneamente, estos deben ser de grupos químicos diferentes para evitar que se acelere la aparición de resistencia y se reduzca el tiempo de vida útil de los productos empleados. No se aplicarán adulticidas organofosforados en áreas donde un año antes se hayan aplicado piretoides.

9.2.2.1.5 Deben ser avalados en México por un comité de expertos. El Programa Nacional convocará, organizará y conducirá a un Comité de Expertos constituido por profesionales nacionales e internacionales, con objeto de contar con respaldo científico y soporte técnico para el uso racional de insecticidas, para disminuir su impacto ecológico y para prevenir la aparición temprana de resistencia. Participarán en este grupo integrantes Institucionales, investigadores y académicos de reconocido prestigio de Universidades e Institutos, así como de grupos de expertos que tienen encomendado el cuidado y protección del ambiente. Todos los participantes serán considerados siempre y cuando tengan la capacidad técnica avalada en forma curricular. Las Instituciones del Sector Salud con funciones afines al control de vectores, participarán de acuerdo a sus posibilidades en la evaluación de insecticidas, técnicas de aplicación y en la capacitación operativa con base en las recomendaciones generadas por el Comité de Expertos.

9.2.2.1.6 Deben ser autorizados para su uso por la CVE. El empleo de insecticidas para el control de los vectores sujetos a esta Norma, o cualquier otro que sea propuesto, así como la metodología para su aplicación, deberá ser aprobado por la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica (CVE), a través del

Programa Nacional de Enfermedades Transmitidas por Vector, previo acuerdo con los grupos interinstitucional y de expertos; en caso necesario, los insecticidas en uso serán sustituidos con base en las recomendaciones de estos grupos.

9.2.2.1.7 Deben basarse en criterios regionales para su aplicación. Los productos y esquemas de empleo de insecticidas deberán conservar un patrón regional basado en universos homogéneos con el fin de obtener la mayor efectividad y evitar la aparición temprana de problemas técnicos.

9.2.2.1.8 Deben aplicarse en dosis óptimas. La OMS recomienda las dosis promedio a que deben aplicarse los insecticidas, sin embargo, debido a que la susceptibilidad de las especies puede variar, estas cifras son susceptibles de modificación, sobre todo para emplear cantidades menores, siempre y cuando se aplique la metodología correcta para determinarlas y se disponga del seguimiento adecuado.

9.2.2.1.9 Deben manejarse adecuadamente. Los insecticidas son sustancias biocidas que pueden producir efectos no deseados de magnitud y trascendencia variable, por lo que el uso, almacenaje y disposición de residuos, se manejará con los lineamientos específicos que dicte el Programa Nacional y las que recomienden los productores.

9.2.2.2 METODOS PARA LA APLICACION DE INSECTICIDAS.

De acuerdo al objetivo que se persiga, los insecticidas se aplican con productos y formulaciones de acción residual o bien con productos y formulaciones de efectos efímeros.

9.2.2.2.1 APLICACIONES DE ACCION RESIDUAL. Dirigidas al control de formas larvarias y adultas de los vectores; en ambos casos se utilizan formulaciones de insecticidas preparadas para mantener un efecto letal o de repelencia que persista por semanas o meses.

9.2.2.2.1.1 Control de mosquitos adultos. Se tratan las superficies donde reposan los vectores dentro, fuera de las viviendas y en el peridomicilio. La aplicación se hace la técnica tradicional de aspersión o mediante la técnica de Rociado Rápido a bajo volumen, como se detalla en los lineamientos y manuales correspondientes.

9.2.2.2.1.2 Control de formas larvarias. Se aplica insecticida en los criaderos de vectores. La aplicación se hace con la técnica tradicional de aspersión o mediante el empleo de rociado a bajo volumen, como se detalla en los lineamientos y manuales correspondientes.

9.2.2.2.2 APLICACIONES DE ACCION EFIMERA. Son los denominados rociados espaciales de aerosoles a Volumen Ultra Reducido o nebulización térmica y tienen por propósito eliminar mosquitos adultos en áreas extensas por un mínimo de dos semanas. Se emplearán insecticidas de probada eficacia, preferentemente piretroides solubles en agua, aplicados en espacios abiertos y cerrados, en áreas rurales y urbanas, en los refugios naturales de los insectos, en interiores de casas habitación, edificios y locales.

9.2.2.2.2.1 Rociados espaciales de aerosoles a Volumen Ultra Reducido (VUR). Son tratamientos con aerosoles en frío, se caracterizan por tratar una hectárea con dosis menores a 500 ml de ingrediente activo. El insecticida se asperja fraccionándose en gotas muy pequeñas que deben tener un diámetro mediano de masa en el rango de 15 a 25 micras.

9.2.2.2.2.2 Nebulización térmica (NT). Consiste en el tratamiento de un área con aerosoles calientes, tiene lugar por medio de generadores de niebla que transforman una solución de baja concentración en una nube espesa de humo caliente que lleva suspendidas las gotas del insecticida.

9.2.2.3 EQUIPOS PARA LA APLICACION DE INSECTICIDAS. El rociado domiciliario se aplica con el equipo de aspersión manual o con motomochilas a bajo volumen. La aplicación de nieblas frías y térmicas se hace con equipos portátiles de tipo motomochilas o generadores de niebla térmica, así como equipos pesados montados en vehículos terrestres y aéreos. En virtud que las Instituciones del Sector Salud cuentan con equipos diversos, se establece que para cuidar la calidad de las aplicaciones y lograr los objetivos de esta medida de control, los equipos para nieblas deben tener las siguientes características:

9.2.2.3.1 Equipos pesados. Potencia suficiente para que el insecticida penetre hasta 100 metros, logrando dispersar la concentración saturando el ambiente con un rendimiento operativo aproximado de 60 manzanas o su equivalente en el área rural, por día de trabajo. Estas condiciones se obtienen con equipos de 18 caballos de fuerza.

9.2.2.3.2 Equipos portátiles. Las motomochilas deben tener la versatilidad necesaria para utilizarse en el rociado a VUR, el bajo volumen y para aplicar insecticidas en polvo, mediante adaptación de los aditamentos correspondientes.

9.2.2.3.3 Introducción de nuevos equipos. Todo equipo que se introduzca para su uso en el programa, deberá ser evaluado considerando: flujo de descarga, tamaño de gotas que genere, capacidad para dispersar la niebla, alcance en áreas abiertas, penetración en casas habitación y anexos, rendimiento, funcionalidad y disponibilidad de refacciones. Las evaluaciones que realicen los servicios estatales de salud, deberán ser presentados para su consideración al Programa Nacional, antes de adquirir cualquier equipo diferente al disponible.

9.2.2.4 APLICACION DE INSECTICIDAS PARA CONTROL DEL PALUDISMO.

9.2.2.4.1 Rociado domiciliario. Se realiza bajo las siguientes indicaciones:

9.2.2.4.1.1 Insecticidas. El empleo regular del DDT se elimina para el control de vectores del paludismo y los piretroides son el grupo que sustituye al DDT aun cuando su efecto residual sea menor de seis meses. El producto de primera elección es la deltametrina en polvo humectable al 5%, a dosis de 25 mg/m2. Se emplearán también, la lambdacihalotrina en polvo humectable al 10%, a dosis de 30 mg/m2 formulada en suspensión al 0.075%; o lambdacihalotrina CS a dosis de 30 mg/m2, formulado en solución microencapsulada al 2.5%; y bifentrina en polvo humectable al 10% en dosis de 50 mg/m2.

9.2.2.4.1.2 Formulaciones de campo. Las cargas de 10 litros de los siguientes productos para su aplicación con equipos de aspersión manual se preparan de la siguiente manera: 125 g de polvo humectable de deltametrina; o 75 g de lambdacihalotrina en sus dos presentaciones; o 125 g de bifentrin. Para la aplicación de deltametrina con motomochila en rociado rápido, se debe agregar 250 g a cada 10 litros de agua. Esta técnica de rociado reduce tiempo y costos de operación.

9.2.2.4.1.3 Periodicidad de las aplicaciones. La frecuencia de los ciclos de rociado deberán adaptarse a la biología del vector incriminado y la época del año en la que se logre mayor impacto; esto debe ser determinado por el análisis epidemiológico de la transmisión en el área, por lo que en ocasiones, sólo será necesario hacer una aplicación anual. Por lo anterior, el tiempo que dure la acción residual del producto no deberá regir la periodicidad de los rociados. En áreas donde *An. Albimanus* es el vector predominante, los rociados deberán anteceder a la época de lluvias en virtud de que en esa época se incrementa la transmisión del paludismo; mientras que en las áreas del *An. Pseudopunctipennis,* los rociados deben coincidir con el periodo de sequía, ya que el vector disminuye poco después de haber iniciado la época lluviosa.

9.2.2.4.2 Nebulización. En los sitios con persistencia de la transmisión, con brotes epidémicos, con exacerbación de la endemia palúdica, o en caso de desastre natural, simultáneamente al rociado domiciliario, se aplicará con la técnica de VUR.

9.2.2.4.2.1 Insecticidas. Se indica el uso de permetrina, esbiol y butóxido de piperonilo a dosis de 10.9, 0.5 y 11.1 gramos de ingrediente activo por hectárea respectivamente; o como alternativa ciflutrin a dosis de 1 a 2 g/ha. El insecticida malathion en aplicación espacial queda temporalmente fuera de uso, hasta contar con una larvicida que no pertenezca al mismo grupo de los organofosforados.

9.2.2.4.2.2 Ciclos de aplicación. Las aplicaciones se realizarán en ciclos de tres a cinco días consecutivos, de acuerdo con los horarios de actividad y reposo de los mosquitos transmisores. La frecuencia de los ciclos depende de la evolución epidemiológica del padecimiento y del efecto sinérgico de otras medidas dirigidas a las etapas larvarias de los mosquitos y a los parásitos del paludismo.

9.2.2.4.3 Larvicidas. Esta medida es de gran utilidad para reducir la densidad de infestación de los vectores apoyada por el saneamiento y las nebulizaciones.

9.2.2.4.3.1 Insecticidas químicos. Se emplea temephos líquido al 50% aplicado con bomba de aspersión manual, a dosis media de 110 ml de ingrediente activo por hectárea de criadero, dosificación que se obtiene con 5 ml del producto en 10 litros de agua, con esta carga se trata en promedio, 230 m2. Para su aplicación con motomochilas, se mezclan 300 ml del producto por cada 10 litros de agua con lo que se cubren 7,500 m2.

9.2.2.4.3.2 Insecticidas biológico. Para tratar cuerpos de agua se empleará *Bacillus turinghiensis* var. *israeliensis* cepa H-14 a dosis equivalente a 2.4 millones de Unidades Internacionales de Potencia/hectárea. Una carga de 10 litros aplicada con motomochila, se prepara con 3 litros de la presentación al 0.6%, más 7 litros de agua con lo que se cubre una extensión de 7,500 m2. Otro producto es triflumuron, que es un inhibidor del crecimiento, se prepara a razón de 5 ml del producto en 5 litros de agua, aplicando 500 ml/ha para una dosis de 197 ml de ingrediente activo por hectárea. Otro inhibidor del crecimiento que se emplea es el metopreno a dosis de 14 g de ingrediente activo por hectárea; aplicados ambos con equipo de aspersión manual. También se deben proteger y sembrar peces larvífagos del género *Poecillia*, los cuales se encuentran libres en los cuerpos de agua naturales, en virtud de su impacto variable sobre las larvas y la aceptación de la población a las siembras, son de utilidad en acciones permanentes.

9.2.2.4.3.3 Ciclos de aplicación. Los larvicidas deben considerarse como un recurso que aplicado de manera preventiva, basándose en estudios entomológicos del área a tratar, permiten reducir el uso y la cantidad de productos adulticidas; y simultáneamente con estos, controlan rápidamente infestaciones de riesgo. Al igual que los otros insecticidas para control de vectores, la periodicidad se determinará de acuerdo a la epidemiología de la transmisión en cada una de las áreas.

9.2.2.5 APLICACION DE INSECTICIDAS PARA CONTROL DEL DENGUE

9.2.2.5.1 Larvicidas. Para controlar el vector del dengue, la aplicación de larvicida es la medida que proporciona mayor rendimiento e impacto.

9.2.2.5.1.1 Insecticidas químicos. Los criaderos se deben tratar con temephos, larvicida degradable de los más inocuos, aplicado en agua a la dosis de una parte por millón, según recomendaciones de la OMS. Se cuenta con tres presentaciones: líquido al 50%, cápsulas al 5% y granos de arena al 1%. En el caso de las cápsulas al 5% se debe utilizar un gramo del producto por cada 50 litros; para temephos en granos de arena al 1% se aplica un gramo por cada 10 litros de agua. La presentación de temephos al 50% se destina para tratar carros-cisterna que suministran agua para uso doméstico durante las emergencias sanitarias-epidemiológicas, o en la dotación cotidiana de agua a los asentamientos humanos de riesgo con suministro irregular. La dosis empleada es de 2 mililitros por cada 1,000 litros de agua.

9.2.2.5.1.2 Insecticidas biológicos. La siembra de peces en piletas, estanques y otros recipientes para almacenamiento son medidas aceptadas por la comunidad que logran por sí mismas el control de criaderos.

9.2.2.5.1.3 Ciclos de aplicación. La aplicación de temephos se hace a recipientes positivos a larvas, evitando su aplicación de rutina en recipientes frecuentemente negativos. Se emplea como medida preventiva básica y se regirá por la periodicidad que indiquen los estudios entomológicos. Ante la presencia de situaciones emergentes como los desastres naturales y brotes, debe aplicarse simultáneamente con rociado espacial a VUR cumpliendo con: coberturas integrales, en periodos de ejecución cortos (menores a tres semanas) y con reducción de los índices de infestación a niveles óptimos, según la “Tabla 4” “Criterios operativos de control”.

9.2.2.5.1 Nebulización. Los mosquitos aedinos también se combaten mediante la aplicación de VUR, sin embargo, el uso de este recurso indica el fracaso de la prevención.

9.2.2.5.2.1 Insecticidas. Se indica el uso de permetrina, esbiol y butóxido de piperonilo a dosis de 10.9, 0.5 y 11.1 gramos de ingrediente activo por hectárea respectivamente; o como alternativa ciflutrin a dosis de 1 a 2 g/ha. El insecticida malathion en aplicación espacial queda temporalmente fuera de uso, hasta contar con una larvicida que no pertenezca al mismo grupo de los organofosforados.

9.2.2.5.2.2 Ciclos de aplicación. Dado que el mosquito *A. aegypti* se caracteriza por ser eminentemente doméstico, se ha observado con un solo ciclo de nebulización de un día, con una aplicación temprana en la mañana y otra por la noche, es suficiente para eliminar a la mayoría de los mosquitos del área tratada. Este esquema reduce la infestación hasta por cuatro semanas cuando se garantiza la reducción simultánea de criaderos activos. Cuando la nebulización se usa como única medida, se aplica en ciclos de varios días consecutivos (el número de días lo determinará la productividad de los criaderos), con dos aplicaciones por día, una en la mañana y otra por la noche. En este caso se tendrá en cuenta que la reducción de densidades no se mantendrá por más de dos semanas.

9.2.2.6 CONTROL DE OTROS VECTORES

9.2.3.6.1 Control de Triatóminos. Se realiza con rociado domiciliario pero sólo en una franja de un metro en la base de paredes, aleros, grietas y otros sitios donde se puedan refugiar las chinches.

9.2.3.6.1.1 Insecticidas. Para los triatóminos, el rociado será con deltametrina, lambdacihalotrina, ciflutrina o bifentrina aplicada a las dosis referidas en el apartado “9.2.2.2.1.1“; el bendiocarb es de utilidad a razón de 20 mg/m2 de ingrediente activo. La periodicidad la determinará la especie de chinche y su grado de domicialización.

9.2.3.6.2 Control de piojos. Se aplican insecticidas en cabeza, cuerpo y ropas de vestir o de cama en forma de polvos, talco y jabones.

9.2.3.6.2.1 Insecticidas. Los insecticidas más comunes para combatir la pediculosis son malathion en polvo seco al 1%, temephos en polvo al 1% o permetrina esta última en tratamiento único tiene alto grado de efectividad hasta por dos semanas, debido a la actividad residual del ingrediente activo, es conveniente aplicar un segundo tratamiento una o dos semanas después. Se debe cuidar de no aplicar estos insecticidas en la cara, proteger ojos y membranas mucosas. En localidades donde la infestación por piojos es menor del 5%, se distribuirán jabones con insecticida durante todo el año, como mínimo dos jabones por familia por mes para el lavado de cabeza, cuerpo, ropa y prendas de cama. En localidades donde el índice de parasitación sea mayor del 5%, además de los jabones se empleará algún insecticida en talco o polvo, aplicado en cabeza, cuerpo y ropas de las personas parasitadas. Esta desparasitación se realizará dos veces por año.

9.2.3.6.3 Control de pulgas. Se aplica directamente a animales domésticos e indirectamente a ratas. Se rocían también pisos y paredes hasta 30 cm de altura, evitando la inhalación y contaminación de alimentos.

9.2.3.6.3.1 Insecticidas. Se usan adulticidas y larvicidas, piretroides, organofosforados o carbamatos residuales en edificios y casas habitación. Contra las pulgas de rata en las habitaciones se aplica malathion en aceite combustible al 4 o 5 %. En animales se usarán polvos inertes de malathion al 4%. A los animales domésticos se les aplicarán con espolvoreadores pequeños.

9.2.3.6.4 Control de garrapatas. Se aplican fundamentalmente en el ganado y perros.

9.2.3.6.4.1 Insecticidas. El uso de insecticidas contra garrapatas (ixodicidas), sigue siendo útil (baño garrapaticidas por inmersión o aspersión para el ganado), debe coordinarse con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, entre otras instancias, para el tipo de ixodicida aplicado en las zonas o regiones específicas del país. En perros se emplearán también baños para el control de garrapatas. En las viviendas y edificios se aplicarán los insecticidas de acción residual permetrina, propoxur, y diazinón con la técnica referida en el apartado de triatóminos "9.2.3.6.1". La personas usarán como repelentes la dietiltoluamida (DEET), y oftalato de metilo.

9.2.3.7 OTRAS MEDIDAS DE CONTROL. Pabellones impregnados con insecticida.

Además de las medidas de control específicas para cada una de las enfermedades, se dispone de pabellones impregnados con insecticida, los cuales dan protección en mayor o menor medida para más de una enfermedad transmitida por vector. Su mecanismo de acción es combinando una medida física que evita el contacto directo del vector con el hombre y la acción letal del insecticida al contacto con el vector. Representa a bajo costo una de las modificaciones más factibles de las viviendas.

9.2.3.7.1 Espectro de acción. Tradicionalmente, los pabellones se utilizan como barrera física para reducir el riesgo de transmisión del paludismo; no obstante, impregnados con insecticidas piretroides, se indican contra la picadura de otros mosquitos, moscas, triatomas, alacranes, pulgas, chinches de cama, piojos y garrapatas. La protección se limita al tiempo que permanecen las personas dentro de éste y al comportamiento horario de los vectores.

9.2.3.7.2 Criterios básicos para la instalación de pabellones impregnados. Es un método indicado para proteger a la población en áreas con persistencia de enfermedades de transmisión vectorial. Su colocación debe dar prioridad a los menores de cinco años de edad y ancianos, mujeres embarazadas, migrantes o refugiados, población laboral involucrada en proyectos de desarrollo agrícola, industrial o de la construcción, y grupos de población en localidades dispersas sin acceso a los servicios de salud. Son necesarias coberturas mayores del 80% de la población censada, con la participación corresponsable de la población en el cuidado y uso adecuado.

9.2.3.7.3 Características del pabellón. Deben ser de tamaño adecuado a las necesidades de cobertura poblacional: dimensiones extrafamiliares; de 190 X 180 X 150 (14.52 m2); y familiares de 130 X 180 X 150 (11.64 m2); su material de fibra sintética, 100% poliéster trenzado y su malla 156 (12 X 13/número de orificios/pulgada cuadrada), aseguran la residualidad del insecticida impregnado. Su resistencia depende del número de fibras por hebra de hilo (100, de cuatro a 5 años, 75 hasta 3 años, y 40, de uno a dos años).

9.2.3.7.4 Mantenimiento y reimpregnación. Los pabellones deben reimpregnarse cada año, aprovechando para hacer un lavado previo de los mismos. La técnica para reimpregnación, depende de la dosis requerida de insecticida por metro cuadrado, de la capacidad de absorción del material con el que está hecho el pabellón y del tamaño del mismo en metros cuadrados, y se describe en instructivos específicos.

9.2.3.7.5 Insecticidas para impregnación. El insecticida de elección es la deltametrina y se requiere una dosis de 25 mg por m2. También se autoriza el uso de alfacypermetrina en suspensión a 40 mg/m2; ciflutrina macroemulsión acuosa a 50 mg/m2; lambdaciolatrina suspensión en cápsulas a 20 mg/m2; y permetrina emulsión concentrada a 500 mg/m2.

10. Coordinación

Con el objeto de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos para la salud, esta Norma señala la necesidad de fortalecer la coordinación que opera entre organismos del Sistema Nacional de Salud y otros con acciones afines incluidas aquellas que apoyen la investigación operativa.

10.1 Institucional. Las estrategias y acciones referidas en la presente Norma deberán ser coordinadas con las entidades federativas, los programas sustantivos afines, los mecanismos de apoyo y líneas estratégicas de la Secretaría de Salud.

10.2 Sectorial. En esta Norma, la coordinación interna entre las diferentes instituciones del Sistema Nacional de Salud se establece de acuerdo con la capacidad técnica y operativa de sus servicios, en la notificación de casos, el diagnóstico de laboratorio, el tratamiento de enfermos y sus colaterales, en la investigación de los casos, así como en las medidas de prevención y control que las instituciones realicen.

10.3 Intersectorial. La coordinación con otros sectores relacionados directa, o indirectamente con la salud o la atención de riesgos, comprende, entre otros aspectos, los relativos al ordenamiento del medio, a la promoción de la salud, la participación social y comunitaria, así como en la educación de la salud.

11. Capacitación

11.1 Al personal de salud. Para el debido cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana, el personal de los servicios del Sistema Nacional de Salud deberá recibir capacitación inicial y adiestramiento, de acuerdo con los manuales de organización y procedimientos vigentes para el fomento de la salud, la promoción y fomento sanitario de las comunidades, la búsqueda de los enfermos mediante la notificación y la pesquisa domiciliaria, los diagnósticos clínicos, virológicos, parasitoscópico y serológico, los estudios

entomológicos, el suministro de los medicamentos, la investigación de los casos, y la aplicación de medidas contra los vectores. Esta capacitación deberá realizarse con periodicidad anual; el personal capacitado deberá ser evaluado. La responsabilidad de estas acciones recae en los responsables estatales y jurisdiccionales o sus equivalentes Institucionales apoyados por el Programa Nacional de Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector.

11.2 A la población. La capacitación de la población para el fomento de la salud, se orienta hacia el autocuidado individual y familiar y la organización de la comunidad, con atención especial al riesgo de infectarse, enfermarse y morir de estas enfermedades. Se lleva a cabo mediante mensajes verbales y escritos, que se entregan en los domicilios, carteles fijos o mural, pláticas a grupos, y a través de los medios masivos de comunicación, con el propósito de motivar, informar, orientar y lograr la participación activa de los individuos y los grupos organizados, para facilitar y apoyar las actividades de vigilancia, prevención y control. La responsabilidad de esta capacitación recae en los responsables estatales y jurisdiccionales o sus equivalentes Institucionales.

12. Investigación

12.1 Fomento. Para el desarrollo de las actividades de prevención y control de las enfermedades causadas por vectores, que establece esta Norma Oficial Mexicana, los organismos del Sector Salud podrán efectuar investigaciones básicas y operativas en aspectos epidemiológicos, entomológicos y mastozoológicos, así como en aspectos operativos, administrativos y socioeconómicos, con particular énfasis en los factores de riesgo y la evaluación.

12.2 Bases. Estas investigaciones deben efectuarse con base en el método científico, y de acuerdo con la Ley General de Salud, que, en materia de investigaciones para la salud, Título Segundo, regula en su artículo trece sobre los aspectos éticos de la investigación en seres humanos, en los que debe prevalecer el criterio de respeto a su dignidad, así como la protección de sus derechos y bienestar.

12.3 Participaciones. Cuando se realicen investigaciones que puedan tener como objetivo modificar o ampliar la presente Norma, será necesario contar con la asesoría y participación directa del Programa Nacional y de instancias como el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, Centro de Investigación del Paludismo, del Centro de Investigaciones de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Instituto Nacional de Salud Pública y del Grupo de Expertos en Insecticidas, para que los resultados puedan ser validados y, según el caso, se disponga de los instrumentos legales que afecten esta Norma.

13. Información

Los datos de las actividades de prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores, se registran simultáneamente a su ejecución, localmente, en los formularios vigentes y, su concentración y presentación, se realiza en los niveles jurisdiccional, estatal y el nacional, a través del SISPA. Los datos relativos a la notificación de casos y las defunciones, se anotan según lo establece la NOM-017-SSA2-1994 para la Vigilancia Epidemiológica.

14. Bibliografía

14.1 Acta Leidensia. Proceedings of the Symposium on Genetic Varation of Malaria Parasites. Vol. 60(1). Leiden, Netherlands. 1991.

14.2 Adak T., U. P. Sharma and V. S. Orlov. 1998. Studies on the *Plasmodium vivax* relapse pattern in Delhi, India. Am. J. Trop. Med. Hig; 59(1) pp. 175-179.

14.3 Africare and the International Eye Foundation-Bob Pond Mass. Distribution of Invermectin: A Handbook for Community Treatment of Onchocerciasis. Washington, D.C. 1991.

14.4 Aguilar, J.F. Parasitología Médica. Guatemala, Guatemala, 1991.

14.5 Agyepong I.A., Aryee B., Dzikunu H., and Manderson L. The malaria manual. TDR/SER/MSR/95.1

14.6 Arredondo-Jiménez J.I. et al. Behaviour of *Anopheles albimanus* in relation to pyretrhoid-treated bednets. Medical and Veterinary Entomology (1997) 11, 87-94.

14.7 Arredondo-Jiménez J.I. y Cols. Efectividad de un insecticida carbamato en rociado intradomiciliar a bajo volumen para el control del paludismo. Salud Pública de México, 35(1):27-38.

14.8 Birn A.E. 1998. Eradication, control or neither? Hookworm vs malaria strategies and Rockefeller Public Health in Mexico. Parassitologia 40:137-147.

14.9 Bown D.N., Frederickson E.C., del Angel G., Méndez J.F. Effects of Bendicarb and Deltamethrin on *Anopheles albimanus* in a Mexican village. Bull PAHO 21(2) 1987.

14.10 Bown D.N., Ríos J.R., del Angel G., Guerrero J.C. and Méndez J.F. Evaluation of chlorphoxim used against *Anopheles albimanus* on the south coast of Mexico. 1. Results of indoor clorphoxim applications and assessment of the methodology employed. Bull PAHO 18(4) 1984.

14.11 Bown D.N., Ríos J.R., del Angel G., Guerrero J.C. and Méndez J.F. Evaluation of chlorphoxim used against *Anopheles albimanus* on the south coast of Mexico. 2. Use of curtain-trap techniques in a villages-scale evaluation trial. Bull PAHO 19(1) 1985.

14.12 Catálogo oficial de plaguicidas de la Comisión Intersectorial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, 1993.

14.13 Center for Disease Control and Prevention. Case definitions for public health surveillance. MMWR, 1990; 39 (RR-13): 10-11.

14.14 Contacos P.G., W.E. Collins G.M. Jeffery, Krotosky W.A. and Howard. Studies on the caracterization of *Plasmodium vivax* strains from Central America. Am. J. Trop. Med. Hig; 21(5) pp. 707-712.

14.15 Christophers, SR. *Aedes aegypti*. The yellow fever mosquito; Its life history, bionomics and structure. Cambridge University Press; 1980.

14.16 Díaz AG, Kourí MG, Guzman L. et al. Cuadro clínico de la fiebre hemorrágica del dengue/Síndrome de choque del dengue en el adulto. Bol. Oficina Sanitaria Panam. 1988;104(6):560-571.

14.17 Dietz VJ, Nielburg P, Gubler DJ, Gómez I, Diagnosis of measles by clinical case definition in dengue-epidemic-areas: implications for measles surveillance and control. Bull World Health Organ. 1992;70(6): 745-750.

14.18 Dirección del Programa Nacional de Enfermedades Transmitidas por Vectores, Coordinación de Vigilancia Epidemiológica: Informes técnicos y de seguimiento sobre la Nueva Estrategia para el control del Paludismo: Tratamiento Focalizado en Oaxaca (1998-2000), Operativos de Emergencias por los Desastres Naturales (1997, 1998 y 1999), Acciones emergentes para el control de Brotes de Dengue y Paludismo (1997, 1998, 1999 y 2000).

14.19 Enfermedades Tropicales en México. Diagnóstico, Tratamiento y Distribución Geográfica. José Luis Valdespino y Cols. Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. INDRE, SSA, agosto de 1994.

14.20 Entomología Médica y Veterinaria. Robert F. Harwood y Cols. Editorial Limusa, 1987.

14.21 Ewald W.P. Evolution of Infectious Disease. Oxford University Press. 1994.

14.22 Fernández de Castro, P.J. Panorama Histórico y Epidemiológico del Paludismo en México. México D.F. 1988.

14.23 Franco Agudelo, S. El Paludismo en América Latina. Universidad de Guadalajara, 1990.

14.24 Fundación Bicentenario de Simón Bolívar. La Escuela de Malariología y Saneamiento Ambiental y la Acción Sanitaria en las Repúblicas Latinoamericanas. Caracas, Venezuela, 1985.

14.25 Garavelli, P.L. and E. Corti. 1992. Chloroquine-resistant *Plasmodium vivax*: the first case in Brazil. Transactions of de Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 86, 128.

14.26 Gómez Dantés Héctor. Monografía sobre la epidemiología del dengue. SSA: México, 1993.

14.27 Goodman, Gilman y Cols. Bases Farmacológicas de la Terapéutica. 18a. Edición. Pergamon Press. 1997

14.28 Gubler D.J, Kuno G. Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever. CAB International 1997.

14.29 Gubler D.J. Dengue and dengue hemorrhagic fever. Clinical Microbiology Reviews, July 1998. P. 480-496.

14.30 Gubler DJ, Dietz VJ, Kuno G, et Al. The 1986 dengue fever outbreak in Puerto Rico: epidemiologic observations. Am. J Trop Med Hyg. 1992.

14.31 Gubler, D.J. Ecology of *Aedes albopictus*. The Johns Hopkins. Univ., CMRT. Annual Report, U.S.A. 1971.

14.32 Guía para la Redacción, Estructuración y Presentación de las Normas Oficiales Mexicanas.

14.33 Guía para la redacción, estructuración y presentación de las Normas Oficiales Mexicanas, SECOFI, 1993.

14.34 Guzmán MG, Kourí GP, Bravo J, et al. Dengue hemorrhagic fever in Cuba 1981: a restrospective seroepidemiologic study. Am J Trop Med Hyg. 1990, 42 (2): 179-184.

14.35 Halstead, S.B., Gómez Dantés H. Dengue; A worlwise problem, A common strategy, Ministery of Health, México, Rockefeller Foundation. México, D.F. 1992.

14.36 Hellen Kelleer International. Comcatting Onchocerciasis. A five-Year Plan, New York, U.S.A., 1992.

14.37 Hernández-Montes O, McCann S, Monroy-Ostria & Barker DC. Identification of Mexican *Leishmania* species by analysis of PCR amplified DNA: Acta Tropica. 71: 139-153 (1998).

14.38 Hernández-Montes O, Monroy-Ostria A & Barker DC. Identification of *Leishmania* especies in Mexico. Trans. Roy. Soc. Trop. Med. And Hyg. 90: 449 (1996).

14.39 Hernández-Montes, O., Monroy- Ostria, A. & Barker, D.C. Use of molecular probes and PCR for detection and typing of Leishmania species in Mexico. J, of Microbiol. Meth, 30: 235 (1997).

14.40 Ibáñez, B.S. Los dípteros hematófagos de México. IV Simposium Nacional de Entomología Médica Veterinaria. México, D.F. 1989.

14.41 Ibragim A. M., F. El Rahaman A. Ali and Mohi Eldin M. Ali. 1992. Assessment If Chloroquine Resistance of *Plasmodium falciparum* in children of Wad Medani (Central Sudan). Journal of Tropical Pediatrics. 38:162-165.

14.42 Institute of Medicine. Malaria: Obstacles and Opportunities. National Academy Press, Washington, D.C. 1991.

14.43 Jenicek Milos, Cleroux Robert. Epidemiología. España 1990.

14.44 Kahl-Martin Colimon. Fundamentos de epidemiología. España, 1990.

14.45 Kaplan JE, Eliason DA, Moore M, et al. Epidemiological investigations of dengue infection in Mexico 1980. Am J. Epidemiol. 1983:117(335-343.

14.46 Keith, P.W. and McAdam, J. New Strategies in Parasitology Frontiers of Infectious Disease. Proceedings of an International Symposium Sponsored By Glaxo Research. Broocket Hall, Herfordshire, G.B., 1989.

14.47 Lagunes, T.A. Manejo de insecticidas piretroides. Colegio de Postgraduados, Chapingo, Texcoco, México, 1988.

14.48 Last-M. Diccionario de Epidemiología. España, 1989.

14.49 Ley de Aguas Nacionales, D.O., 1 de diciembre, 1992.

14.50 Ley Federal sobre Metrología y Normalización (D.O., 10 de junio, 1992).

14.51 Ley General de Salud y Reformas a la misma, Segunda Edición, mayo, 1992.

14.52 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (D.O., 28 de enero, 1998).

14.53 Lineamientos Generales para la prevención y control del tifo. septiembre de 1989.

14.54 Lineamientos para la Operatividad de los Programas de Ricketsiosis en los Estados, Secretaría de Salud. 1998.

14.55 López Antuñano, F. and Schmunis, G.A. Plasmodia of Humans. 1993.

14.56 Manual para el control de las enfermedades transmisibles. Abraham S. Benenson. Publicación Científica número 564, XVI Edición, OPS.

14.57 Martín Tellaeche A. Hallazgo de sesenta y cuatro casos de Tripanosomosis (*Schyzotripanum*) en muestras de sangre tomadas a febriles del área palúdica de México. (Vols. 7 y 8) México. 1976.

14.58 Martín Tellaeche A. Sugerencias para mejorar el control operativo para la Campaña de Lucha Contra la Oncocercosis. Memorias del Simposium Internacional sobre Oncocercosis. Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste. San Cristóbal de las Casas, Chis., 1979.

14.59 Martínez Torres, E. Dengue hemorrágico en niños. Instituto Nacional de Salud. Ministerio de Salud. Colombia, 1990.

14.60 Maurice John. France and Research on Tropical Disease. Francia, 1992.

14.61 Mectizan Product Monography. Merck, Sharp & Dohme. New Jersey, U.S.A. 1988.

14.62 Memorias del Simposium Internacional sobre Oncocercosis. Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste. San Cristóbal de las Casas, Chis., 1979.

14.63 Memorias do Instituto Oswaldo Cruz. Río de Janeiro, Brasil, 1987.

14.64 Méndez-Galván J.F, Estudios de prevalencia del paludismo. Memorias del VI Congreso Nacional de Parasitología. Minatitlán, Veracruz, 1984.

14.65 Méndez-Galván J.F. and Fernández-Cerna E., Editores: Workshop on recent advances in community-based *Aedes aegypti* control: Honduras and México. Mérida, Yucatán, México 1996. Secretaría de Salud de México y Ministerio de Salud Pública de Honduras. (Memorias y material videograbado). Supported by Rockefeller Foundation.

14.66 Méndez-Galván J.F. y Cols. Evaluación de un esquema alternativo de tratamiento para el control del paludismo. Salud Pública de México, 26(6):561-572.

14.67 Méndez-Galván J.F., Montesano-Castellano R. Manual para la vigilancia epidemiológica del dengue, la fiebre hemorrágica del dengue y los mosquitos vectores. México 1994.

14.68 Monroy-Ostria A. & Sánchez-Tejeda G. Molecular Probes and Typing of *Leishmania* species in Mexico. Enviado a Acta Tropica.

14.69 Monroy-Ostria, A., Hernández-Montes, O. & Barker, D.C. Etiology of visceral Leishmaniasis in Mexico. Acta Tropica. (2000). 75: 155-165.

14.70 Monroy-Ostria, Sosa-Cabrera, T. Rivas-Sánchez, B., Ruiz-Tuyu, R., Mendoza-Gonzalea, A:R & Favila-Castillo, L. Seroepidemiological sutides of cutaneous leishmaniasis in the Campeche state of Mexico. Rev. Memorias do Instituto Oswaldo Cruz. 92: 21-26 (1997).

14.71 Morse S.S. Emerging Viruses. Oxford University Press. 1993.

14.72 Mota J., O. Coreño, A. H. Cochrane and C. Ramos. 1996. Prevalence on antibodies to the repeat epitope of the circumsporozoite protein of the *Plasmodium vivax* in San Luis Potosí, Mexico. Archives of Medical Research. 1996. 27 (2): 233-236.

14.73 Murphy G. S., H. B. Purnomo, E.M. Andersen, M.J. Bangs, D.L. Mount, et. al. 1993. Vivax malaria resistant to treatment and prophylaxis with chloroquine. (341) 96-99.

14.74 Nájera J.A. and Hempel J. The burden malaria. WHO/MAL/96.10.

14.75 Nelson, M.J. *Aedes aegypti*: Biología y Ecología. Organización Panamericana de la Salud. Ref: PNSP/86-63. Washington, D.C., 1986.

14.76 Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-SSA2-1999, para la Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector (D.O. 19 de octubre de 1999).

14.77 Norma Técnica No. 25, para la Información Epidemiológica.

14.78 Norma Técnica número 27, para la prevención y control de la oncocercosis en la atención primaria a la salud (Diario Oficial 7 de julio de 1986).

14.79 Norma Técnica número 348, para la prevención y control de la tripanosomosis, en la atención primaria a la salud (D.O.17 de enero 1992).

14.80 Norma Técnica número 350, para la prevención y control del paludismo, en la atención primaria a la salud (D.O. 8 de abril de 1992).

14.81 Norma Técnica número 353, para la prevención y control de leishmaniosis, en la atención primaria a la salud (D.O. 19 de junio de 1992).

14.82 Norma Técnica número 40, para la prevención y control del dengue, en la atención primaria a la salud (D.O. 8 julio de 1986).

14.83 Norma Técnica para la vigilancia epidemiológica del tifo transmitido por piojos. 1989.

14.84 OMS The Leishmaniosis. Control of Tropical Diseases.

14.85 OMS, La lucha antipalúdica como parte de la atención primaria de la salud, Informe de un Grupo de Estudio de la OMS. Serie de Informes Técnicos 712, Ginebra, 1984.

14.86 OMS, La lucha antipalúdica y los objetivos nacionales de salud. Informe de la Séptima Conferencia Asiática sobre Paludismo. Serie de Informes Técnicos, 680, Ginebra, 1982.

14.87 OMS, Manual de Ordenamiento del Medio para la Lucha contra los Mosquitos, con Especial Referencia a los Vectores del Paludismo. Ginebra, 1984.

14.88 OMS, Quimioterapia Práctica del Paludismo. Informe del Grupo Científico de la OMS. Serie de Informes Técnicos, 805, Ginebra, 1993.

14.89 OMS, Técnicas Entomológicas de Campo para la Lucha Antipalúdica. Parte I, Guía del Alumno. Ginebra, 1993.

14.90 OMS, Técnicas Entomológicas de Campo para la Lucha Antipalúdica. Parte II, Guía del Instructor. Ginebra, 1993.

14.91 OMS. 46a. Asamblea Mundial de la Salud. Prevención y Lucha contra el dengue. Informe del Director General, Ginebra, 1993.

14.92 OMS. A.W.A. Brown PH.D. Resistencia de los artrópodos a los insecticidas. Ginebra, 1959.

14.93 OMS. Control de la Enfermedad de Chagas. Informe del Comité de Expertos de la OMS, Serie de Informes Técnicos 811. Ginebra, 1991.

14.94 OMS. Empleo inocuo de insecticidas. 14o. Informe del Comité de Expertos de la OMS. En Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial. Serie de Informes Técnicos 813. Ginebra. 1991.

14.95 OMS. Las Leishmaniosis. Serie de Informes Técnicos, Ginebra, 1984.

14.96 OMS. Lucha Contra las Leishmaniosis. Informe del Comité de Expertos de la OMS. Serie de Informes Técnicos 793. Ginebra, 1990.

14.97 OMS. Métodos químicos de la lucha contra artrópodos, vectores y plagas de importancia para la salud pública. Ginebra. 1984.

14.98 OMS/OPS Epidemiología, diagnóstico, tratamiento y control de las leishmaaniasis en América Latina. Washington, D.C., 1992.

14.99 OMS/OPS Epidemiología, Diagnóstico, Tratamiento y Control de las Leishmaaniasis en América Latina 2a. Versión. Washington, D.C., 1994.

14.100 OPS, Fleming, G. Biología y Ecología de los Vectores de la Malaria en las Américas. Washington, D.C. 1986.

14.101 OPS. Informes Anuales de los Programas de Paludismo en las Américas, de los Años 1989 - 1992. Washington, D.C.

14.102 OPS/OMS A Bibliography of Chagas. Disease (1968-1964) Washington, D.C., 1985.

14.103 OPS/OMS *Aedes albopictus* en las Américas. 99a. Reunión. Grupo de trabajo del Comité Regional OMS., Washington, D.C. 1987.

14.104 OPS/OMS, Conly, G.N. El impacto de la malaria sobre el desarrollo económico: estudio de casos, Publicación Científica 297, Washington, D.C. 1976.

14.105 OPS/OMS. Diagnóstico de Malaria. Publicación Científica 512, Washington, D.C., 1990.

14.106 OPS/OMS. Flebotomos: Vectores de Leishmaniosis en las Américas. Cuaderno de trabajo 33. Washington, D.C. 1989.

14.107 Organización Mundial de la Salud. Comité de Expertos de la OMS en Oncocercosis, Tercer Informe. OMS; Ginebra, 1987 (Serie de Informes Técnicos, 752).

14.108 Organización Mundial de la Salud. Dengue Hemorrágico: Diagnóstico, tratamiento y lucha. Ginebra 1987.

14.109 Organización Mundial de la Salud. Plan Continental de Ampliación e Intensificación del Combate al *Aedes Aegypti*. Washington, 1997.

14.110 Organización Mundial de la Salud. Prevención del dengue y de la fiebre hemorrágica de dengue (Prontuario para dirigentes municipales y comunitarios). Ginebra, 1994.

14.111 Organización Mundial de la Salud. Resistencia de los vectores y reservorios de enfermedades a los plaguicidas. Décimo informe del Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y lucha Antivectorial.

14.112 Organización Mundial de la Salud. Tratamiento de la malaria no complicada y uso de medicamentos antimaláricos para la protección de los viajeros. Informe de la primera reunión oficiosa, Ginebra, 18 al 21 de septiembre de 1995.

14.113 Organización Panamericana de la Salud, Dengue y dengue hemorrágico en las Américas: guías para su prevención y control. Washington, D.C. OPS, Publicación Científica número 548. 1995.

14.114 Organización Panamericana de la Salud. Piojos de Importancia en Salud Pública y su Control. Publicación Científica número 74, Diciembre de 1962.

14.115 Organización Panamericana de la Salud. Seminario Taller Centroamericano sobre Estrategias para la Prevención y Control del Dengue y Dengue Hemorrágico. Washington, 1995.

14.116 Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Plan multinacional estratégico y de acción para la eliminación de la oncocercosis en las Américas. River Blindness Foundation, International Eye Foundation, USAID. Merck, Sharp & Dohme, OPS/OMS. Washington, D.C. 1991.

14.117 Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. Evaluación Oftalmológica de la Oncocercosis en las Américas. OPS/OMS: Antigua Guatemala, Guatemala. 1992 (Memorias del Taller de Evaluación Oftalmológica).

14.118 Ortiz-Quezada F., Méndez-Galván J., Ritchie-Dunham J. Rosado-Muñoz J. Las organizaciones inteligentes en la toma de decisiones en salud: el caso del dengue. Salud Pública de México, Vol. 37, Suplemento 1995.

14.119 Pang, T. Pathogenesis of Dengue Haemorrhagic Fever Towards a more Balance View. Southeast Asian J. Trop. Med. Pub. Health. Vol. 18 número 3. 1987.

14.120 Penilla R.P. et al. Resistance management strategies in malaria vector mosquito control. Baseline data for the large-scale field trial against *Anopheles albimanus*. Medical and Veterinary Entomology (1998) 12. 217-233.

14.121 Plan Nacional de Salud 1998 – 2000.

14.122 Programa Nacional de Prevención y Control del Dengue y Dengue Hemorrágico 1997-1998.

14.123 Programa Nacional de Salud 1995-2000.

14.124 Pukrittayakamee S., S. Vanijanonta, A. Chantra, R. Clemens and N.J. White,1994. Blood stage antimalarial efficacy of primaquine in *Plasmodium vivax* malarie. The Journal infections Diseases. 169:932-5.

14.125 Ramos-Santos, C., Hernández-Montes, O., Sánchez-Tejeda, G. & Monroy-Ostria, A. Visceral leishmaniasis caused by *L. (L)* mexicana in a Mexican patient with HIV infection. Mem. del Instituto O. Cruz. En prensa (2000).

14.126 Reunión Internacional de Enfermedades Transmisibles. Managua, Nicaragua. 1993.

14.127 Rhone Poulenc Santé. Las Leishmaniosis en América Latina. París, Francia. 1992.

14.128 Rigau-Pérez J.G., A.E.E.P.R. Manifestaciones clínicas del dengue hemorrágico en Puerto Rico, 1990-1991. Rev. Panam Salud Pública/Pan Am J Public Health (1(6):435. 1997.

14.129 Rioux, J.A. Lahotte, G. Petter, F. Et. at. Les Leishmaniosses Cutannes du bassin Mediterraneen Occidental. IMEEE, Montpellier, Francia. 1986.

14.130 Ritchie-Dunham, J.L., Méndez-Galván, J.F. Evaluating epidemic intervention policies with systems thinking: A case study of dengue fever in Mexico. System Dynamics Review Vol. 15 número 2 (Summer 1999): 119-138 (John Wiley & Sons, Ltd.)

14.131 Rodríguez M.H., L. González-Cerón, J.E. Hernández, J.A. Nettel, C.Villareal, K.C.Kaine and R.A. Wirtz. Different prevalences of the *Plasmodium vivax* phenotypes VK210 and VK247 associated with the distribution of Anopheles albimanus and Anopheles pseudopunctipennis in Mexico. Am. J. Trop. Med. Hig; 62(1) pp. 122-127.

14.132 Rodríguez-López M.H., Loyola E. E.G., Betanzos-Reyes A.F., Villarreal T. C. Baown D.N. Control focal del paludismo. Gaceta Médica de México, 130(5): 313-319. 1994.

14.133 Sánchez-Tejeda G., Rodríguez N, Monroy-Ostria A. y Cols. Cutaneous Leishmaniasis Caused by Members of *Leishmania braziliensis* complex in Nayarit State of Mexico. Mem. del Instituto O. Cruz. En prensa 2000.

14.134 SARH, SEDUE, SSA, SECOFI (CICOPLAFEST). Catalogo Oficial de Plaguicidas, México. D.F.

14.135 Schuurkamp G.J., P.E. Spicer R.K. Kereu, P.K. Bulungol and K.H. Rieckmann. 1992. in Papua, New Guinea. Transactions of de Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 86,121-122.

14.136 Secretaría de Salud, Coordinación de Vigilancia Epidemiológica. Acciones emergentes de promoción y comunicación. México, 1997.

14.137 Secretaría de Salud, Coordinación de Vigilancia Epidemiológica. Dengue y dengue hemorrágico (Guía práctica para su diagnóstico, tratamiento y manejo). México, 1997.

14.138 Secretaría de Salud, Coordinación de Vigilancia Epidemiológica. Entomología, con énfasis en el control de vectores. Vol. I, México, 1997.

14.139 Secretaría de Salud, Coordinación de Vigilancia Epidemiológica. Entomología, con énfasis en el control de vectores. Vol. II, México, 1997.

14.140 Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Manual de procedimientos de laboratorio para dengue. México, 1997.

14.141 Secretaría de Salud/Organización Panamericana de la Salud. Estrategia y operación del Programa de Eliminación de la Oncocercosis en México. SSA/OPS: 1993 (Documento de trabajo).

14.142 Smoak B. L., R. F. DeFraites, A. J. Magill, K.C. Kain and B. T. Wellde. 1997. *Plasmodium vivax* infection in U.S. Army Troops: Failure of primaquine to prevent relapse in studies from Somalia. Am. J. Trop. Med. Hig; 56(2) pp. 231-234.

14.143 Soberón, A.G. El Paludismo en México. Documento de Trabajo. El Colegio Nacional, México, 1986.

14.144 SSA Programa Nacional de Normalización 1998.

14.145 SSA. La Enfermedad de Chagas. Publicación Técnica del INDRE número 8. 1991.

14.146 SSA. Las Leishmaniosis en especial referencia a México. Publicación Técnica del INDRE número 7. México D.F. 1991.

14.147 SSA. Manual de Toxicología. Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario. México, D.F. 1993.

14.148 SSA/CNEP, Breve Reseña Histórica de la Lucha Antipalúdica en México, México, D.F. 1979.

14.149 SSA/CNEP, Escamilla Gómez, C.A. Un Programa Moderno de Educación Sanitaria, México, 1964.

14.150 SSA/CNEP, Resumen de la Información para la Revisión de las Estrategias de la Campaña para Erradicar el Paludismo en México, México, D.F. 1972.

14.151 SSA/CNEP. Proyecto para la Erradicación del Paludismo en México, México, D.F. 1955.

14.152 SSA/CNEP. Vargas, G.L. y Martínez Palacios, A. Anofelinos Mexicanos, Taxonomía y Distribución. México, D.F. 1956.

14.153 SSA/DGMP-OPS, Informe de la Evaluación Externa del Programa de Prevención y Control del Paludismo, México, 1993.

14.154 SSA/Dirección General de Medicina Preventiva. Historia Natural del Paludismo, Dengue, Oncocercosis, Leishmaniosis y Tripanosomosis Americana.

14.155 SSA/OPS Técnicas de Aplicación de Insecticidas, Manejo y Mantenimiento de Equipos de Aspersión para el Control de Vectores de Paludismo y Dengue. México, D.F. 1993.

14.156 SSA/OPS. Principios de Epidemiología para el Control de la Malaria. México, 1990.

14.157 Susuki Takeshi. Una guía para la enfermedad de Robles (Oncocercosis) en Guatemala, con especial referencia al control del vector. Guatemala, 1993.

14.158 Tellaeche Martín A, Ramírez J., Santos J.I. and Méndez J.F.. Onchocerciasis: Changes in Transmission in Mexico. Annals of Tropical Medicine & Parasitology, Vol. 92, Suplement No. 1, S117-S119 1998.

14.159 Tifus Transmitido por Piojos. Normas y Documentos. Documento Técnico número 2, SSA, junio de 1979.

14.160 Tripanosomosis and Leishmaniosis with Special Reference to Chagas Disease. Ciba Foundation Symposium. Caracas, Venezuela. 1974.

14.161 Vaca M.A. y Cols. Aplicación intradomiciliar de malathion y deltametrina en bajo volumen para el control de *Anopheles sp*. Salud Pública de México 33(5):482, 1991.

14.162 Vallejo Reyes B. Manual: Técnicas de aplicación de insecticidas, manejo y mantenimiento de equipos de aspersión, para el control de vectores de paludismo y dengue. SSA, México, 1995.

14.163 Velasco Castrejón, O. Los agentes etiológicos de las leishmaniosis en México. Presencia de la *L. Braziliensis.* Rev. Latinoamericana de Microbiología. México, D.F. 1989.

14.164 Vigilancia Mundial de las Rickettsiosis: Memorándum de una Reunión de la OMS. Boletín de la Oficina Panamericana, Vol. 177, número 2, Agosto, 1994.

14.165 Villalobos de Chacón, I. Manual de aspectos clínicos y terapeúticos del dengue. Hospital Central. Maracay, Venezuela,1993.

14.166 Villarreal C. et al. Low-volume application by mist-blower compared with conventional compression sprayer treatment of houses with residual pyrethroid to control the malaria vector *Anopheles albimanus* in Mexico. Medical and Veterinary Entomology (1995) 9,187-194.

14.167 WHO Technical Reports Series número 892; WHO Expert Committee on Malaria, Twenthieth Report. Geneve, 2000.

14.168 WHO, A Global Strategy For Malaria Control. Geneve, 1993.

14.169 WHO, Expert Committee on Malaria, Eighteenth Report Technical Report Serie 735. Geneve, 1986.

14.170 WHO, Implementation of the Global Malaria Control Strategy Report of a WHO Study Group on the Implementation of the Global Plan of Action for Malaria Control. Geneva, 1993.

14.171 WHO. Control Technology for the formulation and packing of pesticides. Geneve. 1992.

14.172 WHO. Edited by D.C. Chavasse and H.H. Yap. Chemical methods for the control of vectors and pests of public health importance. WHO/CTD/WHOPES/97.2

14.173 WHO. Guidelines on the use of insecticide-treated mosquito nets, for the prevention and control of malaria in Africa. Trial Edition. CTD/MAL/AFRO/97.4

14.174 WHO. Interin specifications for pesticides used in public health. WHO/CTD/WHOPES/97.7

14.175 WHO. Management on uncomplicated malaria and the use of antimalarial drugs for the protection of travellers. WHO/MAL/96.1075 Rev. 1. 1997

14.176 WHO. Packaged treatment for first line care in cerebral malaria and meningitis. WHO/MAL/97.1083

14.177 WHO. The diagnosis and management of severe and complicated falciparum malaria: Part I Learner's Guide and Part II Tutor's Guide. Trial Edition, August 1996.

14.178 WHO/MAL/98.1084; Malaria Epidemics, Detection and Control Forecasting and Prevention; JA Nájera, RL Kouznetzsov and Delacollette. Malaria Prevention and Control Programme. World Health Organization, Division of Control of Tropical Diseases.1998.

14.179 Winch P.J., Barrientos S.E., Puigserver C.E., Manzano C.L., Lloyd L.S. and Méndez J.F. Variation in *Aedes aegypti* larval Indices over a year period in neighborhood of Merida, Yucatan, Mexico. J.Am. Mosq. Control Assoc. 8(2):193-195. 1992.

14.180 I Conferencia Interamericana para el Control de la Oncocercosis. IACO-91, México y Guatemala, 1991.

14.181 II Conferencia Interamericana para el Control de la Oncocercosis, IACO-92, Quito, Ecuador, 1992.

14.182 III Conferencia Interamericana para el Control de la Oncocercosis, IACO-93, Puerto Ayacucho, Amazonas, Venezuela, 1993.

14.183 IX Conferencia Interamericana para el Control de la Oncocercosis, IACO-98, Puerto Ayacucho, Amazonas, Venezuela, 1998.

15. Concordancia con normas internacionales y mexicanas

Esta Norma Oficial Mexicana es equivalente con los lineamientos y recomendaciones que han emitido y difundido la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.

16. Observancia de la Norma

La vigilancia de la aplicación de esta Norma corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 21 de noviembre de 2000.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, **Roberto Tapia Conyer**.- Rúbrica.

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA

EXTRACTO de Acuerdo de inicio de investigación por prácticas monopólicas relativas en el mercado de telefonía móvil, que publica la Comisión Federal de Competencia, en cumplimiento del artículo 27 del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica (expediente número DE-60-2000).

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Federal de Competencia.

EXTRACTO DE ACUERDO DE INICIO DE INVESTIGACION POR PRACTICAS MONOPOLICAS RELATIVAS EN EL MERCADO DE TELEFONIA MOVIL, QUE PUBLICA LA COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 27 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA.

Por recibida denuncia radicada bajo el expediente número DE-60-2000, por la presunta realización de prácticas monopólicas relativas, consistentes en actos cuyo objeto o efecto es o puede ser desplazar indebidamente del mercado a los agentes económicos denunciantes, impedir sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas, mediante la acción de uno o varios agentes económicos cuyo objeto o efecto directo o indirecto, es o puede ser incrementar los costos u obstaculizar el proceso productivo o reducir la demanda que enfrentan sus competidores.

El mercado que se considera afectado es el mercado de telefonía móvil.

El periodo de la investigación no será inferior a treinta días hábiles, ni excederá de noventa, contado a partir de la publicación del presente Extracto en el **Diario Oficial de la Federación**, mismo que podrá ser ampliado por la Comisión. Los agentes económicos que se consideren afectados por la realización de las prácticas monopólicas investigadas podrán presentar sus denuncias hasta antes del emplazamiento, en su caso, al presunto o presuntos responsables, el cual no podrá realizarse sino después de que concluya el periodo de treinta días señalado. Asimismo, cualquier persona podrá coadyuvar en la investigación.

Con fundamento en el artículo 31 de la Ley Federal de Competencia Económica, la información contenida en el expediente de investigación es estrictamente confidencial. En caso de determinarse una presunta responsabilidad a cargo de algún agente económico, se le emplazará en términos de la fracción I del artículo 33 del referido ordenamiento.

México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre de dos mil.- Así lo acordaron y firman el Presidente de la Comisión Federal de Competencia, **Fernando Sánchez Ugarte**.- Rúbrica.- El Secretario Ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia, **Luis A. Prado Robles**.- Rúbrica.

(R.- 137183)

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 441/93, relativo a la dotación de tierras, promovido por un grupo de campesinos del poblado Santa Efigenia, Municipio de San Ignacio, Sin.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver el juicio agrario número 441/93, que corresponde al expediente administrativo 2611/82, relativo a la solicitud de dotación de tierras, promovida por un grupo de campesinos del poblado denominado "Santa Efigenia", ubicado en el Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa; en cumplimiento a la ejecutoria dictada el cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, en el amparo número 273/98, promovido por Herón Luis Rodríguez Aldaco, en su carácter de apoderado legal de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- El Tribunal Superior Agrario, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, dictó sentencia en el juicio agrario número 441/93, correspondiente al poblado señalado al rubro, conforme a los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO.- Es procedente la dotación de tierras promovida, por campesinos del poblado denominado 'Santa Efigenia', ubicado en el Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.

SEGUNDO.- Es de dotarse y se dota al poblado referido en el punto resolutivo anterior con una superficie total de 1,498-32-90 (mil cuatrocientas noventa y ocho hectáreas, treinta y dos áreas, noventa centiáreas), del predio denominado 'Duranguito', ubicado en el Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, que se tomarán de la siguiente manera: 1,388-51-27 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y una áreas, veintisiete centiáreas) de agostadero, con un 40% de temporal, propiedad de María Felipa de Jesús Guerra de Rodríguez, y 109-81-63 (ciento nueve hectáreas, ochenta y una áreas, sesenta y tres centiáreas) de agostadero, con un 35% de temporal, propiedad de Martha Lilia Palacios Sarabia, para beneficiar a cincuenta y un campesinos cuyos nombres se anotaron en el considerando segundo de esta sentencia, por haber permanecido inexplotadas por más de dos años consecutivos y sin causas justificadas, en términos del artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, aplicado en sentido contrario.

La superficie que se concede deberá localizarse conforme al plano proyecto que para tal efecto se elabore y pasará a ser propiedad del núcleo de población con todas sus accesiones, usos, servidumbres y costumbres; en cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social, la asamblea resolverá de acuerdo con las formalidades y competencia que le confieren los artículos 10 y

56 de la Ley Agraria, debiendo constituir el área de asentamientos humanos, la parcela escolar, la unidad agrícola industrial para la mujer y la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud..."

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, Herón Luis Rodríguez Aldaco en su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando también como actos reclamados, todo lo actuado dentro del expediente relativo al juicio agrario número 441/93, desde la radicación de dicho expediente y particularmente desde el llamamiento a juicio que en forma defectuosa y violatoria de garantías se efectuó mediante edictos a María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, como también los actos tendientes a ejecutar la resolución de veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete.

Del citado amparo, radicado bajo el número 273/98, conoció el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, quien al dictar sentencia el cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, la Justicia de la Unión amparó y protegió a María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, contra los actos reclamados, en virtud de las siguientes consideraciones:

"...OCTAVO. Los conceptos de violación son sustancialmente fundados.

En el caso, el apoderado legal de la agraviada manifiesta que las actuaciones del juicio agrario 441/93, por el que se dota a un grupo de campesinos del poblado Santa Efigenia, del Municipio de San Ignacio, Sinaloa, de una extensión de terreno, son violatorias de garantías, pues se pretende privar a su poderdante del predio de su propiedad sin haber sido legalmente emplazada...

...Es decir, del cúmulo de actuaciones que obran en el sumario a estudio, no se advierte alguna con la que se acredite que se dirigió oficio al casco de la finca de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez; menos aún, existe alguna prueba de que se haya entregado éste o se haya hecho constar alguna circunstancia relacionada con la falta de entrega del oficio.

Además, el artículo 275 de la Ley Federal de Reforma Agraria establece como trámite indispensable, la publicación de la solicitud de dotación en el Periódico Oficial del Estado y en autos no obra alguna constancia que demuestre esto con relación a la quejosa; por tanto, se debe concluir que la impetrante no fue emplazada en los términos que disponía la Ley Federal de Reforma Agraria...

...Tampoco se desatiende que el Tribunal Superior Agrario dispuso la notificación del acuerdo de dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y tres, por 'edictos'; no obstante, el contenido de ese acuerdo y el del edicto respectivo no fue con el fin de emplazar a la quejosa porque en él no se le hizo saber la iniciación del procedimiento dotatorio ni la posibilidad de defensa con la amplitud que permitía la Ley Federal de Reforma Agraria, pues sólo se manda notificar por ese medio el mencionado acuerdo de dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y tres...

...Así, al advertirse que el edicto en mención no se publicó para emplazar a la parte quejosa, es claro que por no existir constancia de que el llamamiento a juicio se verificó conforme a las formalidades previstas en el artículo 275 de la Ley Federal de Reforma Agraria, el procedimiento agrario de dotación, resulta violatorio de la garantía de audiencia que establece el artículo 14 constitucional y que fue la que se estimó vulnerada por la quejosa.

En esas condiciones, lo que procede es conceder en forma lisa y llana el amparo y la protección de la justicia federal solicitados..."

La sentencia dictada en el citado amparo 273/98, fue confirmada en revisión por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito.

TERCERO.- Por acuerdo plenario de primero de febrero del dos mil, el Tribunal Superior Agrario, en cumplimiento a la ejecutoria de cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en el juicio de amparo indirecto 273/98, dejó sin efectos todo lo actuado en el expediente del juicio agrario 441/93, relativo a la dotación de tierras al poblado "Santa Efigenia", Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, desde el auto de radicación hasta la sentencia definitiva emitida por este Tribunal Superior Agrario el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, y sus consecuencias, únicamente por lo que se refiere a la superficie defendida por la quejosa; y a su vez, ordenó turnar el expediente a la Magistratura Ponente, para que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, en su oportunidad, se formulara el proyecto de sentencia correspondiente y se someta a la aprobación del pleno de este Tribunal Superior.

Por acuerdo complementario de trece de marzo del dos mil, y en cumplimiento a la ejecutoria en mención, se tuvo por radicada la acción de dotación de tierras promovida por el poblado en mención, por lo que respecta a la propiedad de la impetrante de garantías, ordenando se notificara este proveído a María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, propietaria del predio denominado "Duranguito", así como al Comité Particular Ejecutivo del núcleo solicitante, por conducto del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 39, con sede en la ciudad de Mazatlán, Estado de Sinaloa.

CUARTO.- También en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, en acuerdo de diecisiete de abril del dos mil, se ordenó girar despacho al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 39, para que en auxilio de este Tribunal Superior Agrario, tomara las medidas pertinentes y notificara personalmente a Herón Luis Rodríguez Aldaco, en su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas de María Felipa de Jesús

Lozano Guerra de Rodríguez, la instauración del procedimiento de dotación de ejido promovida por campesinos del poblado de que se trata, requiriéndolo para que en el término de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la propia notificación, aportara pruebas y formulara los alegatos que a los derechos de su poderdante convinieran, por cuanto a las tierras que defienden, denominadas "Duranguito", con el apercibimiento que de no hacerlo en tiempo y forma, se procedería de conformidad a derecho.

Una vez de haber sido debidamente cumplimentados los acuerdos que anteceden, la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Superior Agrario certificó que el acuerdo de diecisiete de abril de dos mil, fue notificado a María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, el treinta de mayo del mismo año, por lo que el plazo concedido para aportar pruebas y formular alegatos, corría del primero de junio al primero de agosto de esa misma anualidad, en virtud de que el periodo vacacional era del diecisiete al treinta y uno de julio del año en curso.

QUINTO.- Mediante escrito presentado ante este Tribunal el siete de julio del dos mil, Herón Luis Rodríguez Aldaco, en su carácter de apoderado jurídico general de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, ofreció las pruebas que a su derecho convino y manifestó sus alegatos, respecto de la solicitud de dotación de ejido promovida por el núcleo de población denominado "Santa Efigenia", mismas que en el apartado de considerandos de esta resolución serán analizadas y valoradas.

En virtud que de entre las pruebas ofrecidas por Herón Luis Rodríguez Aldaco se encuentra la testimonial, y que asimismo, en escrito presentado por dicha persona ante este Tribunal el treinta y uno de julio de dos mil, y por el cual amplió sus alegatos y ofreció también como prueba de su parte la confesional, por acuerdos de once de julio y siete de agosto de dos mil, se ordenó se girara despacho al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 39, con sede en Mazatlán, Sinaloa, para que en auxilio de las labores de este Tribunal Superior Agrario, proveyera lo necesario a fin de que se realizaran las diligencias necesarias que ameritaran la preparación y desahogo de dichas probanzas; y hecho lo anterior, devolvieran las respectivas constancias para estar en posibilidad de resolver lo procedente en el juicio agrario que nos ocupa.

Por oficio número 1384/2000, de once de septiembre de dos mil, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 39, devolvió a este Tribunal Superior debidamente diligenciado el despacho número DA/172/2000, en el que obran las constancias del desahogo de las pruebas antes referidas.

SEXTO.- En mérito de lo anterior, y a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria en mención, se procede a la revisión del expediente administrativo 441/93, relativo a la solicitud de dotación de tierras del poblado "Santa Efigenia", Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, en donde obran los siguientes antecedentes:

I.- Por escrito de cinco de abril de mil novecientos ochenta y dos, un grupo de campesinos radicados en el poblado "La Chicayota", solicitó al Gobernador del Estado de Sinaloa, dotación de tierras con el nombre de "Santa Efigenia", señalando como fincas afectables las ubicadas dentro del radio legal de afectación y asimismo manifestaron que tenían cerca de dos años viviendo en el predio denominado "El Duranguito". En esta solicitud se propuso como integrantes del Comité Particular Ejecutivo a Manuel Espinoza Luna, Adrián Hernández G. y Benito Rascón Flores, como presidente, secretario y vocal, respectivamente.

II.- La Comisión Agraria Mixta del Estado instauró el expediente el treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y dos, asignándole el número 2611/82, girando los avisos de notificación correspondientes. Esta solicitud se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, el doce de julio del mismo año.

III.- Por oficio número 414/84, de tres de octubre de mil novecientos ochenta y tres, el Delegado Agrario en el Estado de Sinaloa, comisionó a Lorenzo Larrañaga Núñez, para que realizara inspección ocular en los poblados denominados "Santa Efigenia" y "La Chicayota", del Municipio de San Ignacio, Sinaloa, y determinara el número de familias que se encuentran en cada núcleo; comisionado que en su informe de veinte de octubre de ese año, dio a conocer lo siguiente:

"...El 18 de octubre de 1993, me trasladé a los poblados 'Santa Efigenia', y 'La Chicayota', procediendo a investigar el número de familias que se encuentran actualmente viviendo, destacando que en el primer poblado se localizan 35 familias y en el segundo 10 familias...".

A este informe el comisionado acompañó copia de su oficio de comisión, y un documento en el que detalla el número de jefes de familia de cada poblado, así como el tiempo de radicar y el número de personas que integra cada familia.

IV.- Por oficio número 2596, de doce de febrero de mil novecientos ochenta y dos, la Comisión Agraria Mixta encomendó la práctica de trabajos técnicos e informativos al ingeniero Jaime Hugo López Gutiérrez, quien rindió informe el veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, trabajos que no son de tomarse en cuenta en virtud de que en el mismo no se hace referencia alguna del predio propiedad de la quejosa María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez.

V.- Por oficio número 252/34 de diez de abril de 1984, la Secretaría de la Reforma Agraria, a través de la Subsecretaría de Organización y Desarrollo Agrario que coordina el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural en los municipios de Cosalá, Elota y San Ignacio, Estado de Sinaloa, comisionó al ingeniero Jesús Alcaraz Camacho, a efecto de que investigara la superficie que tienen en posesión los campesinos del poblado "Santa Efigenia", comisionado que en su informe de veintiséis de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, dio a conocer que en el poblado "Santa Efigenia", existen cincuenta y un personas con parcela, la parcela escolar y la unidad agrícola industrial para la mujer, en tanto que en el poblado "La Chicayota", existen ocho personas con parcelas.

A su informe el comisionado anexó acta de inspección ocular de trece de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, que contiene la relación de campesinos que están en posesión de las parcelas.

VI.- La Comisión Agraria Mixta por oficio número 1383 de ocho de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, instruyó a Jaime Hugo López Gutiérrez, con el objeto de que se trasladara al poblado solicitante y llevara a cabo trabajos censales y técnicos e informativos, comisionado que rindió su informe el diecinueve de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, en el que se destaca lo siguiente:

"...En virtud de lo anterior, me trasladé al poblado 'La Chicayota', lugar donde radican los presuntos solicitantes de dotación del poblado Santa Efigenia, habiéndolos visitado en varias ocasiones con la finalidad de checar la existencia de los solicitantes, así como su arraigo en el lugar; de lo antes expuesto se deduce que los solicitantes firmantes en la solicitud de ejido, en la actualidad sólo existen 10 solicitantes avecindados en el poblado 'La Chicayota'; y que de 3 veces que fui a investigarlos, siempre encontré diferentes personas, ya que las anteriores se iban a radicar a sus lugares de origen, y el líder que encabeza el movimiento Manuel Espinoza Luna, acarreaba gente de diferentes partes del estado y de la República, con la promesa de que ya tenía el ejido constituido y que les entregaría su parcela; es por eso que para las investigaciones que se realizaban no se notificaba a los interesados con tiempo, para evitar el peregrinar de solicitantes acarreados...".

El comisionado anexó a su informe, escrito de veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, mediante el cual el Presidente Municipal de "San Ignacio", Estado de Sinaloa, hace constar que en el libro de registro y en los archivos a cargo del Ayuntamiento, no existe el poblado "Santa Efigenia", sino que tiene antecedentes que así se le asignó a un grupo de solicitantes de tierra, mismos que tienen su residencia en el poblado "La Chicayota". También acompañó el informe que rindiera el ingeniero Lorenzo Larrañaga Núñez, quien fue comisionado el tres de octubre de mil novecientos ochenta y tres, por el Jefe de la Brigada Prider en los municipios de Cosalá, Elota y San Ignacio, del Estado de Sinaloa, a fin de que investigara la existencia de los poblados "Santa Efigenia" y "La Chicayota", del Municipio de San Ignacio, y mediante inspección ocular que verificó, en su informe de veinte de octubre de ese mismo año, manifiesta que en el poblado "Santa Efigenia", existen treinta y cinco familias y en el último diez familias.

VII.- La Comisión Agraria Mixta, el dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta y seis, emitió dictamen considerando improcedente la acción de dotación de tierras, en virtud de que no se reúne el requisito establecido en el artículo 195 de la Ley Federal de Reforma Agraria, dejando expedito el derecho del grupo peticionario para que previa satisfacción de los presupuestos de procedibilidad, promuevan la acción agraria que corresponde.

El Gobernador del Estado de Sinaloa, no emitió mandamiento.

VIII.- El Delegado Agrario, previo resumen del caso, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, propuso negar la acción de dotación de tierras, en virtud de que no existe el poblado "Santa Efigenia"; y por oficio número VI/25508 de esa misma fecha, remitió el expediente para su estudio y resolución en segunda instancia.

IX.- La Sala Regional del Cuerpo Consultivo Agrario del Noroeste, por oficio número 334 de doce de agosto de mil novecientos ochenta y siete, solicitó al Delegado Agrario en el Estado de Sinaloa, la práctica de trabajos técnicos e informativos al estimar que los practicados con anterioridad presentan discrepancias. En tal virtud, por oficio 60584 de seis de mayo de mil novecientos ochenta y siete, se comisionó a María Eugenia Cruz Pasos, quien rindió su informe el ocho de septiembre del mismo año, del que se desprende en lo que interesa, lo siguiente:

"...TRABAJOS DESARROLLADOS POR LA SUSCRITA.- Con fecha 31 de mayo del presente año, me constituí en el poblado denominado 'LA CHICAYOTA', Km. 1116, Sindicatura de Dimas, del Municipio de San Ignacio, de esa Entidad Federativa, lugar donde tiene su asentamiento urbano el núcleo agrario 'SANTA EFIGENIA', previa convocatoria que fue fijada por la suscrita en los lugares más visibles del lugar de fecha 19 de mayo citando al núcleo peticionario para el día 31 de mayo, con el fin de darles a conocer los trabajos a realizar, así como la instalación de los trabajos censales, por causas ajenas a todos dicha Asamblea no se llevó a cabo, fijando una segunda Convocatoria de fecha 5 de junio, citando para el día 14 del mismo mes y año.

Quiero hacer la aclaración que el procedimiento que procede (sic) al levantar un censo agrario, no fue llevado a cabo por la suscrita en virtud de que el grupo peticionario no tiene registrado el poblado, lo cual

demuestro con constancia proporcionada por el Síndico Municipal de 'DIMAS', Municipio de San Ignacio, de esta Entidad Federativa, aunque también es cierto que sí existe un caserío donde se encuentra enclavado el grupo solicitante o sea un asentamiento urbano y se encuentran divididos por una calle de por medio del poblado 'LA CHICAYOTA KM. 1116'. Ahora bien, me fue proporcionada por parte de los interesados constancia expedida por el Presidente Municipal de San Ignacio, Sinaloa, de fecha 28 de julio del presente año, donde hace constar lo siguiente: "Que el centro de población denominado 'SANTA EFIGENIA', es una comunidad perteneciente a la Comisaría de la 'CHICAYOTA', Sindicatura de Dimas, de esta Municipalidad, la que actualmente cuenta con una población aproximada de 70 habitantes. La constancia proporcionada se anexa al presente informe.

Con relación a los trabajos censales una vez reunidos en la Asamblea convocada, procedí a levantar un censo con las personas que se encontraban presentes en el lugar, obteniéndose el siguiente resultado:

NUMERO TOTAL DE HABITANTES	246
NUMERO TOTAL DE JEFES DE HOGAR	59
NUMERO TOTAL DE CAPACITADOS	96

(Datos de los poblados 'La Chicayota' y 'Santa Efigenia')

...En lo que se refiere a los trabajos técnicos e informativos relacionados en el artículo 286, fracciones II y III de la Ley Federal de Reforma Agraria, con fecha 20 de mayo, se notificó personalmente a los propietarios ubicados dentro del radio legal de 7 kilómetros, haciendo la aclaración que la fecha de la notificación es por que en esas fechas, la suscrita se encontraba realizando trabajos técnicos e informativos complementarios para el poblado 'La Chicayota Km. 1116', y los propietarios investigados fueron los mismos para ambos expedientes.

Previa notificación hecha a los propietarios, con fecha 22 de mayo de 1987, procedimos a realizar las inspecciones oculares a las propiedades ubicadas dentro del radio legal de 7 kilómetros del poblado peticionario, encontrándose todas éstas dentro del predio 'EL DURANGUITO', Sindicatura de 'DIMAS', Municipio de San Ignacio, de esta Entidad Federativa, encontrando la siguiente situación:

LOTE DE TERRENO PROPIEDAD MARIA FELIPA DE JESUS LOZANO GUERRA DE RODRIGUEZ.- Con superficie de 1,388-51-27 Has. de temporal este lote se encuentra enmontado, vegetación alta arbustiva, lo utilizan como agostadero enmontado, se encuentra delimitado por cerco de alambre de púas y postes de madera, cuenta con los siguientes linderos: AL NORTE, Ejido 'TOYHUA Y SUS ANEXOS', al SUR, OCTAVIO GAXIOLA GAXIOLA, MARTIN OSUNA RAMIREZ y propiedad del mismo, OTE. Ejido 'TOYHUA Y ANEXOS', y PTE. FRANCISCA SARABIA DE PALACIOS.- Adquirió mediante escritura pública número 1895, volumen LVIII, de fecha 21 de diciembre de 1978, del Protocolo del Notario Público, Lic. FERNANDO A. ORRANTIA, pasada en la Ciudad de Mazatlán, Sin., se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad de San Ignacio, Sin., bajo la Inscrip. No. 47 del Libro No. 20, Sección I...

...Con lo anterior, se concluye con las inspecciones oculares a las propiedades ubicadas dentro del radio de 7 kilómetros, encontrándose en el mismo, el ejido 'TOYHUA Y ANEXOS', 2da. ampliación de Dimas, N.C.P.E. PIAXTLA DE ABAJO'...".

A este informe la comisionada anexó copias de los oficios de notificación a propietarios de predios; copias de oficios mediante los que solicitó información de estos predios al Registro Público de la Propiedad y de la Oficina de Catastro de San Ignacio, Sinaloa; informes proporcionados por estas autoridades de veinte y veintiocho de mayo de mil novecientos ochenta y siete, respectivamente; constancia del Síndico Municipal de Estación Dimas, de treinta de mayo de mil novecientos ochenta y siete, en la que se manifiesta que no existe ningún poblado con el nombre de "Santa Efigenia"; copias de las actas de inspección ocular, sin fechas selladas por la autoridad municipal del lugar; convocatoria y acta relativa a la reorganización del Comité Particular Ejecutivo; documentos que contienen los datos de campesinos censados; copias simples de escrituras públicas que amparan fracciones de terrenos del predio "El Duranguito".

X.- Por oficio número 86/91 de primero de febrero de mil novecientos noventa y uno, la Delegación Agraria en el Estado de Sinaloa, comisionó a Jesús Alcaraz Camacho, a efecto de que llevara a cabo inspección ocular para determinar la existencia del poblado "Santa Efigenia", al respecto el funcionario en su informe de trece de febrero de mil novecientos noventa y uno, manifestó:

"...Con fecha 6 de febrero de 1991, me trasladé al Municipio de San Ignacio, de esta Entidad Federativa, y en inspección ocular realizada se comprobó que el poblado de 'SANTA EFIGENIA', Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, sí existe, se encuentra ubicado a 15 Km. al oeste de la Sindicatura de DIMAS, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa con un camino de terracería cuyas colindancias son las siguientes norte: camino vecinal al poblado de DIMAS sur; caserío denominado La Chicayota al este; con el ejido Toyhua y anexos al oeste: con la vía del ferrocarril, está integrado por 40 casas habitación se encuentran construidas la mayoría de láminas de cartón, madera y palma que alojan aproximadamente 48 familias, además se pudo constatar que cuenta con una Escuela Primaria Rural de nombre RAFAEL BUELNA TENORIO, de la cual instruye a 30 alumnos que cubre de 1o. al 4o. año,

también cuenta con un Templo (Iglesia) tipo ramada en proyecto de construcción, una casa para las juntas de la comunidad construida de lámina y madera con su terreno propio cercado con poste de madera, también se constató que el poblado de SANTA EFIGENIA se formó desde el año de 1978...".

El comisionado anexó a este informe el acta de inspección ocular levantada el seis de febrero de mil novecientos noventa y uno.

XI.- El Delegado Agrario en el Estado de Sinaloa, por oficio número 60476 de treinta de abril de mil novecientos noventa y dos, comisionó al ingeniero Martín Padilla García, para que realizara trabajos técnicos e informativos complementarios ordenados por el Cuerpo Consultivo Agrario, a través de acuerdo de treinta de enero de mil novecientos noventa y dos. El comisionado en su informe de veinte de junio de mil novecientos noventa y dos, apuntó:

"...INVESTIGACION DE CAPACIDAD AGRARIA.- Se llevó a cabo el día 24 de mayo de 1992, a las 12:00 Hras. previa convocatoria de fecha 11 de mayo de 1992, estando todos los interesados en el lugar acostumbrado para sesionar se dio inicio a la investigación dando como resultado lo siguiente: 17 hombres, 8 mujeres, faltando únicamente los CC. Manuel Hernández Gallardo, que dicen tener una superficie de 1-00-00 (una hectárea) desmontada y la Sra. Juana Gallardo López que tiene una superficie de 2-00-00 (dos hectáreas) desmontadas, estas dos personas no estuvieron presentes en la investigación realizada, pero las autoridades ejidales reconocen sus derechos como miembros activos del grupo 'Santa Efigenia'.

TRABAJOS REALIZADOS POR EL COMISIONADO.- Después de haberme documentado ampliamente de los archivos de esta Delegación, me trasladé al poblado 'Santa Efigenia', Municipio de San Ignacio, entrevistándome con los CC. Ramón Durán Hernández y Reyes Baltazar Coronel, quienes ostentan los cargos de Presidente y Tesorero del núcleo ejidal solicitante ya mencionado, dándoles a conocer el motivo de mi visita al poblado, dándome la anuencia para hacer los trabajos técnicos complementarios, de investigación de capacidad agraria; se procedió a fijar convocatoria extraordinaria por primera vez, el día 11 de mayo de 1992, en los lugares más visibles del poblado, para celebrarse el 24 de mayo del mismo año. Por segunda vez me constituí en el poblado, se pasó a realizar la investigación agraria dando como resultado: 17 hombres y 8 mujeres, haciendo un total de 25 capacitados, faltando únicamente Manuel Hernández Gallardo y Juana Gallardo López, pero se les reconocen sus derechos como ejidatarios. Haciendo un recuento de la cantidad de hectáreas desmontadas que poseen los solicitantes son únicamente 63-00-00 Has., pero según el representante ejidal del poblado, manifestaron (sic) que tenían 300-00-00 Has. abiertas al cultivo, pero fue con la solicitud inicial de dotación de tierras de ejido de 5 de abril de 1992, (sic), de los cuales la mayoría de los solicitantes emigraron a otros lugares para un medio de vida mejor para sus familias; también se anexa plano donde se señala que son los mismos terrenos que solicitan 'Santa Efigenia' como 'La Chicayota Km. 1116'.

También se convocó a celebrar asamblea a los integrantes del grupo denominado 'Chicayota Km. 1116', que fue fijada el mismo día que a los de la 'Santa Efigenia' únicamente con diferencia de horario. Para celebrarse el día 24 de mayo de 1992, notifiqué al grupo de 'La Chicayota Km. 1116' de los trabajos a realizar en el poblado vecino, hacer una investigación de capacidad agraria a 27 campesinos solicitantes de dotación y la posible unificación de los 2 grupos solicitantes para formar una sola acción, pidió la palabra Antonio Naranjo, quien funge como Comisariado Ejidal haciendo saber que no firmaría nada, argumentando que el problema no era de ellos, porque ya estaba por salir la Resolución Presidencial a favor de 'La Chicayota Km. 1116', y que ya se había elaborado un convenio ante la C.N.C. el 8 de diciembre de 1991, donde dice que en forma unánime que las 42 personas capacitadas ya están posesionadas mediante una asamblea y que las personas faltantes se les posesionara donde se localicen terrenos compartidos para cultivo de lo bueno y lo malo, firmando como representación de los núcleos agrarios de común acuerdo, los solicitantes, tanto de 'La Chicayota Km. 1116', como los de la 'Santa Efigenia', haciendo notar que en el acuerdo tomado ante la C.N.C., hay varias anomalías con respecto a las firmas de los grupos apareciendo más un grupo que del otro y repetidamente también se hace notar que Reyes Baltazar Coronel, quien funge como Tesorero me hace saber que efectivamente se hizo un acuerdo de notificación de los 2 grupos, pero era de 27 solicitantes de 'Santa Efigenia' y 26 de 'La Chicayota Km. 1116' para formar un grupo de 54 solicitantes, y una sola acción agraria, pero al comisionado no se le comprobó dicho acuerdo. Se mandó notificación al grupo ejidal 'La Chicayota Km. 1116', para llevar asamblea con la finalidad de hacer que los 2 grupos se unieran, el día 14 de junio de 1992, negándose a recibir dicha notificación el representante del primer núcleo mencionado, por lo cual se procedió a buscar a las autoridades municipales para que dieran fe de los hechos...".

El comisionado anexó a su informe acta de ocho de diciembre de mil novecientos noventa y uno, mediante la que los integrantes de los grupos solicitantes de tierra denominados "La Chicayota" y "Santa Efigenia", pretendieron tramitar conjuntamente el asunto ante la Secretaría de la Reforma Agraria, respetándose la posesión de terrenos que cincuenta y un personas ostentan y que se respetará los terrenos que se encuentran desmontados hasta en tanto el asunto se resuelva en definitiva; también

agregó los documentos relativos a estudios de capacidad agraria y acta relativa a trabajos censales de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y dos.

XII.- El Cuerpo Consultivo Agrario, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y tres, dictaminó que se niega la acción de dotación de tierras, promovida por campesinos del poblado "Santa Efigenia", en virtud de que no se reúne el requisito de capacidad agraria previsto en el artículo 196 fracción II de la Ley Federal de Reforma Agraria aplicado en sentido contrario.

XIII.- Por auto de veinte de abril de mil novecientos noventa y tres, se radicó en este Tribunal Superior Agrario el expediente número 441/93, ordenándose la notificación a los integrantes del Comité Particular Ejecutivo y comunicándolo a la Procuraduría Agraria.

XIV.- El dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y tres, este Tribunal Superior Agrario emitió acuerdo para mejor proveer, para tal caso se giró el despacho número AC/169/93, determinando que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 26, con sede en Culiacán, Sinaloa, llevara a cabo entre otras, la siguiente diligencia: Que investigara la situación real que prevalece en el predio de María de Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, con superficie de 1,388-51-27 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintisiete centiáreas), para precisar la calidad y tipo de explotación de dicho inmueble. De encontrarse inexplotado se levantaría acta circunstanciada, ante dos testigos de asistencia, con la certificación de la autoridad municipal del lugar; notificándose a la propietaria en términos de los artículos 275 y 304 de la Ley Federal de Reforma Agraria, concediéndole un término de cuarenta y cinco días para que presente pruebas y alegue lo que a su derecho convenga.

XV.- El veinte de enero de mil novecientos noventa y cuatro, en cumplimiento al despacho que antecede, el actuario del Tribunal Unitario Agrario, notificó el acuerdo de mérito a Ramón Durán Hernández, Adrián Hernández Gallardo y Martín Hernández Benítez, quienes se ostentaron como integrantes del Comité Particular Ejecutivo.

Asimismo, a través de acta circunstanciada de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, informó que se desconoce el domicilio de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez.

A esta acta acompañó documento de trece de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, mediante el cual el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio, Sinaloa, informó que María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, no tiene su domicilio en esa municipalidad.

El veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, el actuario comisionado levantó acta circunstanciada, en la que manifiesta que se constituyó en las oficinas del Registro Público de la Propiedad del Municipio de San Ignacio, Sinaloa, con el objeto de solicitar aclaración respecto de la inscripción de la propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, en virtud de que en el oficio 12/94, de ocho de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, el Oficial del Registro Público de la Propiedad, afirma que no se encontró registrada propiedad a nombre de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, empero, de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos se sabe que en libro 20, de la sección primera, relativo a documentos públicos, el actuario constató que aparece registrada bajo la inscripción 47 la propiedad de la antes mencionada, anexando a su diligencia copia fotostática de la escritura número 1895, volumen LVIII, de veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, del licenciado Fernando A. Orrantia, Notario Público con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en la que se hace constar que María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, compró a Carlota Ibarra Burgueño viuda de Córdova, la superficie de 1,388-51-26 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintiséis centiáreas).

XVI.- Por escrito presentado el quince de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Ramón Durán Hernández, Adrián Hernández Gallardo y Martín Hernández Benítez, quienes se ostentaron como integrantes del Comité Particular Ejecutivo, presentaron las siguientes pruebas:

a).- Escrito de veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, en el que el Secretario del Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, hace constar que el poblado "Santa Efigenia" sí existe y se encuentra ubicado a una distancia de quince kilómetros de la Sindicatura de Dimas, Municipio de San Ignacio, se compone de cuarenta casas construidas de lámina de cartón, palma y madera, cuenta además con una escuela primaria, un templo y que el poblado se formó desde mil novecientos setenta y ocho.

b).- Escrito de seis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, mediante el que la autoridad municipal de la comunidad denominada Toyhua, San Ignacio, Sinaloa, pretende hacer constar que el grupo solicitante de tierras que nos ocupa está en posesión de una superficie de 388-00-00 (trescientas ochenta y ocho hectáreas) propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez.

c).- Copia simple de escrito de diez de enero de mil novecientos setenta y nueve, mediante el que la Oficina de Recaudación de Rentas del Municipio de San Ignacio, Sinaloa, hace constar que el veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, se realizó el traslado de dominio de la compraventa que llevó a cabo Carlota Burgueño viuda de Córdova, en favor de María Felipa Lozano de Rodríguez, respecto

de un lote con superficie de 1,388-51-26 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintiséis centiáreas).

d).- Copia simple de la escritura pública número 1895, de veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, en la que consta el contrato de compraventa antes mencionado.

e).- Copia simple del plano informativo que muestra las 300-00-00 (trescientas hectáreas) que fueron señaladas como afectables por solicitantes del núcleo "Santa Efigenia" y las proyectadas para el poblado "La Chicayota Km. 1116", y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 1o., 9o. fracción VIII y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO.- En cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, en el juicio de amparo número 273/98, promovido por Herón Luis Rodríguez Aldaco, en su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76 y 80 de la Ley Agraria, el Tribunal Superior Agrario, por acuerdo de primero de febrero de dos mil, dejó sin efectos su sentencia dictada el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, en el expediente del juicio agrario 441/93, relativo a la solicitud de dotación de tierras del poblado de que se trata, únicamente por lo que se refiere a la superficie defendida por la quejosa, por lo que este órgano jurisdiccional, en términos de la ejecutoria de amparo, emite la presente resolución, sólo en lo que fue materia de estudio por el órgano jurisdiccional, de conformidad al primero de los artículos citados, esto es, que se encuentra firme la afectación hecha al predio propiedad de Martha Lilia Palacios Sarabia, con una superficie de 109-81-63 (ciento nueve hectáreas, ochenta y un áreas, sesenta y tres centiáreas) de agostadero, con un 35% de temporal.

TERCERO.- Como se señaló en antecedentes, en vía de cumplimiento de la ejecutoria pronunciada el nueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, en el amparo indirecto 273/98, por acuerdo de diecisiete de abril del dos mil, se ordenó notificar personalmente a Herón Luis Rodríguez Aldaco, en su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, la instauración del procedimiento de dotación de ejido promovido por campesinos del poblado de "Santa Efigenia", Municipio de San Ignacio, Sinaloa, requiriéndolo para que en el término de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la propia notificación, aportara pruebas y formulara los alegatos que a los derechos de su poderdante convinieran, por cuanto hace a las tierras que defienden, denominadas "Duranguito".

En base a los anterior, y estando dentro del término concedido, por escrito presentado ante este Tribunal el siete de julio del dos mil, Herón Luis Rodríguez Aldaco manifestó que dado que su representada y el promovente estaban casados bajo el régimen de sociedad conyugal, ocurría también por su propio derecho a este procedimiento; señalando por otra parte, como alegatos, que el inmueble propiedad de ellos es inafectable, en los términos de la Constitución y la Ley Federal de Reforma Agraria, en atención a que se trata de una pequeña propiedad ganadera en explotación que cuenta con certificado de inafectabilidad ganadera número 207104, expedido el dieciséis de junio de mil novecientos ochenta, según acuerdo publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de veintiuno de mayo de mil novecientos ochenta, inscritos en el Registro Agrario Nacional bajo el número 3710 a foja 191, volumen 195, de veintiséis de junio de ese mismo año; inmueble que en todo tiempo ha estado en explotación, sin que jamás se haya tramitado instancia alguna para dejar sin efectos el mismo. Que el inmueble en cuestión fue adquirido a nombre de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, por la sociedad conyugal que tienen constituida, mediante contrato de compraventa celebrado con Carlota Ibarra Burgueño viuda de Córdova, el veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, mediante escritura pública 1895, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en San Ignacio, Sinaloa, el treinta de enero de mil novecientos setenta y nueve, bajo la inscripción número 47, libro 20, sección I, de documentos públicos. Que durante el año de mil novecientos setenta y nueve, adquirieron ciento nueve cabezas de ganado bovino cebú, que constituyen el pie de cría, habiéndose adquirido hasta el año de mil novecientos ochenta y tres, un total de doscientas treinta y una cabezas de ganado de la misma raza, y que cercaron el inmueble con alambre de púas de cuatro hilos y postes de madera, que también se construyeron cercos internos, corrales de manejo y un baño garrapaticida, se abrieron caminos y brechas a lo largo de los cercos, siendo que desde su adquisición, han mantenido la explotación al cuidado de diversos trabajadores, por lo que en ningún momento se ha abandonado la explotación del rancho, ya que desde su adquisición se ha estado vendiendo ganado y comprando sementales, invirtiendo en mantenimiento de cercos y corrales, habiéndose cubiertos los impuestos prediales y toda clase de cargas fiscales motivadas

por la explotación del rancho en cuestión. También indica que en ninguna de las diligencias relativas a trabajos técnicos e informativos que obran en el expediente, se le dio intervención, habiendo sido practicadas a "sus espaldas", por lo que carecen de todo valor probatorio, y advierte además que en ninguno de dichos estudios se precisa que su predio hubiese estado inexplotado por más de dos años. Por otra parte manifiesta, que dentro del expediente número 415/97, relativo a la solicitud de dotación presentada por el núcleo de población "El Pozole", Municipio de San Ignacio, Sinaloa, en el cual también fue señalado su predio ganadero como afectable, este mismo Tribunal Superior Agrario dictó sentencia el dos de octubre de mil novecientos noventa y siete, en cuyo considerando cuarto declaró inafectable su predio, por tratarse de una pequeña propiedad ganadera en explotación, en base a que dentro del mismo, se practicó un estudio técnico el once de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, en cumplimiento del oficio número 1975 de veintidós de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, girado por la Consultoría adscrita a la Sala Regional del Cuerpo Consultivo Agrario, en el que se constató que su predio se dedica a la ganadería. Que desde el diez de julio de mil novecientos setenta y nueve, la Secretaría de Finanzas del Estado de Sinaloa, otorgó el registro número SI-1215 a favor de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, correspondiéndole el fierro identificado con el mismo número, además que también su representada se encuentra inscrita en la Asociación Ganadera Local de San Ignacio, Sinaloa, desde el seis de abril de mil novecientos setenta y nueve, con el registro número 831/1235/SI-1215, encontrándose hasta la fecha al corriente en el pago de las cuotas de dicha Asociación, teniendo más de veinte años explotando en forma ininterrumpida el inmueble en unión de su esposo y apoderado, estando además registrada como socia bajo el número 633, de la Asociación Ganadera de Criadores de Cebú en la República Mexicana, con fecha de ingreso de treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y uno. Advierte también que la solicitud del núcleo peticionario se inició el cinco de abril de mil novecientos ochenta y dos, y que el certificado de inafectabilidad ganadera mencionado, se expidió el dieciséis de junio de mil novecientos ochenta, siguiéndose explotando su predio hasta la fecha. Considera importante señalar que el núcleo de población peticionario, jamás ha estado en posesión material del inmueble de su propiedad, pues fue hasta la diligencia de toma de posesión practicada en cumplimiento a la sentencia dictada por este Tribunal Superior el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, y que fuera practicada del veintiséis al treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y ocho, que se les dio posesión jurídica y material, pero que ésta no la han tenido en forma plena, pues sólo algunas personas que suponen pertenecen al grupo peticionario, procedieron entrar al predio a cortar madera, y algunos construyeron dos o tres chozas que habitan eventualmente, y que sin embargo, el ganado tanto del promovente como de su esposa, sigue pastando en el predio, sus trabajadores realizan sus labores normales de atención al ganado y mantenimiento general de los cercos.

Para acreditar su dicho, en el mismo escrito aportó pruebas, a las que se les hace el siguiente análisis y valoración.

Con la documental consistente en el recibo número 226354, de seis de abril de mil novecientos setenta y nueve, se acredita que la Tesorería Municipal de San Ignacio, Sinaloa, recibió de María Felipa de Jesús Lozano, la cantidad de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de impuestos con respecto al certificado de residencia como ganadera del citado municipio.

Con el oficio número 019/84 de diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se conoce que el Director de Alimentación Pecuaria de la Secretaría de Alimentos, Productos y Servicios Esenciales, le solicitó a María Felipa de Jesús Lozano que enviara su existencia de ganado en venta y el precio del mismo, para que la citada dependencia a su vez pudiera proponerlo a la persona que lo solicitara, en virtud de que se pretendía establecer una sesión denominada "Bolsa Ganadera", con la intención de ayudar al ganadero a promover sus ventas.

Con el escrito de quince de mayo del dos mil, signado por el Presidente de la Asociación Ganadera Local de San Ignacio, Sinaloa, se conoce que la citada persona manifiesta que María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez es socia activa de dicha asociación, desde el seis de abril de mil novecientos setenta y nueve, con registro número 831/1235/SI-1215, ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Sinaloa, quien en compañía de su esposo, Herón Luis Rodríguez Aldaco, se dedica, posee y cría un hato de aproximadamente doscientas cabezas de ganado bovino de raza cebú, el cual ha pastoreado ininterrumpidamente hasta la fecha, en su rancho de nombre "El Reloz", ubicado en la fracción del lote número 17 del predio rústico "Duranguito", con superficie de 1,388-51-26 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y una áreas, veintiséis centiáreas) (sic), y con fierro de herrar semovientes, registrado a su nombre bajo el número SI-1215 ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Sinaloa; y que su predio cuenta con el certificado de inafectabilidad ganadera número 207104, expedido a nombre de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez y Herón Luis Rodríguez Aldaco, el dieciséis de junio de mil novecientos ochenta.

Con el escrito de doce de julio de mil novecientos noventa y uno, firmado por Luis Peña Farber, quien se dice ser apoderado general para pleitos y cobranzas de Herón Luis Rodríguez Aldaco y María Felipa de

Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, se conoce que pidió al Subprocurador de Justicia del Estado, zona sur, que desalojara a unos invasores de las propiedades de sus representados, y que investigara los hechos atentatorios de sus derechos e intereses hasta su completo esclarecimiento, y que consisten en que la persona de nombre Espectación Rodríguez Sandoval, quien realiza labores de campo y de vigilancia en el predio denominado "Duranguito" o "El Reloz", reportó que al supervisar el ganado y revisar los cercos, observó en diferente ocasiones la incursión en los terrenos de dos o tres individuos que no reconoció como vecinos del lugar, haciendo trabajos de limpia y preparación de tierra, al parecer para sembrarla; y que al llevarse a cabo la investigación solicitada, sólo encontraron un campamento rústico habitado por trabajadores de la obra de la carretera denominada "Costera", quienes señalaron que trabajaban para la constructora denominada "I.C.A.", por lo que se llegó a la conclusión que no existía indicio alguno que en el rancho "El Reloz" estuviera asentado algún grupo de personas con carácter de invasión.

Con la sentencia dictada por este Tribunal Superior Agrario, el dos de octubre de mil novecientos noventa y siete, en el juicio de número 415/97, integrado con motivo de la solicitud de dotación de tierras promovida por un grupo de campesinos del poblado "El Pozole", Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, se llega al conocimiento, en lo que interesa, que mediante oficio número 657 de dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, el Cuerpo Consultivo Agrario solicitó la realización de trabajos complementarios, mismos que fueron practicados el dieciocho de julio de ese mismo año, y en los que se asentó, que en las inspecciones oculares se investigó el lote de terreno de agostadero propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, indicándose que en dicho terreno sólo pasta ganado en la época de lluvias, debido a las condiciones climatológicas que privan en la región, y que se encuentra delimitado por cercos y alambre de púas y postes de madera, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de San Ignacio, Sinaloa, bajo el número 47, del libro 20, sección I. Y que mediante oficio número 1975, de veintidós de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, la Consultoría adscrita a la Sala Regional del Cuerpo Consultivo Agrario, solicitó la realización de trabajos técnicos e informativos complementarios, para mejor proveer, mismos que fueron realizados, rindiéndose el informe correspondiente el once de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, en el que se consigna que el predio propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, con superficie de 1,388-51-27 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y una centiáreas, veintisiete áreas) (sic), ubicado en el predio "Duranguito", Municipio de San Ignacio, se dedica a la ganadería, y que está cercado con alambre de púas de cuatro hilos. Asimismo se conoce que este Tribunal Superior Agrario, en la citada sentencia, señaló que de las actuaciones que obran en el expediente, pequeñas propiedades, entre las que se encuentra la de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, por su naturaleza resultan inafectables en términos de lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria; habiendo sido afectadas para satisfacer las necesidades del citado núcleo de población solicitante, diversas propiedades que en un total suman 458-14-86 (cuatrocientas cincuenta y ocho hectáreas, catorce áreas, ochenta y seis centiáreas), y que corresponden a los predios de Evangelina Palacios Sáinz, Candelario Gárate Noriega y Martín Ozuna Ramírez.

Con la documental consistente en copia certificada del primer testimonio del instrumento público levantado el primero de junio de mil novecientos noventa y ocho, por el notario público titular de la Notaría Pública número 37, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se acredita la personalidad con que actúa en el presente juicio Herón Luis Rodríguez Aldaco, en virtud del poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio y cambiario que le confirió María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez.

Con las certificaciones del Registro Civil que obran a fojas 340, 341 y 342, sólo se acredita que el veintiuno de junio de mil novecientos cuarenta, nació María Felipa de Jesús Lozano Guerra; que Herón Luis Rodríguez Aldaco y María Felipa de Jesús Lozano Guerra contrajeron matrimonio el veintitrés de abril de mil novecientos sesenta y ocho, y que Herón Luis Rodríguez Aldaco nació el diecinueve de agosto de mil novecientos treinta y nueve.

Con la escritura pública levantada el veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, por el notario público del Estado de Sinaloa, con ejercicio en el Municipio de Mazatlán, se acredita que Carlota Ibarra Burgueño viuda de Córdova, vendió a María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez un lote de terreno rústico con superficie de 1,388-51-26 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y una áreas, veintiséis centiáreas), ubicado en la Sindicatura de Dimas, Municipio de San Ignacio, Sinaloa, que constituye fracción del lote número 17 de la división del predio denominado "Duranguito"; y que el citado contrato de compraventa quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de San Ignacio, Sinaloa, el treinta y uno de enero de mil novecientos setenta y nueve, bajo la inscripción número 47, del libro número 20, sección I.

Con la certificación número 483183, del Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Gobierno del Estado de Sinaloa, de quince de mayo del dos mil, se acredita que no se encontró ningún

gravamen constituido sobre el predio denominado "Duranguito", con superficie de 1,388-41-26 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cuarenta y una áreas, veintiséis centiáreas) (sic), propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez.

Con la declaración de impuesto predial rústico municipal, se conoce que María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, el quince de mayo del dos mil, pagó el citado impuesto durante el periodo 1/1999 al 4/2000, respecto a su predio rústico, ubicado en "Estación Dimas", San Ignacio, Sinaloa.

Con la copia certificada del certificado de inafectabilidad ganadera número 207104, expedido el dieciséis de julio de mil novecientos ochenta, se comprueba que el mismo ampara el predio denominado "Duranguito", ubicado en el Municipio de San Ignacio, Sinaloa, copropiedad de María Felipa de Jesús Guerra de Rodríguez y Herón Luis Rodríguez Aldaco, con superficie de 1,487-51-26 (mil cuatrocientas ochenta y siete hectáreas, cincuenta y un áreas, veintiséis centiáreas) de agostadero de buena calidad, de conformidad con el acuerdo de inafectabilidad dictado el dieciocho de abril de mil novecientos ochenta, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el veintiuno de mayo de este mismo año. Asimismo, con la documentación que se anexa al citado certificado de inafectabilidad, consistente en la escritura de veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, antes analizada, y con la que se llegó al conocimiento que María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, compró el terreno rústico con superficie de 1,388-51-26 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintiséis centiáreas), que constituye fracción del lote número 17 de la división del predio denominado "Duranguito"; y con la escritura levantada el veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, ante el notario público del Estado, con ejercicio en el Municipio de Mazatlán, de la que se desprende que Herón Luis Rodríguez Aldaco compró a Ana María Velenzuela Córdova un lote de terreno rústico que es fracción del lote número 7 de la división del predio denominado "Duranguito", ubicado en la Sindicatura de Dimas, Municipio de San Ignacio, Sinaloa, con superficie de 99-00-00 (noventa y nueve hectáreas), se infiere que en dicho certificado de inafectabilidad ganadera se ampararon estas dos propiedades, ya que sumadas las superficies que adquirieron María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez y Herón Luis Rodríguez Aldaco dan un total de 1,487-51-26 (mil cuatrocientas ochenta y siete hectáreas, cincuenta y un áreas, veintiséis centiáreas).

Con el título número 33122, expedido el diez de julio de mil novecientos setenta y nueve, por la Secretaría de Finanzas del Estado de Sinaloa, sólo se acredita que María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, durante el citado año fue propietaria de un fierro para herrar semovientes, y que el citado título quedó registrado bajo el número SI-1215, según solicitud de registro de fierro con el mismo número, correspondiente a la asociación ganadera del Municipio de San Ignacio; lo anterior, en virtud de que en el mismo título señala que sólo sería válido durante el año de su expedición, debiendo revalidarse dentro de los meses de enero y febrero de cada año.

Con los cinco recibos que obran a fojas 371 a 373, expedidos en diversas fechas, por la Asociación Ganadera Local de San Ignacio, Sinaloa, se conocen los pagos realizados por María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez por concepto de cuotas anuales, correspondientes a los años de mil novecientos setenta y nueve, mil novecientos ochenta y uno a mil novecientos ochenta y cuatro, mil novecientos ochenta y ocho a mil novecientos noventa, mil novecientos noventa y dos, mil novecientos noventa y nueve y dos mil.

Con la copia certificada de la constancia expedida en el mes de enero de mil novecientos ochenta y dos, por el presidente y secretario de la Asociación Ganadera de Criadores de Cebú en la República Mexicana, se conoce que María de Jesús, había sido miembro activo de esa asociación desde el tres de julio de mil novecientos ochenta y uno, teniendo como número de socio el 633.

Con los ciento cuarenta y tres certificados de registro de ganado, expedidos por la Asociación Ganadera de Criadores de Cebú en la República Mexicana, con fechas once de agosto de mil novecientos ochenta y uno, nueve de febrero, seis y once de mayo de mil novecientos ochenta y dos, y veinte y veinticuatro de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, se llega al conocimiento que el criador de dicho ganado es María de Jesús Lozano, del rancho "Reloz", ubicado en el Municipio de San Ignacio, Sinaloa.

Con la constancia expedida el diecinueve de junio de dos mil, por el Presidente Municipal Constitucional de San Ignacio, Sinaloa, se llega al conocimiento, que la citada persona manifiesta que María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, según antecedentes que obran en los archivos de esa municipalidad, es propietaria de una fracción del predio rústico "Duranguito", con superficie de 1,388-51-26 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintiséis centiáreas), ubicado en la Sindicatura de Dimas de dicho Municipio, y que en ese lugar tiene establecido, en compañía de su esposo Herón Luis Rodríguez Aldaco, un rancho ganadero donde han mantenido a través de los últimos veinte años, en forma ininterrumpida, su pie de cría con más de ciento cincuenta vientres de ganado bovino en su rancho denominado "El Reloz".

Con la certificación expedida el quince de julio de mil novecientos ochenta y uno, por el síndico propietario de la Sindicatura de Dimas, San Ignacio, se conoce que la citada persona manifestó que los

predios propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez y Héron Luis Rodríguez Aldaco, ubicados en el predio "Duranguito", se encontraron en ese año en plena producción agrícola y ganadera, cercas perimetralmente con cuatro hilos de alambre de púas, con caminos de acceso, casas y aperos de labranza, ganado vacuno y en plena posesión física y jurídica de sus propietarios.

Con el escrito signado por el Síndico Municipal de Estación Dimas, San Ignacio, Sinaloa, se conoce que dicha persona manifiesta que el quince de junio de mil novecientos noventa y ocho, se presentó ante él, el licenciado Eduardo Escutia Zúñiga, en representación de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, y que una vez de haber acreditado una propiedad con escritura número 1895, de veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, y exhibir una fe notarial respecto de un terreno rústico con superficie de 1,388-00-00 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas), ubicada dentro del predio "Duranguito", le solicitó que lo acompañara al citado lugar, siendo que una vez de haberse presentado en el mismo, observó "un inmenso"" terreno cercado a su alrededor con instante de madera de alambre de púas, fraccionado en su interior con cercos del mismo material; que asimismo se encontraron dentro de dichos terrenos varias cabezas de ganado pastoreando así como un baño garrapaticida y dos trabajadores haciendo las labores del campo, de nombres Reynaldo Torres Pérez y Espectación Rodríguez Sandoval, quienes manifestaron al Síndico Municipal que el primero de ellos tiene más de tres años de trabajar en la citada propiedad, y que el segundo lo hace desde el año de mil novecientos ochenta y dos.

Con las treinta y un facturas que obran a fojas 521 a 552, se conoce, que María Felipa de Jesús Lozano y sucesores realizaron compra de ganado en los años de mil novecientos setenta y ocho a mil novecientos ochenta y tres, a la Compañía Ganadera "Las Cabras" S. de R.L., Sergio Escutia Monroy, Corrales del Sur, S. de R.L., Héctor Escutia Monroy, Sergio Escutia Zúñiga, Héctor Escutia Castro y Angelina Monroy Ruiz.

Con las facturas expedidas por "Metalek", S.A. de C.V., el veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y uno, sólo se llega al conocimiento que el licenciado Herón Rodríguez, compró alambre de púas de treinta y cuatro kilogramos y grapa galvanizada.

Con las catorce facturas que obran a fojas 554 a 569 y con la guía de tránsito comercial número 833379 de la Asociación Ganadera Local de San Ignacio, de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, expedida el seis de junio de mil novecientos ochenta y cinco, y en la que se aparece como vendedora María de Jesús Lozano de Rodríguez, "Ganadería" Estación Dimas, San Ignacio, Sinaloa, y el "Rancho El Reloz", Ganadería-Agricultura-Silvicultura, licenciado Herón L. Rodríguez Aldaco, han llevado a cabo diversas ventas de ganado a diversas personas, durante los años de mil novecientos ochenta y cinco, mil novecientos noventa, mil novecientos noventa y uno, mil novecientos noventa y tres, mil novecientos noventa y ocho, mil novecientos noventa y nueve y dos mil.

Con la constancia expedida el seis de junio de mil novecientos ochenta y cinco, por la Inspección de Ganadería de la Asociación Ganadera Local de San Ignacio, Sinaloa, se conoce que en el predio propiedad de Herón Rodríguez, se encontró un baño garrapaticida y cien cabezas de ganado bovino bañadas.

Con los contratos individuales de trabajo por tiempo indeterminado, celebrados el dos de mayo de mil novecientos noventa y cuatro y quince de marzo de mil novecientos noventa y siete, se llega al conocimiento que Asención Rodríguez Sandoval y Reynaldo Torres Pérez, fueron contratados, respectivamente, en las fechas señaladas como trabajadores del licenciado Herón L. Rodríguez Aldaco, en su carácter de propietario del rancho ganadero "El Reloz", para realizar trabajos de campo en el citado rancho.

Las probanzas anteriormente analizadas tienen valor probatorio con fundamento en los artículos 129, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

La testimonial de Raymundo Munguía Chávez, Manuel Astorga Medina, Vidal Osuna Osuna y Reynaldo Torres Pérez, tiene valor probatorio, con fundamento en los artículos 197 y 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en virtud de que dichos testigos convinieron en lo esencial al declarar que conocen a María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez y a Herón Luis Rodríguez Aldaco; que conocen el rancho "El Reloz", ubicado en el predio "Duranguito" de la Sindicatura de Dimas, Municipio de San Ignacio, Sinaloa, que el citado rancho tiene una superficie de 1,388-51-26 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintiséis centiáreas) y el cual desde hace veinte años se ha explotado para la cría de ganado.

La confesional de los integrantes del Comité Particular Ejecutivo del poblado "Santa Efigenia", no es de tomarse en consideración atento a lo dispuesto por los artículos 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en virtud que lo manifestado por las citadas personas en nada los perjudica.

CUARTO.- Teniendo en consideración que con ninguna de las constancias que obran en los autos del expediente en estudio, como lo son, los trabajos a que se hace referencia en el apartado de antecedentes de esta sentencia, se desprenda que el predio que defienden a María Felipa de Jesús Lozano Guerra de

Rodríguez y Herón Luis Rodríguez Aldaco, se encuentre dentro de las hipótesis señaladas por la Ley Federal de Reforma Agraria para que pueda ser afectado, sino que por el contrario con el informe rendido el ocho de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, por María Eugenia Cruz Pasos, se conoce que el lote de terreno propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, con superficie de 1,388-51-27 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintisiete centiáreas), se encontró utilizado como agostado, delimitado con cerco de alambre de púas y postes de madera; que asimismo con las pruebas aportadas por Herón Luis Rodríguez Aldaco en su carácter de apoderado legal de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, se acredita que el predio de referencia, denominado "Duranguito" o "Rancho el Reloz", se ha dedicado constantemente a la explotación de ganado mayor, e incluso, con la documental consistente en la sentencia dictada por este Tribunal Superior Agrario, el dos de octubre de mil novecientos noventa y siete, en el juicio agrario número 415/97, integrado con motivo de la solicitud de dotación de tierras promovida por un grupo de campesinos del poblado denominado "El Pozole", Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, se conoce que durante la realización de los trabajos técnicos e informativos, particularmente de los llevados a cabo el dieciocho de julio de mil novecientos ochenta y ocho, se indicó que el predio propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, se dedica para pastar ganado sólo en la época de lluvias, debido a las condiciones climatológicas que privan en la región, habiéndose encontrado delimitado por cerco de alambres de púas y postes de madera; y con el informe de once de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, se desprende que el predio propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, con superficie de 1,388-51-27 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintisiete centiáreas), se dedica a la ganadería, siendo que por lo anterior, el predio de que se trata resultó inafectable para satisfacer las necesidades agrarias del poblado mencionado.

Además de lo anterior, al estar acreditado que María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez es propietaria del predio en mención, adquirido el veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, por compra hecha a Carlota Ibarra Burgueño viuda de Córdova, es decir, antes de la fecha de la instauración y publicación de la solicitud de dotación de tierras hecha por el núcleo de población de que se trata; que dicho predio, conjuntamente con el de la propiedad de Herón Luis Rodríguez Aldaco y que sumados hacen una superficie total de 1,487-51-26 (mil cuatrocientas ochenta y siete hectáreas, cincuenta y un áreas, veintiséis centiáreas) de agostadero de buena calidad, se encuentra amparado con el certificado de inafectabilidad ganadera número 207104, expedido el dieciséis de junio de mil novecientos ochenta, de conformidad on el acuerdo de inafectabilidad dictado el dieciocho de abril de mil novecientos ochenta, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de veintiuno de mayo de ese mismo año; que asimismo no existe causal alguna por la cual pudiera declararse la nulidad y cancelación de dicho acuerdo y certificado de inafectabilidad, por no encontrarse en ninguna de las hipótesis a que hace referencia el artículo 418 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en virtud de que la superficie que ampara el citado certificado de inafectabilidad ganadera no rebasa la superficie señalada como máximo inafectable, de acuerdo con las equivalencias del diverso artículo 250 de la misma ley, ya que inclusive, del estudio técnico practicado en el año de mil novecientos noventa y cuatro, donde se precisa la condición y tipo de explotación de los recursos naturales realizados por la Comisión Técnica Consultiva de Coeficientes de Agostadero dependiente de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en el predio propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, con una superficie de 1,388-51-27 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintisiete centiáreas), se conoce que su coeficiente de agostadero es de 6.26 (seis punto veintiséis hectáreas) por unidad animal, que multiplicadas por quinientos que serían las cabezas de ganado mayor que no deben de exceder para su manutención en una pequeña propiedad, como así lo dispone la fracción IV del artículo 249 de la Ley Federal de Reforma Agraria, dan un total de 3,130-00-00 (tres mil ciento treinta hectáreas), con lo que precisamente se concluye que dicho predio no rebasa la pequeña propiedad inafectable.

Por otra parte, y como ya se mencionó, con ninguna de las constancias que obran en el expediente en estudio, se puede advertir que el predio en cita no haya sido explotado durante dos años consecutivos, como tampoco obra constancia alguna de que el mismo se haya dedicado a un fin distinto del señalado en el certificado.

En virtud de las apuntadas consideraciones, este Tribunal Superior Agrario llega a la conclusión que conforme a los artículos 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, el predio propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, con superficie de 1,388-51-27 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintisiete centiáreas), resulta inafectable para satisfacer las necesidades agrarias del núcleo de población denominado "Santa Efigenia", Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 43 y 189 de la Ley Agraria; 1o., 7o. y la fracción II de cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; 76 y 80 de la Ley de Amparo, y en

cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, en el amparo número 273/98, promovido por Herón Luis Rodríguez Aldaco en su carácter de apoderado legal de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, se

RESUELVE:

PRIMERO.- Es inafectable el predio denominado "Duranguito", ubicado en el Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, con superficie de 1,388-51-27 (mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, cincuenta y un áreas, veintisiete centiáreas), propiedad de María Felipa de Jesús Lozano Guerra de Rodríguez, atento en lo dispuesto por los artículos 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

SEGUNDO.- En consecuencia, es de negarse y se niega la dotación de ejido promovida por campesinos del poblado denominado "Santa Efigenia", Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, sólo por cuanto hace al predio señalado en el punto resolutivo que antecede, que fue materia de estudio constitucional, quedando subsistente la sentencia dictada por este Tribunal Superior Agrario el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, en lo que no fue materia de amparo.

TERCERO.- Publíquense: esta resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa; los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscríbase en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y procédase a hacer la cancelación respectiva; asimismo inscríbase en el Registro Agrario Nacional el que deberá expedir los certificados de derechos correspondientes, de acuerdo a las normas aplicables y conforme a lo resuelto en esta sentencia.

CUARTO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Sinaloa, a la Procuraduría Agraria y a la Secretaría de la Reforma Agraria; ejecútese, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.

QUINTO.- Comuníquese al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada el cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en el juicio de amparo 273/98.

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario, firman los Magistrados que lo integran, ante la Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a veinte de octubre de dos mil.- El Magistrado Presidente, **Luis Octavio Porte Petit Moreno**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Rodolfo Veloz Bañuelos**, **Marco Vinicio Martínez Guerrero**, **Luis Angel López Escutia**, **Ricardo García Villalobos Gálvez**.- Rúbricas.- La Secretaria General de Acuerdos, **Claudia Dinorah Velázquez González**.- Rúbrica.

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 853/93, relativo a la dotación de tierras, promovido por campesinos del poblado El Aguaje, Municipio de San Felipe, Gto.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver en cumplimiento de la ejecutoria dictada en el expediente D.A. 2415/98, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el ocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho, en el Juicio Agrario número 853/93, relativo a la acción de dotación de tierras, solicitada por campesinos del poblado "El Aguaje", Municipio de San Felipe, Estado de Guanajuato, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Mediante escrito de veintiuno de enero de mil novecientos treinta y siete, un grupo de campesinos del poblado de que se trata solicitó al Gobernador del Estado, dotación de tierras, señalando como finca de posible afectación, la denominada "El Aguaje", ubicada dentro del radio legal de afectación del grupo gestor.

SEGUNDO.- La Comisión Agraria Mixta, el veintiséis de febrero de mil novecientos treinta y siete, instauró el expediente respectivo bajo el número 1506, publicándose la solicitud en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veintisiete de mayo de mil novecientos treinta y siete.

TERCERO.- El Comité Particular Ejecutivo quedó integrado por J. Juan Rodríguez, Ricardo Chávez y Leobardo Chávez, como presidente, secretario y vocal, respectivamente, de conformidad con la propuesta realizada en la solicitud por los propios campesinos.

Por lo que respecta a las notificaciones a los propietarios de los predios enclavados dentro del radio legal correspondiente, fue realizada el diecisiete de abril de mil novecientos cincuenta y tres.

CUARTO.- La Comisión Agraria Mixta, mediante oficio 195 del veintiuno de enero de mil novecientos cincuenta y tres, comisionó a personal de su adscripción para realizar trabajos censales, el informe correspondiente se rindió el treinta de abril del mismo año, del que se desprende que existen 45 (cuarenta y cinco) habitantes y un total de 17 (diecisiete) capacitados.

Por lo que respecta a los trabajos técnicos e informativos, no fueron realizados en virtud de que, al practicarse la diligencia censal, solamente resultaron 17 (diecisiete) habitantes con capacidad en materia agraria.

QUINTO.- La Comisión Agraria Mixta, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres, aprobó dictamen en sentido negativo, en virtud de que el grupo peticionario carecía de capacidad colectiva.

Por su parte el Gobernador del Estado, no emitió mandamiento alguno, en tanto que el Delegado Agrario en la entidad federativa, el diecinueve de abril de mil novecientos cincuenta y seis, formuló su opinión proponiendo negar la acción agraria por falta de capacidad del grupo gestor.

SEXTO.- En sesión plenaria del cuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve, el Cuerpo Consultivo Agrario aprobó acuerdo mediante el cual se ordena la realización de una nueva diligencia censal con el objeto de demostrar la capacidad jurídica del núcleo gestor.

Del informe rendido el veinticuatro de noviembre de mil novecientos setenta, se conoce que existe en el poblado peticionario un total de 162 (ciento sesenta y dos) habitantes de los cuales 46 (cuarenta y seis) son capacitados en materia agraria.

SEPTIMO.- La Delegación Agraria en el Estado, el veintiséis de febrero de mil novecientos setenta y uno, mediante oficio 1526, comisionó personal para que realizara trabajos técnicos complementarios y del informe rendido el quince de noviembre del mismo año, se conoce que dentro del radio legal correspondiente se localizan los siguientes predios:

"El Aguaje", que perteneció originalmente a María Santos Flores viuda de Lara, la que al morir dejó como heredero a José Luis Gutiérrez y como legatarias a Secundina Flores de Martínez, Jacinta viuda de Martínez y Josefa Martínez, de conformidad con la inscripción 178, del tomo 9, del primero de noviembre de mil novecientos veintisiete, a fojas de la 46 a la 50, del Registro Público de la Propiedad, con 995-00-00 (novecientas noventa y cinco hectáreas). Posteriormente, en el año de mil novecientos treinta y tres, José Luis Gutiérrez fraccionó este terreno en nueve lotes que fueron vendidos a Tomás, Pedro y Miguel Bárcenas, contando cada uno con certificado de inafectabilidad agrícola.

Asimismo, dentro del radio legal investigado existen varias congregaciones integradas por campesinos que cuentan con superficies que fluctúan de entre 1-00-00 (una hectárea) y 100-00-00 (cien hectáreas), que por su calidad de tierras y régimen de explotación al que están dedicadas no rebasan los límites de la pequeña propiedad, señalando las siguientes: "Los Cedros", "Galeana", "Las Caleras", "Rancho Nuevo", "La Virgen", "El Cabrito", "La Chica", "Las Pilas", "La Capellanía".

Predio "La Obra", que perteneció inicialmente a la sucesión de Puente viuda de Espinoza, con una superficie de 801-00-00 (ochocientas una hectáreas) y posteriormente el once de abril de mil novecientos veinticinco, mediante resolución emitida en juicio intestamentario pasó a propiedad de Leonila, Rafaela y Avelina Espinoza Puente, registrándose bajo las partidas 111, 112 y 113 del tomo VII del año de mil novecientos veinticinco, del Registro Público de la Propiedad, quedando fraccionada de la siguiente forma: 251-99-08 (doscientas cincuenta y una hectáreas, noventa y nueve áreas, ocho centiáreas) a Leonila Espinoza Puente; 251-99-08 (doscientas cincuenta y una hectáreas, noventa y nueve áreas, ocho centiáreas) a Rafaela Espinoza Puente; y 297-01-86 (doscientas noventa y siete hectáreas, una área, ochenta y seis centiáreas) a Avelina Espinoza Puente, posteriormente estos terrenos fueron fraccionados a diversas personas.

Predio "El Carrizal", con una superficie de 685-47-00 (seiscientas ochenta y cinco hectáreas, cuarenta y siete áreas) de terrenos de temporal, propiedad original de Gregorio Gómez, quien el diez de enero de mil novecientos treinta, vendió a Petra Mata de Manteca, quien a su vez fraccionó este predio en cinco lotes en los años de mil novecientos cuarenta y cinco, y mil novecientos cuarenta y siete, vendiéndolos a J. Trinidad Manteca, Javier Vizuet Cedillo, J. Jesús Manteca, María Elena, Horacio, Manuel, Jorge y Luis Manteca Martínez, María de los Angeles Ortiz viuda de Manteca y Ernesto Manteca Ortiz.

Predio "El Jaralillo", propiedad de María Soledad Sánchez viuda de Bueno, con una superficie de 356-90-00 (trescientas cincuenta y seis hectáreas, noventa áreas), que fue fraccionado en tres lotes y vendido a Alejandra Méndez y Pedro Méndez Bueno contando cada una de estas fracciones con certificado de inafectabilidad agrícola.

Predio "San Antonio de los Alpes", dividido en catorce fracciones amparadas todas con certificado de inafectabilidad agrícola desde el año de mil novecientos cuarenta y nueve, de la siguiente forma: once lotes de 108-63-44 (ciento ocho hectáreas, sesenta y tres áreas, cuarenta y cuatro centiáreas) y tres lotes de 160-00-00 (ciento sesenta hectáreas).

OCTAVO.- La Dirección General de Inafectabilidad Agrícola y Ganadera, hoy dependiente de la Dirección General de Tenencia de la Tierra, instauró el procedimiento tendente a declarar la nulidad de fraccionamientos de propiedades afectables, el veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y dos, en relación con los predios denominados "El Carrizal", "El Jaralillo", "San Antonio de los Alpes", "Trojes de Aguirre", "La Obra", "El Aguaje" y "Los Remedios", así como la nulidad de los Acuerdos Presidenciales de

inafectabilidad de origen y en consecuencia de la cancelación de los certificados correspondientes que amparaban dichos predios.

Mediante oficios números 8632, 8633, 8634, 8635, 8656 y del 8659 al 8691, del veintinueve de septiembre de mil novecientos setenta y dos, del 12921 al 12938 del veinticuatro de noviembre del mismo año, se notificó a Alejandro Méndez Bueno, Francisco Alfonso Mayers, Pedro Méndez Bueno, Benjamín García Bueno, Saturnino García Bueno, Alicia Marina González, Amalia García Hernández, Elvira García Burgos, Eloy Marina, María Teresa García Haces, Martha Marina González, José Marina González, Julio García Hernández, Jesús García Hernández, María de los Angeles Alday Díaz, Josefina Rodríguez Herrera, Luciano Rodríguez, Francisco Garibay, María Concepción Garibay, Rosendo González, David Chávez, Maclovia Fernández, Josefina Guzmán de Sánchez, Flaviano y Sixto Munguía, José Zapién Orozco, Lidia del Carmen viuda de Díaz Infante, Roberta, María de Lourdes y Aurora Díaz Infante, sucesión de Javier Vizuet, J. Trinidad Manteca, J. Jesús Manteca, María Elena, Horacio, José Manuel y Luis Manteca, María de los Angeles Ortiz Manteca, Ernesto Manteca Ortiz, Vicente Legambre, Gonzalo Chávez Cruz, Jesús Díaz Aguirre, J. Natividad Rodríguez, J. Ramón Rodríguez Martínez, Jesús Bueno, Rafaela Espinoza Puente, Cipriano Espinoza, Esteban Bueno, Vicente Calvillo, J. Jesús, Luis, María Otilia, María del Refugio, José Luis, Salvador, Alicia y María Teresa Aguiñaga Espinoza, Miguel Luna Aguiñaga, Felipe Núñez Gasca, Emilio Pacheco Cortés, Isabel Avila Rojas y Juan Amézquita Rodríguez, de la iniciación de dicho procedimiento concediéndoles un plazo de treinta días para que rindieran pruebas y formularan alegatos en su defensa.

NOVENO.- Con escritos del seis, siete, ocho, diez, quince, dieciséis, veintiuno, veintidós, veinticuatro y veinticinco de noviembre; once, veintiuno y veintiséis de diciembre de mil novecientos setenta y dos; doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, acudieron al procedimiento de referencia las siguientes personas: Julián García Hernández, Alejandra Méndez Bueno, Francisco Alfonso Mayer Sánchez y Pedro Méndez Bueno, Amalia García Hernández, Benjamín García Hernández, José Trinidad Manteca Mata, Javier Marco Antonio Vizuet, Salvador Manteca Ortiz, María Ortiz viuda de Manteca Mata, Jesús Manteca, Ernesto Manteca Ortiz, Rosa Martha Chávez, Alicia Díaz Infante, Martha Cruz de Chávez, Jesús María Aguirre García, Jesús Vaquera, Gerardo Aguirre Zúñiga, Catalina García viuda de Aguirre, Zenaida Chávez Orozco, Guadalupe Chávez de Teacher, Gonzalo Chávez Cruz, Saturnino García Bueno, Maclovia Fernández de Rodríguez, Fernando Rodríguez, Félix Rodríguez en representación de Luciano Rodríguez, Flaviano y Sixto Munguía, Olalla de Jesús Díaz Infante Hernández, Lidia Hernández viuda de Infante, María de Lourdes, Olivia del Refugio, Elvira, Aurea y Lidia del Carmen Díaz Infante, Eva Mercedes, Roberta, Alfonso y José Dolores Díaz Infante, Pedro Alejandri R. en representación de María Teresa Burgos de Haces, María de los Angeles Alday, Esteban Bueno Vázquez, Eufrosina Pacheco en representación de Emilio Pacheco Cortez, Vicente Calvillo Sánchez en representación de Elvira García Burgos, Amalia, Julián y Benjamín García Hernández y María de los Angeles Alday, presentando alegatos que convenían a sus intereses; además mediante escrito del diez de noviembre de mil novecientos setenta y tres, comparecieron al procedimiento Saturnino García Bueno, Alejandro Méndez Bueno, Francisco Alfonso Mayer Sánchez y Pedro Méndez Bueno.

El catorce de junio de mil novecientos setenta y cuatro, la Dirección General de Inafectabilidad Agrícola y Ganadera emitió su dictamen en el cual declara procedente la nulidad de los certificados de inafectabilidad agrícola números 183052, 183053,183054, 33795, 33793, 33794, 35500, 35501, 35502, 35504, 35503, 35505, 35511, 53316, 53317, 53318, 59631, 59634, 59632, 59633 y 59746, que amparan las fracciones en que se dividieron los predios denominados "El Jaralillo", "San Antonio de los Alpes" y "El Aguaje". Considerando que no es procedente declarar la nulidad del fraccionamiento realizado en los predios "El Aguaje", "Trojes de Aguirre", y "El Jaralillo", declara además la nulidad del fraccionamiento realizado en los predios "El Carrizal" y "La Obra", por haberse efectuado en forma ilegal de acuerdo a lo establecido en la fracción primera del artículo 210 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

DECIMO.- El catorce de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, el Cuerpo Consultivo Agrario acordó declarar improcedente la presente acción agraria por falta de capacidad colectiva del núcleo de población solicitante.

UNDECIMO.- Mediante escrito 641, del treinta de septiembre de mil novecientos ochenta, el grupo peticionario se inconformó con el acuerdo aprobado por el Cuerpo Consultivo Agrario citado en el párrafo que precede, argumentando que el núcleo gestor sí tiene capacidad jurídica; ante lo cual el dieciocho de agosto de mil novecientos ochenta y dos, el citado Cuerpo Colegiado ordenó a la Delegación Agraria en la entidad la realización de trabajos censales en el poblado de que se trata, así como trabajos técnicos complementarios dentro del radio legal del núcleo gestor.

DUODECIMO.- En cumplimiento al acuerdo anterior, la Delegación Agraria en el Estado comisionó personal y del informe rendido el diez de febrero y el cuatro de julio de mil novecientos ochenta y tres, se conoce que en el poblado peticionario existen 305 (trescientos cinco) habitantes, de los cuales 79 (setenta y nueve) son capacitados en materia agraria.

En relación con el predio denominado "El Aguaje" el comisionado informa que fue propiedad de María Santos Flores viuda de Lara, y que posteriormente pasó a ser propiedad de José Luis Gutiérrez, según hijuela expedida a su nombre, registrada el primero de noviembre de mil novecientos veintisiete en el Registro Público de la Propiedad. Esta finca fue dividida en nueve lotes quedando integrada de la siguiente manera:

Lote 1, denominado "El Potrerillo", adquirido por Tomás Bárcenas Barroso, el veintinueve de septiembre de mil novecientos treinta y tres, con una superficie de 161-87-10 (ciento sesenta y una hectáreas, ochenta y siete áreas, diez centiáreas) de las cuales 80-00-00 (ochenta hectáreas) son de riego y el resto de temporal y agostadero, cuenta con certificado de inafectabilidad agrícola 53316, del nueve de septiembre de mil novecientos cincuenta, a nombre de Benjamín García Hernández.

Lote 2, denominado "El Carmen", adquirido por Manuel de Jesús Bárcenas Loredo, el veintinueve de septiembre de mil novecientos treinta y tres, con una superficie de 135-55-49 (ciento treinta y cinco hectáreas, cincuenta y cinco áreas, cuarenta y nueve centiáreas) de temporal, cuenta con certificado de inafectabilidad agrícola 59746 a nombre de Alicia Marina González, del ocho de diciembre de mil novecientos cincuenta.

Lote 3, denominado "El Monte", adquirido por José Rubén Bárcenas Loredo, por medio de su apoderado Tomás Bárcenas Barroso, el dieciocho de octubre de mil novecientos treinta y cuatro, con una superficie de 92-36-52 (noventa y dos hectáreas, treinta y seis áreas, cincuenta y dos centiáreas) de temporal, cuenta con certificado de inafectabilidad agrícola 53317, del veintiuno de junio de mil novecientos cincuenta, a nombre de Alicia García Hernández.

Lote 4, denominado "La Presa", adquirido por Miguel Bárcenas Barroso, el veintinueve de septiembre de mil novecientos treinta y tres, con una superficie de 144-01-97 (ciento cuarenta y cuatro hectáreas, una área, noventa y siete centiáreas) de las cuales 70-00-00 (setenta hectáreas) son de riego y el resto de temporal, cuenta con certificado de inafectabilidad agrícola 59634, a nombre de Eloy Marina González del cinco de julio de mil novecientos cincuenta.

Lote 5, denominado "San Juan", adquirido por Martha Marina González, el diecisiete de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve, con una superficie de 91-05-00 (noventa y una hectáreas, cinco áreas) de temporal, cuenta con certificado de inafectabilidad agrícola 59633, del veintisiete de noviembre de mil novecientos cincuenta.

Lote 6, denominado "San Gabriel", adquirido por José Marina González, con una superficie de 100-68-25 (cien hectáreas, sesenta y ocho áreas, veinticinco áreas) de temporal, cuenta con certificado de inafectabilidad agrícola 59632, del veinticinco de noviembre de mil novecientos cincuenta.

Lote 7, denominado "Guadalupe", adquirido por Rafael Bárcenas Barrera, el veintinueve de septiembre de mil novecientos treinta y tres, con una superficie de 98-05-00 (noventa y ocho hectáreas, cinco áreas) de temporal, cuenta con certificado de inafectabilidad agrícola 59631, del veintiocho de noviembre de mil novecientos cincuenta, a nombre de Julio García Hernández.

Lote 8, denominado "San Rafael", adquirido por María del Carmen Marina González, el veintiocho de julio de mil novecientos cuarenta y siete, con una superficie de 64-34-93 (sesenta y cuatro hectáreas, treinta y cuatro áreas, noventa y tres centiáreas) de temporal, cuenta con certificado de inafectabilidad agrícola 59635.

Lote 9, denominado "El Casco", adquirido por Eloy Marina Bueno, para su menor hijo Juan Francisco Marina González, el veintiocho de julio de mil novecientos cuarenta y siete, con una superficie de 107-68-65 (ciento siete hectáreas, sesenta y ocho áreas, sesenta y cinco centiáreas) de las cuales 62-68-00 (sesenta y dos hectáreas, sesenta y ocho áreas) son de temporal y la superficie restante de agostadero, cuenta con certificado de inafectabilidad agrícola 53318, del veintiuno de junio de mil novecientos cincuenta.

El comisionado hace saber que las fracciones 1, 2 y 3, denominadas "El Potrerillo", "El Carmen" y "El Monte", se encuentran en posesión de los campesinos solicitantes desde hace dieciocho años, quienes en un principio los trabajaban en aparcería, pero que hace más de dos años dejaron de dar participación a los propietarios y los trabajan por su propia cuenta, ya que los propietarios se encuentran ausentes del lugar desde hace más de dos años consecutivos. En cuanto a las fracciones 4, 5, 6, 7 y 8, se encuentran abandonadas por sus propietarios, quienes además están ausentes del lugar desde hace más de seis años.

DECIMOTERCERO.- El veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, el Delegado Agrario en la entidad federativa rindió su informe complementario proponiendo la afectación del predio antes mencionado, por haberse comprobado que ha permanecido inexplotado por parte de sus propietarios, por más de dos años consecutivos, perdiendo su calidad de inafectable como lo establece el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, interpretado a contrario sensu.

DECIMOCUARTO.- En sesión plenaria del veintidós de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, el Cuerpo Consultivo Agrario acordó instruir a la Dirección General de Tenencia de la Tierra, Subdirección de

Inafectabilidad Agrícola y Ganadera, para que con los elementos de prueba existentes, instaurara el procedimiento de cancelación de certificados de inafectabilidad agrícola expedidos a favor de Benjamín García H., Alicia Marina González y Amalia García Hernández, que amparan los lotes 1, 2 y 3 del predio "El Aguaje", debiendo notificar a los propietarios para que en un término de treinta días manifestaran lo que a sus intereses conviniera.

DECIMOQUINTO.- Mediante oficio 608661, del once de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, la Dirección de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera y Agropecuaria solicitó al Delegado Agrario en la entidad federativa la realización de una investigación minuciosa en el predio denominado "El Aguaje"; informe que se rindió, el veintidós de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, del que se desprende lo siguiente:

Que el predio denominado "El Aguaje", se encuentra fraccionado en nueve lotes de los cuales seis están en posesión de los solicitantes y otros por aparceros que son quienes los trabajan desde hace aproximadamente quince años, en tanto que los otros tres lotes restantes se encuentran sin explotación, ya que en el momento de realizarse la inspección se comprobó que debido a la compactación de la tierra, ésta no ha sido removida por un término aproximado de cinco años; mencionando el comisionado que cada uno de estos lotes se encuentra amparado con su respectivo certificado de inafectabilidad.

Debe señalarse que obran en autos a fojas de la 2232 a la 2257 del legajo XXI del expediente las actas circunstanciadas de inexplotación del dieciocho, veinte, veintidós, veintitrés y veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta y cinco en relación con las fracciones que integran el predio "El Aguaje".

DECIMOSEXTO.- La Dirección de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera y Agropecuaria, el doce de junio de mil novecientos ochenta y cinco, instauró el procedimiento de nulidad de Acuerdos Presidenciales y cancelación de Certificados de Inafectabilidad Agrícola, y mediante oficios del 567480 al 567495 de la misma fecha, notificó la instauración del procedimiento antes referido a María Esther Sáenz Pedroza, María Santos Calvillo, Ignacio Ramírez López, Francisco Ramírez López, María del Socorro Ramírez Pedroza, Silvestre Salazar Ibarra, Velio Guerrero Ramírez, Felícitas Mata viuda de Salazar, Felipe Salazar Mata, Manuel Gómez Mata, J. Jesús Ramírez González, María de los Angeles Ramírez de Nava y Francisco Pedroza Sáenz, actuales propietarios de los predios amparados con los certificados de inafectabilidad agrícola sujetos a dicho procedimiento, así como a Silvestre Salazar Ibarra, Fidel Ibarra Guzmán, Felícitas Mata viuda de Salazar, Felipe Salazar Mata, Manuel Gómez Mata, Saturnino García Bueno y Domingo Ibarra Hernández, así como a los sucesores o a quien represente legalmente sus derechos, notificándoseles mediante edictos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, de conformidad con el artículo 167 de la citada ley.

DECIMOSEPTIMO.- Mediante escrito del trece de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, comparecieron al procedimiento en mención, Federico Ezequiel Velázquez Vázquez, María Santos Calvillo Hernández, Socorro Ramírez Pedroza, Angelina López de Ramírez, Francisco Ramírez López, María Esther Sáenz de Pedroza, José de Jesús Ramírez González, Francisco Pedroza Sáenz, Ignacio Ramírez López, María de los Angeles Ramírez de Nava, María Isabel López de la Torre, como actuales propietarios de los predios referidos para oponerse al procedimiento que nos ocupa, aportando pruebas y formulando alegatos.

DECIMOCTAVO.- La Dirección General de Tenencia de la Tierra, el seis de mayo de mil novecientos ochenta y siete, emitió dictamen en el que determinó dejar sin efectos jurídicos los acuerdos presidenciales, por inexplotación de los predios por sus propietarios por más de dos años consecutivos, siendo los siguientes:

1.- Acuerdo Presidencial de veintiuno de junio de mil novecientos cincuenta, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el nueve de septiembre del mismo año; cancelando el certificado de inafectabilidad agrícola 53316, expedido a favor de Benjamín García Hernández, respecto del predio denominado "El Potrerillo", con una superficie de 161-87-10 (ciento sesenta y una hectáreas, ochenta y dos áreas, diez centiáreas) de agostadero, propiedad actual de Esther Sáenz de Pedroza y María Isabel López de la Torre.

2.- Acuerdo Presidencial de veintiuno de junio de mil novecientos cincuenta, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el nueve de septiembre del mismo año; cancelando el certificado de inafectabilidad agrícola 53317, expedido a favor de Amalia García Hernández, en relación con el predio denominado "El Monte", con una superficie de 92-36-52 (noventa y dos hectáreas, treinta y seis áreas, cincuenta y dos centiáreas) de agostadero, propiedad en la actualidad de Ignacio Ramírez López.

3.- Acuerdo Presidencial de veintiuno de junio de mil novecientos cincuenta, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el nueve de septiembre del mismo año; cancelando el certificado de inafectabilidad agrícola 53318, expedido a favor de Juan Francisco Marina González, en relación con el predio denominado "Fracción Nueve", con una superficie de 107-68-65 (ciento siete hectáreas, sesenta y ocho áreas, sesenta y cinco centiáreas) de las cuales 62-68-00 (sesenta y dos hectáreas, sesenta y ocho

áreas) son de temporal y la superficie restante de agostadero, propiedad en la actualidad de Francisco Pedroza Sáenz.

4.- Acuerdo Presidencial de cinco de julio de mil novecientos cincuenta, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el veinticinco de noviembre del mismo año; cancelando el certificado de inafectabilidad agrícola 59631, expedido a favor de Julio García Hernández, en relación con el predio denominado "Lote número siete", con una superficie de 98-05-60 (noventa y ocho hectáreas, cinco áreas, sesenta centiáreas) de temporal, propiedad en la actualidad de J. de Jesús Ramírez González.

5.- Acuerdo Presidencial de cinco de julio de mil novecientos cincuenta, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el veinticinco de noviembre del mismo año; cancelando el certificado de inafectabilidad agrícola 59632, expedido a favor de José Marina González, en relación con el predio denominado "San Gabriel", con una superficie de 100-68-25 (cien hectáreas, sesenta y ocho áreas, veinticinco centiáreas) de temporal, propiedad en la actualidad de Angelina López de Ramírez.

6.- Acuerdo Presidencial de seis de julio de mil novecientos cincuenta, publicado en el **Diario Oficial de la Federación,** el veintisiete de noviembre del mismo año; cancelando el certificado de inafectabilidad agrícola 59633, expedido a favor de Martha Marina González, en relación con el predio denominado "San Juan", con una superficie de 91-05-20 (noventa y una hectáreas, cinco áreas, veinte centiáreas) de temporal propiedad en la actualidad de María del Socorro Ramírez de Pedroza.

7.- Acuerdo Presidencial de cinco de julio de mil novecientos cincuenta, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el veinticuatro de noviembre del mismo año; cancelando el certificado de inafectabilidad agrícola 59634, expedido a favor de Eloy Marina González, en relación con el predio denominado "La Presa", con una superficie de 144-01-97 (ciento cuarenta y cuatro hectáreas, una área, noventa y siete centiáreas) de las cuales 50-61-97 (cincuenta hectáreas, sesenta y una áreas, noventa y siete centiáreas) son de temporal y la superficie restante de agostadero, propiedad en la actualidad de Francisco Ramírez López.

8.- Acuerdo Presidencial de cinco de julio de mil novecientos cincuenta, publicado en el **Diario Oficial de la Federación,** el veinticinco de noviembre del mismo año; cancelando el Certificado de Inafectabilidad Agrícola 59635, expedido a favor de María del Carmen Marina González, respecto del predio denominado "San Rafael", con una superficie de 64-34-93 (sesenta y cuatro hectáreas, treinta y cuatro áreas, noventa y tres centiáreas) de temporal, propiedad actual de María de los Angeles Ramírez de Nava.

9.- Acuerdo Presidencial de diecinueve de julio de mil novecientos cincuenta, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el ocho de diciembre del mismo año; cancelando el certificado de inafectabilidad agrícola 59746, expedido a favor de Alicia Marina González, en relación con el predio denominado "El Carmen", con una superficie de 135-55-49 (ciento treinta y cinco hectáreas, cincuenta y cinco áreas, cuarenta y nueve centiáreas) de agostadero, propiedad en la actualidad de María Santos Calvillo Hernández.

Al respecto, la Dirección antes mencionada consideró que *"...instauró el presente procedimiento tomando como base el acuerdo que en sesión del 22 de febrero de 1984, aprobado por el Cuerpo Consultivo Agrario, así como los informes del 4 de julio de 1983 y 22 de marzo de 1985, rendidos por los comisionados ex-profesos por la Delegación del Ramo en la Entidad, de los cuales se desprende que los predios de referencia se han dejado de explotar por más de dos años consecutivos, sin que exista causa de fuerza mayor que lo justifique, por lo que su situación jurídica se contrapone a lo previsto por la Ley de la Materia".*

Es conveniente señalar que en cuanto hace a los predios denominados "La Obra" y "El Carrizal", éstos fueron afectados para satisfacer las necesidades agrarias de los poblados "La Huerta" y "El Aposento", ubicados en el Municipio de San Felipe, Estado de Guanajuato, de conformidad con el informe rendido el cuatro de julio de mil novecientos ochenta y siete, por el personal comisionado por la Delegación Agraria en el Estado, y que obra en autos a fojas de la 2005 a la 2029 del legajo XIX del expediente.

DECIMONOVENO.- En sesión plenaria del veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, el Cuerpo Consultivo Agrario aprobó dictamen positivo en los términos del dictamen emitido por la Dirección General de Tenencia de la Tierra.

VIGESIMO.- Obra en autos dictamen positivo del Cuerpo Consultivo Agrario, del diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y tres.

VIGESIMO PRIMERO.- Por auto de dieciséis de julio de mil novecientos noventa y tres, se tuvo por radicado este juicio, habiéndose registrado con el número 853/93, notificándose a los interesados y por oficio a la Procuraduría Agraria.

VIGESIMO SEGUNDO.- Este Tribunal Superior emitió sentencia en el juicio 853/93, el dos de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, dotando al poblado "El Aguaje", Municipio de San Felipe, Estado de Guanajuato, una superficie de 995-63-71 (novecientas noventa y cinco hectáreas, sesenta y tres áreas, setenta y una centiáreas), de diversas calidades y por ejecutoria de quince de noviembre de mil

novecientos noventa y cinco, dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro del expediente número D.A. 1895/95, promovido por Francisco Pedroza Sáenz y otros, resolvió conceder el juicio de garantías, para el efecto de dejar insubsistente la sentencia reclamada y se diera cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 288, Ley Federal de Reforma Agraria.

Este organo jurisdiccional, en cumplimiento a la ejecutoria antes aludida, por auto de diecisiete de enero de mil novecientos noventa y seis, resolvió dejar insubsistente la sentencia definitiva de dos de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, para que siguiendo los lineamientos de la misma, se dictara otra conforme a derecho.

VIGESIMO TERCERO.- Este Tribunal Superior, el dos de octubre de mil novecientos noventa y siete, dictó sentencia resolviendo lo siguiente:

"PRIMERO.- Es procedente la dotación de tierras promovida por campesinos del poblado denominado "El Aguaje", Municipio de San Felipe, Estado de Guanajuato.

SEGUNDO.- Se dejan sin efectos jurídicos los Acuerdos Presidenciales del veintiuno de junio de mil novecientos cincuenta, publicados en el ***Diario Oficial de la Federación*** *el nueve de septiembre del mismo año; cinco de julio de mil novecientos cincuenta, publicados en el* ***Diario Oficial de la Federación*** *el veinticinco de noviembre del mismo año; cinco de julio de mil novecientos cincuenta, publicado en el* ***Diario Oficial de la Federación*** *el veintisiete de noviembre del mismo año; cinco de julio de mil novecientos cincuenta, publicado en el* ***Diario Oficial de la Federación*** *el veinticuatro de noviembre de ese mismo año; cinco de julio de mil novecientos cincuenta, publicado en el* ***Diario Oficial de la Federación*** *el veinticinco de noviembre del mismo año; diecinueve de julio de mil novecientos cincuenta, publicado en el* ***Diario Oficial de la Federación*** *el ocho de diciembre del mismo año; asimismo, procede la cancelación de los certificados de inafectabilidad agrícolas 53316, 53317, 53318, 59631, 59632, 59633, 59634, 59635 y 59746 expedidos a favor de Benjamín García Hernández, Amalia García Hernández, Juan Francisco Marina González, Julio García Hernández, José Marina González, Martha Marina González, Eloy Marina González, María del Carmen Marina González y Alicia Marina González, que amparan los predios denominados "El Potrerillo", con 161-87-10 hectáreas (ciento sesenta y una hectáreas, ochenta y seis áreas y diez centiáreas) de agostadero; "El Monte", con 92-36-52 hectáreas (noventa y dos hectáreas, treinta y seis áreas y cincuenta y dos centiáreas) de agostadero; "El Aguaje", con 107-68-65 hectáreas (ciento siete hectáreas, sesenta y ocho áreas y sesenta y cinco centiáreas) de temporal y agostadero; "Guadalupe", con 98-05-60 hectáreas (noventa y ocho hectáreas, cinco áreas y sesenta centiáreas) de temporal; "San Gabriel", con 100-68-25 hectáreas (cien hectáreas, sesenta y ocho áreas y veinticinco centiáreas) de temporal; "San Juan", con 91-05-20 hectáreas (noventa y una hectáreas, cinco áreas y veinte centiáreas) de temporal; "La Presa", con 144-01-97 hectáreas (ciento cuarenta y cuatro hectáreas, una área y noventa y siete centiáreas) de temporal y agostadero; "San Rafael", con 64-34-93 hectáreas (sesenta y cuatro hectáreas, treinta y cuatro áreas y noventa y tres centiáreas) de temporal y "El Carmen", con 135-55-49 hectáreas (ciento treinta y cinco hectáreas, cincuenta y cinco áreas y cuarenta y nueve centiáreas) de agostadero, propiedad actualmente de Esther Sáenz de Pedroza y María Isabel López de la Torre; Ignacio Ramírez López; Francisco Pedroza Sáenz; J. de Jesús Ramírez González; Angelina López de Ramírez; María del Socorro Ramírez de Pedroza; Francisco Ramírez López; María de los Angeles Ramírez de Nava y María Santos Calvillo Hernández, respectivamente.*

TERCERO.- Es de dotarse y se dota al poblado referido en el resolutivo primero de esta sentencia de 995-63-71 hectáreas (novecientas noventa y cinco hectáreas, sesenta y tres áreas y setenta y una centiáreas), de las cuales 467-43-95 hectáreas (cuatrocientas sesenta y siete hectáreas, cuarenta y tres áreas y noventa y cinco centiáreas) son de temporal, 45-00-65 hectáreas (cuarenta y cinco hectáreas y sesenta y cinco centiáreas) son de agostadero de buena calidad y 483-19-11 hectáreas (cuatrocientas ochenta y tres hectáreas, diecinueve áreas y once centiáreas) son de agostadero en terrenos áridos, que se tomarán íntegramente del predio denominado "El Aguaje" en sus fracciones "El Potrerillo", "El Monte", "Fracción Nueve del Aguaje", "Lote Siete del Aguaje", "San Gabriel", "Lote Cinco del Aguaje", "San Juan", "La Presa", "San Rafael", "Fracción Dos del Aguaje o El Carmen", propiedad de Esther Sáenz de Pedroza y María Isabel López de la Torre, Ignacio Ramírez López, Francisco Pedroza Sáenz, J. Jesús Ramírez González, Angelina López de Ramírez, María del Socorro Ramírez de Pedroza, Francisco Ramírez López, María de los Angeles Ramírez de Nava y María Santos Calvillo Hernández, ubicadas en el Municipio de San Felipe, Estado de Guanajuato, afectables en términos del artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria interpretado a contrario sensu; superficie que se localizará de acuerdo al plano proyecto que obra en autos, en favor de (79) setenta y nueve campesinos capacitados que se relacionan en el considerando sexto de esta sentencia. Esta superficie pasará a ser propiedad del núcleo de población beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres; en cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá de acuerdo con las facultades

que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria y podrá constituir la Parcela Escolar, la Unidad Agrícola Industrial para la Mujer y la Unidad Productiva para el Desarrollo Integral de la Juventud".

VIGESIMO CUARTO.- Inconformes con la sentencia anterior, mediante escrito presentado el cinco de enero de mil novecientos noventa y ocho, ante este Tribunal Superior, María Esther Sáenz de Pedroza, María Santos Calvillo Fernández, Ignacio Ramírez López, Francisco Ramírez López, María del Socorro Ramírez de Pedroza, Angélica López de Ramírez, José de Jesús Ramírez González, María de los Angeles Ramírez de Nava, Francisco Pedroza Sáenz e Isabel López de la Torre, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, juicio que le tocó conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que en expediente D.A.2415/98, el ocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho, resolvió conceder el amparo impetrado. Las consideraciones que sirvieron de base para la emisión de esta ejecutoria son del tenor siguiente en su parte medular:

"...SEPTIMO.- Los conceptos de violación hechos valer son parcialmente fundados.

Ello es así dado que, por cuanto se refiere al argumento marcado con el inciso A) del concepto en estudio; si bien es cierto que el Tribunal Superior Agrario, no precisó en forma específica que (sic) examinaba de dicho informe, ello no es suficiente para conceder el amparo solicitado, ya que sí las tomó en consideración dado que consideró que: "Del análisis a las diversas actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se concluye que existen elementos suficientes para dejar sin efectos jurídicos los Acuerdos Presidenciales de inafectabilidad de origen y por lo mismo, para cancelar los certificados de inafectabilidad agrícolas 53316, 53317, 53318, 59631, 59632, 59633, 59634, 59635 y 59746 expedidos a favor de Benjamín García Hernández, Amalia García Hernández, Juan Francisco Marina González, Julio García Hernández, José Marina González, Martha Marina González, Eloy Marina González, María del Carmen Marina González y Alicia Marina González, referidos a los predios denominados 'El Portillo', con -161-87-10 hectáreas (ciento sesenta y una hectáreas, ochenta y siete áreas y diez centiáreas) de agostadero; 'El Monte', con 92-36-52 hectáreas (noventa y dos hectáreas, treinta y seis áreas y cincuenta y dos centiáreas) de agostadero; 'El Aguaje' con 107-68-65 hectáreas (ciento siete hectáreas, sesenta y ocho áreas y sesenta y cinco centiáreas) de temporal y agostadero; 'Guadalupe', con 98-05-60 hectáreas (noventa y ocho hectáreas, cinco áreas y sesenta centiáreas) de temporal; 'San Gabriel', con 100-68-25 hectáreas (cien hectáreas, sesenta y ocho áreas y veinticinco centiáreas) de temporal; 'San Juan', con -91-05-20 hectáreas (noventa y una hectáreas, cinco áreas y veinte centiáreas) de temporal; 'La Presa', con 144-01-97 hectáreas (ciento cuarenta y cuatro hectáreas, una área y noventa y siete centiáreas) de temporal y agostadero; 'San Rafael', con 64-34-93 hectáreas (sesenta y cuatro hectáreas, treinta y cuatro áreas y noventa y tres centiáreas) de temporal y 'El Carmen', con 135-55-49 hectáreas (ciento treinta y cinco hectáreas, cincuenta y cinco áreas y cuarenta y nueve centiáreas) de agostadero, propiedad actualmente de Esther Sáenz de Pedroza y María Isabel López de la Torre; Ignacio Ramírez López; Francisco Sáenz; J. De Jesús Ramírez González, Angelina López de Ramírez; María del Socorro Ramírez de Pedroza; Francisco Ramírez López; María de los Angeles Ramírez de Nava y María Santos Calvillo Hernández, respectivamente, en virtud de haberse configurado los supuestos contenidos en el artículo 418 fracción II y 419 de la Ley Federal de Reforma Agraria, una vez que ha quedo (sic) comprobado que los propietarios de las diversas fracciones que integran el predio 'El Aguaje', abandonaron esas superficies que han permanecido inexplotadas por más de dos años consecutivos de parte de sus titulares, según se desprende de las actas de inexplotación respectivos del dieciocho, veinte, veintidós, veintitrés y veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, y que obran en autos a fojas de la 2232 a la 2257 del legajo XXI del expediente. En lo que respecta a los Acuerdos Presidenciales de origen relativos a los certificados de inafectabilidad 183052, 183053, 183054, 33795, 33793, 33797, 35500, 35501, 35502, 35504, 35503, 35505 y 35511, no procede dejarlos sin efectos jurídicos y por lo mismo tampoco procede su cancelación, por no configurarse ninguno de los supuestos señalados por el artículo 418 de la Ley Federal de Reforma Agraria."; por lo que es inexacto que no se haya tomado en consideración dicho informe, sino que fue valorado en forma conjunta con el resto de las probanzas.

El segundo de los conceptos de violación, resulta ineficaz, dado que por una parte, los argumentos relativos a que se da una inexacta e indebida aplicación del artículo tercero transitorio de la reforma al artículo 27 y de los artículos 287 y 289, de la Ley Federal de Reforma Agraria, son los mismos que la parte quejosa hizo valer en el tercer concepto de violación de la demanda de amparo que dio origen al juicio de garantías número DA-1895/95, y que ya fueron analizados en la ejecutoria dictada en dicho juicio de garantías, como a continuación se transcribe: "En primer término, contrario a lo aducido por los quejosos en el primero de ellos, conforme a lo dispuesto por los artículos: Tercero transitorio del Decreto promulgado el tres de enero de mil novecientos noventa y dos (publicado en el ***Diario Oficial de la Federación*** *el día seis del mismo mes y año), por el cual se reformó el artículo 27 Constitucional; Tercero Transitorio de la Ley Agraria y 1o., 9o., fracción VIII y Cuarto Transitorio fracción II, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, el Tribunal Superior responsable sí resulta competente para conocer y resolver*

tanto sobre el procedimiento de dotación de ejidos, como en relación a los procedimientos de nulidad y cancelación de certificados de inafectabilidad agrícola.- Los mencionados preceptos, textualmente disponen: (transcribe).- De los preceptos transcritos se advierte que por virtud de lo dispuesto en la Ley Agraria que entró en vigor el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, se derogó la anterior Ley Federal de Reforma Agraria, la cual se continuaría aplicando a los asuntos que a esa fecha se encontraban en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, creación de nuevos centros de población y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales y por lo que hace a los demás asuntos, de los que corresponda conocer a los Tribunales Agrarios, se turnarían a éstos por la Comisión Agraria Mixta o el Cuerpo Consultivo Agrario, según corresponda, en el estado en que se encuentren, una vez que los mencionados Tribunales entraran en funciones. Luego a los Tribunales Agrarios como órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, les corresponde la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional, en los términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Federal y los Tribunales señalados, entre ellos el Tribunal Superior Agrario responsable, son por tanto competentes para conocer y resolver tanto de un procedimiento de dotación de ejidos, como de los relacionados correspondientes a nulidad y cancelación de certificados de inafectabilidad; sobre todo cuando como en el caso ambos procedimientos se encuentran vinculados; y también se consideró que: 'Ahora bien que por cuestión de método deben analizarse a continuación las violaciones de carácter procedimental a que se refieren los quejosos en el tercer concepto de violación, en el que aducen que el expediente agrario remitido al Tribunal Superior responsable no se encontraba en estado de resolver, por no haberse seguido el trámite de la primera instancia de dotación de tierras en la forma prevista en los artículos 287, 288 y 292 de la Ley Federal de Reforma Agraria, ya que, según los quejosos, después de la solicitud inicial del veintiuno de enero de mil novecientos treinta y siete, hasta el censo efectuado de acuerdo con el informe del diez de febrero y cuatro de julio de mil novecientos ochenta (sic), no se desprende que se haya constituido la junta censal, a que se refiere el mencionado artículo 287 y que se haya cumplido con los requisitos señalados en ese precepto; ni que se hubiera elaborado la relación detallada que ahí se estipula; que tampoco aparece que se hubiera dado vista por diez días a los propietarios, con dichos trabajos censales y que una vez realizados se hubieran remitido por la Comisión Agraria Mixta a la consideración del ejecutivo del Estado, para que emitiera su dictamen.- Al respecto, de las constancias que obran en el expediente número 1506, de dotación de tierras y nulidad de acuerdos presidenciales y cancelación de certificados de inafectabilidad agrícola, relativo al poblado 'El Aguaje', Municipio de San Felipe, Estado de Guanajuato, se advierte lo siguiente: a).- Por oficio de veintiuno de enero de mil novecientos cincuenta y tres, el Presidente de la Comisión Agraria Mixta en el Estado de Guanajuato, comisionó a José Díaz Barriga, para realizar los trabajos censales respectivos. Por cédula de fecha diecisiete de abril de mil novecientos cincuenta y tres, fijada en la tabla de avisos de la Presidencia Municipal de San Felipe, Guanajuato, se hizo del conocimiento de los propietarios o encargados de las fincas afectables de la solicitud de dotación. Así como de la realización de los trabajos censales. En la misma fecha se fijó la convocatoria y el veintidós de abril siguiente se levantó el acta correspondiente en la que se hizo constar que en el poblado solicitante sólo habitaban 12 jefes de familia y 5 varones mayores de 16 años (fojas 26 a la 31 del legajo VI).- b).- en sesión celebrada el veinticuatro de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres, se aprobó por la Comisión Agraria Mixta del Estado de Guanajuato, el respectivo dictamen negativo, ante la falta de capacidad legal del poblado gestor, para solicitar y obtener la dotación de ejidos (fojas 37 a 39 del legajo VI).- c).- El Cuerpo Consultivo Agrario en sesión celebrada el cuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve, el Delegado del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, en el Estado de Guanajuato comisionó al C. Alfonso Martínez Benaviedes, para practicar 'nueva diligencia censal, tendiente a demostrar la 'capacidad jurídica del núcleo gestor'. Con fecha nueve de noviembre de mil novecientos setenta, se fijó en las oficinas municipales de San Felipe, Guanajuato, la convocatoria respectiva. En la misma fecha se fijó en las referidas oficinas la 'cédula notificatoria común a los dueños o encargados de los Predios situados dentro del radio legal de afectación del poblado "El Aguaje", Municipio de San Felipe, Estado de Guanajuato', en la que se les hizo saber la realización de los trabajos censales y se les otorgó plazo para que designaran su representante censal; y por oficio de la misma fecha, entregado a la C. Ma. Socorro Sandoval, hija de la encargada de la finca El Aguaje, Municipio de San Felipe, Guanajuato, quien no firmó se notificó al propietario o encargado de la finca el plazo otorgado para designar representante censal. En acta levantada el diecinueve de noviembre de mil novecientos setenta, se designó por parte del poblado hoy tercero perjudicado el representante censal. Obra también en el expediente el Acta de instalación de la Junta Censal levantada en la misma fecha diecinueve de noviembre de mil novecientos setenta, así como el acta de clausura de los trabajos censales, en la que se hizo constar que: existe un total de 46 campesinos capacitados y que 'no asistió ningún representante de los propietarios de las fincas presuntas afectables, no obstante haber sido notificados con la debida oportunidad, según constancias que se agregan a esta documental. (fojas de la

50 a la 57 del legajo III).- d.- Con fecha catorce de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, el Cuerpo Consultivo Agrario, declaró improcedente la acción de dotación de ejido, por falta de capacidad colectiva del poblado solicitante.- e).- Por Acuerdo aprobado el dieciocho de agosto de mil novecientos ochenta y dos, el Pleno del Cuerpo Consultivo Agrario determinó dejar sin efectos jurídicos el Acuerdo de catorce de noviembre de mil novecientos setenta y nueve antes citado y ordenó la realización de nuevos trabajos censales en el poblado solicitante (fojas 1934 a 1940 del legajo XXIII) y f).- Por oficio número 103, de fecha cuatro de enero de mil novecientos ochenta y tres se comisionó al Ingeniero Cirenio Torres Rosales, para realizar los trabajos censales del poblado "El Aguaje", Municipio de San Felipe, Estado de Guanajuato, en cumplimiento a lo cual se rindió Informe con fecha cuatro de julio de mil novecientos ochenta y tres, al que se adjuntaron diversos documentos, entre ellos: la convocatoria de fecha dos de febrero de mil novecientos ochenta y tres, que fue fijada en varios tantos en los lugares públicos y más concurridos del poblado, el Acta de instalación de la Junta Censal y el Acta de Clausura de los trabajos censales, todos de fecha diez de febrero de mil novecientos ochenta y tres, en las que se hizo constar que existe un total de 79 capacitados (fojas 2005 a la 2034 del legajo XIX).- De la anterior relación se sigue que no le asiste la razón a los quejosos en cuanto aducen que en el procedimiento seguido ante las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria, se omitió dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 287 y 288 párrafo primero, de la Ley Federal de Reforma Agraria, toda vez que de las constancias antes relacionadas se advierte que se realizaron en diversas ocasiones, diligencias para complementar el censo agrario del núcleo de población solicitante; asimismo que en su oportunidad se constituyó la junta censal (formada por un representante de la Comisión Agraria Mixta y un representante de los cuerpos campesinos peticionarios); y de la lectura de tales documentos, se advierte además que en ellos se señalan los datos relativos al número de individuos capacitados para recibir unidad de dotación, especificando los datos relativos a sexo, edad, estado civil, ocupación u oficio, número de habitantes y nacionalidad."

Respecto a la alegada violación del artículo 288 de la Ley Federal de Reforma Agraria, debe decirse que en el citado amparo DA-1895/95, fue concedida la protección para que la autoridad responsable subsanara la violación a dicho numeral, poniendo a la vista de los quejosos los trabajos censales realizados, les otorgara término para presentar sus objeciones y dictada nueva resolución, conforme a derecho procediera, por lo que de estimar la parte quejosa que no se cumplió con dicho trámite, debió plantearlo en el recurso de queja respectivo.

En cambio, es fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, el argumento que se hace consistir en que se violó la garantía de audiencia en perjuicio de la parte quejosa dado que para la práctica de la inspección ocular realizada el veintidós de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, no se le notificó personalmente, sino a una persona de nombre Federico Velázquez Vázquez, quien sin apoyarse en documento alguno se ostentó como representante legal de los ahora quejosos.

Lo anterior es así, ya que como se advierte de la foja doscientos veintitrés del legajo XI, del expediente 23/24275, la autoridad municipal del poblado denominado El Aguaje, del Municipio de San Felipe del Estado de Guanajuato, hizo constar que Federico Velázquez V. se presentó ante el Comisionado de la Secretaría de la Reforma Agraria como Representante Legal de los actores propietarios del predio denominado "El Aguaje" de ese Municipio, pero sin que se advierta que haya acreditado la personalidad con que se ostentó, de tal manera que no estando demostrado ese supuesto, resulta que efectivamente no se notifica a los propietarios afectados la realización de la diligencia aludida y, por ello, se les privó del derecho de intervenir y hacer las manifestaciones que estimaran procedentes, con clara violación a lo dispuesto en el artículo 14 Constitucional, razón por la cual procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que el Tribunal Superior Agrario deje insubsistente la sentencia reclamada y ordene la reposición de la inspección ocular que dio origen al acta de veintidós de febrero de mil novecientos ochenta y cinco previa notificación a los interesados de la realización de tal inspección, hecho lo cual, dicte la resolución que en derecho corresponda...".

VIGESIMO QUINTO.- Por auto de seis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, este Tribunal Superior determinó dejar insubsistente la sentencia definitiva de dos de octubre de mil novecientos noventa y siete, y turnó el expediente a esta Magistratura para que elaborara el proyecto de resolución que en derecho corresponda.

VIGESIMO SEXTO.- Por acuerdo de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, este Organo Jurisdiccional, en cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa dictó un acuerdo para mejor proveer, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reformó este precepto

Constitucional, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el seis de enero de mil novecientos noventa y dos; en los artículos 1o. y 9o. fracción VIII y cuarto transitorio, fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y 80 de la Ley de Amparo.

SEGUNDO.- El artículo 80 de la Ley de Amparo señala que la sentencia que concede el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo al efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.

TERCERO.- La capacidad individual de los solicitantes y colectiva del núcleo gestor, quedó acreditada según trabajos censales realizados el diez de febrero de mil novecientos ochenta y tres, desprendiéndose que el núcleo peticionario cuenta con 79 (setenta y nueve) capacitados, que son los mismos que se toman en cuenta para resolver el presente asunto, por lo cual se estiman satisfechos los requisitos de capacidad individual y colectiva del grupo accionante conforme a lo dispuesto por el artículo 288 de la Ley Federal de Reforma Agraria, siendo los siguientes: 1.- Andrés Pedroza Ramírez, 2.- Federico Ortiz Salazar, 3.- Esteban Gómez Fraide, 4.- Teodoro Gómez Fraide, 5.- Leonardo Gómez Fraide, 6.- Raymundo Rodríguez Ligaz, 7.- J. Apolinar Súchil Solís, 8.- Manuel Súchil Ortiz, 9.- Catarino Súchil Ortiz, 10.- Wenceslao Prado Lira, 11.- Patricio Prado Rodríguez, 12.- J. Dolores Barbosa Calvillo, 13.- Juan Gómez Fraide, 14.- Ignacio Villegas Prado, 15.- Agustín Súchil Ortega, 16.- Juan Gómez Moreno, 17.- Alfonso Gómez Fraide, 18.- Florentino Súchil Ortega, 19.- Rodrigo Súchil Solís, 20.- Silvestre Súchil Ortega, 21.- Margarito Pedroza Ortiz, 22.- J. Jesús Ortiz Hernández, 23.- Julián Ortiz Lira, 24.- J. Guadalupe Hernández Rodríguez, 25.- Manuel Prado Lira, 26.- Alvaro Prado Chávez, 27.- José Garitachea Súchil, 28.- Juan Garitachea Súchil, 29.- Antonio Garitachea Martínez, 30.- Alberto Garitachea Súchil, 31.- Agapito Hernández González, 32.- Feliciano Hernández González, 33.- Martín Hernández González, 34.- Tomás Ortiz Rodríguez, 35.- Jacinto Ortiz Ortiz, 36.- Salvador Pedroza Rodríguez, 37.- Raúl Pedroza Rodríguez, 38.- J. Luz Pedroza Monjaraz, 39.- J. Jesús Pedroza Monjaraz, 40.- Eulogio Ortiz Ortiz, 41.- Angel Garitachea Martínez, 42.- Francisco Hernández Mejía, 43.- Narciso Villegas Ríos, 44.- Catarino Velázquez Hernández, 45.- Agapito Ortiz Velázquez, 46.- Martín Hernández Prado, 47.- Modesto Hernández Prado, 48.- Ciro Hernández Moreno, 49.- Gregorio Hernández González, 50.- Agustín Méndez Ortega, 51.- Pascual Méndez Becerra, 52.- Leonardo Méndez Ortega, 53.- Antonio Ortiz Velázquez, 54.- Plácido Ortiz Ortiz, 55.- Juan Ortiz Ortiz, 56.- Felipe Ortiz Ortiz, 57.- Lorenzo Velázquez Fraide, 58.- Pedro Ceballos Velázquez, 59.- Práxedis Villegas Hernández, 60.- Leobardo Chávez Andrade, 61.- Juan Velázquez Rodríguez, 62.- Alberto Prado Lira, 63.- Teódulo Prado Merino, 64.- Florencio Villegas Ríos, 65.- Ezequiel Villafaña Ortega, 66.- Agustín Villafaña Pérez, 67.- J. Refugio Martínez Vidales, 68.- Alfonso García Hernández, 69.- Alfonso García Alvarez, 70.- Martín García Alvarez, 71.- Jorge Arellano Malta, 72.- Antonio Arellano Malta, 73.- Saturnino Prado Pérez, 74.- Pedro Prado Sandoval, 75.- Saturnino Prado Sandoval, 76.- José Aguilar Olvera, 77.- Amador Aguilar Caudillo, 78.- Ramón Aguilar Caudillo y 79.- Agustín Súchil Ortega.

CUARTO.- Fueron notificados los propietarios de los predios localizados dentro del radio legal de afectación del poblado de que se trata, conforme lo dispone el artículo 275 de la Ley Federal de Reforma Agraria, cumpliéndose así las garantías de audiencia y legalidad establecidas por los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna. En cuanto al procedimiento se cumplieron las formalidades exigidas por los artículos 272, 275, 286, 291, 292, 297 y 304 del ordenamiento legal antes invocado.

QUINTO.- El dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, en cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa, este organo jurisdiccional emitió un acuerdo para mejor proveer, con fundamento en el artículo 186 de la Ley Agraria, en el que se giró despacho al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en Guanajuato, Estado de Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este Tribunal Superior, comisionara personal de su adscripción para que llevara al cabo la reposición de la inspección ocular, previa notificación a los interesados.

SEXTO.- Por auto de diez de marzo de mil novecientos noventa y nueve, el Tribunal Unitario del Distrito 11, tiene por recibido el despacho D.A./027/99, ordenando a la brigada de ejecución adscrita a dicho Tribunal para que previa notificación a las partes interesadas en el procedimiento, proceda a la práctica de la inspección ocular.

SEPTIMO.- Por auto de veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, el Tribunal Unitario de conocimiento, emitió un acuerdo, en los siguientes términos:

"VISTO el despacho de cuenta, con el fin de proceder a su debida cumplimentación; con fundamento en el artículo 58 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se deja sin efectos el diverso proveído de diez de los corrientes; y en su lugar se señalan las once horas del día martes treinta de marzo próximo para que se lleve a cabo la prueba de inspección ocular, en términos de lo establecido por los artículos 161 al 164 del Código Adjetivo invocado; para tal efecto, se comisiona a la brigada de ejecución adscrita a este Tribunal Unitario Agrario, en las personas del Licenciado Carlos Ruiz Becerra y del

Ingeniero Miguel Angel Regalado Acuña, actuario ejecutor y perito topógrafo respectivamente. En la inteligencia de que con toda oportunidad se deberá citar a las partes para que concurran a dicha diligencia, es decir, al Comité Particular Ejecutivo que promueve el expediente de dotación número 853/93, ante el Tribunal Superior Agrario, en su domicilio bien conocido en el poblado "El Aguaje", Municipio de San Felipe, Guanajuato, así como a los señores MARIA ESTHER SAENZ DE PEDROZA, MARIA SANTOS CALVILLO FERNANDEZ, IGNACIO RAMIREZ LOPEZ, FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ, MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ DE PEDROZA, ANGELICA LOPEZ DE RAMIREZ, JOSE DE JESUS RAMIREZ GONZALEZ, MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ DE NAVA, FRANCISCO PEDROZA SAENZ E ISABEL LOPEZ DE LA TORRE, en el domicilio que han señalado en los autos del expediente de dotación de tierras y que corresponde al número 127 de la calle Tlaxcala, Despacho 103, en la colonia Roma, México, Distrito Federal...".

El anterior proveído fue notificado a través del Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, a los quejosos, mediante instructivo el veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, no encontrando a los amparistas, pero sí al Licenciado Miguel Angel Espino García, quien se dijo ser Asesor de los buscados.

OCTAVO.- El treinta de marzo de mil novecientos noventa y nueve, se llevó a cabo la diligencia de la que se desprende lo siguiente:

"Nos constituimos en los terrenos dotados al Núcleo Agrario "El Aguaje", estando presentes los CC. Alfonso Gómez Fraide, Apolinar Suchilt Solís y Leonardo Gómez Fraide, Suplente del Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del Poblado de Referencia; cabe hacer mención que aun de haber sido notificadas las partes sólo están presentes los integrantes del Comisariado Ejidal, y por la otra un Licenciado en Derecho de apellidos Meza Padilla, quien dice ser representante de María Esther Sáenz Pedroza, María Santos Calvillo Fernández, Ignacio Ramírez López, Francisco Ramírez López, María del Socorro Ramírez Pedroza, Angélica López de Ramírez, José de Jesús Ramírez González, María de los Angeles Ramírez de Nava e Isabel López de la Torre; presentando un Poder General amplísimo otorgado por un Licenciado Enrique Machaín, no acreditando con esto su personalidad que dice tener en la presente diligencia, puesto que en el texto del poder que muestra o exhibe, sólo menciona que el Licenciado Machaín otorga poder para que el Licenciado Meza Padilla lo represente, más no que el listado de personas mencionadas le otorguen, ni al Licenciado Machaín, ni al Licenciado Meza Padilla la facultad de representarlos; por lo que no se le da intervención en la presente diligencia...".

NOVENO.- Por auto de veinte de abril de mil novecientos noventa y nueve, este Tribunal Superior dictó un acuerdo en el que manifiesta que toda vez de las constancias emitidas se desprende que se presentó un licenciado de apellidos Meza Padilla que dijo ser representante de los buscados, presentando un poder amplísimo para pleitos y cobranzas que le otorgó el licenciado Enrique Machain, por lo que en tal virtud se devuelve el despacho al Tribunal Unitario Agrario de referencia, para que se notifique personalmente a María Sáenz de Pedroza, María Santos Calvillo Fernández, Ignacio Ramírez López, Francisco Ramírez López, María del Socorro Ramírez de Pedroza, Angélica López de Ramírez, José de Jesús Ramírez González, María de los Angeles Ramírez de Nava, Francisco Pedroza Sáenz e Isabel López de la Torre, e inclusive en términos del artículo 173 de la Ley Agraria, y en caso de que se apersone quien diga ser representante de los mismos, deberá acreditarse con documento idóneo.

DECIMO.- De las constancias de autos se desprende que toda vez que no se pudo localizar a los quejosos, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, notificó por edictos con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, el treinta y uno de mayo y el cuatro de junio de dos mil en el periódico de mayor circulación; y el treinta de mayo y el dos de junio del año en cita en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en los que se les hizo saber a los interesados que la inspección ocular se llevaría al cabo a las once horas del día veintisiete del mismo mes y año.

UNDECIMO.- El veintisiete de junio de dos mil, se llevó a cabo la diligencia antes referida, de la que se desprende lo siguiente:

"... CONFORME A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL, NOS CONSTITUIMOS EN EL POBLADO DENOMINADO `EL AGUAJE', MUNICIPIO DE SAN FELIPE, ESTADO DE GUANAJUATO, Y TODA VEZ QUE SE PRACTICARON LAS NOTIFICACIONES EN TIEMPO Y FORMA, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS CC. TOEDORO GOMEZ FRAIDE, APOLINAR SUCHILT SOLIS Y LEONARDO GOMEZ FRAIDE, PLENAMENTE IDENTIFICADOS Y RECONOCIDOS EN AUTOS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO RESPECTIVAMENTE, DEL COMISARIADO EJIDAL DEL POBLADO 'EL AGUAJE', MUNICIPIO DE SAN FELIPE, ESTADO DE GUANAJUATO; DE LOS CC. MARIA ESTHER SAENZ PEDROZA, MARIA SANTOS CALVILLO FERNANDEZ, IGNACIO RAMIREZ LOPEZ, FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ, MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ DE PEDROZA, ANGELICA LOPEZ DE RAMIREZ, JOSE DE JESUS RAMIREZ GONZALEZ, MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ DE NAVA, FRANCISCO PEDROZA SAENZ E ISABEL LOPEZ DE

LA TORRE, NO SE ENCUENTRAN PRESENTES NI POR SI, NI POR PERSONA QUE LOS REPRESENTE LEGALMENTE; ACTO CONTINUO LOS PRESENTES INICIAMOS EL RECORRIDO DE LOS TERRENOS DEL CONTROVERTIDO, A LO QUE EXPONEMOS:

AL ESTE DE LOS TERRENOS Y ATRAVESANDO LA CARRETERA QUE VA DE SAN FELIPE A LEON, EN UNA SUPERFICIE DE 250-00-00 HAS., SE ENCUENTRAN 80-00-00 HAS. SEMBRADAS DE NOPAL TUNERO DE LA VARIEDAD REYNA; SE ENCUENTRAN 5-00-00 HAS. REFORESTADAS CON ARBOLES DE EUCALIPTO; Y 165-00-00 HAS. SEMBRADAS DE MAIZ Y CHILES.- - - AL OESTE DE LA CARRETERA QUE VA DE LEON A SAN FELIPE, EN UNA SUPERFICIE DE 745-00-00 HAS., SE ENCUENTRAN 359-00-00 HAS. SEMBRADAS DE MAIZ BLANCO, MAIZ SORGO, CHILES; SE ENCUENTRAN 350-00-00 HAS. EN PROCESO DE REFORESTACION, SEMBRADAS LAS SIGUIENTES VARIEDADES DE ARBOLES, EUCALIPTO, PINO GREG, PINO PIÑONERO, CEDRO, FRESNO Y CAPULIN; EN UNA SUPERFICIE DE 11-00-00 HAS. SE ENCUENTRA LA ZONA URBANA; EN UNA SUPERFICIE DE 25-00-00 HAS. ABARCAN LOS BORDOS QUE EN TOTAL SUMAN VEINTICINCO; Y LA SUPERFICIE DE 00-63-71 HAS. SE ABARCA LOS CAMINOS Y ACCESOS.- - - LA SUMA TOTAL DE LAS SUPERFICIES ANTES MENCIONADAS DAN UN TOTAL DE 995-63-71 HAS., TODAS LAS SUPERFICIE SE ENCUENTRAN CERCADAS CON POSTES TUBULARES, EN PARTES CON TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS Y EN OTRAS CON CINCO. SE ANEXA PLANO DESCRIPTIVO A ESCALA 1:20,00. - - - CON LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SIENDO LAS DIECISEIS HORAS DEL DIA VEINTISIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL, SE DA POR TERMINADA LA DILIGENCIA DE INSPECCION JUDICIAL...".

DUODECIMO.- Por auto de veinte de septiembre de dos mil, este Tribunal Superior, dictó un acuerdo para regularizar el procedimiento con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, toda vez que de las constancias que corren agregadas al expediente en que se actúa, no se advierte que se haya dado cabal cumplimiento a lo ordenado en el proveído de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, en virtud de que en el acta de veintisiete de junio de dos mil, en la que se llevó al cabo el desahogo de la prueba de inspección ocular, se desprende que los quejosos no comparecieron a dicha diligencia, a pesar de haber sido notificados en términos del artículo 173 de la Ley Agraria. Por lo que se ordenó enviar despacho al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, para que procediera a desahogar nuevamente la inspección ocular, previa notificación a los beneficiados en el amparo.

En cumplimiento al proveído que antecede y una vez que fueron debidamente notificados los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado "El Aguaje" y los amparistas, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, desahogó la inspección ocular el veintiséis de octubre de dos mil, de la que se desprende lo siguiente:

"SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DIA VEINTISEIS DE OCTUBRE DE 2000, LOS SUSCRITOS LIC. CARLOS RUIZ BECERRA E ING. MIGUEL ANGEL REGALADO ACUÑA, ACTUARIO EJECUTOR Y PERITO TOPOGRAFO RESPECTIVAMENTE, AMBOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA DE EJECUCION DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, ADSCRITA AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO DECIMO PRIMERO, SEDE EN GUANAJUATO CAPITAL, Y CONFORME A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, NOS CONSTITUIMOS EN EL POBLADO DENOMINADO EL AGUAJE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE, TODA VEZ QUE SE NOTIFICARON CONFORME A DERECHO A LAS PARTES EN LA PRESENTE DILIGENCIA, ENCONTRANDOSE PRESENTES LOS CC. TEODORO GOMEZ FAIDE, APOLINAR SUCHILT SOLIS Y LEONARDO GOMEZ FRAIDE, QUIENES SE IDENTIFICAN CON CREDENCIALES EXPEDIDAS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL FOLIOS NUMEROS, 76944164, 16013859 Y 016012734 RESPECTIVAMENTE, MANIFESTANDO SER LOS INTEGRANTES DEL COMISARIADO EJIDAL, NO PRESENTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE, QUIENES MANIFIESTAN ADEMAS QUE OBRA EN AUTOS EL ACTA QUE SE LES REQUIERE, ASIMISMO ESTAN PRESENTES LOS CC. REGINO ANAYA MENDEZ Y PEDRO BECERRA CORDERO QUIENES SE IDENTIFICAN CON CREDENCIALES EXPEDIDAS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL FOLIO 76676052 Y 01642196 RESPECTIVAMENTE, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON PODERES ESPECIALES OTORGADOS A AMBOS POR LOS CC. MARIA SANTOS CALVILLO HERNANDEZ, IGNACIO RAMIREZ LOPEZ, MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ DE PEDROZA, FRANCISCO PEDROZA S., MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ DE NAVA, FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ, MARIA ISABEL LOPEZ DE LA TORRE, TODOS LOS PODERES ANTES MENCIONADOS FUERON OTORGADOS ANTE LA FE DEL LIC. FRANCISCO FERNANDEZ REGALADO, NOTARIO PUBLICO NUMERO 32, DE LA CIUDAD DE LEON, GTO., PODER ESPECIAL QUE CONFIERE FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ, EN CARACTER DE ALBACEA DE LA C. ANGELINA LOPEZ DE LA TORRE DE RAMIREZ, ANTE LA FE DEL LIC. RAUL ROBLES ALVAREZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO 42, DE LA CIUDAD DE LEON, GTO., ASIMISMO

PRESENTAN LA REVOCACION DE MANDATO QUE REALIZAN MARIA ISABEL LOPEZ DE LA TORRE, MARIA SANTOS CALVILLO HERNANDEZ, MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ DE PEDROZA, MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ DE NAVA, FRANCISCO PEDROZA S. E IGNACIO RAMIREZ LOPEZ; ACTO CONTINUO TODOS LOS PRESENTES NOS TRASLADAMOS A LOS TERRENOS QUE SE ORDENAN EN EL AUTO DE REFERENCIA, INICIANDO A CONTINUACION LA DESCRIPCION DE LOS TERRENOS EN EL AUTO DE REFERENCIA, INICIANDO A CONTINUACION LA DESCRIPCION DE LOS TERRENOS, ASIMISMO LA INSPECCION OCULAR ORDENADA; EN LOS TERRENOS QUE SE UBICAN AL ESTE DE LA CARRETERA QUE VA DE SAN FELIPE A LEON, SE ENCUENTRAN EN UNA SUPERFICIE DE 250-00-00 HAS. SE ENCUENTRAN 80-00-00 HAS. SEMBRADAS DE NOPAL TUNERO DE LA VARIEDAD REYNA, 5-00-00 SE ENCUENTRAN REFORESTADAS, CON ARBOLES DE EUCALIPTO, ASIMISMO LAS 165-00-00 HAS. RESTANTES SE ENCUENTRAN SEMBRADAS DE MAIZ, CEBADA Y TRIGO, COSECHANDOSE FRIJOL, EN SU LINEA NORTE SE SEMBRARON UNA LINEA DE MAGUEY, EN LA COLINDANCIA CON EL POBLADO EL MAGUEY. AL OESTE DE LA CARRETERA QUE VA DE SAN FELIPE A LEON, EN UNA SUPERFICIE DE 745-63-71 HAS., SE ENCUENTRAN 359-00-00 HAS. SEMBRADAS DE MAIZ BLANCO, TRIGO Y CEBADA; SE ENCUENTRAN 350-00-00 HAS. EN PROCESO DE REFORESTACION, SEMBRADAS DE ARBOLES DE EUCALIPTO, PINO GREG., PINO PIÑONERO, CEDRO, FRESNO Y CAPULIN, ADEMAS DE MAGUEY Y NOPAL; EN UNA SUPERFICIE DE 25-00-00 HAS. ABARCAN LOS BORDOS; EN UNA SUPERFICIE DE 11-00-00 HAS. ABARCA (SIC) LA ZONA URBANA Y EN UNA SUPERFICIE DE 00-63-71 HAS. ABARCA CAMINOS Y ACCESOS. LA SUMA TOTAL DE LAS SUPERFICIES ANTES DESCRITAS SUMAN 995-63-71 HAS., TODAS LAS SUPERFICIES ANTES MENCIONADAS SE ENCUENTRAN CERCADAS CON POSTES TUBULARES Y CUATRO HILOS DE ALAMBRE DE PUAS, ADEMAS SE MENCIONA QUE SE REALIZARON TRABAJOS DE DESAZOLVE EN EL BORDO, ELEVANDO LA CORTINA EN CINCUENTA CENTIMETROS, SE ANEXA PLANO DESCRIPTIVO A ESCALA 1:20,000. CON LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SIENDO LAS QUINCE TREINTA HORAS DEL VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL 2000, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE DILIGENCIA DE INSPECCION OCULAR, FIRMANDO, SELLANDO E IMPRIMIENDO SU HUELLA DACTILAR AL CALCE, LOS QUE EN LA PRESENTE INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO".

DECIMOTERCERO.- De lo anterior tenemos que de las inspecciones oculares de veintisiete de junio y veintiséis de octubre de dos mil, a las que este organo jurisdiccional les otorga valor probatorio con fundamento en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles y de las diversas constancias que integran el expediente que se resuelve, se concluye, que existen elementos suficientes para dejar sin efectos jurídicos los acuerdos presidenciales de inafectabilidad agrícolas números 53317, 53318, 59631, 59632, 59633, 59634, 59635 y 59746, expedidos a favor de Benjamín García Hernández, Amalia García Hernández, Juan Francisco Marina González, Julio García Hernández, José Marina González, Martha Marina González, Eloy Marina González, María del Carmen Marina González y Alicia Marina González, que amparan los predios "El Potrerillo" con una superficie de 161-87-10 (ciento sesenta y una hectáreas, ochenta y siete áreas, diez centiáreas), de agostadero; "El Monte", con una superficie de 92-36-52 (noventa y dos hectáreas, treinta y seis áreas, cincuenta y dos centiáreas) de agostadero; "El Aguaje", con una superficie de 107-68-65 (ciento siete hectáreas, sesenta y ocho áreas, sesenta y cinco centiáreas) de temporal y agostadero; "Guadalupe", con una superficie de 98-05-60 (noventa y ocho hectáreas, cinco áreas, sesenta centiáreas) de temporal; "San Gabriel", con una superficie de 100-68-25 (cien hectáreas, sesenta y ocho áreas, veinticinco centiáreas) de temporal; "San Juan", con una superficie de 91-05-20 (noventa y una hectáreas, cinco áreas, veinte centiáreas) de temporal; "La Presa" con una superficie de 144-01-97 (ciento cuarenta y cuatro hectáreas, una área, noventa y siete centiáreas) de temporal y agostadero; "San Rafael", con una superficie de 64-34-93 (sesenta y cuatro hectáreas, treinta y cuatro áreas, noventa y tres centiáreas) de temporal; y "El Carmen" con una superficie de 135-55-49 (ciento treinta y cinco hectáreas, cincuenta y cinco áreas, cuarenta y nueve centiáreas) de agostadero; predios que actualmente son propiedad de Esther Sáenz de Pedroza y María Isabel López de la Torre; Ignacio Ramírez López; Francisco Pedroza Sáenz; J. de Jesús Ramírez González; Angélica López de Ramírez; María del Socorro Ramírez de Pedroza; Francisco Ramírez López; María de los Angeles Ramírez de Nava y María Santos Calvillo Hernández, respectivamente, en virtud de haberse configurado los supuestos que establecen los artículos 418, fracción II y 419 de la Ley Federal de Reforma Agraria, toda vez que quedó acreditado que los propietarios de las diversas fracciones que integran el predio "El Aguaje", abandonaron las citadas superficies, permaneciendo inexplotadas por más de dos años consecutivos, según se desprende de las actas de inexplotación respectivas de dieciocho, veinte, veintidós, veintitrés y veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, así como de la inspección ocular de veintisiete de junio de dos mil, que se llevó a cabo en cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa.

DECIMOCUARTO.- Por lo que se considera procedente conceder al grupo peticionario una superficie de 995-63-71 (novecientas noventa y cinco hectáreas, sesenta y tres áreas, setenta y una centiáreas), de la siguiente forma: 467-43-95 (cuatrocientas sesenta y siete hectáreas, cuarenta y tres áreas, noventa y cinco centiáreas) de temporal, 45-00-65 (cuarenta y cinco hectáreas, sesenta y cinco centiáreas) de agostadero de buena calidad, y 483-19-11 (cuatrocientas ochenta y tres hectáreas, diecinueve áreas, once centiáreas) de agostadero de mala calidad, que se tomarán del predio denominado "El Aguaje", en sus fracciones "El Potrerillo", "El Monte", "Fracción Nueve del Aguaje", "Lote Siete del Aguaje", "San Gabriel", "Lote Cinco del Aguaje", "San Juan", "La Presa", "San Rafael", "Fracción Dos del Aguaje o El Carmen", propiedad de Esther Sáenz de Pedroza y María Isabel López de la Torre, Ignacio Ramírez López, Francisco Pedroza Sáenz, Jesús Ramírez González, Angélica López de Ramírez, María del Socorro Ramírez de Pedroza, Francisco Ramírez López, María de los Angeles Ramírez de Nava, y María Santos Calvillo Hernández, afectables de conformidad a lo establecido por el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, interpretado en sentido contrario, puesto que quedó demostrado que dichos terrenos han permanecido en inexplotación por más de dos años consecutivos por parte de sus propietarios, sin causa legal que lo justifique.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 43 y 189 de la Ley Agraria; 1o. y 9o. fracción VIII y fracción II del cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número D.A.2415/98, del ocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho, es de resolverse, y se

RESUELVE:

PRIMERO.- Es procedente la dotación de tierras promovida por campesinos del poblado denominado "El Aguaje", Municipio de San Felipe, Estado de Guanajuato.

SEGUNDO.- Se dejan sin efectos jurídicos los acuerdos presidenciales de veintiuno de junio de mil novecientos cincuenta, publicados en el **Diario Oficial de la Federación** el nueve de septiembre del mismo año; cinco de julio de mil novecientos cincuenta, publicados en el **Diario Oficial de la Federación** el veinticinco de noviembre del mismo año; cinco de julio de mil novecientos cincuenta, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el veintisiete de noviembre del mismo año; cinco de julio de mil novecientos cincuenta, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el veinticuatro de noviembre de ese mismo año; cinco de julio de mil novecientos cincuenta, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el veinticinco de noviembre del mismo año; diecinueve de julio de mil novecientos cincuenta, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el ocho de diciembre del mismo año; asimismo, procede la cancelación de los certificados de inafectabilidad agrícolas 53316, 53317, 53318, 59631, 59632, 59633, 59634, 59635 y 59746 expedidos a favor de Benjamín García Hernández, Amalia García Hernández, Juan Francisco Marina González, Julio García Hernández, José Marina González, Martha Marina González, Eloy Marina González, María del Carmen Marina González y Alicia Marina González, que amparan los predios denominados "El Potrerillo", con 161-87-10 (ciento sesenta y una hectáreas, ochenta y siete áreas y diez centiáreas) de agostadero; "El Monte", con 92-36-52 (noventa y dos hectáreas, treinta y seis áreas y cincuenta y dos centiáreas) de agostadero; "El Aguaje" con 107-68-65 (ciento siete hectáreas, sesenta y ocho áreas y sesenta y cinco centiáreas) de temporal y agostadero; "Guadalupe" con 98-05-60 (noventa y ocho hectáreas, cinco áreas y sesenta centiáreas) de temporal; "San Gabriel" con 100-68-25 (cien hectáreas, sesenta y ocho áreas y veinticinco centiáreas) de temporal; "San Juan" con 91-05-20 (noventa y una hectáreas, cinco áreas y veinte centiáreas) de temporal; "La Presa" con 144-01-97 (ciento cuarenta y cuatro hectáreas, una área y noventa y siete centiáreas) de temporal y agostadero; "San Rafael" con 64-34-93 (sesenta y cuatro hectáreas, treinta y cuatro áreas y noventa y tres centiáreas) de temporal y "El Carmen" con 135-55-49 (ciento treinta y cinco hectáreas, cincuenta y cinco áreas y cuarenta y nueve centiáreas) de agostadero, propiedad actualmente de Esther Sáenz de Pedroza y María Isabel López de la Torre; Ignacio Ramírez López; Francisco Pedroza Sáenz; J. de Jesús Ramírez González, Angelina López de Ramírez; María del Socorro Ramírez de Pedroza; Francisco Ramírez López; María de los Angeles Ramírez de Nava y María Santos Calvillo Hernández, respectivamente.

TERCERO.- Es de dotarse y se dota al poblado referido en el resolutivo primero de esta sentencia de 995-63-71 (novecientas noventa y cinco hectáreas, sesenta y tres áreas y setenta y una centiáreas), de las cuales 467-43-95 (cuatrocientas sesenta y siete hectáreas, cuarenta y tres áreas y noventa y cinco centiáreas) son de temporal, 45-00-65 (cuarenta y cinco hectáreas y sesenta y cinco centiáreas) son de agostadero de buena calidad y 483-19-11 (cuatrocientas ochenta y tres hectáreas, diecinueve áreas y once centiáreas) son de agostadero en terrenos áridos, que se tomarán íntegramente del predio denominado "El Aguaje" en sus fracciones "El Potrerillo", "El Monte", "Fracción Nueve del Aguaje", "Lote Siete del Aguaje", San Gabriel", "Lote Cinco del Aguaje", "San Juan", "La Presa", "San Rafael", "Facción Dos del Aguaje o El Carmen", propiedad de Esther Sáenz de Pedroza y María Isabel López de la Torre,

Ignacio Ramírez López, Francisco Pedroza Sáenz, J. Jesús Ramírez González, Angelina López de Ramírez, María del Socorro Ramírez de Pedroza, Francisco Ramírez López, María de los Angeles Ramírez de Nava y María Santos Calvillo Hernández, ubicadas en el Municipio de San Felipe, Estado de Guanajuato, afectables en términos del artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria interpretado en sentido contrario; superficie que se localizará de acuerdo al plano proyecto que obra en autos, en favor de 79 (setenta y nueve) campesinos capacitados que se relacionan en el considerando tercero de esta sentencia. Esta superficie pasará a ser propiedad del núcleo de población beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres; en cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá de acuerdo con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria y podrá constituir la parcela escolar, la Unidad Agrícola Industrial para la Mujer y la Unidad Productiva para el Desarrollo Integral de la Juventud.

CUARTO.- Publíquense: esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato; los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscríbase en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y procédase a hacer la cancelación respectiva; asimismo, inscríbase en el Registro Agrario Nacional; el que deberá expedir los certificados de derechos correspondientes, de acuerdo a las normas aplicables y conforme a lo establecido en esta sentencia.

QUINTO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Guanajuato y a la Procuraduría Agraria; con testimonio de esta sentencia comuníquese al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dentro del Juicio de Amparo directo D.A. 2415/98, ejecútese y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario, siendo ponente el Magistrado licenciado Ricardo García Villalobos Gálvez, y Secretario de Estudio y Cuenta el licenciado Enrique García Serrano, firman los Magistrados que lo integran, ante la Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a tres de noviembre de dos mil.- El Magistrado Presidente, **Luis Octavio Porte Petit Moreno**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Rodolfo Veloz Bañuelos**, **Marco Vinicio Martínez Guerrero**, **Luis Angel López Escutia**, **Ricardo García Villalobos Gálvez**.- Rúbricas.- La Secretaria General de Acuerdos, **Claudia Dinorah Velázquez González**.- Rúbrica.

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 993/93, relativo a la creación de un nuevo centro de población ejidal, que de constituirse se denominará Río Uxpanapa, Municipio de Minatitlán, Ver.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver el juicio agrario número 993/93, que corresponde al expediente 5841, relativo a la creación de un nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominará "Río Uxpanapa"; en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y seis, misma que terminó de engrosarse el once de junio de mil novecientos noventa y siete, en el juicio constitucional número 101/994, por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, y que quedó intocada en el toca en revisión 61/98, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito en Villahermosa, Tabasco; el veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y ocho, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito de diez de marzo de mil novecientos setenta y ocho, un grupo de campesinos radicados en el Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz, solicitaron a la Secretaría de la Reforma Agraria, por conducto del Delegado Agrario en la propia entidad federativa, la creación de un nuevo centro de población ejidal, que de constituirse se denominará "Río Uxpanapa", manifestando su conformidad para trasladarse al lugar en donde hubiese tierras disponibles; señalaron como predio de probable afectación, terrenos nacionales que se localizan en el Municipio de Minatitlán, que colinda con el Río Uxpanapa y los límites de los Estados de Veracruz y Oaxaca.

SEGUNDO.- El expediente respectivo se instauró por la Dirección General de Procedimientos Agrarios; Dirección de Nuevos Centros de Población Ejidal, dependiente de la Secretaría de la Reforma Agraria, el nueve de febrero de mil novecientos setenta y nueve y se registró con el número 5841.

La solicitud de referencia se publicó en el **Diario Oficial de la Federación,** el trece de marzo de mil novecientos setenta y nueve y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, el dos de octubre de ese mismo año.

TERCERO.- El nueve de febrero de mil novecientos setenta y nueve, la Dirección General de Nuevo Centro de Población expidió los nombramientos del Comité Particular Ejecutivo, el cual quedó integrado

por Pedro Agustín Vicente, Aniceto Castillo Mariano y José Bernardo Ruiz, como presidente, secretario y vocal, respectivamente.

CUARTO.- La Delegación Agraria del Estado de Veracruz comisionó al coronel e ingeniero León Castro Troncoso, para realizar los trabajos técnicos e informativos; al rendir su informe, sin fecha, manifestó que investigó un terreno baldío propiedad de la Nación, con superficie de 6,273-00-00 (seis mil doscientas setenta y tres hectáreas) de humedad, temporal y monte, que se encuentra ubicado en el Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz, el cual puede dedicarse a los cultivos de maíz, arroz, soya, tabaco, hortalizas, leguminosas y frutales.

QUINTO.- La Dirección General de Procedimientos Agrarios, el cuatro de junio de mil novecientos setenta y nueve, emitió opinión, en la que propone conceder una superficie de 6,273-00-00 (seis mil doscientas setenta y tres hectáreas), de humedad, temporal y monte, que se tomarán de los terrenos propiedad de la Nación.

SEXTO.- La Comisión Agraria Mixta en el Estado de Veracruz, por oficio de veintidós de agosto de mil novecientos setenta y nueve, emitió su dictamen en sentido positivo, estimando procedente la creación del nuevo centro de población ejidal solicitado.

SEPTIMO.- El dictamen de referencia fue sometido a consideración del Ejecutivo Estatal; el Gobernador del Estado de Veracruz no emitió opinión.

OCTAVO.- La Dirección General de Tenencia de la Tierra, por oficio número 532579 de siete de agosto de mil novecientos ochenta y uno, solicitó a la Delegación Agraria en el Estado de Veracruz, la práctica de trabajos técnicos e informativos complementarios, consistentes en llevar a cabo el levantamiento topográfico de la superficie propuesta para beneficiar al nuevo centro de población que de constituirse se denominará "Río Uxpanapa".

En virtud de lo anterior, la Delegación Agraria en el Estado designó al ingeniero J. Trinidad Olivares Gama; éste rindió su informe el veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y seis, manifestando que la superficie que se consignó en el plano proyecto es de 6,273-00-00 (seis mil doscientas setenta y tres hectáreas), pero que físicamente en el terreno se encontró una superficie total de 5,083-00-00 (cinco mil ochenta y tres hectáreas), ya que en la parte Este existe una cordillera rocosa inaccesible; por el Oeste se localiza el acantilado del Río Oaxaca; por el Norte, los poblados "El 12" y "Los Amarillos"; y al Sur, terrenos que se denominan "La Paz" y "La Gringa", perteneciente a un grupo de pequeños propietarios.

La Consultoría Regional en el Estado de Veracruz, solicitó al Delegado Agrario, comisionara personal de su adscripción a fin de determinar la situación jurídica que guardan los terrenos que se propone dotar, para constituir el nuevo centro de población ejidal.

En cumplimiento, la Delegación Agraria, por oficio 29664 de siete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, instruyó al licenciado Jaime López Rodríguez; dicho profesionista rindió su informe el once de agosto de ese mismo año, en el que manifestó que efectivamente los solicitantes están en posesión de 5,083-00-00 (cinco mil ochenta y tres hectáreas), las cuales se explotan con cultivos propios de la región, como maíz, frijol, arroz, plátano y yuca; además cuenta con cabezas de ganado vacuno, puercos y aves de corral; asimismo, informó que los solicitantes están de acuerdo en que se les reconozca únicamente la superficie de 5,083-00-00 (cinco mil ochenta y tres hectáreas), ya que la restante no es de utilidad por ser terrenos escabrosos; el comisionado hace mención de que la superficie se localiza dentro del decreto expropiatorio de cuatro de enero de mil novecientos setenta y cuatro, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de diez del mismo mes y año, por el que se establece el distrito de drenaje de Uxpanapa y se declara de utilidad pública la adquisición de una superficie aproximada de 260,000-00-00 (doscientas sesenta mil hectáreas), ubicada en los municipios de Las Choapas, Minatitlán, Hidalgotitán y Jesús Carranza, Veracruz y Santa María Chimalapa, Oaxaca.

Agregado al expediente, obra acta de entrega precaria que hizo la Delegación Agraria del Estado de Veracruz al grupo denominado "Río Uxpanapa", Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz, el diez de julio de mil novecientos noventa y uno, de una superficie de 5,083-00-00 (cinco mil ochenta y tres hectáreas) de terrenos propiedad de la Nación, para beneficiar a doscientos ochenta y seis campesinos afectados por la construcción de la presa "Cerro de Oro" hoy (Miguel de la Madrid Hurtado), los cuales son procedentes de los ex-ejidos "Arroyo Tambos", "Santa Flora", "Piedra Azúcar" y "Arroyo Caracol Estrella", del Municipio de San Felipe Usila, Estado de Oaxaca.

NOVENO.- En los términos del artículo 16 de la Ley Federal de Reforma Agraria, el Cuerpo Consultivo Agrario, el quince de julio de mil novecientos noventa y dos, emitió dictamen positivo; sin que éste tenga carácter vinculatorio, en virtud de que el Tribunal Superior Agrario está dotado de autonomía y plena jurisdicción, conforme a lo dispuesto en la fracción XIX del artículo 27 constitucional. El expediente se turnó debidamente integrado para su resolución definitiva el diez de agosto de mil novecientos noventa y tres.

DECIMO.- Por auto de once de agosto de 1993, se tuvo por radicado el presente expediente, se registró bajo el número 993/93; se notificó a los interesados en términos de ley y a la Procuraduría Agraria.

DECIMO PRIMERO.- El dos de noviembre de mil novecientos noventa y tres este Tribunal Superior Agrario emitió sentencia en el juicio agrario 993/93, resolviendo:

"PRIMERO.- Es procedente la solicitud de creación de un nuevo centro de población ejidal, promovida por campesinos radicados en el poblado denominado "Río Uxpanapa", Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz.

SEGUNDO.- Constitúyase el nuevo centro de población ejidal "RIO UXPANAPA", Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz, con una superficie de 5,083-00-00 (cinco mil ochenta y tres hectáreas), de humedad, temporal y monte, propiedad de la Nación, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria, extensión que se localizará de conformidad con el plano proyecto que obra en autos, esta superficie se destinará para satisfacer las necesidades agrarias de doscientos setenta y tres campesinos capacitados, los cuales fueron relacionados en el considerando tercero de esta sentencia; en cuanto a la determinación del destino de las tierras y a la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria y podrá constituirse el área de asentamiento humano y la parcela escolar, así como la unidad agrícola e industrial de la mujer y la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud.

TERCERO.- Publíquese esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz; los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario y en los estrados de este Tribunal, inscríbase en el Registro Público de la Propiedad y procédase a hacer la cancelación respectiva; asimismo, inscríbase en el Registro Agrario Nacional el que deberá expedir los certificados de derechos correspondientes.

CUARTO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Veracruz, a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Procuraduría Agraria; para los efectos de los artículos 248 y 334 de la Ley Federal de Reforma Agraria; ejecútese y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido."

DECIMO SEGUNDO.- Inconforme con la sentencia anterior, los integrantes del comisariado y consejo de vigilancia de los bienes comunales de Santa María Chimalapa, municipio del mismo nombre, Distrito de Juchitán, Estado de Oaxaca, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, así como su ejecución, argumentando que la superficie dotada para la constitución del nuevo centro de población ejidal denominado "Río Uxpanapa", les fue reconocida y titulada por Resolución Presidencial publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el dieciséis de marzo de mil novecientos sesenta y siete, la que dicen, reconoce y titula una superficie de 460,000-00-00 (cuatrocientas sesenta mil hectáreas); del juicio de amparo en comento, conoció el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, bajo el número 1246/995, quien el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, decretó el sobreseimiento del juicio de amparo, razonando en la parte que interesa: "...Resulta ilustrativa al juzgador para determinar que con la resolución combatida y su ejecución no se afecta la esfera jurídica de la quejosa, ya que tales dictámenes periciales concuerdan en el sentido de que, con el acto reclamado, no existió sobreposición y jamás se abarcaron o tomaron terrenos comunales del poblado quejoso, ya que las tierras dotadas se encuentran comprendidas dentro del decreto expropiatorio de fecha cuatro de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el diez de los propios mes y año. En este orden de ideas, debe estimarse que el quejoso carece de interés jurídico para demandar la protección constitucional... No es óbice a lo anteriormente resuelto, lo alegado por la parte quejosa en el sentido de que se violan en su perjuicio los artículos 14, 16 y 27 constitucionales, en virtud de que se les priva de la posesión de terrenos de su propiedad, sin que hayan sido oídos ni vencidos en juicio, mediante una resolución carente de motivación y fundamentación, en virtud de que como se dijo, los terrenos dotados al nuevo centro de población, son propiedad de la Nación, y no se encuentran comprendidos dentro del área que como de su propiedad alega la impetrante de garantías...".

La resolución anterior, causó ejecutoria mediante acuerdo de veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz.

DECIMO TERCERO.- Por separado, los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado denominado "Jorge L. Tamayo", solicitaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de la resolución dictada por el Tribunal Superior Agrario en favor del nuevo centro de población ejidal "Río Uxpanapa", al no tomar en consideración el mandamiento del Gobernador del Estado de Veracruz, dictado en el expediente 7388, de veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y tres, que les concedió una superficie de tierra de manera provisional, la que se encuentra incluida en la que se dota al poblado "Río Uxpanapa"; el juicio de amparo en comento fue radicado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz bajo el número 101/94, quien dictó sentencia el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y seis, misma que terminó de engrosar el once de junio de mil novecientos noventa y siete, la que

concluyó con el siguiente punto resolutivo: "UNICO.- La Justicia de la Unión ampara y protege al núcleo de población ejidal "Jorge L. Tamayo" del Municipio de Minatitlán, Veracruz, en contra de los actos de las autoridades responsables precisadas en el exordio de este fallo, en términos del considerando quinto del mismo.". El considerando quinto, textualmente dice: "QUINTO.- Los conceptos de violación que se hacen valer, son substancialmente fundados y se suple la queja deficiente en lo conducente, con base al artículo 227 de la Ley de Amparo. Los impetrantes de garantías argumentan en síntesis, que las autoridades señaladas como responsables, vulneran en su perjuicio las garantías de audiencia y de legalidad, que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, en virtud de que sin haberlos oído ni vencido en juicio, pretenden desposeerlos de cuatrocientas hectáreas de terreno que tienen en posesión en forma quieta, pacífica, continua, pública y de buena fe, en su carácter de ejidatarios, y para regularizar su posesión que en el año de mil novecientos ochenta y siete, solicitaron ante la Comisión Agraria Mixta, se abriera el procedimiento correspondiente por la vía de dotación sin embargo, antes de que se instaurara su solicitud, también se había solicitado con fecha 10 de marzo de 1978, en la vía de Creación de Nuevo Centro de Población Ejidal, los mismos terrenos por parte del Núcleo de Población Ejidal, Río Uxpanapa (hoy tercero perjudicado), a pesar de que ya se había dictado dictamen favorable a sus intereses por parte del Cuerpo Consultivo Agrario, aprobado por el mandamiento del Gobernador del Estado y concedió los terrenos que tienen en posesión, lo que se advierte de las actas de entrega precaria de fecha 17 de septiembre de 1990, realizada por el licenciado Alfonso Domínguez Romero, en su carácter de Subdelegado de Organización y Desarrollo Agrario en la Zona Sur del Estado de Veracruz, y el ingeniero Ramón Guevara Mendoza, con el carácter de Comisionado por parte de dicha Subdelegación dependiente de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante oficio SODA/00510/90, de fecha 3 del mes y año antes citados, al grupo ejidal quejoso denominado "Jorge L. Tamayo", del Municipio de Minatitlán, Veracruz, de una superficie de 468-91-95 hectáreas ante los representantes del Comité Particular Agrario del precitado núcleo de población (fojas 416 y 417 de autos), y la diversa acta de posesión y deslinde provisional de fecha 27 de octubre de 1993, en la que el ingeniero Rosario Acosta Ochoa, Comisionado Auxiliar de la Comisión Agraria Mixta en el Estado, en cumplimiento al oficio 195 de fecha 19 del mes y año antes citados, dio posesión provisional total de la dotación al ejido "Jorge L. Tamayo", del Municipio de Minatitlán, Veracruz (quejoso), dando cumplimiento con ello al mandamiento del C. Gobernador Constitucional del Estado de fecha 3 de septiembre de 1993 (fojas de la 421 a la 423 de autos), por lo que posteriormente, el Tribunal Superior Agrario con fecha dos de noviembre de mil novecientos noventa y tres resolvió en el sentido de que se dotara al poblado tercero perjudicado de 5,083-00-00 hectáreas dentro de las cuales se encuentran incluidas las 400-00-00 que viene poseyendo el poblado quejoso y que pretende entregar a dicho poblado tercero perjudicado, cuando que desde hace años los hoy quejosos vienen poseyendo como ya se dijo la superficie mencionada. Por tanto, el Cuerpo Consultivo Agrario como el Tribunal Superior Agrario, debieron tomar en consideración ese derecho de posesión, virtud de que, si bien es cierto que los hoy quejosos solicitaron posteriormente la dotación de una parte de la superficie total controvertida y que ya poseían, es inconcuso que las responsables debieron respetar dicha posesión, toda vez que desde mucho antes de que se fallara en definitiva el procedimiento instaurado por los hoy terceros perjudicados ya existían constancias de la posesión de dicha superficie por parte de los hoy quejosos, por lo que en tales circunstancias se violan en su perjuicio los preceptos constitucionales que se invocan.- Por otra parte, obra en autos, la prueba pericial recabada de oficio por este Juzgado en cumplimiento a la ejecutoria de fecha dos de febrero de mil novecientos noventa y seis, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, la que revocó la sentencia de fecha siete de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, dictada por este juzgado y en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, ordenándose por ende, la reposición del procedimiento; pureza (sic) practicada por los ingenieros Miguel Rivera Animas, perito topógrafo designado por la parte quejosa e ingeniero José Antonio López Armas, perito topógrafo oficial designado por este Juzgado de Distrito, y de cuyos dictámenes se desprende que efectivamente la resolución definitiva reclamada y dictada por el Tribunal Superior Agrario afecta toda la superficie de 400-00-00 hectáreas dadas en posesión precaria y provisional al poblado "Jorge L. Tamayo" (quejoso), es decir, dicha superficie queda dentro de las 5,083-00-00 hectáreas que por resolución definitiva de dicha autoridad responsable dotó al poblado tercero perjudicado; y la diligencia de inspección ocular practicada por Alejandro Valdés Manzanilla, en su carácter de representante de la Secretaría de la Reforma Agraria, en cumplimiento al oficio de comisión número SODA-535/91, que se le giró a dicho representante el día cuatro de octubre de mil novecientos noventa y uno, por parte del Subdelegado de Organización y Desarrollo Agrario, Zona Sur, a practicarse en los terrenos que comprende el plano de localización del Nuevo Centro de Población Ejidal Río Uxpanapa, Municipio de Minatitlán, Veracruz (tercero perjudicado), misma que se llevó a efecto el día diez siguiente (octubre de mil novecientos noventa y uno), y en la que se comprobó que efectivamente los campesinos del Nuevo Centro de Población Ejidal "Jorge L. Tamayo", del propio Municipio (hoy quejoso), estaban dentro de la superficie de 5,083-00-00 hectáreas con que

fueron dotados los campesinos del poblado tercero perjudicado, por lo que era necesario que la Delegación Agraria en el Estado o la Subdelegación de Organización y Desarrollo Agrario Zona Sur, comisionara personal técnico capacitado, para que se realizara el replanteo de linderos de los campesinos del poblado de Río Uxpanapa y enseguida lo correspondiente a los hijos de los ejidatarios que se encontraban en el Ejido "Jorge L. Tamayo", inspección con la que el promotor agrario comisionado informó a la Subdelegación oficiante el día once del mes y año antes citados (fojas 270 y 271 de autos). De dichas probanzas, se desprende, que le asiste la razón a los peticionarios de garantías, en virtud de que se advierte que se violan en su perjuicio las garantías constitucionales que éstos invocan. En efecto, de las constancias relativas al expediente 7388 (siete mil trescientos ochenta y ocho), respecto de la solicitud de dotación de tierras, elevada a nombre del poblado "Jorge L. Tamayo", del Municipio de Minatitlán, Veracruz (hoy quejoso), tramitación desahogada por la Comisión Agraria Mixta del Estado, en la que se tomaron en cuenta los trabajos censales y técnicos e informativos, así como los datos proporcionados por el Registro Público de la Propiedad y el dictamen emitido por dicha comisión el día veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y tres, se desprende que por mandamiento del Gobernador del Estado de fecha veinticinco siguiente, se declaró procedente dicha acción dotatoria solicitada, y se ordenó dotar a dicho poblado de 400-00-00 hectáreas, propiedad de la Nación, según Decreto Expropiatorio de 4 de enero de 1974 y publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el día 10 de los propios mes y año precitados (fojas 213 bis de autos), que expropia una superficie de 260,000-00-00 hectáreas para el reacomodo de los campesinos afectados por las presas "Miguel Alemán" y "Cerro de Oro", hoy "Miguel de la Madrid", ordenando asimismo devolver el expediente a la oficina de su origen para que una vez que se pusiera a los vecinos en posesión provisional de las tierras que les fueron concedidas, en apoyo a lo dispuesto por el artículo 299 de la Ley Federal de Reforma Agraria, fuera enviado al Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria para los efectos legales procedentes, mandamiento que se cumplimentó mediante acta de posesión y deslinde provisional de fecha 27 de octubre de 1993, practicada por el ingeniero Rosario Acosta Ochoa, Comisionado Auxiliar de la Comisión Agraria Mixta en el Estado (fojas de la 421 a la 423 y de la 418 a la 420 de autos). Por otra parte, obra agregada a fojas de la 204 a la 213 de autos, la resolución de fecha dos de noviembre de mil novecientos noventa y tres, emitida por el Tribunal Superior Agrario en el juicio agrario número 993/993, que corresponde al expediente número 8841, relativo a la Creación del Nuevo Centro de Población Ejidal que de constituirse se denominaría "Río Uxpanapa" (hoy tercero perjudicado), promovido por un grupo de campesinos radicados en el Municipio de Minatitlán, Veracruz, mediante la cual declaró procedente la solicitud planteada, y que se constituyera el nuevo centro de población de mérito, con una superficie de 5,083-00-00 hectáreas, de humedad, temporal y monte, propiedad de la Nación, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria, superficie que se localizará conforme al plano proyecto que obra en ese procedimiento, destinando esa superficie para satisfacer las necesidades agrarias de doscientos sesenta y tres campesinos capacitados. Ahora bien, de los relatados expedientes agrarios de solicitud de dotación y de Creación de Nuevo Centro de Población Ejidal, promovidos por los quejosos y por los ahora terceros perjudicados, se advierte que ambos poblados solicitaron como de probable afectación la superficie de 260,000-00-00 hectáreas, propiedad de la Nación, según Decreto Expropiatorio de 4 de enero de 1974 y publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el día 10 siguiente (fojas 213 bis). Por otro lado, según los quejosos elevaron la solicitud de dotación de tierras ante las autoridades correspondientes en el año de mil novecientos ochenta y siete, después de la diversa solicitud de creación de nuevo centro de población ejidal hecha por el poblado Río Uxpanapa (el diez de marzo de mil novecientos setenta y ocho), ante las mismas autoridades. Según se observa del sumario, los impetrantes de garantías eran poseedores legítimos de la superficie controvertida de aproximadamente 400-00-00 hectáreas, desde antes que el propio Tribunal Superior Agrario dictara resolución definitiva respecto al poblado Río Uxpanapa, inclusive, dentro del procedimiento agrario de creación de ese nuevo centro de población ejidal, se practicaron diligencias de las que se desprenden la posesión del poblado Jorge L. Tamayo, como son: La diligencia de inspección ocular practicada por Alejandro Valdés Manzanilla, en su carácter de representante de la Secretaría de la Reforma Agraria, en cumplimiento al oficio de comisión número SODA-535/91, que se le giró a dicho representante el día cuatro de octubre de mil novecientos noventa y uno, por parte del Subdelegado de Organización y Desarrollo Agrario, Zona Sur, a practicarse en los terrenos que comprende el plano de localización del Nuevo Centro de Población Ejidal Río Uxpanapa, Municipio de Minatitlán, Veracruz (tercero perjudicado), misma que se llevó a efecto el día diez siguiente (octubre de mil novecientos noventa y uno), con la que se comprobó que efectivamente los campesinos del Nuevo Centro de Población Ejidal "Jorge L. Tamayo", del propio municipio (hoy quejosos), estaban dentro de la superficie de 5,083-00-00 hectáreas con que fueron dotados los campesinos del poblado tercero perjudicado, por lo que resultaba necesario que la Delegación Agraria en el Estado o la Subdelegación de Organización y Desarrollo Agrario, Zona Sur, comisionara personal técnico capacitado, para que se realizara el replanteo de linderos de los campesinos del poblado Río Uxpanapa y enseguida lo

correspondiente a los hijos de los ejidatarios que se encontraban en el ejido Jorge L. Tamayo, circunstancias que el comisionado informó a la Subdelegación oficiante el día once del mes y año antes citados (fojas 270 y 271 de autos); así también con el acta de entrega precaria de fecha 17 de septiembre de 1990, donde consta la dotación de una superficie de 468-91-95 hectáreas, al grupo ejidal denominado "Jorge L. Tamayo", del Municipio de Minatitlán, Veracruz, realizada por funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, ante los representantes del Comité Particular Ejecutivo respectivo (fojas 416 y 417 de autos). Así las cosas, dable es concluir que resulta errónea la determinación del Tribunal responsable, al haber resuelto favorable la creación del nuevo centro de población ejidal tercero perjudicado, sin haber tomado en consideración que los integrantes del poblado "Jorge L. Tamayo" (hoy quejoso), se encontraban en posesión material de más de cuatrocientas hectáreas, comprendidas dentro de la superficie con la que creó el Nuevo Centro de Población Ejidal denominado "Río Uxpanapa" (hoy tercero perjudicado). Lo anterior, se encuentra debidamente acreditado en autos, con los dictámenes periciales del perito designado por la parte quejosa, así como el del perito oficial de este Juzgado, que determinan que la resolución definitiva reclamada del Tribunal Superior Agrario afecta toda la superficie de 400-00-00 hectáreas, dadas en posesión precaria y provisional al poblado "Jorge L. Tamayo". En las relacionadas consideraciones, resulta evidente que se vulneran en perjuicio de los hoy quejosos, las garantías de audiencia y legalidad en el procedimiento agrario, que consagran los artículos 14 y 16 Constitucionales, en razón de que han demostrado fehacientemente estar en posesión material de la superficie que les fue entregada en posesión precaria, que se encuentra dentro de las 5,083-00-00 hectáreas, con las que fue dotado el núcleo de población tercero perjudicado por lo que el Tribunal responsable debió haberlos llamado a juicio para que hiciera valer lo que a sus intereses conviniera, respecto del predio en cuestión. De manera que al haber quedado demostrada la posesión por parte de los hoy quejosos, respecto de la superficie controvertida, es lógico que al pretender ejecutar la resolución reclamada en favor del poblado tercero perjudicado, se vulneran sus garantías, puesto que no fueron oídos ni vencidos en dicho procedimiento agrario, lo cual debió haber advertido el Tribunal Superior Agrario al emitir la resolución que ahora se combate, subsanando dicha deficiencia, tal como lo establece el artículo cuarto transitorio, fracción II, último párrafo, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios que establece: "Si a juicio del Tribunal Superior o de los Tribunales Unitarios, en los expedientes que reciban no se ha observado la garantía de audiencia, se subsanará esta deficiencia ante el propio Tribunal." En mérito de lo anterior, lo que procede es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitados, en los términos de los razonamientos anteriormente expuestos...".

En contra de la sentencia anterior, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión, mismo que fue radicado ante el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, bajo el número de toca 61/98, autoridad federal, que el veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y ocho, resolvió dejar intocada la sentencia recurrida sujeta a revisión.

DECIMO CUARTO.- El catorce de octubre de mil novecientos noventa y ocho, el Tribunal Superior Agrario acordó lo siguiente: "...PRIMERO.- Se deja parcialmente sin efectos la sentencia definitiva del dos de noviembre de mil novecientos noventa y tres, emitida por el Tribunal Superior Agrario en el expediente del juicio agrario 993/93, que corresponde al expediente administrativo agrario 5841, relativos a la creación del nuevo centro de población ejidal al poblado "Río Uxpanapa", Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz, únicamente por lo que se refiere a la superficie que defiende el poblado quejoso.

SEGUNDO.- Túrnese el expediente del juicio agrario con el expediente administrativo agrario referidos, al Magistrado Ponente para que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, en su oportunidad, formule el proyecto de sentencia correspondientes y lo someta a la aprobación del Pleno de este Tribunal Superior.

TERCERO.- Remítase copia certificada de este acuerdo al órgano de control constitucional respectivo, para acreditar el cumplimiento que el Tribunal Superior Agrario está dando a la ejecutoria de amparo."

DECIMO QUINTO.- El quince de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, el Tribunal Superior Agrario ordenó proveer lo necesario para otorgar la garantía de audiencia del poblado denominado "Jorge L. Tamayo", ubicado en el Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz, en términos de la referida ejecutoria de amparo.

En diverso acuerdo de la misma fecha se dio cuenta del escrito presentado por los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado denominado "Río Uxpanapa", ubicado en el Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz, quienes señalaron para recibir y oír toda clase de notificaciones el ubicado en la calle de Orizaba número 16, primer piso, Módulo de la Procuraduría Agraria, colonia Roma, en la Ciudad de México, Distrito Federal, solicitando la entrega del plano definitivo de su poblado. Al respecto, se tuvo por señalado el domicilio indicado y a la petición relativa, se ordenó decir a los ocursantes que deberán estarse a la resolución dictada en el juicio de amparo 101/994, la que quedó intocada en el toca en revisión 61/98, por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito el veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y ocho, por virtud del cual, quedó insubsistente la sentencia pronunciada por este

Tribunal Superior Agrario el dos de noviembre de mil novecientos noventa y tres para efectos de otorgar garantías de audiencia al poblado denominado "Jorge L. Tamayo", por lo que no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado.

DECIMO SEXTO.- Los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado denominado "Jorge L. Tamayo", presentaron escrito ante este Tribunal Superior Agrario, el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en el que en la parte relativa expresan: "...Que ese Tribunal al considerar que se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento agrario de acuerdo a los artículos 327, 329, 330, 331 y 332 de la Ley Federal de Reforma Agraria, el 2 de noviembre de 1993, dictó sentencia constituyendo el nuevo Centro de Población Ejidal denominado "Río Uxpanapa", Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz, con una superficie de 5,083-00-00 Has., mismas que se pretendió ejecutar el 30 de enero de 1994, en la que quedaban incluidas las 976-25-30-90 Has., que el poblado "JORGE L. TAMAYO", mantiene en posesión.

Ahora bien, como este Tribunal Superior Agrario actuó en contra de nuestros intereses en la prosecución del expediente 993/93, del Nuevo Centro de Población Ejidal "Río Uxpanapa", no obstante que corre agregada a dicho expediente la diligencia de inspección ocular practicada por Alejandro Valdés Manzanilla, personal comisionado por la Subdelegación de Organización y Desarrollo Agrario Zona Sur, a través del numeral SODA-535/91 del 4 de octubre de 1991 en donde se comprueba la existencia de nuestra posesión, con fecha 2 de febrero de 1994, solicitamos ante el C. Juez Séptimo hoy Octavo, de Distrito en el Estado, el amparo y protección de la Justicia Federal, cuyo juicio quedó radicado bajo el número 101/94, emitiendo el juzgador sentencia a nuestro favor el 11 de junio de 1997, basándose en la jurisprudencia número mil trescientos cincuenta uno, publicada en la página dos mil ciento ochenta y dos, Segunda Parte, Salas y Tesis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, cuyo rubro es: "POSESION. DEBE RESPETARSE PARA PRIVAR A UN NUCLEO DE POBLACION EJIDAL DE ELLA". SE LE DEBE OIR EN DEFENSA. SEA QUE LA POSESION SEA "LEGITIMA O ILEGITIMA". Por ello, es que el A quo en el considerando quinto resuelve que: "...Así las cosas, dable es concluir que resulta errónea la determinación del Tribunal responsable, al haber resultado favorable la creación del Nuevo Centro de Población Ejidal tercero perjudicado, sin haber tomado en consideración que los integrantes del poblado "Jorge L. Tamayo" (hoy quejoso), se encontraban en posesión material de más de cuatrocientas hectáreas, comprendidas dentro de la superficie con la que creó el Nuevo Centro de Población Ejidal denominado "RIO UXPANAPA" (hoy tercero perjudicado).

En tal circunstancia, este Comisariado Ejidal del poblado "Jorge L. Tamayo", Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz, para los efectos legales procedentes conforme a lo establecido por la ley de la materia, en nuestro carácter de promoventes ya acreditada por el presente escrito, comparecemos a apersonarnos al procedimiento del referido juicio agrario, aportando los alegatos y pruebas que a nuestros intereses convienen, con el objeto de que los mismos sean considerados y surtan efectos al momento de que ese Tribunal Superior Agrario emita una nueva resolución y que nos permitimos exponer de la siguiente manera, atento a lo dispuesto por los artículos 8 y 27 Constitucionales y 186 y demás relativos de la Ley Agraria vigente.

1.- Que la Justicia Federal nos protegió en nuestra posesión, dado que al verificar con trabajos técnicos informativos realizados por los ingenieros Miguel Rivera Animas perito designado por nosotros y José Antonio López Armas perito designado por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, se comprobó que la superficie que nosotros ostentamos no es de 400-00-00 Has., sino que la superficie real que ocupamos consta de 662-34-59.90 Has. de terrenos de temporal y 313-90-71 Has., de terrenos cerriles, que en suma son 976-25-30.90 Has., misma que usufructuamos y explotamos con cultivos propios de la región consistentes en maíz, frijol, ajonjolí, plátano, pastos mejorados y típicos de la región, en donde también se encuentra constituida la Zona Urbana que cuenta con servicios públicos como son agua potable, luz eléctrica, escuela primaria completa, jardín de niños y vías de comunicación como caminos de terracería.

2.- Solicitamos a su Señoría el cabal cumplimiento de la sentencia del 11 de junio de 1997, recaída en el juicio de garantías 101/994, misma que quedó intocada por ejecutoria de 21 de agosto de 1998, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en el toca en revisión número 61/98, cuyo efecto es, que al dictar ese Tribunal Superior Agrario una nueva sentencia en el juicio agrario número 993/93, del Nuevo Centro de Población Ejidal denominado "RIO UXPANAPA", Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz, se excluya y se respete a nuestro favor las 976-25-30.90 Has. que tenemos en posesión...

...Con el objeto de promover nuestros alegatos y argumentos antes expuestos, nos permitimos aportar los siguientes testimonios de prueba los que desde luego, solicitamos sean considerados y tomados en cuenta al momento de que ese Organo Colegiado, emita su correspondiente resolución...

...e).- Fotocopia del dictamen pericial del 7 de junio de 1996, elaborado por el C. Ing. Miguel Rivera Animas, perito designado por nosotros en el juicio constitucional, en cinco fojas útiles.

f).- Copia heliográfica del plano informativo que elaboró el C. Ing. Miguel Rivera Animas, perito designado por nosotros en el juicio constitucional que se alude, el cual concuerda con el plano informativo realizado por el perito oficial designado por el juzgado del conocimiento del juicio de garantías, el cual refleja la situación real de los terrenos que poseemos...

...UNICO.- Nos tenga por presentado con este escrito, formulando nuestros alegatos en este juicio agrario, solicitando sean tomados en cuenta al resolverse esta controversia, y que al emitirse la nueva sentencia ésta se modifique excluyendo la superficie de 976-25-30.90 Has., que mantenemos en posesión."

De las documentales anexas al escrito de referencia, destaca el dictamen pericial rendido por el ingeniero Miguel Rivera Animas, en el juicio de amparo 101/94 de siete de junio de mil novecientos noventa y seis, del que se lee lo siguiente: "...Es de observarse que el poblado "Jorge L. Tamayo" lo conforma un número promedio de veintisiete viviendas techadas con lámina de zinc y cartón y cercadas con madera, contando dicho poblado con una escuela primaria bilingüe de nombre "Cinco de Mayo"; cuenta también con servicios de luz eléctrica y con sistema de agua potable por gravedad... Cabe hacer mención que la superficie analítica de los terrenos que mantiene en posesión y que reclaman los ejidatarios de "Jorge L. Tamayo", hasta donde tienen sus mojoneras y reconocen sus linderos es de 662-34-59 Has. de terrenos de temporal y no las 400-00-00 Has. que dicen haber recibido en posesión precaria y provisional, tal y como se ilustra o demuestra con el plano informativo levantado por el suscrito y que se anexa al presente dictamen... Por otra parte, también se localizaron los terrenos libres de posesión de "Jorge L. Tamayo" y que también al ejecutarse la sentencia le fueron entregados al nuevo centro de población ejidal "Río Uxpanapa", mismos que se encuentran totalmente enmontados y sin explotación alguna, montañosos y cerriles, demasiados accidentados, acantilados e inaccesibles y que son los colindantes al Río Oaxaca, tal como se contempla en el plano informativo que se anexa, demostrándose con color café; resultándonos una superficie analítica, de 313-90-71 Has., que anteriormente a la ejecución de la sentencia que nos ocupa no eran reclamados por el nuevo centro de población ejidal "Río Uxpanapa", ya que estos terrenos se encuentran totalmente fuera del plano proyecto de localización del nuevo centro de población ejidal "Río Uxpanapa" ...Por lo tanto la superficie total deslindada es de 976-25-30 Has. que se encuentran comprendidas dentro del acta de posesión y deslinde de fecha 18 de enero de 1994, levantada al ejecutarse la sentencia que beneficiara al nuevo centro de población ejidal "Río Uxpanapa" y dentro del plano de ejecución de la misma;..." (en el expediente formado por este Tribunal Superior Agrario obra plano informativo que muestra la situación y ubicación de los terrenos cuyo levantamiento topográfico fue realizado por el ingeniero Miguel Rivera Animas, conteniendo el cuadro de construcción respectivo, con los datos, rumbos, distancias vértices y coordenadas respectivas, y en el que se aprecia claramente las colindancias de las superficies reportadas por dicho profesionista, esto es 313-90-71 Has. de terrenos montañosos y cerriles, en partes acantilados inaccesibles con un 15% laborable y 662-34-59.90 Has. de terrenos de temporal).

Al escrito en comento, le recayó acuerdo de quince de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, ordenándose agregar a sus autos el escrito de cuenta y los anexos que acompaña teniendo por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones; por admitidas las pruebas documentales que refiere el escrito de referencia y formulados los alegatos respectivos; para los efectos que a su interés convenga, se ordenó dar vista con el escrito y documentos de cuenta al Comisariado Ejidal del poblado denominado "Río Uxpanapa", por un término de tres días a partir del día siguiente al en que surtiera sus efectos.

En consecuencia, obra en autos notificación por instructivo de veintiuno de enero de mil novecientos noventa y nueve, efectuada en la calle de Orizaba número 16, primer piso, colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, notificación que previo citatorio de ley, se entendió con el licenciado Ramón Gómez González, quien se identificó con credencial expedida de la Procuraduría Agraria con número de registro 3606, entregándole copia autorizada del acuerdo de quince de diciembre de mil novecientos noventa y ocho; anexándose a las constancias de notificación copias de la identificación de la persona referida.

En diverso acuerdo de veintidós de enero de mil novecientos noventa y nueve, se dio cuenta de la razón actuarial en comento, ordenándose realizar el cómputo respectivo, mismo que corrió del veinticinco al veintisiete de enero del propio año, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 1o., 9o. fracción VIII y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO.- En el presente caso se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento agrario, de acuerdo con lo establecido en los artículos 327, 329, 330, 331 y 332 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

TERCERO.- La capacidad jurídica del grupo solicitante quedó demostrada de conformidad con los artículos 198 y 200 de la Ley Agraria, al haberse comprobado que existen doscientos setenta y tres campesinos capacitados en materia agraria, siendo los siguientes: 1.- Ricardo Borja Santiago, 2.- Felipe Hipólito B., 3.- Fernando Borja P., 4.- Emiliano Hipólito O., 5.- Alvaro Bautista M., 6.- Manuel Hipólito M., 7.- Pedro Mariano Borja, 8.- Juan Hipólito Margarito, 9.- José Carlos Borja S., 10.- Pedro Mariano Luciano, 11.- José Crisanto Hernández, 12.- Manuel José Martínez, 13.- Manuel Mariano Borja, 14.- Pedro Miguel Martínez, 15.- Leonardo Hipólito D., 16.- Salvador de Jesús D., 17.- Manuel Toribio de Jesús, 18.- José Velazco Lorenzo, 19.- Germán de Jesús M., 20.- Ricardo Hipólito L., 21.- Eduardo Isidro L., 22.- Pedro Miguel José, 23.- Diego Acosta Bautista, 24.- Roberto Acosta Ruiz, 25.- Manuel de Jesús M., 26.- Florentino Velazco M., 27.- Felipe Crisanto Borja, 28.- José José Antonio, 29.- Antonio Miguel M., 30.- Vicente Florentino B., 31.- Leonardo Avendaño, 32.- Adán Rosas Isidro, 33.- Marcelino Vicente, 34.- Miguel Isidro Crisanto, 35.- Antonio Isidro Crisanto, 36.- Juan Isidro Crisanto, 37.- Abel Isidro Crisanto, 38.- Venancio Acosta Bautista, 39.- Victorio Hipólito R., 40.- Raymundo de Jesús Manuel, 41.- Lorenzo de Jesús Manuel, 42.- Fernando Crisanto Borja, 43.- Soledad Hernández Velazco, 44.- Antonio Crisanto Martínez, 45.- Juan Francisco Cruz, 46.- Antonio Isidro Martínez, 47.- José Vicente Bejarano, 48.- Salvador Vicente Manuel, 49.- Porfirio Marcelino V., 50.- Ismael Castillo Vicente, 51.- Juana Vicente Manuel, 52.- Carlos Francisco Y., 53.- José Marcelino Vicente, 54.- Lorenzo García Vicente, 55.- Narciso Avendaño Vicente, 56.- José Vicente Antonio, 57.- Pablo Castillo Mariano, 58.- Juana Vicente Manuel, 59.- Rosendo Vicente Concepción, 60.- Valentín Baldomero B., 61.- Juan Vicente C., 62.- Manuel Castillo Manuel, 63.- Maximino Domínguez V., 64.- Gonzalo Marcelino Vicente, 65.- Vicente Montolia M., 66.- Arturo Cristóbal Marcelino, 67.- José Agustín Tomás, 68.- Andrés Martínez Carlos, 69.- Perfecto Domínguez V., 70.- Manuel Lozano Isidro, 71.- Mariano Domínguez Acosta, 72.- Mario Cristóbal Marcelino, 73.- Fidelfo Mariano Hipólito, 74.- Sabino Vicente B., 75.- Miguel Vicente Díaz, 76.- Constantino Agustín V., 77.- Manuel Martínez Roque, 78.- Manuel Montolia V., 79.- Aniceto Castillo M., 80.- Vicente Martínez Isidro, 81.- José Castillo Marcelino, 82.- José Martínez Isidro, 83.- Alfonso Borja Bejarano, 84.- Alvaro Vicente C., 85.- Justino Marcelino V., 86.- Juan Miguel José, 87.- María Roberto Vicente, 88.- Pedrona Feliciano M., 89.- Pedro Vicente Manuel, 90.- María Marcelino S., 91.- Manuel Castillo M., 92.- Constantino Vicente C., 93.- Pedrona Vicente M., 94.- Tito Baldomero García, 95.- Pablo Martínez J., 96.- Emilio Montolla M., 97.- Bonifacio García B., 98.- Amadeo Martínez de Jesús, 99.- Armando Vicente B., 100.- Germán Roque Ramón, 101.- Raymundo José C., 102.- Ambrosio S. Domínguez V., 103.- Faustino Castillo M., 104.- Aristeo Agustín V., 105.- Fidencio Martínez de J., 106.- Federico Vicente Francisco, 107.- Rosa Concepción, 108.- Federico Lorenzo M., 109.- José Bernardo Ruiz, 110.- Ubaldo Valdez Juan, 111.- Manuel Vicente Santiago, 112.- Sacramento Cristóbal R., 113.- Fautino de la Cruz M., 114.- Margarito López Miguel, 115.- Roberto Vicente Cristóbal, 116.- Antonio Vicente C., 117.- Gonzalo Santiago G., 118.- Mariano Santiago F., 119.- Pedro Miguel Régules, 120.- Ranulfo Cristóbal M., 121.- Soledad Manuel M., 122.- Modesto de la Cruz V., 123.- Ubaldo Vicente Cristóbal, 124.- Tomás Avendaño Acosta, 125.- Emilio González Francisco, 126.- Antonio Bernardo Ruiz, 127.- Juan Vicente Cristóbal, 128.- Pedro Calletano Miguel, 129.- Hugolino Lorenzo Manuel, 130.- Plácido Cristóbal B., 131.- Emilio Lozano Santiago, 132.- Antonio Bernardo A., 133.- Leonardo Miguel Mariano, 134.- Lázaro Cristóbal B., 135.- Marcos Cristóbal Manuel, 136.- Pablo de la Cruz M., 137.- Narciso Marino Hipólito, 138.- Salvador López Miguel, 139.- Manuel Pablo Antonio, 140.- Esteban de Jesús P., 141.- Leonardo Avendaño Acosta, 142.- Manuel Mariano Hipólito, 143.- Manuel Ezequiel Régules, 144.- Moisés Pablo Manuel, 145.- Rafael Vicente Ezequiel, 146.- Macedonio Martínez, 147.- Juan Cristóbal Bautista, 148.- Florentino Cristóbal, 149.- Anastacio Lorenzo Manuel, 150.- Mauricio Ezequiel C., 151.- Esteban González Agustín, 152.- Manuel de la Cruz J., 153.- Juan Avendaño Acosta, 154.- Abel González Agustín, 155.- Gregorio Crisanto G., 156.- Leonardo Pedro A., 157.- Macario Miguel Hernández F., 158.- Adrián de la Cruz M., 159.- Juan Lorenzo Manuel, 160.- Pioquinto Santiago V., 161.- Prisciliano López V., 162.- Próspero Ezequiel C., 163.- Salomón Cristóbal A., 164.- José Roque Martínez, 165.- Andrés Juan Tomás, 166.- José Feliciano Lorenzo, 167.- Felipe Ruiz Cantos, 168.- Juan Cristóbal José, 169.- Manuel Miguel Pedro, 170.- Juan Agustín Vicente, 171.- Manuel Juan Cristóbal, 172.- José Cristóbal Tomás, 173.- Juan Nicolás García, 174.- Erasmo Miguel Jacinto, 175.- Raúl Miguel Martínez, 176.- Maximino Miguel C., 177.- Anastacio Gregorio M., 178.- Manuel Martínez C., 179.- Ubaldo Miguel Pedro, 180.- Manuel Martínez M., 181.- Emilio Miguel Margarito, 182.- Cristóbal Martínez M., 183.- Manuel Roque Gregorio, 184.- Ernesto Miguel M., 185.- Alfredo Agustín I., 186.- José Carlos C., 187.- Juan Gregorio M., 188.- Lorenzo Toribio Francisco, 189.- Genaro Vicente Martínez B., 190.- José Carlos Roque, 191.- Felipe Miguel J., 192.- Manuel Martínez B., 193.- José Martínez Isidro, 194.- Aurelio Miguel José, 195.- Esteban Martínez M., 196.- Pedro Agustín Vicente, 197.- Marino Ruiz B., 198.- Raymundo Agustín A., 199.- Manuel García G.,

200.- Othón Toribio, 201.- Alfredo Toribio Martínez, 202.- Panuncio Nicolás S., 203.- José Concepción Martínez, 204.- Manuel Cristóbal T., 205.- Daniel Salvador José, 206.- Hermenegildo Cristóbal, 207.- Toribio Martínez, 208.- Juan Martínez D., 209.- Guillermo Agustín C., 210.- Vicente Jacinto, 211.- Fernando Ruiz V., 212.- Romeo Agustín José, 213.- Pedro Nicolás M., 214.- Guillermo Jacinto, 215.- Rafael Miguel, 216.- Antonio Miguel P., 217.- Antonio Salvador P., 218.- David Miguel D., 219.- Federico Ruiz V., 220.- José Toribio M., 221.- Félix Miguel C., 222.- Lázaro Gregorio M., 223.- Pedro Lorenzo M., 224.- Santiago Juan M., 225.- Martín Ruiz T., 226.- Alejandro Feliciano, 227.- Florentino Miguel, 228.- José Gregorio C., 229.- Raúl Cristóbal R., 230.- Francisco Gregorio A., 231.- Esteban Martínez, 232.- Aurelio Martínez E., 233.- Leonardo Martínez C., 234.- Eusebio Ruiz F., 235.- Salvador Nicolás S., 236.- Catarino Miguel, 237.- Cornelio Martínez C., 238.- Rafael Agustín B., 239.- Roberto Martínez C., 240.- Melquiades Gregorio A., 241.- Benjamín Miguel I., 242.- Inocencio de la Cruz, 243.- Emeterio Ruiz Pablo, 244.- José de la Cruz, 245.- Fernando Pablo de Jesús, 246.- José Andrés Ruiz, 247.- Rosa Vicente, 248.- Juventino Baranda M., 249.- Luis Miguel Cruz, 250.- José Agustín B., 251.- Darío Avendaño M., 252.- Cliserio Martínez L., 253.- Alfonso Martínez C., 254.- Mauricio Martínez P., 255.- Emiliano Martínez C., 256.- Faustino Cristóbal, 257.- Pedro José Andrés, 258.- Hermelinda Valdez, 259.- Simón Miguel M., 260.- Florentino Miguel, 261.- Apolonio Vicente Pérez, 262.- Julia Miguel C., 263.- Jesús Ruiz G., 264.- Fernando Roque, 265.- Eusebio Ruiz, 266.- Antonio Martínez M., 267.- Carmen Martínez, 268.- José Miguel Cristóbal, 269.- Leonardo Martínez, 270.- Antonio Miguel Tomás, 271.- José Juan Cristóbal, 272.- José Miguel M. y 273.- Juan Martínez.

En lo que corresponde a: 1.- Marino Francisco Pacheco, 2.- Cándido Francisco López, 3.- Eduardo García Bejarano, 4.- María Valeriana Hernández, 5.- José Carlos Domínguez, 6.- Pedro Borja de Jesús, 7.- Marino Domínguez Francisco, 8.- Manuel Antonio Sebastián, 9.- Valeriano Domínguez, 10.- Adrián Domínguez, 11.- Federico Martínez, 12.- Fernando Domínguez D., 13.- Prudencio Francisco M., 14.- Alfredo Francisco M., 15.- Manuel Avendaño V., 16.- Higinio García C. y 17.- Diego Marcelino V., se excluyen de la presente sentencia, toda vez que fueron beneficiados por sentencia aprobada en sesión de pleno del Tribunal Superior Agrario, el diez de agosto de mil novecientos noventa y tres, dictada en el juicio agrario número 414/93, relativa al nuevo centro de población ejidal denominado "Ley de Reforma Agraria", Municipio de Isla, Estado de Veracruz.

CUARTO.- El artículo 80 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que concede amparo tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, en ese sentido y en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, el once de junio de mil novecientos noventa y siete al resolver el juicio de amparo 101/94, promovido por los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado denominado "Jorge L. Tamayo", ubicado en el Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Superior Agrario el dos de noviembre de mil novecientos noventa y tres al resolver el juicio agrario 993/93 relativo a la solicitud de creación de nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominaría "Río Uxpanapa", ubicado en el municipio y estado citado, resolución de amparo, que fue declarada intocada en el toca en revisión 61/98, resuelto el veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y ocho, por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. En esa virtud, mediante acuerdo de catorce de octubre de mil novecientos noventa y ocho, este Tribunal Superior Agrario, dejó parcialmente sin efectos la sentencia definitiva impugnada en la vía constitucional; mediante diverso acuerdo de quince de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, este órgano jurisdiccional dio cuenta del escrito signado por los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado denominado "Jorge L. Tamayo", por el cual ofrecen pruebas y formulan alegatos en el juicio agrario 993/93, probanzas que se tuvieron por admitidas y por formulados los alegatos respectivos, lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo que ordenó otorgar garantía de audiencia al poblado denominado "Jorge L. Tamayo" en el juicio que se resuelve.

Es oportuno destacar, que en el acuerdo de quince de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se ordenó dar vista al Comisariado Ejidal del poblado denominado "Río Uxpanapa", con las documentales ofrecidas como prueba y alegatos formulados por el poblado "Jorge L. Tamayo". Acuerdo que fue notificado el veintiuno de enero de mil novecientos noventa y nueve en el domicilio señalado por el poblado "Río Uxpanapa", para recibir y oír notificaciones, sin que se haya desahogado por parte del poblado último. En esa virtud, en cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo de referencias, se emite el presente fallo.

QUINTO.- De las constancias y actuaciones que integran el expediente que se resuelve, mismas que son analizadas con fundamento en los artículos 167 y 189 de la Ley Agraria en correlación con los artículos 197, 202, 203, 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se conoce que el diez de marzo de mil novecientos setenta y ocho un grupo de campesinos radicados en el Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz, solicitaron la creación de un nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominaría "Río Uxpanapa", manifestando su conformidad para trasladarse al lugar en donde hubiese tierras disponibles, señalando como predio de probable afectación,

terrenos nacionales que se localizan en el Municipio de Minatitlán; instaurado y publicado que fue el procedimiento agrario que nos ocupa, el ingeniero León Castro Troncoso rindió informe de comisión; reportó como terreno propiedad de la Nación, una superficie de 6,273-00-00 (seis mil doscientas setenta y tres hectáreas) de humedad, temporal y monte, que se encuentra ubicado en el Municipio de Minatitlán, y que es factible dedicarlo al cultivo; en esa virtud, la Dirección General de Procedimientos Agrarios el cuatro de junio de mil novecientos setenta y nueve emitió opinión, proponiendo conceder al poblado gestor la superficie de referencia; a su vez, el veintidós de agosto de mil novecientos setenta y nueve, la Comisión Agraria Mixta en el Estado de Veracruz, emitió dictamen en sentido positivo, estimando procedente la creación del nuevo centro de población ejidal solicitado; dicho dictamen fue sometido a la consideración del Gobernador del Estado de Veracruz, quien no emitió opinión. La Delegación Agraria en el Estado, designó al ingeniero J. Trinidad Olivares Gama, para que llevara a cabo levantamiento topográfico de la superficie propuesta, dicho comisionado rindió informe el veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y seis, manifestando que la superficie real de la extensión propuesta es de 5,083-00-00 (cinco mil ochenta y tres hectáreas); dicha Delegación Agraria instruyó a Jaime López Rodríguez para que determinara la situación jurídica de los terrenos que se propone dotar para la constitución del nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominaría "Río Uxpanapa", dicho comisionado rindió informe el once de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, en el que dijo, que los solicitantes estaban en posesión de 5,083-00-00 (cinco mil ochenta y tres hectáreas), las cuales explotaban con cultivos propios de la región y con ganado vacuno, puercos y aves de corral, expresando también, que los solicitantes en la presente acción manifestaron estar de acuerdo en que se les reconozca únicamente la superficie indicada, ya que la restante no es de utilidad por ser terrenos escabrosos, informa también que la superficie en estudio se localiza dentro del decreto expropiatorio de cuatro de enero de mil novecientos setenta y cuatro, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el diez del mismo mes y año, por el cual se establece el distrito de drenaje de Uxpanapa y se declara de utilidad pública la adquisición de una superficie aproximada de 260,000-00-00 (doscientas sesenta mil hectáreas), ubicada en los municipios de Las Choapas, Minatitlán, Hidalgotitlán y Jesús Carranza, Estado de Veracruz y Santa María Chimalapa, del Estado de Oaxaca; también se conoce, que en acta de entrega precaria realizada por la Delegación Agraria en el Estado de Veracruz al grupo denominado "Río Uxpanapa" el diez de junio de mil novecientos noventa y uno, se hizo constar la entrega de 5,083-00-00 (cinco mil ochenta y tres hectáreas) de terrenos propiedad de la Nación; en esa virtud, el quince de junio de mil novecientos noventa y dos el Cuerpo Consultivo Agrario emitió dictamen en sentido positivo.

Las actuaciones anteriores sirvieron de sustento a la sentencia dictada por el Tribunal Superior Agrario el dos de noviembre de mil novecientos noventa y tres, en la que se dotó para la constitución del nuevo centro de población ejidal denominado "Río Uxpanapa" ubicado en el Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz una superficie de 5,083-00-00 (cinco mil ochenta y tres hectáreas) de humedad, temporal y monte, propiedad de la Nación, la que fue afectada con fundamento en el artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

SEXTO.- En contra de la resolución anterior, los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado denominado "Jorge L. Tamayo" ubicado en el Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, mismo que fue concedido en resolución dictada el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y seis, terminada de engrosar el once de junio de mil novecientos noventa y siete, por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, bajo el número 101/94, misma que fue declarada intocada el veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y ocho, por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en el toca en revisión 61/98.

La concesión de amparo de referencia se sustenta básicamente en lo expuesto en el resultando décimo tercero del presente fallo, transcribiendo en este apartado por su importancia, la parte relativa siguiente: "...Así las cosas, dable es concluir que resulta errónea la determinación del Tribunal responsable, al haber resuelto favorable la creación del nuevo centro de población ejidal tercero perjudicado, sin haber tomado en consideración que los integrantes del poblado "Jorge L. Tamayo" (hoy quejoso), se encontraban en posesión material de más de cuatrocientas hectáreas, comprendidas dentro de la superficie con la que creó el Nuevo Centro de Población Ejidal denominado "Río Uxpanapa" (hoy tercero perjudicado). Lo anterior, se encuentra debidamente acreditado en autos, con los dictámenes periciales del perito designado por la parte quejosa, así como el del perito oficial de este Juzgado, que determinan que la resolución definitiva reclamada del Tribunal Superior Agrario afecta toda la superficie de 400-00-00 hectáreas, dadas en posesión precaria y provisional al poblado "Jorge L. Tamayo". En las relacionadas consideraciones, resulta evidente que se vulneran en perjuicio de los hoy quejoso, las garantías de audiencia y legalidad en el procedimiento agrario, que consagran los artículos 14 y 16 Constitucionales, en razón de que han demostrado fehacientemente estar en posesión material de la superficie que les fue entregada en posesión precaria, que se encuentra dentro de las 5,083-00-00 hectáreas, con las que fue dotado el núcleo de población tercero perjudicado, por lo que el Tribunal

responsable debió haberlos llamado a juicio para que hicieran valer lo que a sus intereses conviniera, respecto del predio en cuestión. De manera que al haber quedado demostrada la posesión por parte de los hoy quejosos, respecto de la superficie controvertida, es lógico que al pretender ejecutar la resolución reclamada en favor del poblado tercero perjudicado, se vulneran sus garantías, puesto que no fueron oídos ni vencidos en dicho procedimiento agrario, lo cual debió haber advertido el Tribunal Superior Agrario al emitir la resolución que ahora se combate, subsanando dicha deficiencia, tal como lo establece el artículo cuatro transitorio, fracción II, último párrafo, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios que establece: "Sí a juicio del Tribunal Superior o de los Tribunales Unitarios, en los expedientes que reciban no se ha observado la garantía de audiencia, se subsanará esta deficiencia ante el propio Tribunal.". En mérito de lo anterior, lo que procede es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitados, en los términos de los razonamientos anteriormente expuestos...".

Como es de observarse, la concesión de amparo al poblado denominado "Jorge L. Tamayo", se sustentó básicamente en los dictámenes periciales desahogados ante el órgano constitucional, quien concluyó que el poblado denominado "Jorge L. Tamayo", se encontraba en posesión material de una superficie mayor a 400-00-00 (cuatrocientas hectáreas), las que se encuentran comprendidas dentro de las 5,083-00-00 (cinco mil ochenta y tres hectáreas) otorgadas por el propio Tribunal Superior Agrario para la constitución del nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominaría "Río Uxpanapa", por lo que al no tomar en consideración el Tribunal Superior Agrario la posesión del poblado quejoso, trajo consigo, la concesión del amparo, para el efecto de que se llamara a juicio al poblado "Jorge L. Tamayo" para que hiciera valer lo que a sus intereses conviniera respecto al predio en cuestión.

SEPTIMO.- En ese sentido, el quince de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, este Tribunal Superior Agrario dio cuenta del escrito presentado por los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado denominado "Jorge L. Tamayo", del que se hizo referencia en el resultando décimo sexto de la presente resolución y que se transcribe como si se insertase a la letra en obvio de repeticiones, por el cual, expresan que la superficie real que poseen consta de 662-34-59.90 (seiscientas sesenta y dos hectáreas, treinta y cuatro áreas, cincuenta y nueve centiáreas, noventa miliáreas) de temporal y 313-90-71 (trescientas trece hectáreas, noventa áreas, setenta y una centiáreas) de terrenos cerriles, que en suma son 976-25-30.90 (novecientas setenta y seis hectáreas, veinticinco áreas, treinta centiáreas, noventa miliáreas), las que usufructúan y explotan con cultivos propios de la región consistentes en maíz, frijol, ajonjolí, plátano, pastos mejorados y típicos de la región, superficie en la que se encuentra la zona urbana que cuenta con servicios públicos, como son agua potable, luz eléctrica, escuela primaria, jardín de niños, y vías de comunicación con terrenos de terracería, consideración que sustenta básicamente en el desahogo de las pruebas periciales rendidas ante el órgano de control constitucional, al resolver el juicio de amparo 101/94, solicitando se excluya de las 5,083-00-00 (cinco mil ochenta y tres hectáreas) que se había dotado al poblado "Río Uxpanapa" en el juicio agrario 993/93 y se respete a su favor las 976-25-30.90 (novecientas setenta y seis hectáreas, veinticinco áreas, treinta centiáreas, noventa miliáreas) que tienen en posesión.

Con el escrito y documentos anexos, se ordenó dar vista al Comisariado Ejidal del poblado denominado "Río Uxpanapa", ordenamiento que fue notificado en el domicilio señalado para tal efecto por el propio poblado, sin que haya hecho manifestación alguna, en cuanto a las pruebas ofrecidas y alegatos formulados por el poblado denominado "Jorge L. Tamayo", particularmente, en cuanto a su petición de exclusión y respeto de la superficie ya indicada.

OCTAVO.- Ahora bien, tomando en cuenta la ejecutoria que concedió amparo al poblado denominado "Jorge L. Tamayo" en contra de la resolución dictada en favor del diverso denominado "Río Uxpanapa", así como el dictamen pericial rendido por el ingeniero Miguel Rivera Animas en el juicio de amparo 101/94, con el cual, el poblado citado en primer término defiende una superficie total de 976-25-30 (novecientas setenta y seis hectáreas, veinticinco áreas, treinta centiáreas), por ser ésta la superficie real analítica que posee en base a una entrega precaria y mandamiento gubernamental, documentos de los que se ocupó el órgano de control constitucional, y que adminiculados con los dictámenes, llevaron a la concesión del amparo solicitado, este Tribunal Federal, mismo que no fue materia de objeción, por parte del diverso denominado "Río Uxpanapa", tanto en su contenido, como en la petición del poblado denominado "Jorge L. Tamayo", lo anterior con fundamento en los artículos 202, 203, 207 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, en relación con los diversos 167 y 189 de la Ley Agraria.

En esa virtud, considerando que las 5,083-00-00 (cinco mil ochenta y tres hectáreas) propuestas por las autoridades agrarias para la creación del nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominaría "Río Uxpanapa", ubicado en el Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz correspondía a terrenos de humedad, temporal y monte cerril, observándose en el plano proyecto que refleja dicha superficie, aprobado en sesión de catorce de abril de mil novecientos noventa y tres del Cuerpo Consultivo Agrario, que al Poniente colinda con acantilado inaccesible, esto es, que las 5,083-00-00 (cinco mil

ochenta y tres hectáreas) únicamente abarcaron la superficie de temporal que posee el poblado "Jorge L. Tamayo", es decir, 662-34-59 (seiscientas sesenta y dos hectáreas, treinta y cuatro áreas, cincuenta y nueve centiáreas), no así las 313-90-71 (trescientas trece hectáreas, noventa áreas, setenta y una centiáreas) de terrenos cerriles, montañosos e inaccesibles que refiere el ingeniero Miguel Rivera Animas, la superficie para la constitución de nuevo centro de población ejidal es de 4,420-65-41 (cuatro mil cuatrocientas veinte hectáreas, sesenta y cinco áreas, cuarenta y una centiáreas) de temporal y monte cerril, constituyendo una sola unidad topográfica, es decir, que dicha superficie no se encuentra fraccionada.

NOVENO.- En tales circunstancias, es procedente dotar para la creación del nuevo centro de población ejidal que se denominará "Río Uxpanapa" una superficie total de 4,420-65-41 (cuatro mil cuatrocientas veinte hectáreas, sesenta y cinco áreas, cuarenta y una centiáreas) de temporal y monte cerril, propiedad de la Nación, afectable conforme al artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria; superficie que deberá ser localizada de conformidad al plano proyecto que para el efecto se elabore en beneficio de los doscientos setenta y tres campesinos capacitados relacionados en el considerando tercero del presente fallo y que pasará a ser propiedad del núcleo de población beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres; en cuanto a la determinación del destino de las tierras y a la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá de acuerdo con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria y podrá constituir el área de asentamiento humano, la parcela escolar, la unidad agrícola e industrial para la mujer y la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud.

En la creación de este nuevo centro de población ejidal deberá colaborar para el mejor logro de su constitución y coadyuvar con las obras de infraestructura económica, así como de la asistencia técnica y social necesaria para su sostenimiento y desarrollo; el Gobierno del Estado de Veracruz, las Secretarías de la Reforma Agraria, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de Hacienda y Crédito Público, de Salud, de Desarrollo Social, de Comunicaciones y Transportes y de Educación Pública, la Comisión Nacional del Agua, Federal de Electricidad y la Procuraduría Agraria, de acuerdo a lo establecido en los artículos 248 y 334 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 43, 189 de la Ley Agraria; 1o., 7o., así como el cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, y 80 de la Ley de Amparo, se

RESUELVE:

PRIMERO.- Es procedente la solicitud de creación de nuevo centro de población ejidal que se denominará "Río Uxpanapa" y se ubicará en el Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz.

SEGUNDO.- Es de dotarse y se dota para la creación del nuevo centro de población ejidal que se denominará "Río Uxpanapa" ubicado en el Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz una superficie total de 4,420-65-41 (cuatro mil cuatrocientas veinte hectáreas, sesenta y cinco áreas, cuarenta y una centiáreas) de temporal y monte cerril, propiedad de la Nación, afectable conforme al artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria; superficie que deberá ser localizada de conformidad al plano proyecto que para el efecto se elabore en beneficio de los doscientos setenta y tres campesinos capacitados relacionados en el considerando tercero del presente fallo y que pasará a ser propiedad del núcleo de población beneficiado, con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres; en cuanto a la determinación del destino de las tierras y a la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá de acuerdo con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria y podrá constituir el área de asentamiento humano, la parcela escolar, la unidad agrícola e industrial para la mujer y la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud.

TERCERO.- En la creación de este nuevo centro de población ejidal deberá colaborar para el mejor logro de su constitución y coadyuvar con las obras de infraestructura económica, así como de la asistencia técnica y social necesaria para su sostenimiento y desarrollo; el Gobierno del Estado de Veracruz, las Secretarías de la Reforma Agraria, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de Hacienda y Crédito Público, de Salud, de Desarrollo Social, de Comunicaciones y Transportes y de Educación Pública, la Comisión Nacional del Agua, Federal de Electricidad y la Procuraduría Agraria, de acuerdo a lo establecido en los artículos 248 y 334 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

CUARTO.- Publíquese esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación** y el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz; los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscríbase en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y procédase a las cancelaciones respectivas; asimismo, inscríbase en el Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de derechos respectivos de acuerdo a las normas aplicables y conforme a lo resuelto en esta sentencia; ejecútese y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

QUINTO.- Con copia certificada de la presente Sentencia infórmese al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo 101/94

promovido por el Comisariado Ejidal del poblado "Jorge L. Tamayo", Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz.

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario; firman los Magistrados que lo integran, ante la Secretaria General de Acuerdos habilitada por acuerdo plenario de dos de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve.- El Magistrado Presidente, **Luis Octavio Porte Petit Moreno**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Rodolfo Veloz Bañuelos**, **Marco Vinicio Martínez Guerrero**, **Luis Angel López Escutia**, **Ricardo García Villalobos Gálvez**.- Rúbricas.- La Secretaria General de Acuerdos, **Claudia Dinorah Velázquez González.-** Rúbrica.

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 4/98, relativo a la ampliación de ejido, promovido por un grupo de campesinos del poblado Quirio, Municipio de Alvaro Obregón, Mich.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver el juicio agrario número 4/98, que corresponde al expediente administrativo número 747, relativo a la solicitud de ampliación de ejido, hecha por un grupo de campesinos del poblado denominado "Quirio", Municipio de Alvaro Obregón, Estado de Michoacán, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por Resolución Presidencial de diecinueve de febrero de mil novecientos treinta y seis, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el diecisiete de marzo del mismo año, se dotó de tierras al poblado "Quirio", en una superficie de 389-00-00 (trescientas ochenta y nueve hectáreas), para beneficiar a noventa y un campesinos capacitados, más la parcela escolar (fojas 150 a la 153, legajo II).

SEGUNDO.- Los campesinos del poblado "Quirio", formularon solicitudes de ampliación de ejido, el veinte de julio de mil novecientos treinta y seis y seis de noviembre de mil novecientos treinta y nueve con resultados negativos, toda vez que en las resoluciones presidenciales se resolvió, que no existían tierras afectables dentro del radio legal de afectación (foja 1, legajo V; 15 y 16, legajo III).

TERCERO.- Por escrito de veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y uno, un grupo de campesinos del poblado "Quirio", Municipio de Alvaro Obregón, Estado de Michoacán, solicitó al Gobernador del Estado, ampliación de ejidos; señalaron como terrenos de presunta afectación, los desecados de la laguna de "Cuitzeo" propiedad del Gobierno Federal, y que: "...tenemos de hecho ya en posesión desde hace varios años..." (foja 11, legajo VI).

El tres de febrero de mil novecientos sesenta y dos, la Comisión Agraria Mixta instauró el expediente respectivo, registrándolo con el número 747.

Por oficio de tres de febrero de mil novecientos sesenta y dos, se notificó la iniciación de dicho expediente, a la Secretaría de Recursos Hidráulicos, Agencia General en el Estado, y se giró cédula común notificatoria a los propietarios o encargados de predios rústicos comprendidos dentro del radio legal de afectación del poblado "Quirio". Como respuesta, el Agente General de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, manifestó: "...De la misma manera que en las demás ocasiones en que se han señalado para hacer dotaciones de ejidos, los terrenos del Vaso del Lago de Cuitzeo, en la presente ocasión hacemos notar a esa Comisión, que los terrenos en cuestión, no son afectables por concepto de dotación y ampliación de ejidos de acuerdo con la fracción VIII del artículo 104 del Código Agrario. Dichos terrenos no pueden considerarse desecados puesto que no se ha hecho obra alguna para impedir que lleguen a ser cubiertos por las aguas, sino que únicamente por la escasez de lluvias están secos en la actual temporada; pero al presentarse lluvias normales o abundantes, volverán a quedar cubiertas por las aguas". (foja 16, legajo I).

La referida solicitud de ampliación de ejido fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, el nueve de julio de mil novecientos sesenta y dos (foja 34 reverso, legajo I).

El veintisiete de julio de mil novecientos sesenta y dos, el Gobernador del Estado de Michoacán expidió nombramientos a Felipe Ruiz, Miguel Arroyo y Alberto Hernández, como presidente, secretario y vocal del Comité Ejecutivo Agrario, respectivamente.

CUARTO.- La Comisión Agraria Mixta en el Estado de Michoacán, mediante oficio número 268, de veintidós de febrero de mil novecientos sesenta y dos, comisionó a José Ochoa Garibay, para el efecto que realizara los trabajos a que se refería la fracción I del artículo 232 del Código Agrario de mil novecientos cuarenta y dos. El comisionado en su informe el veintitrés de junio del mismo año, respecto del resultado de los trabajos censales, manifestó lo siguiente: "...NUMERO DE HABITANTES 115. NUMERO DE JEFES DE HOGAR 19. NUMERO DE SOLTEROS MAYORES 16 AÑOS 28. NUMERO DE INDIVIDUOS CAPACITADOS CON DERECHO A RECIBIR TIERRA 47. NUMERO DE CABEZAS DE GANADO MAYOR 37. NUMERO DE CABEZAS DE GANADO MENOR 11. NUMERO DE AVES DE CORRAL 28...". En el mismo informe señaló: "...El día 17 del actual, efectué la inspección ocular sobre los

terrenos concedidos anteriormente al poblado en calidad de dotación de ejidos y pude darme cuenta de que éstos están siendo bien aprovechados por los ejidatarios, encontrándose ocupados los de cultivo en siembras de maíz y frijol..." (foja 18, legajo I).

QUINTO.- El veintitrés de julio de mil novecientos sesenta y dos, el Gobernador del Estado de Michoacán, emitió su mandamiento, en el sentido de dotar al poblado "Quirio" de 350-00-00 (trescientas cincuenta hectáreas), de terrenos de humedad, que se tomarían íntegramente de los sobrantes de la "Laguna de Cuitzeo", propiedad del Gobierno Federal, para formar treinta y cinco parcelas para igual número de capacitados: "...de los que figuran en el censo agropecuario respectivo, teniendo en cuenta el orden de preferencias establecido en el artículo 153 del Código Agrario en vigor.- III.- Se dejan a salvo los derechos agrarios de 12 de los capacitados que figuran en el censo agropecuario respectivo para que los ejerciten en tiempo y forma legal que mejor les convenga.- IV.- La superficie total que se conceda pasará a poder del poblado beneficiado con todos sus usos, costumbres y servidumbres, activas y pasivas y con todo cuanto de hecho y por derecho le corresponda, debiéndose localizar de acuerdo con el plano proyecto aprobado. V.- Ejecútese la presente resolución; publíquese en el Periódico Oficial del Estado y remítase el expediente a la Delegación del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, para su resolución en Segunda Instancia..." (fojas 46 y 47, legajo I).

El diecinueve de septiembre de mil novecientos sesenta y dos fue ejecutado el mandamiento gubernamental, entregándose al núcleo agrario "Quirio", la posesión provisional sobre una superficie de 280-00-00 (doscientas ochenta hectáreas); quedó pendiente de entregar 70-00-00 (setenta hectáreas), toda vez que "...por acuerdo tomado con el grupo denominado 'MARIANO ESCOBEDO', que a este grupo se le respetaría los terrenos que tienen en cultivo, y los cuales están localizados dentro del plano proyecto de 'QUIRIO', por tal razón, y porque otra parte del terreno que estaba proyectado para 'QUIRIO', también una parte fue tomada por el Ejido definitivo de Téjaro de los Izquierdo, tomando en consideración las superficies deducidas a este proyecto de 'QUIRIO', se procedió a localizar la superficie que quedó libre..." (fojas 58 y 59, legajo I).

El mandamiento antes referido fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y dos.

El treinta de enero de mil novecientos sesenta y tres, el Delegado del entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización en el Estado de Michoacán, rindió informe, donde opinó que era procedente modificar el mandamiento gubernamental y propuso la afectación de 280-00-00 (doscientas ochenta hectáreas), foja 77, legajo I.

SEXTO.- El Coordinador Agrario en el Estado de Michoacán, por oficio número 145 de tres de febrero de mil novecientos noventa y siete, encomendó al ingeniero Daniel García Alfaro, para que llevara a cabo trabajos técnicos e informativos en el poblado "Quirio". Dicho comisionado rindió informe el dieciocho de marzo del mismo año, en el que manifestó: "Me trasladé al poblado de referencia para darme cuenta de: los terrenos entregados en forma provisional por el C. Ing. Jesús Gallegos Devese correspondiente a la ejecución del Mandamiento Gubernamental de fecha 23 de julio de 1962 que por vía de ampliación benefició al poblado 'QUIRIO' con 350-00-00 Has., al momento de su ejecución sólo se entregaron 280-00-00 Has., de éstas, 268-00-54 Has., fueron incluidas en mis ejecuciones parcial de 6 de diciembre de 1981 y complementaria del 23 de junio de 1984, de la Resolución Presidencial de fecha 3 de noviembre de 1980 que amplió de tierras al poblado 'CARRILLO PUERTO' el día 17 de febrero del año en curso, llevé a cabo la ejecutoria del Juicio de Amparo número II-1348/90 dejando sin efectos mis actos de ejecución en esa área dejándola en poder del grupo de la ampliación de 'QUIRIO' anexo acta y plano de este acto; estos terrenos han estado en posesión del grupo mencionado desde antes de ejecutar en favor de 'CARRILLO PUERTO', sembrando básicamente de maíz, sorgo y alfalfa, este grupo se amplió en su número aproximadamente de 80 incorporando unos campesinos que se autodenominan de Mariano Escobedo existiendo una subdivisión de parcelas sin que aparentemente exista conflicto.- Se formuló el radio de afectación ubicando en el centro el poblado actual de los beneficiarios que desde que se ejecutó la dotación aparentemente tuvieron problemas con su hábitat, puesto que las actas se formularon en Zacapendo (de la dotación), posteriormente como los terrenos dotados fueron 2 polígonos uno cerca de QUIRIO y el otro en la ribera del Lago de Cuitzeo, distante un polígono de otro aproximadamente 9 km. el grupo se dividió en dos, unos se quedaron en Quirio y Zacapendo y otros se trasladaron a 'LA MINA', posteriormente adquirieron un pequeño terreno que fue primero de la colonia agrícola del ZAPOTE, luego comprado por la Secretaría de Recursos Hidráulicos S.A.R.H. para resolver problemas de los afectados con la construcción de la presa 'EL ROSARIO', Municipio de Angamacutiro y en este terreno han tratado de agrupar a los ejidatarios de la ampliación de QUIRIO, se anexa plano de este poblado; en el plano del radio de afectación se puede apreciar que la mayor parte es ejido, sólo una fracción denominada LA PRESA que aparentemente se encuentra en proyecto, en posesión de los promoventes; lo demás es dotaciones y ampliaciones resueltas, la 2da. superficie en cantidad pertenece al vaso de la Laguna de Cuitzeo y como 3ra. superficie importante son las zonas federales de la vía del tren, la carretera 120, el

aeropuerto y la carretera vía corta México-Guadalajara, existiendo unas superficies de pequeña propiedad que como se puede apreciar están muy lejanas de ser afectables, razón por la que no se solicitaron datos al Registro Público de la Propiedad.- Se solicitó información a la Comisión Nacional del Agua en relación a si existe algún Decreto o solicitud de desincorporación de terrenos federales, del Vaso de la Laguna de Cuitzeo, informando en el sentido de que no existe Decreto ni solicitud a este respecto, que en breve darán contestación oficial por escrito; si bien, en el aspecto legal no ha habido Decreto favorable, en la práctica se han construido bordos de contención que beneficiaron a los poblados: 'CARRILLO PUERTO', 'TEJARO DE LOS IZQUIERDO', 'TROJES DE CHEHUAYO', provisional 'LA PRESA', ampliación 'QUIRIO' y ejido 'LEON CARDENAS', haciendo la siguiente observación, en esta parte de la Laguna convergen sus dos principales afluentes: el río grande de Morelia y el río Queréndaro, sus escurrimientos alcanzaron anualmente 332 millones de metros cúbicos, actualmente con las presas que se construyeron se redujo a 185 millones de metros cúbicos, estos afluentes han arrastrado millones de toneladas de sedimentos que redujeron notablemente la profundidad de la laguna en esta área cubriéndola de tierra fértil, unido a fuertes sequías, los campesinos de diversos poblados ejercieron posesiones y presionaron los Gobiernos, para lograr que se dieran dotaciones y/o ampliaciones de tierras, y lo que antes era el vaso de la laguna de Cuitzeo, la curva de nivel 1821, actualmente se delimita en esta área por el color azul" (fojas 1 y 2, legajo IX).

SEPTIMO.- El once de abril de mil novecientos noventa y siete, el Cuerpo Consultivo Agrario aprobó dictamen en sentido negativo, ya que consideró: "VII.- Que del análisis efectuado a los antecedentes del expediente que nos ocupa, como es el caso de los informes de los trabajos técnicos e informativos complementarios practicados por la Coordinación Agraria en el Estado, de los comunicados que en su momento emitió el entonces Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, con respecto a los terrenos del Vaso de la Laguna de 'CUITZEO', este Cuerpo Consultivo Agrario estima que debe ser negada la acción de tercer intento de ampliación de ejido promovido por el poblado denominado 'QUIRIO', Municipio de Alvaro Obregón, Estado de Michoacán, toda vez que no existen terrenos legalmente afectables con los cuales se puedan satisfacer sus necesidades agrarias, ya que por una parte, dentro de dicho radio se ubican los ejidos definitivos de 'TEJARO DE LOS IZQUIERDO', 'TROJES DE CHEHUAYO', 'CARRILLO PUERTO', 'LEON CARDENAS', 'LA PRESA', 'SAN AGUSTIN DEL PULQUE', 'AMPLIACION DE CHEHUAYO', 'AMPLIACION DE CHEHUAYITO', 'QUIRIO', 'ZACAPENDO', 'LA MINA', 'QUERENDARO', 'BELISARIO DOMINGUEZ', 'ESTACION QUERENDARO', 'EL ZAPOTE', 'ZINZIMEO', 'TEPECUA', 'CHAPITIRO', 'PALO BLANCO', 'AMPLIACION DE INDAPARAPEO', 'VILLA UNION', 'AMPLIACION DE ALVARO OBREGON', 'PURISIMA', 'CUAPARATARO' y 'EJIDO LAS TROJES', asimismo, se localizan terrenos de la Colonia Agrícola 'EL ZAPOTE', así como la zona federal del Aeropuerto Internacional 'FRANCISCO J. MUJICA' y Autopista México-Morelia-Guadalajara, asimismo se ubican fracciones de pequeñas propiedades que por su extensión, calidad y tipo de explotación, no exceden los límites a la propiedad inafectable contemplada por los artículos 249 y 250 de la Ley Federal de Reforma Agraria; y en cuanto a los terrenos sobrantes del Vaso de la Laguna de 'CUITZEO', éstos resultan inafectables de conformidad a lo dispuesto por el artículo 249 fracción IV inciso d) de la Ley Federal de Reforma Agraria" (fojas 10 y 11, legajo X).

OCTAVO.- Por auto de diecinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, se tuvo por radicado en este Tribunal Superior Agrario el expediente relativo a la ampliación de tierras, solicitadas por el poblado "Quirio"; el cual fue registrado con el número 4/98, y turnado al Magistrado Marco Vinicio Martínez Guerrero, en su carácter de Magistrado Instructor, para que en su oportunidad presentara a consideración del pleno la resolución correspondiente. Dicho auto de radicación se notificó al Comité Particular Ejecutivo del poblado solicitante y a la Procuraduría Agraria, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal Superior Agrario es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 1o., 9o. fracción VIII y cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO.- El derecho del núcleo agrario "Quirio", Municipio de Alvaro Obregón, Estado de Michoacán, para solicitar ampliación de tierras, quedó acreditado en los términos del artículo 97 del Código Agrario y su correlativo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria, vigentes durante el tiempo en que se inició y tramitó el procedimiento correspondiente; al comprobarse que las tierras concedidas al poblado por concepto de dotación de ejido, estaban totalmente aprovechadas en el tiempo en que solicitaron primera ampliación de tierras, como se desprende del informe rendido el veintitrés de junio de mil novecientos sesenta y dos, por el comisionado de la Comisión Agraria Mixta, donde se asentó que mediante una inspección ocular constató que los terrenos concedidos al poblado "Quirio", estaban totalmente aprovechados, al cultivarlos de maíz y frijol. Documental pública que forma convicción plena,

por haberse realizado por un funcionario en ejercicio de sus funciones, suficiente para estimar que el núcleo agrario solicitante, satisfizo uno de los requisitos de procedibilidad para solicitar ampliación de tierras.

Por la misma razón, tienen valor probatorio los trabajos censales realizados por el comisionado de la Comisión Agraria Mixta, el veinte de junio de mil novecientos sesenta y dos, quien realizó el censo de población y agropecuario en el poblado "Quirio", y señaló las características de las personas relacionadas con la capacidad agraria individual. Así, de la revisión hecha a la documentación relativa a la diligencia censal, se estima que al momento de la realización de los trabajos censales había cuarenta y siete campesinos que reunían los requisitos de capacidad agraria individual, exigidos por el artículo 54 del Código Agrario vigente en el tiempo cuando fueron realizados los trabajos censales, y su correlativo 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria; cuyos nombres son los siguientes: 1.- Felipe Ruiz, 2.- Ismael Ruiz, 3.- Angel Ruiz, 4.- Miguel Arroyo, 5.- Filiberto Hernández, 6.- Samuel García, 7.- Salvador Muñiz, 8.- Roberto García, 9.- J. Carmen Flores Hernández, 10.- Marcial Onofre, 11.- Carlos Rivera, 12.- Antonio García, 13.- José Herrera, 14.- Manuel Muñiz, 15.- Onésimo López, 16.- Rubén Ortiz, 17.- Luis Alvarado, 18.- Juan Camacho, 19.- Aureliano Izquierdo, 20.- Marín Bazán, 21.- Martín Bazán, 22.- Lucio Ortiz, 23.- Sabino Barrera, 24.- José López, 25.- Raúl Alvaro, 26.- Olegario García, 27.- Salomón Guzmán, 28.- J. Guadalupe Bermejo, 29.- J. Jesús López, 30.- José López Serrano, 31.- J. Jesús Bermejo, 32.- Tito Bermejo, 33.- Elías Bermejo, 34.- Lorenzo Rocha, 35.- Teodoro Rocha, 36.- Heriberto Chávez, 37.- Daniel Tinoco, 38.- Antonio Rosales, 39.- Manuel Rosales, 40.- Senobio Javier, 41.- Eliazar Chávez, 42.- Mariano Avalos, 43.- Javier Camarena, 44.- Juan Camarena, 45.- Primitivo Arroyo, 46.- Ernesto Sandoval y 47.- Camerino Cornejo.

TERCERO.- En lo que corresponde a la superficie señalada como de presunta afectación, conformada por los terrenos desecados de la laguna de "Cuitzeo", debe decirse que conforme a los trabajos técnicos e informativos realizados en el año de mil novecientos noventa y siete, la misma se estima afectable en favor del núcleo agrario "Quirio", en su calidad de propiedad federal, y porque actualmente ya no forman parte del vaso de la laguna de "Cuitzeo", y es susceptible de cultivo, actualizándose en consecuencia el supuesto contenido en el artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria, y no el diverso artículo 249, inciso d), del mismo ordenamiento legal.

Para sustentar lo antes dicho, cabe señalar que desde el año de mil novecientos sesenta y dos, los campesinos solicitantes de tierras del núcleo agrario "Quirio", manifestaron estar en posesión de una superficie que corresponde a las tierras desecadas de la laguna de "Cuitzeo"; si bien no se realizaron trabajos técnicos e informativos en primera instancia, se estimó procedente dotar por vía de ampliación de ejido, de una superficie de 350-00-00 (trescientas cincuenta hectáreas), tomándose como base los planos existentes en la Comisión Agraria Mixta, que dictaminó en este sentido; al igual que el Gobernador del Estado, que emitió mandamiento el veintitrés de julio de mil novecientos sesenta y dos, en el que declaró procedente la solicitud de ampliación de ejido y concedió al poblado "Quirio" la superficie antes mencionada, que se tomarían de los sobrantes de la laguna de "Cuitzeo" propiedad del Gobierno Federal, para beneficiar a treinta y cinco campesinos capacitados y dejó a salvo los derechos de doce campesinos, para que lo ejercieran en el tiempo y forma que legalmente correspondieran. Dicho mandamiento fue ejecutado el diecinueve de septiembre de mil novecientos sesenta y dos, entregándose una superficie total de 280-00-00 (doscientas ochenta hectáreas), al haberse respetado una superficie de 70-00-00 (setenta hectáreas) a un grupo de campesinos autodenominado "Mariano Escobedo", que se encontró en posesión de esta última superficie.

Lo anterior, aunado a los trabajos técnicos e informativos realizados en el año de mil novecientos noventa y siete, hace posible conocer que el núcleo agrario "Quirio" está en posesión de la superficie aproximada de 350-00-00 (trescientas cincuenta hectáreas), concedidas mediante mandamiento gubernamental, ya que mediante la investigación correspondiente, se llegó al conocimiento que cultivan con maíz, sorgo y alfalfa la superficie últimamente mencionada, usufructuada por aproximadamente ochenta campesinos, al haberse incorporado al grupo solicitante de tierras, las personas que conforman el grupo autodenominado "Mariano Escobedo".

La posesión del núcleo agrario solicitante se corrobora, con el acta de diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete, donde consta que el comisionado de la Secretaría de la Reforma Agraria devolvió al núcleo agrario "Quirio", la superficie de 268-00-54 (doscientas sesenta y ocho hectáreas, cincuenta y cuatro centiáreas), que había ejecutado en favor del núcleo agrario "Carrillo Puerto", por lo que en ese momento dejó fuera de la ejecución la superficie antes mencionada, respecto de la cual realizó el deslinde correspondiente, como consta a fojas treinta y tres a la treinta y siete del legajo IX, y quedó en poder de los beneficiados con la ampliación provisional de "Quirio".

Así, al quedar demostrado que el núcleo agrario solicitante ejerce la posesión de manera legítima, por estar respaldada con el mandamiento gubernamental de veintitrés de julio de mil novecientos sesenta y dos, en términos de los artículos 204 y 313 de la Ley Federal de Reforma Agraria, resulta apegado a

derecho dotar al núcleo agrario "Quirio", Municipio de Alvaro Obregón, Estado de Michoacán, mediante la vía de primera ampliación de ejido, de una superficie total aproximada de 350-00-00 (trescientas cincuenta hectáreas), a localizar de conformidad con el plano proyecto de ejecución, el cual debe ajustarse a las medidas y colindancias de las superficies deslindadas y entregadas previamente a los núcleos agrarios colindantes de la superficie dotada mediante esta sentencia, identificada también por el hecho de que es únicamente la superficie de tierra que está en posesión del núcleo agrario "Quirio", sin perjuicio de terceros. Superficie que se dota para beneficiar a los campesinos capacitados en materia agraria, modificándose el mandamiento gubernamental en este sentido, toda vez que no cabe dejar derechos a salvo, por no existir ya vía agraria para solicitar tierras por concepto de dotación o creación de un nuevo centro de población, a raíz de las reformas al artículo 27 constitucional, publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** el seis de enero de mil novecientos noventa y dos; en el entendido de que se beneficia con esta dotación a los campesinos que poseen de manera legítima la superficie de 350-00-00 (trescientas cincuenta hectáreas), entre ellos, los que conforman el grupo denominado "Mariano Escobedo", aceptados de hecho por el núcleo agrario "Quirio", al no advertirse conflictos internos relacionados con la posesión y el parcelamiento económico de la superficie dotada, estimándose suficiente la mencionada superficie de tierra para el número de campesinos que la posee, dada la calidad de la misma. Esta superficie pasa a ser propiedad del núcleo de población beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres. En cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá de acuerdo con las facultades que le otorgan los artículos 10, 23 y 56 de la Ley Agraria, órgano supremo del ejido, que está facultado para reconocer el parcelamiento económico o de hecho que exista, acorde a los intereses del núcleo agrario beneficiado con las tierras, pues si bien es posible que por el tiempo transcurrido entre la fecha en que fue elaborado el censo (veinte de junio de mil novecientos sesenta y dos) y la de esta resolución, las circunstancias de hecho pudieron haber variado, en lo que corresponde a la capacidad agraria de los campesinos inicialmente censados, también lo es que una vez que existe mandamiento ejecutado, es dable la sustitución de campesinos que se hubieren ausentado, por los poseedores legítimos de las tierras, en términos de los artículos 220 y 310 de la Ley Federal de Reforma Agraria; y actualmente la Ley Agraria faculta a la asamblea para reconocer el parcelamiento económico o de hecho y para aceptar a nuevos integrantes del ejido; órgano supremo del ejido que se ha pronunciado en el sentido de que la relación de campesinos contenida en el acta de asamblea de siete de marzo de mil novecientos noventa y ocho, sea tomada en cuenta para determinar quiénes son los capacitados por la ampliación de tierras, porque son las personas que en la actualidad poseen de manera quieta, pública y pacífica el predio sujeto a afectación; por ello es que se beneficia con esta resolución sólo a los poseedores legítimos de la superficie en litigio, sin que se enlisten en esta sentencia, porque no se trata de un censo agrario realizado en términos del artículo 286 de la Ley Federal de Reforma Agraria, sino que es un acuerdo interno del órgano supremo del ejido.

Por otro lado, no se desatienden los alegatos hechos valer por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos ni la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua, donde la primera refiere que el predio es inafectable, en términos del artículo 249 inciso d) de la Ley Federal de Reforma Agraria; y la segunda señala que al nueve de octubre de mil novecientos noventa y siete, no existe algún decreto de desincorporación de la propiedad federal correspondiente a la laguna de "Cuitzeo". Sin embargo, tales cuestiones resultan intranscendentes, toda vez al momento de la solicitud y hasta el dictado de esta Resolución, los terrenos afectados de hecho no son parte del vaso de la laguna "Cuitzeo" y han sido dedicados al cultivo, si se toma en cuenta que sólo se afecta el área desecada, fuera del vaso que comprende la laguna de "Cuitzeo", dado que el nivel máximo de capacidad, disminuyó por la escasez de lluvias, como lo informó la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, desde el veinticinco de abril de mil novecientos sesenta y dos, ya que a este respecto expuso: "...Dichos terrenos no pueden considerarse desecados puesto que no se ha hecho obra alguna para impedir que lleguen a ser cubiertos por las aguas, sino que únicamente por la escasez de lluvias están secos en la actual temporada; pero al presentarse lluvias normales o abundantes, volverán a quedar cubiertas por las aguas" (foja 16, legajo I). Habiéndose salvado actualmente el obstáculo señalado por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, porque ya se realizaron obras para impedir que los terrenos dotados sean cubiertos permanentemente por el agua, principal razón por la cual se consideran que las tierras dotadas, no forman parte del vaso de la laguna de "Cuitzeo", sino del área desecada, pues el área dotada afectada se ha visto favorecida con obras realizadas, tales como bordos de contención y presas, como se advierte de los trabajos técnicos e informativos practicados en el año de mil novecientos noventa y siete, donde el comisionado de manera textual expone: "...en la práctica se han construido bordos de contención que beneficiaron a los poblados: 'CARRILLO PUERTO', 'TEJARO DE LOS IZQUIERDO', 'TROJES DE CHEHUAYO', provisional 'LA PRESA', ampliación 'QUIRIO' y ejido 'LEON CARDENAS', haciendo la siguiente observación, en esta parte de la Laguna convergen sus dos principales afluentes: el río grande

de Morelia y el río Queréndaro, sus escurrimientos alcanzaron anualmente 332 millones de metros cúbicos, actualmente con las presas que se construyeron se redujo a 185 millones de metros cúbicos, estos afluentes han arrastrado millones de toneladas de sedimentos que redujeron notablemente la profundidad de la laguna en esta área cubriéndola de tierra fértil, unido a fuertes sequías, los campesinos de diversos poblados ejercieron posesiones y presionaron los Gobiernos, para lograr que se dieran dotaciones y/o ampliaciones de tierras, y lo que antes era el vaso de la laguna de Cuitzeo, la curva de nivel 1821..." (fojas 1 y 2, legajo IX); cuestiones que ilustra en el plano que obra a fojas cuarenta y uno, legajo IX, donde se observa de manera gráfica que en la superficie propuesta se ubican bordos de contención construidos. De ahí que el área entregada no corresponda al vaso de la laguna de "Cuitzeo", considerada inafectable de conformidad con el artículo 249 fracción IX inciso d) de la Ley Federal de Reforma Agraria, sino a terrenos propiedad federal aptos para el cultivo, susceptibles de dotación para cumplir con la función social de la propiedad prevista en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, superior al mero trámite administrativo pendiente de realizar, consiste en la desincorporación del área que correspondía a la laguna de "Cuitzeo", actualmente desecada en las superficies dotadas a diversos núcleos agrarios.

Por las mismas razones se desestima el dictamen negativo del Cuerpo Consultivo Agrario, emitido el once de abril de mil novecientos noventa y siete, ya que el mismo se sustenta en el hecho de estimar como inafectable la superficie solicitada, por no existir terrenos susceptibles de satisfacer las necesidades agrarias del núcleo agrario "Quirio", dado que por una parte aduce que dentro del radio legal de afectación se ubican diversos ejidos definitivos, terrenos correspondientes a la colonia agrícola "El Zapote", diversa infraestructura como aeropuerto y carreteras, así como pequeñas propiedades inafectables, y por otra parte señala que los "sobrantes" del vaso de la laguna de "Cuitzeo" resultan inafectables de conformidad con el artículo 249 fracción IV inciso d) de la Ley Federal de Reforma Agraria. Lo anterior en virtud de que, con la dotación de la superficie de 350-00-00 (trescientas cincuenta hectáreas), no se afectan superficies que correspondan a los ejidos definitivos "Tejaro de los Izquierdo", "Trojes de Chehuayo", "Carrillo Puerto", "León Cárdenas", "La Presa", "San Agustín del Pulque", "Ampliación de Chehuayo", "Ampliación de Chehuayito", "Quirio", "Zacapendo", "La Mina", "Queréndaro", "Belisario Domínguez", Estación Queréndaro", "El Zapote", "Zinzimeo", "Tepecua", "Chapitiro", "Palo Blanco", "Ampliación de Indaparapeo", "Villa Unión", "Ampliación de Alvaro Obregón", Purísima", "Cuaparataro" y "Las Trojes", ni de los terrenos de la colonia agrícola "El Zapote", el que ocupa el Aeropuerto Internacional "Francisco J. Mújica" y la infraestructura carretera, así como tampoco se afectan pequeñas propiedades, sino que el área afectada corresponde a la Federación, por haber dejado de formar parte del vaso de la laguna de "Cuitzeo", al haberse desecado, misma que es susceptible de cultivo por parte de los campesinos solicitantes de tierra, sin afectar en momento alguno el vaso de la laguna de "Cuitzeo", de ahí que no se actualice el supuesto del artículo y fracción citado por el Cuerpo Consultivo Agrario, sino el diverso contenido en el artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 27 fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 43 y 189 de la Ley Agraria, y 1o., 7o. y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se

RESUELVE:

PRIMERO.- Es procedente la acción de ampliación de ejido promovida por un grupo de campesinos del núcleo agrario "Quirio", Municipio de Alvaro Obregón, Estado de Michoacán.

SEGUNDO.- Se concede al núcleo agrario "Quirio", por concepto de ampliación de ejido, una superficie de 350-00-00 (trescientas hectáreas), propiedad de la Nación, las cuales se afectan conforme al artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria, para satisfacer las necesidades agrarias y beneficiar a los campesinos que poseen de manera legítima la superficie antes señalada.

La superficie que se concede pasa a ser propiedad del núcleo agrario beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres, sin perjuicio de terceros. En cuanto a la determinación del destino de las tierras, la asamblea resolverá conforme a lo dispuesto por los artículos 10, 23 y 56 de la Ley Agraria vigente, y debe ser localizada conforme al plano proyecto de ejecución que se elabore, en el entendido de que para la ejecución de esta sentencia debe observarse también lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Agraria.

TERCERO.- Se revoca el mandamiento del Gobernador del Estado de Michoacán, emitido el veintitrés de julio de mil novecientos sesenta y dos, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, el veintidós de noviembre del mismo año, en cuanto a los beneficiados con la superficie dotada.

CUARTO.- Publíquense: esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación**, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán y en el Boletín Judicial Agrario; inscríbase en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, y procédase a hacer la cancelación respectiva; asimismo, inscríbase en el Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de derechos correspondientes, de acuerdo con las normas aplicables y conforme a lo resuelto en esta sentencia.

QUINTO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Michoacán, a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Agraria; ejecútese y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario; firman los Magistrados que lo integran, ante la Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a cinco de septiembre de dos mil.- El Magistrado Presidente, **Luis Octavio Porte Petit Moreno**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Rodolfo Veloz Bañuelos, Marco Vinicio Martínez Guerrero**, **Luis Angel López Escutia**, **Ricardo García Villalobos Gálvez**.- Rúbricas.- La Secretaria General de Acuerdos, **Claudia Dinorah Velázquez González**.- Rúbrica.